
ECOLOGÍA POLÍTICA NATURALEZA, SOCIEDAD Y UTOPIA

Héctor Alimonda
(Compilador)

Héctor Alimonda

Alain Lipietz

James O'Connor

Roberto Guimarães

Guillermo Castro Herrera

Célia Dias

Angela Alonso

Valeriano Costa

Eduardo Gudynas

Roberto Moreira

David Barkin

Canrobert Costa Neto

Flaviane Canavessi

Renata Menasche

Ricardo Ferreira Ribeiro

Fernando Marcelo de la Cuadra

Henri Acselrad

Cecília C. do A. Mello

Ruy de Villalobos

Colección Grupos de Trabajo de CLACSO

Grupo de Trabajo *Ecología política*

Coordinador: Héctor Alimonda

Director de la Colección

Dr. Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo

Area Académica de CLACSO

Coordinador: Emilio Taddei

Asistente Coordinador: Sabrina González

Revisión de Pruebas: Daniel Kersfeld

Area de Difusión

Coordinador: Jorge A. Fraga

Arte y Diagramación: Miguel A. Santángelo

Edición: Florencia Enghel

Impresión: Gráficas y Servicios

Imagen de tapa: artista no identificado, 1819, *Tabulae Physiognomicae IX*, “As árvores que nasceram antes de Cristo na floresta às margens do rio Amazonas”. En Carl Friedrich Philip von Martins, *Flora Brásiliensis*, V. I, Munich, 1840-1906. Cortesía del Departamento de Botánica, Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro.

Primera edición: “*Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía*”
(Buenos Aires: CLACSO, marzo de 2002)



CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional

**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**

Callao 875, piso 3°

C1023AAB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4811-6588 / 4814-2301

Fax: (54-11) 4812-8459

E-mail: clacso@clacso.edu.ar

<http://www.clacso.edu.ar>

www.clacso.org

ISBN 950-9231-74-6

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

INDICE

Héctor Alimonda

Introducción: política, utopía, naturaleza

7

Alain Lipietz

A Ecologia Política, solução para a crise da instância política?

15

James O'Connor

¿Es posible el capitalismo sostenible?

27

Roberto Guimarães

La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo

53

Guillermo Castro Herrera

Naturaleza, sociedad e historia en América Latina

83

Célia Dias

As antinômias discursivas de la economia política

101

Angela Alonso e Valeriano Costa

Para uma sociologia dos conflitos ambientais no Brasil

115

Eduardo Gudynas

La ecología política de la integración: reconstrucción de la ciudadanía y regionalismo autónomo

137

Roberto Moreira

Questão agrária e sustentabilidade

153

David Barkin

El desarrollo autónomo: un camino a la sustentabilidad

169

Canrobert Costa Neto e Flaviane Canavessi

Sustentabilidade em assentamentos rurais: o MST rumo à “reforma agrária agroecológica” no Brasil?

203

Renata Menasche

Legalidade, legitimidade e cultivos transgênicos clandestinos

217

Ricardo Ferreira Ribeiro

O Eldorado do Brasil central: história ambiental e convivência sustentável com o Cerrado

249

Fernando Marcelo de la Cuadra

Conflicto ambiental en Chile: la contaminación del aire en Santiago

277

Henri Acselrad y Cecília C. do A. Mello

*Conflicto social e risco ambiental: o caso de um vazamento de óleo na
Bahía de Guanabara*

293

Ruy de Villalobos

*La valuación de recursos naturales extinguidos: el caso de la merluza en el
mar continental argentino*

319

Introducción: *política, utopía, naturaleza*

Héctor Alimonda*

Para Julia y sus compañeros de generación,
que tuvieron cinco años en el año 2000

“La libertad, en este terreno, sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana”

Karl Marx, *El Capital*, Tomo III, Sección
Séptima, capítulo XLVIII

La política

Alguna vez, en su celda de la cárcel de Turi, el detenido Antonio Gramsci se interrogaba sobre el estatuto teórico de la sociología. Atento a las enseñanzas de su maestro Maquiavelo, y testigo activo de su propia época, desconfiaba del conservadurismo implícito en la noción de una evolución “natural” de las sociedades, de acuerdo con leyes cognoscibles. La política, para él, era un arte, y la *virtú del Príncipe*, potenciada por la *Fortuna*, podía desagregar equilibrios sociales cristalizados, marcar puntos de ruptura, congrega fuerzas heterogéneas y hacer avanzar en nuevas direcciones a los procesos históricos. “El éxito de la sociología está en relación con la decadencia del concepto de ciencia política y de arte político que tiene lugar en el siglo XIX (con más exactitud en la segunda mitad, con el éxito de las doctrinas evolucionistas y positivistas). Lo que hay de realmente importante en la sociología no es otra cosa que ciencia política”, escribía Gramsci en sus cuadernos escolares con su porfiada letra de hormiga (1972: 95).

* Coordinador del Grupo de Trabajo Ecología Política de CLACSO. Profesor del Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA-UFRRJ). Con beca de CAPES, participa del Programa de Posdoctorado en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.

Quienes estén de acuerdo con este comentario probablemente compartirán también el punto de vista de Alain Lipietz, conferencista invitado para la reunión del Grupo de Trabajo en Ecología Política de CLACSO, que se desarrolló en Rio de Janeiro, durante los días 23 y 24 de noviembre de 2000. Parafraseando a Gramsci, puede decirse que para Lipietz todas las cuestiones ambientales significativas son políticas. Esto es así precisamente porque la particularidad de la ecología de la especie humana es que sus relaciones con la naturaleza están mediadas por formas de organización social, que reposan en dispositivos políticos para asegurar su consenso y su reproducción.

Ésta parece una evidencia de sentido común cuando las relaciones de la sociedad humana con nuestro planeta, que presentan síntomas de crisis generalizadas, se han instalado en el primer plano de las relaciones internacionales, y serán fatalmente condicionadas, por ejemplo, por la arrogancia del gobierno de George W. Bush al negarse a discutir el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático.

El debate internacional sobre transgénicos, mientras tanto, con la participación de organizaciones campesinas, grupos ambientalistas y de consumidores, grandes empresas de biotecnología y agentes gubernamentales, pone de manifiesto la presencia de la política en el seno de las transformaciones tecnológicas. Sea en el nivel macroscópico o en el microscópico, la política está desbordando las relaciones humanas con la naturaleza.

Alain Lipietz (quien, después de todo, es diputado al Parlamento Europeo por *Les Verts* franceses) llega a proponer una reconstrucción de la política, paralizada por la lógica del ajuste estructural como pensamiento único, a partir del punto de vista de la Ecología Política. Sería la posibilidad de dotarla de nuevos contenidos, de rehacer nuevas alianzas sociales y nuevas solidaridades, de rescatar, en suma, a partir de esa perspectiva, la *virtú* del Príncipe maquiavélico.

La propuesta es sin duda atractiva, y es bueno recordar que cuenta con antecedentes de ciudadanía latinoamericana (“el ambientalismo como resignificación”, proponía hace unos años Enrique Leff). Un complemento al análisis de Alain Lipietz, aunque no procesa una interlocución directa con él, es el artículo siguiente de este volumen, de James O’Connor, editor de la importante revista californiana *Capitalism, Nature, Socialism* (en cuyas páginas, a lo largo del año 2000, Alain desarrolló una interesante polémica con críticos de Estados Unidos). No pudiendo estar presente en la reunión de nuestro GT, O’Connor autorizó a publicar su artículo en el presente libro.

Pero pretender refundar la política desde un lugar que supone una articulación significativa de validez con enunciaciones científicas (en este caso la ecología científica) encierra el peligro de reintroducir dispositivos despóticos de enunciación. Una política que se supone basada en certezas científicas trae consigo el riesgo del dogmatismo y de la cristalización de sus verdades. Por ejemplo, el ecologismo puede ser una resurrección del economicismo. Esta posibilidad ya fue señalada por au-

tores como Cornelius Castoriadis y André Gorz, y será justicia recordar que también Lipietz lo advierte, en su libro *Qu'est-ce que l'Écologie Politique?*

Por esta causa, para no transformar su potencialidad crítica en un nuevo despotismo tecnoburocrático, la Ecología Política debe traer implícita una reflexión sobre la democracia y sobre la justicia ambiental como ampliación y complementación de los derechos humanos y de ciudadanía. La centralidad de la política en las relaciones sociedad-naturaleza puede tener significativas consecuencias teóricas y prácticas, al permitir una articulación de perspectivas de diferentes problemáticas “sociales”, y la apertura de un espacio de interpelaciones horizontales y de enunciaciones plurales.

La utopía

París, 1936. Walter Benjamin, un melacólico exilado alemán, traductor de Marcel Proust y cuya tesis de doctorado fue rechazada por la Universidad de Frankfurt, escribe un pequeño texto que vendrá a ser una de las obras capitales de la crítica cultural del siglo XX: *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Después de analizar el proceso de destrucción del “aura” de las obras de arte, por causa de la capacidad técnica de reproducirlas y de exhibirlas, Benjamin examina la revolución introducida en el campo artístico por la producción cinematográfica, y avanza en la dirección de un análisis de la estetización de la política, a su juicio una característica del fascismo. Es en el *Epílogo*, en una crítica al futurista italiano Marinetti, cuando se abre una ventana inesperada, y una luz, inusual en su época, ilumina otra escena posible, apenas en la última página del texto. Se aproxima fatalmente una nueva guerra mundial, afirma Benjamin, aún más cruel y arrasadora que la anterior. La causa de esta catástrofe es que las fuerzas productivas han sido desviadas de su cauce natural, se han vuelto ingobernables, y en ese carácter retornan como elemento doblemente destructivo, de la humanidad y de la naturaleza.

Ésta podría ser solamente una nota disonante más en una obra heterodoxa. Pero se vuelve más significativa cuando se vincula con otro atisbo, que aparece en el último texto escrito por Benjamin, las *Tesis sobre el concepto de Historia*, poco antes de su suicidio en Hendaya. Es un nuevo indicio, que denota el comienzo de una reflexión benjaminiana sobre la relación naturaleza-sociedad, a partir de bases totalmente heterodoxas para su época y su tradición teórica, y que lo aproximan a nuestra contemporaneidad.

En 1940, la guerra previsible ha estallado en su fase europea, y su frente abarca desde Noruega al norte de África. En la *Tesis XI*, Benjamin ataca al “conformismo” de la socialdemocracia, que la ha llevado al colapso. Pero el fundamento de este conformismo (cuyos rasgos tecnocráticos, dirá Benjamin, son comunes al marxismo vulgar y al fascismo) está en la creencia en que el desarrollo técni-

co encarnaba la corriente progresista, el “lado bueno” de la historia, sin percibir que esos avances en el dominio de la naturaleza representan al mismo tiempo retrocesos en la organización de la sociedad, y que la riqueza producida por el trabajo no beneficia a los trabajadores.

Esa concepción tecnocrática, para Benjamin, supone inclusive “una concepción de la naturaleza que contrasta funestamente con las utopías socialistas anteriores a 1848. El trabajo, como es visto ahora, tiene como objetivo la explotación de la naturaleza, comparada, con ingenua complacencia, con la explotación del proletariado. Comparada con esta concepción positivista, las fantasías de Fourier, tan ridiculizadas, se revelan sorprendentemente razonables”. En la lectura benjaminiana, los delirios de Fourier se resolvían en una visión del trabajo que al mismo tiempo que satisface necesidades humanas, reconcilia a la humanidad con la naturaleza (“un tipo de trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, libera a las creaciones que duermen, como virtualidades, en su vientre”) (Benjamin, 1987: 228). Queda nuestra imaginación en vuelo libre, pensando en los caminos posibles de la obra benjaminiana, si hubiera podido cruzar la frontera española.

Crítica y utopía

Vamos entonces al epígrafe de esta introducción, extraído del tercer volumen de *El Capital*. A esta altura del texto, espero que el lector acepte que no fue puesto allí para, invocando una autoridad sagrada, cerrar los caminos de la imaginación teórica. Todo lo contrario: es justamente el ajuste de cuentas con los espectros de Marx uno de los mayores desafíos teóricos para la constitución de la Ecología Política contemporánea.

En 1974, Jacques Rancière se insurgía contra el ejercicio de trigonometría en que Louis Althusser y sus seguidores (que eran, *hélas!*, legión) habían transformado la lectura de Marx, a partir de un recorte de textos canónicos en los cuales actuaría, pura, la “práctica teórica”.

Pues bien: Rancière traía “perlas” del volumen tercero de *El Capital* y subrayaba herejías: “libertad”, “productores libremente asociados”, “más digna de su naturaleza humana”, y se preguntaba irónicamente: “¿Por qué tanta ideología en el frontispicio de la Ciencia?” (Rancière, 1974: 106).

Porque en la obra de Marx, respondía, afloran una y otra vez fragmentos de discursos, de consignas, de interpelaciones de acción, de utopías, provenientes del movimiento histórico de los trabajadores. Y Rancière lo comprobaba comparando esos textos de Marx con vestigios discursivos del movimiento obrero de la época. Marx no trabajó solamente a partir de una revisión crítica de la economía política inglesa, de la teoría política francesa y de la filosofía alemana. Es decir, no se limitó apenas a la lectura crítica de la forma en que los desdoblamiento de la acumulación de capital estaban constituyendo a la sociedad burguesa de la épo-

ca, a sus formaciones discursivas y a sus dispositivos de representación. También registró, e incorporó de forma transfigurada en su obra, la constitución de espacios alternativos de acción y de enunciación diferentes del capital, aunque creados y/o recreados por él. Espacios subordinados al capital, sí, pero al mismo tiempo opuestos, lugares de resistencia, de fantasía, de deseo, de imaginación.

En la obra de Marx no están presentes solamente los bustos ilustres y bronceados de Smith y Ricardo, Montesquieu y Guizot, Hegel y Fichte. En principio, están además sus rivales (frecuentemente subvalorados) dentro de la tradición socialista: Owen, Fourier, Herzen, Bakunin, por citar algunos.

Pero están también rumores de voces antiguas de tejedores de Flandes y de Italia, ecos de pueblos oprimidos y tenaces (Irlanda por lo menos, Rusia después), consignas rasguñadas en muros de ladrillos de Manchester y de Yorkshire, la algarabía de un París de barricadas de 1830 y 1848. Está el movimiento del capital, su avance irrefrenable en todos los ámbitos, pero también la generación de capacidades de resistencia, cuyas formulaciones aparecen inclusive (recordaba Rancière) en la propia teoría de la plusvalía.

Y por si esto fuera poco, la obra de Marx tiene por lo menos otras dos fuentes fundamentales, que con frecuencia son olvidadas. Una de ellas es la incorporación de una masa enorme de información concreta, de fuentes históricas y contemporáneas, material periodístico, informes de inspecciones de fábrica y de salud pública, etc., que ofrecían la materia prima sobre la cual se podía ejercer el trabajo crítico, suscitar la formulación de sus hipótesis y verificar sus tendencias. La otra es una mirada atenta a lo que estaba sucediendo, en su época, con las ciencias de la naturaleza. Allí están sus comentarios sobre Liebig, por ejemplo. No para tomarlas como paradigma de cientificidad, ingenuidad en la que Federico Engels acostumbraba incurrir, sino como una referencia fundamental para entender el funcionamiento de la naturaleza y evaluar las perspectivas que ese nuevo conocimiento implicaba para la evolución de la sociedad.

Naturalmente, esto no significa creer, cándida y/o tozudamente, que en esa obra están las respuestas para todos los desafíos contemporáneos. Marx tendió a valorar excesivamente algunos elementos, y a dejar de lado, con mucho riesgo, cuestiones que hoy vemos como fundamentales. Dentro de la propia tradición socialista de la época hubo autores, como Danielson o Podolinsky, que tuvieron una percepción mucho más sensible de la problemática ambiental. De los clásicos de la corriente marxista posterior, sólo Rosa Luxemburgo parece haber avanzado en algunas reflexiones recuperables para una perspectiva de Ecología Política.

¿A qué viene todo esto? A esta altura el lector se lo imagina, y debe estar muy alarmado. Sí, es eso: simplemente decir que la tarea cada vez más urgente e imprescindible de construcción de una Ecología Política latinoamericana debería recorrer esos caminos. Un esclarecimiento conceptual riguroso pero flexible, fundamentado en un referente teórico crítico. Una dilatada acumulación de información sobre la na-

turalidad y la historia del continente, especialmente sobre la relación entre ambas, y sobre los acontecimientos contemporáneos a escala planetaria. Un trabajo reflexivo sobre las diversas formas en que los poderes dominantes en diferentes épocas concibieron y ejecutaron sus estrategias de apropiación de la naturaleza latinoamericana, y un balance de sus efectos ambientales y de sus consecuencias sociales. Un diálogo permanente con territorios del saber científico y tecnológico, especializados en dominios externos a las ciencias sociales. Una relectura, desde nuevos puntos de vista, de clásicos del pensamiento social y político del continente, como José Bonifácio de Andrada e Silva, Manuel Gamio, José Martí, José Carlos Mariátegui o Gilberto Freyre. Y, sobre todo, un recuento de las desmesuradas experiencias de resistencia de los latinoamericanos, de su tozuda búsqueda de alternativas y de herencias, de sus esperanzas y de su desesperación, de sus sueños y de sus pesadillas.

Claro que es una tarea enorme. Pero no es una empresa solitaria, es un vasto esfuerzo colectivo que ya ha comenzado. Después del pánico inicial, es fácil mirar alrededor y encontrar indicios, señales, caminos por donde avanzar, espacios de diálogo, de intercambio y de acumulación de fuerzas y de recursos. Al nivel en que cada uno esté, por más microscópico que parezca. Fue por eso que me pareció oportuno comenzar con una referencia al prisionero Antonio Gramsci, una hormiga encerrada y laboriosa, que a pesar de todo no renunció a su capacidad de pensamiento y a su imaginación.

“Un libro no es más que una botella con un mensaje, arrojada al mar”, dijo Eduardo Galeano en una conferencia en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, allá por 1973. Ojalá este libro, con el mensaje de trabajo colectivo que contiene, vaya a dar a playas fértiles, y contribuya para el avance de una Ecología Política latinoamericana, construida en base a un trabajo riguroso de crítica y a una recuperación de la utopía.

Crítica y utopía: justamente el nombre de la brava revista que CLACSO publicaba hace dos décadas.

En octubre de 2000, el Comité Directivo de CLACSO, reunido en Cuenca, Ecuador, dispuso la modificación del nombre del Grupo de Trabajo, de Medio Ambiente y Desarrollo, Ecología Política. Este Grupo ya tenía una reunión prevista en Río de Janeiro, Brasil, durante los días 23 y 24 de noviembre, y en octubre se encontraba en un grado avanzado de organización.

Por esta causa, asegurada una calidad académica indispensable y una representatividad razonable de diferentes países de la región (requisitos básicos de CLACSO), los participantes habían sido convocados para presentar un panorama, necesariamente variado y plural, de diferentes perspectivas desde donde las ciencias sociales latinoamericanas venían trabajando temas vinculados con la problemática del medio ambiente y el desarrollo. La posibilidad de contar con la participación de un reconocido especialista como David Barkin, de México, y mi propia inserción institucional en el Curso de Pósgraduação em Desenvolvimento,

Agricultura e Sociedade (UFRRJ) facilitaron una cierta concentración en temas vinculados con la agricultura. Desde luego, intentamos que otros temas estuvieran también presentes, aunque sabiendo de antemano que resultaría imposible obtener una representatividad temática y nacional completa.

Por estas razones, la reunión de estos trabajos en un libro a ser publicado por CLACSO no pretende constituir el punto de partida de una Ecología Política latinoamericana, sino solamente un conjunto de aportes para una discusión necesaria. Esperamos que la segunda reunión del GT, prevista para noviembre de 2001 en Guadalajara, México, junto con otras actividades que estamos desarrollando, puedan dar origen a una segunda publicación, complementando este debate y trayendo nuevas y significativas contribuciones de otros colegas latinoamericanos.

En ese sentido, quiero agradecer la participación en nuestra reunión de Ruy de Villalobos, Pablo Bergel y María di Pace (Argentina), Ana María Galano Linhart y Elder Andrade de Paula (Brasil), Jaime Llosa Larrabure (Perú), Santiago Villaveces Izquierdo y Camilo Rubio (Colombia), y María Fernanda Espinosa (Ecuador). Aunque por diferentes razones sus aportes no fueron incluidos en esta edición, su presencia y su colaboración resultaron indispensables para nuestros debates. Lo mismo vale para el compañero Odilon Horta, Secretario de Medio Ambiente del Sindicato de los Petroleros de Rio de Janeiro, quien nos trajo una vívida y lúcida percepción de la complejidad de los conflictos ambientales en el mundo del trabajo.

Va también una mención especial de agradecimiento a la colaboración permanente recibida en mis tareas de coordinador del GT por el compañerismo y la buena erudición, no solamente en temas ambientales, de José Augusto Pádua. Y también, a la distancia, agradezco el estímulo y la solidaridad “vía modem” de Enrique Leff.

La reunión de nuestro Grupo de Trabajo en Rio de Janeiro no hubiera sido posible sin el apoyo efectivo de la FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rio de Janeiro), organismo de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología. Agradezco por ello, muy especialmente, a su director, Dr. Luis Fernandes, y a la profesora Maria Lucia Vilarinhos, en nombre de nuestro Grupo de Trabajo y también en nombre de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. Va un reconocimiento, también, a la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), por la cesión de instalaciones para nuestra reunión.

Y merecen también un agradecimiento Célia y Julia, sin cuyo apoyo nada sería posible, y que con mucha frecuencia fueron víctimas de la desatención que esta tarea implicó.

Bibliografía

- Benjamin, Walter 1987 *Obras Escolhidas* (São Paulo: Brasiliense) Vol. 1.
- Gramsci, Antonio 1972 *Notas sobre Maquiavelo, sobre la Política y sobre el Estado Moderno* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Leff, Enrique 1994 (1992) “Cultura democrática, gestión ambiental y desarrollo sustentable en América Latina”, en *Ecología Política* (Barcelona) N° 4, septiembre. Reproducido en *Ecología y Capital* (México: Siglo XXI).
- Lipietz, Alain 1999 *Quést-ce que l’Ecologie Politique?* (Paris: La Decouverte).
- Marx, Carlos 1971 (1867) *El Capital – Crítica de la Economía Política* (México: Fondo de Cultura Económica) Vol. III.
- Rancière, Jacques 1974 “Modo de emprego”, en *Estudos Cebrap* (São Paulo, Janeiro) N°7, Fevereiro – Março.

*A Ecologia Política, solução para a crise da instância política? **

Alain Lipietz**

Introdução

Desde os anos 80, um sentimento de impotência se espalhou pelo planeta, particularmente pelos países que passaram por experiências democráticas. O voto parece não ter mais sentido: uma vez eleitos, todos os dirigentes, apesar de suas promessas, logo atuam de acordo com a única política possível, a que é ditada pelas exigências da globalização. Ora, para a maioria, essa política só traz infelicidade: insegurança, pobreza, exclusão...

Esse sentimento de “esvaziamento do político” tem uma dupla dimensão:

Quanto aos conteúdos do que se chama “política”, isto é, “o que se faz”, as estratégias e os objetivos parecem reduzir-se a uma “infrapolítica”, à simples otimização da competitividade que, por sua vez, se traduz no abandono de toda pretensão social.

Quanto às formas e aos domínios do que se chama “política”, isto é, “como e com quem se age”, o que constitui a própria definição da cidade (*polis*) dos homens e das mulheres, eles parecem reduzir-se a uma coleção de indivíduos em competição mal contrabalançada por regulamentos abstratos, caídos do céu (de Bruxelas, da OMC) e, em geral, desfavoráveis.

* Economista e investigador. Director de Recherche de CNRS. Diputado en el Parlamento Europeo.

** Tradução de Ana Maria Galano.

A sociedade não é, no entanto, um mercado. As necessidades das sociedades, o desejo, assumem a forma de reações “identitárias”: integrismos no Terceiro Mundo; populismos autoritários e xenófobos no Norte. A França e, mais ainda, a Áustria, a maioria dos países europeus, na verdade, têm assistido, desde os anos 80 e 90, a manifestações desse gênero.

A ascensão do Front National, que parecia inevitável, foi bloqueada por suas próprias contradições, sobretudo pelo renascer de esperança que os primeiros sucessos da “maioria plural” suscitou. Nas eleições europeias de 1999, os Verdes, componentes desta coalizão que mais comportava inovações, obteve um sucesso de importância espetacular, sancionado por uma forte progressão eleitoral. Foi como se, depois de 15 anos de desespero, a “vontade de política” renascesse e depositasse sua confiança na ecologia política.

‘Estranha escolha’, devem pensar alguns. A ecologia não é percebida como uma recusa da política por velhos *hippies*, uma atração íntima por flores e passarinhos? Retificaremos, primeiro, essa imagem e redefiniremos o que é ecologia enquanto política. Em seguida, examinaremos como ela responde à crise da política e de seus conteúdos, à crise da política e de suas formas.

O que é Ecologia Política?

A expressão “ecolô” (usada em francês) já indica a visão redutora e muitas vezes caricatural que uma grande parte da opinião pública tem da ecologia. No entanto, quando se acrescenta a esse vocábulo a palavra política, a idéia partilhada por esse grupo passa por uma mudança: o deboche se transforma em perplexidade. Não há dúvida de que a ecologia política, pelo menos aos olhos da opinião pública, ainda não adquiriu o estatuto de noção clara e distinta. O que é então ecologia? E ecologia política?

O que é ecologia?

Segundo o dicionário Le Petit Robert, a palavra aparece na segunda metade do século XIX. Termo utilizado pela Biologia, em sua origem, a Ecologia é uma disciplina científica. É a ciência que estuda a relação triangular entre indivíduos de uma espécie, a atividade organizada desta espécie e o meio ambiente, que é, ao mesmo tempo, condição e produto da atividade, portanto condição de vida daquela espécie.

Assim, o ecologista que se interessa por castores se dedicará a analisar a relação deles com o meio em que vivem: a floresta e os rios, bem como as barragens que constroem, ou seja, a natureza transformada por sua atividade. Ele se interessará ainda pela capacidade do sistema de assegurar as necessidades da população de castores e pelo modo como esta se multiplica, se organiza, etc.

Aplicada aos homens, a ecologia é o estudo da relação da humanidade com o meio ambiente, isto é, da maneira como se transformam mutuamente e de como o meio ambiente permite que a humanidade viva. Da mesma forma que o meio ambiente dos castores não se limita a florestas e rios, o meio ambiente dos homens não é apenas natureza selvagem, compreendendo também a natureza transformada por eles. A ecologia humana é, portanto, a interação complexa entre meio ambiente (o meio em que vive a humanidade) e funcionamento econômico, social e, acrescentemos, político das comunidades humanas.

Essa é uma diferença significativa entre a ecologia da espécie humana e a ecologia das outras espécies animais. Com efeito, os homens são animais não apenas sociais, mas também políticos. Na origem da especificidade da ecologia humana, existe, porém, uma outra característica que remonta aos primeiros passos dessa espécie na face da Terra. Sabe-se, atualmente, que a capacidade de produzir instrumentos não é mais reconhecida como uma exclusividade dos humanos, uma vez que chimpanzés são capazes de improvisar certos instrumentos, ainda que rudimentares. Os homens, ao contrário, não pararam de melhorar seus instrumentos e, conseqüentemente, não deixaram de aperfeiçoar sua capacidade de agir sobre meio ambiente e transformá-lo pela “domesticação” (que tem raiz latina próxima de “ecologia”, em grego) de animais e pelo uso das plantas desde a revolução do neolítico.

Durante milhares de anos, tudo girou em torno da luta contra a fome e as intempéries. Conviver com a ordem do mundo o mais harmonicamente possível constituiu um ato de sabedoria daqueles homens do passado remoto. Contudo, há quatro séculos, iniciou-se uma verdadeira reversão desse quadro. Se, até então, o problema era submeter-se à ordem da natureza, dali em diante, os homens passaram a entender que a natureza é que deveria se ajustar aos seus desejos. Os incessantes progressos da ciência e de suas aplicações técnicas reforçaram cada vez mais o sentimento de que os homens eram “mestres” e “donos” da natureza.

Durante a segunda metade do século XX, depois da expansão que se seguiu à 2ª Guerra Mundial, esse movimento de emancipação chegou a seus limites. Os “milagres” da técnica e da tecnologia começaram a dar mostras de falhas; acidentes “imprevisíveis” multiplicaram-se e seus efeitos alcançaram escala planetária (marés negras, Tchernobyl). Enquanto as primeiras manifestações de alarme expressas no Clube de Roma, nos anos 70, enfatizavam a insuficiência de recursos naturais, trabalhos científicos mais recentes destacam graves desequilíbrios ecológicos provocados por poluições industriais (destruição da camada de ozônio, efeito estufa, elevação do nível da água dos oceanos, aquecimento das temperaturas). Não tem parado de crescer o número daqueles que passam a ter consciência dos efeitos perturbadores da atividade humana e do progresso técnico, independentemente de acidentes. A importância que vêm adquirindo essas novas inquietações levou a que alguns observadores tentassem descobrir os mecanismos econômicos e políticos geradores dos desequilíbrios ecológicos.

Foi sobre essa base conceitual e histórica que se constituiu a ecologia política. Em seguida, aprofundou-se a análise crítica do funcionamento geral das sociedades industriais avançadas que, por sua vez, permitiu uma reflexão paralela sobre os meios a serem adotados para caminhar-se em direção a um outro modo de desenvolvimento.

Da ciência à política

A passagem da ciência à ecologia política introduz questões que dizem respeito ao sentido do que fazemos, levando a uma série de outras perguntas: em que medida nossa organização social, a maneira como produzimos e consumimos, modifica o meio ambiente? E mais precisamente, como pensar a combinação, a interpenetração, a disposição desses diversos fatores nas ações sobre o meio ambiente? Serão favoráveis os efeitos dessas modificações sobre os indivíduos? Desfavoráveis? A ecologia científica nos diz quais são os efeitos de nossos comportamentos e práticas; ela nos esclarece a respeito do que está em jogo. No entanto, cabe-nos, a nós homens, escolher o modo de desenvolvimento que desejamos, em função de valores que evoluem no curso de debates públicos.

Levando em consideração os desequilíbrios provocados pela atividade humana, a ecologia política passa a se interrogar acerca da modernidade e a desenvolver uma análise crítica do funcionamento das sociedades industriais. Essa análise questiona um certo número de valores e de conceitos-chave sobre os quais se apóia nossa cultura ocidental.

A natureza

Já evocamos o sentimento de poderio e domínio sobre a natureza, o qual se desenvolveu progressivamente a partir do século XVIII. Uma exaltação narcísea que tendeu a construir, sob a forma de oposição, até mesmo de antagonismo, a relação entre homem e natureza. Com isso, alcançavam-se dois objetivos: a natureza servia para valorizar os homens que, ao mesmo tempo, pareciam se ter destacado dela. Particularmente, a comparação entre os homens e outras espécies animais permitia manifestar a diferença, tornando implícita sua metamorfose. A depreciação da natureza banalizava as práticas mais degradantes a que ela era submetida, bem como os animais e mesmo os povos indígenas, que os europeus “descobriam” e julgavam “não-civilizados”.

A ecologia política considera que os limites do aceitável foram amplamente ultrapassados e que chegou a hora de questionar, de um modo geral, práticas e representações, já que não são independentes. Os homens são parte da natureza, respiram-na e dela tiram sua alimentação, ainda que hoje, irrefletidamente, os jovens relacionem os produtos derivados do leite ao supermercado, em vez de associá-los ao campo.

Certamente, não se está aqui propondo o extremo oposto, a sacralização da natureza. A ecologia política questiona a oposição natureza/cultura, porém relativizando-a. Parece-nos bem mais fecundo interessar-se antes pela complexidade do mundo vivo que pela oposição homem/natureza. Os homens e seu meio ambiente não param de se transformar mutuamente, sendo assim importante convencer-se de que ambos estão envolvidos em uma evolução interdependente (co-evolução).

O progresso

Depois de Hiroxima, de Tchernobyl e dos buracos na camada de ozônio ou, mais recentemente, da crise da vaca louca, devemos avaliar as conseqüências de um progresso que já não se mostra nem linear nem sem limites: o progresso técnico não é necessariamente sinônimo de emancipação humana e de melhorias do meio ambiente. Para a ecologia política, não se trata, no entanto, de rejeitar a noção de progresso nem de mergulhar em um “catastrofismo” antitécnico. Trata-se de dar o lugar certo ao progresso técnico, uma vez que não há razão para considerá-lo “naturalmente” dotado de virtudes.

Para os ecologistas, o desenvolvimento das capacidades humanas não constitui um valor em si. A tecnologia introduziu-se em nosso mundo cotidiano, trazendo consigo novas vulnerabilidades, novas dependências. A técnica nunca conseguirá suprimir todos os riscos, provocando mesmo novos riscos. Depois de ter tentado domesticar a natureza, agora temos de aprender a domesticar o próprio progresso, o que supõe considerar sempre seus dois lados: o de solução para crises e o de fator de crises ecológicas. O progresso técnico nos diz o que se pode fazer (OGM, por exemplo), mas não o que é bom ou mau. O fato de a ciência e a técnica virem a garantir a possibilidade de escolhermos o sexo, a cor e o cabelo de nossos filhos e de gerações futuras não nos obrigará a optar por isso. Para a ecologia política, os valores independem das mudanças técnicas e prévias à sua implementação.

A responsabilidade

O poder das atuais tecnologias é de tal ordem que suas conseqüências para o meio natural, para as outras espécies vivas, vegetais ou animais, se multiplicaram. Ainda que não ocorram acidentes ecológicos, o simples funcionamento de vários sítios industriais produz efeitos nocivos para o meio ambiente. Basta pensar na criação de suínos na Bretanha ou nos diversos rejeitos lançados em rios na França. A decisão de andar de carro ou de trem e o nível de calefação de nossas casas influem no clima. Degradamos o meio que nos faz viver.

Há coisas milagrosas em nosso planeta, mas há também horror. A beleza do mundo é um desses milagres; se a sacrificamos, o que sobrá? Esse meio, que torna a vida possível, pode ser fonte de alegria ou, em outros termos, de alegria de

estar no mundo. Somos nós também que o produzimos; seremos nós que o legaremos a nossos filhos e aos filhos de nossos filhos. Ele é o berço, o domínio e a casa que preparemos para sua acolhida. Desejar filhos, fazê-los nascer, sem nos preocupar com o mundo devastado que lhes legamos, é uma atitude digna de pena.

A solidariedade

O princípio da propriedade e o poder econômico, este conseqüência daquele, não deveriam dar a seus detentores o direito de influir discricionariamente na vida dos outros. No entanto, é assim que tudo se dá. Por vezes, ainda que de maneira indireta, embora não menos determinante, esse poder se estende até um direito de vida ou de morte. Acaba levando alguns ao total desespero, por sentirem-se completamente incapazes de encontrar um lugar na sociedade, de ganhar seu sustento, de viver decentemente, seja porque desde muito jovens se viram marginalizados, seja porque sofrem os efeitos de demissões aos 40 anos, quando “reconversões” se tornam impossíveis e as obrigações familiares, esmagadoras, porque impossíveis de serem cumpridas.

Considerando o Direito e seu funcionamento implacável, seu caráter um tanto sacralizado, não há o risco de uma perda de sentido mais profundo? A riqueza dos indivíduos se constitui sempre da base de cooperação social; um indivíduo isolado, sem laços com seus semelhantes, não conseguiria sequer sobreviver. Se um indivíduo enriquece, ele deve seu enriquecimento a toda a cadeia de seus semelhantes que construiu o mundo onde ele nasceu e a seus contemporâneos que participaram direta ou indiretamente de seu enriquecimento. Isso não deveria levar a um direito de retorno que se traduziria em um dever de solidariedade mínimo? Uma sociedade que tende a abolir o princípio do dom implicando o contradição não estará correndo o risco de se desfazer, de se decompor? A simples solidariedade, mas também a dívida direta, nos impõe a atitude de não permanecermos indiferentes à infelicidade de um continente inteiro. A África está sem forças, exausta, e não somos alheios a essa situação.

A autonomia

A responsabilidade será apenas aparente se não for acompanhada de autonomia. Esta implica reconquista, por indivíduos e coletividades, do controle de suas atividades de produção, de sua vida quotidiana e de decisões públicas. Trata-se de traduzir em ações um certo número de fórmulas: “colocar as mãos na massa”; participar; ver as conseqüências de seus próprios atos. As decorrências desses atos se dão em âmbitos diversos: na empresa, na vida cidadã em plano local, regional e nacional.

Recolocar o conteúdo no centro da política

Os enunciados precedentes mostram uma evidência: a ecologia é portadora de muitíssimos novos conteúdos, ou melhor, constitui um intenso apelo para que haja interesse por conteúdos. A ecologia fixa objetivos, redefine meios e estratégias, ou seja, lida com ações que pareciam não ter mais relação com a “política”, reduzida à competição pelo poder entre homens e partidos intercambiáveis.

A esperança revolucionária sumiu do horizonte, o comunismo faliu e o projeto socialista decepcionou. Portadora de grandes ambições durante todo o século, hoje a política está muito debilitada. Não há nenhum mal em que a política se torne mais modesta, entretanto sua atual impotência e seu enfraquecimento face à economia são extremamente perniciosos. Uma sociedade sem projeto político, entregue às forças do mercado e sugada pela espiral do “produzir cada vez mais” só pode levar ao crescimento das desigualdades sociais e das crises ecológicas. É urgente, portanto, dar novamente sentido e conteúdo à política.

O impasse do produtivismo

As revoluções agrárias e industriais permitiram que se acabasse com as crises de escassez alimentar. Possibilitaram ao Ocidente alimentar, alojar e vestir um número cada vez maior de indivíduos cuja perspectiva de emprego é cada vez menor. Inicialmente, o modelo capitalista assegurou que se pudesse sobreviver. Com o fim da 2ª Guerra Mundial e o nascimento de uma nova variante do capitalismo, designada fordismo por muitos economistas, o modelo assegurou o poder de “viver bem”, ou melhor, de aumentar o poder de consumo. O modelo capitalista teve diversas variantes, mas todas se caracterizam por um traço comum: o produtivismo. Este, com sua dinâmica do “sempre mais”, atingiu hoje seus limites.

Depois de trinta anos (1945-1975) de crescimento econômico, o modelo fordista entrou em crise. Nos anos 80, essa crise desembocou em uma variante muito mais liberal do capitalismo e, paralelamente, em uma crise ecológica; embora menos perceptível pela opinião pública, esta não é menos ameaçadora. Foi em detrimento da Terra que se deu a busca de economia de trabalho e de acumulação do capital, duas bases de sustentação do fordismo como do liberalismo. A volta ao liberalismo recolocou na ordem do dia crises ligadas à pobreza (doenças ligadas à fome e à insalubridade, não apenas no Terceiro Mundo, mas também nos países ricos). Ao mesmo tempo, no próprio núcleo do sistema capitalista, esboça-se um novo tipo de crise ecológica: crises de abundância, herança envenenada dos milagres técnico-econômicos do pós-guerra. Esse novo tipo de crise é tão mais ameaçador quanto superpõe efeitos locais (destruição de paisagens, poluição do ar, envenenamento de lençóis

freáticos) a efeitos globais que repercutem em qualquer ponto do planeta, embora provenham de disfunções localizados em sociedades determinadas.

O sistema produtivista resolveu o problema da penúria pela quantidade. Levou-se essa resposta quantitativa a tais extremos que surgiu um problema de qualidade. É preciso mudar de orientação: retomar o controle da economia; dominar as condições de um novo tipo de crescimento, englobando forças do mercado e da tecnologia; repensar nosso modelo de desenvolvimento, partindo de uma reavaliação de nossas necessidades. Está mais do que na hora de se observar a questão essencial: produzir para quê?

Um novo modelo de desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável

Segundo definição adotada pela ONU, desenvolvimento sustentável é o que permite satisfazer as necessidades das gerações atuais, começando pelos mais carentes, sem comprometer as possibilidades de que gerações futuras também possam satisfazer suas necessidades.

O que implica a idéia de desenvolvimento sustentável? A idéia encerra duas dimensões. Atualmente, supõe que esse modo de desenvolvimento responda às necessidades de todos; em longo prazo, supõe que possa durar¹. O desenvolvimento sustentável inclui também a idéia de redistribuição (ou de justiça social), uma vez que propõe uma ordem para a satisfação das necessidades: começar pelos mais carentes. No entanto, como fazer? Como reorientar nosso desenvolvimento para que se torne sustentável?

Primeiro imperativo: economizar o fator Terra, dando prioridade a tecnologias que economizam energia e, mais amplamente, que respeitem o meio ambiente.

Segundo imperativo: implementar novas regulamentações, acrescentando à proteção social a proteção do meio ambiente.

Para tanto, os meios existem. Estendem-se de medidas regulamentares (leis e normas) a meios econômicos (“eco-impostos”, autorizações negociadas), passando por acordos de autolimitação e códigos de boa conduta. Cada um desses instrumentos obedece a uma lógica diferente. Alguns permitem que se reparem degradações; outros, que se indenizem danos causados por terceiros; outros, ainda, que se previnam efeitos nocivos pela dissuasão. Sem dúvida, a via do imposto dissuasivo é a mais promissora. Duplamente promissora, porque, ao lado de seu efeito protetor do meio ambiente, também oferece à coletividade recursos novos que podem ser alocados em outras políticas. Por exemplo, baixar o custo do trabalho no quadro de políticas de crescimento do emprego. Com isso, chegamos ao efeito redistributivo do modelo de desenvolvimento sustentável. Os mais carentes não têm meios de poluir e, freqüentemente, são os mais atingidos por poluições. Serão, portanto, os maiores beneficiários de uma reorientação geral para

o desenvolvimento sustentável. Em curto prazo, podem ser penalizadas as classes cuja renda é pouco significativa. Para estas, restrições ao uso livre e gratuito do meio ambiente poderão turvar a miragem de uma generalização do modelo da sociedade de consumo, do qual não percebem o caráter insustentável e perigoso para sua própria saúde. Às novas políticas ecológicas é portanto necessário associar reformas sociais, senão aquelas políticas não parecerão legítimas.

Em longo prazo, e do ponto de vista do interesse geral, são evidentes as vantagens do desenvolvimento sustentável. Infelizmente, no entanto, é muito raro impor-se o interesse da humanidade; geralmente se adota a fórmula “depois de mim, o dilúvio”. Como fazer para que forças sociais e políticas se interessem pelo desenvolvimento sustentável? Certamente, promovendo-se um intenso debate ideológico e cultural, visando a modificar a percepção da escala dos riscos e das vantagens do desenvolvimento sustentável, a fazer progredir os valores e normas da ecologia. Para além da política e de seus conteúdos, é a instância política, seu campo e seus métodos, que deve ser reconstruída.

Repensar a instância política entre o global e o local

Os governos parecem incapazes de resolver tanto os problemas quotidianos como os de dimensão planetária; seja impedir demissões em alguma empresa que apresenta excelentes resultados económicos, seja lutar contra o aquecimento da temperatura no mundo. Em um momento em que inexistem mais limites para o poder económico e financeiro, o poder político continua dependendo amplamente do princípio da soberania dos Estados. A relação de forças se encontra, portanto, não apenas desigual, mas invertida. Para que a instância política readquirir credibilidade e, assim, meios de ação, é indispensável alcançar um novo equilíbrio.

“Pensar globalmente, agir localmente”

A mundialização e as fortes tensões que abalam os Estado-Nações, quando não levam à sua implosão, reforçam a pertinência desta palavra-de-ordem surgida entre os ecologistas dos anos 70.

Pensar globalmente

Porque a ecologia política se apropria de máximas que podem ser as do humanismo em geral: “Sou homem e nada que é humano me é estranho”; “Somos todos responsáveis por tudo, diante de todos, particularmente, de nós mesmos”. Pensar globalmente corresponde a elevar-se ao nível de uma visão planetária, que o saber ecológico tornou possível. Visão do estado do planeta, de sua degradação

contínua, do jogo complexo de causas e conseqüências e, parte essencial desse jogo, da atividade humana sob suas diversas formas. Este é um aspecto essencial: o ‘controle da natureza’ constitui um fantasma que parece prudente não evocar em demasia; ao contrário da atividade humana, pela qual somos responsáveis e sobre a qual podemos, devemos, em todo caso, esperar manter controle.

Agir localmente

Avontade de se encarregar do meio ambiente circundante, de agir por si mesmo, em seu próprio domínio. Contra o centralismo, contra a tecnocracia. É a reivindicação de um direito: o de aproximação do poder político dos cidadãos, ou seja, regionalização, até mesmo municipalização do poder político ou, melhor dizendo, reapropriação da política sem delegação nem subordinação. A possibilidade de pensar a esfera planetária suscita nossa responsabilidade local e deveres conseqüentes. A ação local permite que melhor se meça o que está em jogo e os resultados de seus próprios atos. Possibilita ainda que se note como, na ausência de ação, o horizonte é de infantilismo, de recriminação estéril e repetitiva que perpetua o *status quo*.

Poucos são os que percebem que as conseqüências de seus atos, insignificantes a seus olhos, se tornam expressivas e mudam de esfera quando são ampliadas pelo número de atores sociais envolvidos. E ainda que o soubessem, será que isso adiantaria muito? Quem levaria em conta essas aspirações? “Nosso modo de vida não é negociável”, foi como o ex-presidente Bush reagiu às negociações da Eco-92, no Rio de Janeiro.

Agir globalmente, pensar localmente

Como responder a esse cinismo e egoísmo, senão por meio de leis globais que impeçam os homens de ser nocivos em escala planetária? Sendo imprescindível agir globalmente, na busca pela aceitação de leis globais, é necessário convencer em lugares precisos, por meio de acordos locais. Agir globalmente, pensar localmente, essa deve ser a divisa de uma ecologia política pragmática e realista.

Agir globalmente

Trata-se de fixar regras de uma ordem superior às instâncias tradicionais (em particular, o Estado-Nação) e munir-se de meios para que sejam aplicadas. Trata-se de eliminar efeitos perversos derivados de certas interações, de impedir condutas que parecem localmente vantajosas, mas que, por sua sucessão, podem ter conseqüências desastrosas para o conjunto. Resumindo, trata-se de estabelecer regulamentações para o jogo cego do exclusivismo e das concorrências mercantis, das relações de forças do poder geopolítico, para privilegiar práticas úteis mutuamente.

Pensar localmente

Este aspecto, parece-nos, é essencial. Não faltam teóricos, sobretudo na França, para pensar globalmente. Quanto a agir globalmente, isto é, elaborar tratados internacionais, com aditivos de leis nacionais e decretos de regulamentação, há legisladores, ministros e seus gabinetes que sabem muito bem como o fazer. Os problemas só começam a surgir quando se chega ao nível da implementação local. As regulamentações só têm efeito quando cidadãos crêem em sua utilidade, convencem-se de que têm sentido, quando obrigações parecem justificadas. Em sociedades democráticas, essa justificação supõe a adesão ao princípio do interesse geral que, por sua vez, implica que, local ou individualmente, suas vantagens sejam percebidas.

Um bom exemplo é o da 3ª república, na França. A escola constituiu então uma correia de transmissão essencial. Foi por meio dessa instituição que se difundiram os valores daquela república que, um século depois, estava ressuscitando os valores da Revolução. Foi por meio de professores primários que se transmitiram princípios elementares de moral e de educação cívica, fermento dos progressos humanos e sociais do fim do século XIX. Tais resultados foram obtidos pelos professores primários porque, face à Igreja e aos notáveis tradicionais, souberam convencer uma população majoritariamente rural dos benefícios da instrução, participando da gestão de municípios e da promoção social das crianças. Do mesmo modo, é fácil compreender teoricamente que a luta contra o efeito estufa implica a imposição de limites à circulação dos carros. Não será, no entanto, pela culpabilidade dos automobilistas - por exemplo, pelos efeitos catastróficos que poderão provocar no Bangladesh em 2050 -, que se conseguirá levá-los àquela compreensão. Certamente é muito mais eficaz valorizar o silêncio e o ar menos poluído de uma cidade em que a circulação de automóveis é restrita.

Sem a adesão dos atores não se faz nada durável. É assim que entendemos a fórmula “pensar localmente”. Para a ecologia política, é preciso agir para que se amplie a tomada de consciência de efeitos distantes da vida de cada um, de modo a tornar justificáveis restrições impostas por leis. Trata-se de, pouco a pouco, amadurecer em comunidades locais a consciência de um destino comum do gênero humano, de necessidades comuns, de vantagens recíprocas. Trata-se ainda de agir politicamente para compilar regras internacionais, que maiorias locais estejam dispostas a aceitar.

Conclusão

Faz pouco tempo que somos 6 bilhões de seres humanos; de semelhantes, ainda se diz. Há, no entanto, uma enorme disparidade. Para constatar isso, basta que nos limitemos aos personagens valorizados pela mídia dentre a massa de

anônimos. Pelo lado do horror, impera a abundância: homens do GIA; milícias sérbias na Bósnia e no Kosovo; os virtuosos das machadinhas no Ruanda. Outros homens chamam-se E. Levinas, P. Ricoeur, H. Jonas. Convidam-nos a manter relações humanas bem diferentes. É preciso um singular esforço de imaginação para considerá-los, uns e outros, semelhantes. É grande a tentação de ver os primeiros como pré-hominídeos. Sabemos, porém, que os homens não são isso ou aquilo; são seres em constante transformação, construindo-se a si mesmos. As relações sociais das quais participamos, da infância até a velhice, desempenham um papel essencial nesse processo. Está em nossas mãos, conseqüentemente, o evoluir para uma humanidade bárbara ou civilizada. É isso que está em jogo para a ecologia política. Quanto a nós, estamos convencidos de que a ecologia política está destinada a ter uma influência durável sobre a humanidade de amanhã.

Notas

1 Em inglês, usa-se o termo *sustainable*; em francês, o adjetivo *durable*. Com esta tradução, porém, perde-se uma das duas dimensões contidas no termo inglês.

*¿Es posible el capitalismo sostenible? **

James O'Connor**

Introducción

Hay pocas expresiones tan ambiguas como las de “capitalismo sostenible” y otros conceptos asociados, tales como “agricultura sostenible”, “uso sostenible de la energía y los recursos” y “desarrollo sostenible”. Esta ambigüedad recorre la mayor parte de los principales discursos contemporáneos sobre la economía y el ambiente: informes gubernamentales y de las Naciones Unidas; investigaciones académicas; periodismo popular y pensamiento político “verde”. Esto lleva a muchas personas a hablar y escribir acerca de la “sostenibilidad”: la palabra puede ser utilizada para significar casi cualquier cosa que uno desee, lo que constituye parte de su atractivo.

“Capitalismo sostenible” tiene una connotación a la vez práctica y moral. ¿Existe acaso alguien en su sano juicio que pueda oponerse a la “sostenibilidad”? El significado más elemental de “sostener” es “apoyar”, “mantener el curso”, o “preservar un estado de cosas”. ¿Qué gerente corporativo, ministro de finanzas o funcionario internacional a cargo de la preservación del capital y de su acumulación ampliada rechazaría asumir como propio este significado? Otro significado es el de “proveer de alimento y bebida, o de medios de vida”. ¿Qué trabajador urbano mal pagado, o qué campesino sin tierra rechazaría este significado? Y otra definición es la de “persistir sin ceder”. ¿Qué pequeño agricultor o empresario no se resiste a “ceder” ante los impulsos expansionistas del gran capital o del estado, enorgulleciéndose por su “persistencia”?

* Traducción realizada por el Profesor Guillermo Castro Herrera.

** Profesor de la Universidad de California. Editor de la revista *Capitalism, nature, socialism*.

Estamos en presencia de una lucha a escala mundial por determinar cómo serán definidos y utilizados el “desarrollo sostenible” o el “capitalismo sostenible” en el discurso sobre la riqueza de las naciones. Esto quiere decir que la “sostenibilidad” es una cuestión ideológica y política, antes que un problema ecológico y económico.

El análisis que se hace aquí utiliza el término “sostener” en los tres sentidos indicados: “sostener el curso” de la acumulación capitalista a escala global; “proporcionar medios de vida” a los pueblos del mundo, y “sostenerse sin ceder” por parte de aquellos cuyas formas de vida están siendo subvertidas por las relaciones salariales y mercantiles. En esta perspectiva, el problema del capitalismo sostenible se refiere en parte a la posibilidad -o no- de que la sostenibilidad definida de estas tres maneras pueda ser alcanzada, y a cómo podría lograrse tal cosa.

Existe un cuarto sentido para “sostener”: el que se refiere a la “sostenibilidad ecológica”, aún cuando es escaso el acuerdo entre los científicos de la ecología respecto al significado preciso de esta expresión. Por ejemplo, la biodiversidad o la “salud del planeta” rara vez son problematizadas en términos de la ciencia ecológica y de las ideologías subyacentes a esta ciencia, como tampoco ocurre con la expresión “crisis ecológica”, tan ampliamente utilizada por escritores populares sin el beneficio de una definición precisa.

Los ecólogos de poblaciones y los biólogos de la conservación correlacionan por lo general cambios en la población de una determinada especie, cambios en la “capacidad de carga”, definida de manera estrecha en términos de las necesidades de esa especie, y algún coeficiente que mide la relación entre la especie y la capacidad de carga en cuestión por un lado, y el resto del ecosistema del que esa especie podría depender por el otro. Todos estos términos poseen alguna capacidad explicativa. Sin embargo, tal multiplicidad de determinantes implica que no existe forma evidente de saber con certeza si las amenazas a una especie provienen de ella misma, por así decirlo, o de transformaciones en el conjunto del ecosistema debido, por ejemplo, a la intrusión de otras especies. Si esto es así, hablar acerca de la “sostenibilidad” de especies en particular puede resultar menos preciso de lo que parecía a primera vista, y el concepto de “crisis ambiental” puede resultar más problemático.

Estas ambigüedades se acentúan cuando los ecólogos o los Verdes combinan las dimensiones social y económica con la biofísica, y debaten acerca de la “sostenibilidad” de ecosistemas o regiones enteras. En la región de la bahía de Monterrey, California, por ejemplo, la excesiva extracción de aguas subterráneas ha hecho disminuir el nivel de los acuíferos, ocasionando salinización debido al agua de mar, lo que a su vez amenaza la viabilidad de la agricultura. ¿Constituye esto una “crisis”?

En términos económicos no, si la región importa agua. De hecho, el agua importada puede insuflar nueva vida a la agricultura local y al desarrollo industrial, comercial y residencial. “Agricultura sostenible” significa una cosa desde una perspectiva biorregional estricta, y otra si la perspectiva es ampliada para incluir a otras biorregiones. En este caso particular, el debate en torno al agua tiene que ver menos con la “sostenibilidad” del capital agrícola local y de la calidad del agua, y más con normas de juicio relativas al tipo de comunidad y de cultura que los habitantes de la región desean tener: en el caso de Pajaro Valley, por ejemplo, se trata de escoger entre preservar su actual sabor mexicano, o abrirlo más a la población trabajadora de Silicon Valley, al otro lado de la cordillera litoral.

Si se define “sostener” de estas cuatro maneras, la respuesta breve a la pregunta “¿es posible el capitalismo sostenible?” es “no”, y la larga es “probablemente no”. El capitalismo tiende a la autodestrucción y a la crisis; la economía mundial crea una mayor cantidad de hambrientos, de pobres y de miserables; no se puede esperar que las masas de campesinos y trabajadores soporten la crisis indefinidamente y, como quiera que se defina la “sostenibilidad”, la naturaleza está siendo atacada en todas partes.

En este artículo se examina alguna evidencia relativa al problema del “capitalismo sostenible”, haciendo énfasis en algunos de los diferentes conceptos de “sostenibilidad” planteados por los Verdes y por el sector empresarial. Ofrecemos un breve recuento de las condiciones de sostenibilidad económica (o de rentabilidad y acumulación), para discutir enseguida la “primera” contradicción del capitalismo -o contradicción “interna”-, y la naturaleza de la acumulación capitalista, cargada de episodios de crisis y dependiente de las crisis. A esto se agrega un breve examen del proceso de formación de una crisis mundial en la década de 1980, y se plantea que las perspectivas de una gestión económica global son tan endebles como las de una regulación ambiental global.

A partir de lo anterior, se aborda otro problema en apariencia insoluble para el capitalismo: la “segunda” contradicción, esto es, la reducción de las “ganancias marginales” generada por la contradicción entre el capital y la naturaleza (y otras condiciones de producción), asociada a los efectos económicos adversos para el capital que surgen del ambientalismo y otros movimientos sociales. Desde aquí se discuten las formas mediante las cuales el capitalismo intenta enfrentar estas crisis. La capacidad del capital para enfrentar con éxito tanto la “primera” como la “segunda” contradicción es limitada, debido a la naturaleza del estado liberal democrático y del propio capital. Se subraya lo incierto de las consecuencias políticas -y por tanto económicas y ecológicas- de una depresión económica generalizada. Por último, tras un breve examen de las condiciones ambientales en los países pobres (el Sur), se delinean algunas conclusiones sobre las posibilidades de movimientos ambientalistas sociales y políticos radicales, o “verdes rojos”. Si bien se plantea que las perspectivas para alguna clase de “so-

cialismo ecológico” no son buenas, las de un “capitalismo sostenible” pueden ser aun más remotas.

La política ambiental y el discurso de la sostenibilidad

La evidencia favorece la idea de que el capitalismo no es sostenible desde el punto de vista ecológico, a pesar de la reciente avalancha de charlas sobre “productos verdes”, “consumo verde”, “forestería selectiva”, “agricultura baja en insumos” y demás. Durante la campaña por la presidencia de 1992, ninguno de los tres candidatos principales hizo del “ambiente” un tema relevante. A partir de la victoria de Bill Clinton, el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha aceptado compromisos en temas que van desde el uso de tierras federales para pastoreo hasta la tala de bosques antiguos y la lucha contra la contaminación, abandonando a menudo métodos de control de la contaminación de eficacia ya probada a favor de “soluciones de mercado”.

Los gobiernos estatales y locales desdeñan el ambiente en su competencia por atraer capital escaso. En la legislación federal, se hace más estrecha la definición de “humedales”, al igual que la de “especies en peligro”. La salud ocupacional y la preservación de la seguridad laboral son saboteadas. Se mercantilizan más los parques nacionales y estatales en la medida en que los gerentes buscan maneras de obtener beneficios. Mientras la industria nuclear se encuentra momentáneamente estancada, algunas industrias de bienes de capital, como la del papel y la pulpa, han empezado a instalar tecnologías más limpias; la agricultura orgánica se ha visto beneficiada por un aumento del interés de los consumidores en productos libres de pesticidas; la mayoría de los dirigentes sindicales se oponen o son indiferentes a las demandas planteadas por los ambientalistas; y las grandes organizaciones ambientalistas tradicionales (con dos o tres notables excepciones) están más dispuestas a comprometer sus posturas en nombre del “crecimiento económico”.

En la mayor parte de los países, los partidos verdes siguen siendo pequeños o comprometen sus posiciones en la política local o nacional. En Europa, el ambiente no figura entre las preocupaciones de los burócratas que dirigen la poderosa Comisión Europea, a pesar de la representación de los Verdes en el Parlamento Europeo. Los acuerdos internacionales sobre el desgaste de la capa de ozono son débiles, y en materia de calentamiento global son meramente simbólicos.

Los acuerdos relativos a la protección de los “bienes comunitarios” del mundo -cuencas, bosques, ríos, lagos, costas, océanos y calidad del aire- suelen ser honrados en lo fundamental. La caza de ballenas puede reiniciarse, y en todas partes los pescadores demandan agotar la riqueza del mar. El petróleo tiene más importancia que nunca como riqueza económica y poder nacional. Las empresas

energéticas y mineras (que a menudo son las mismas) se encaminan a la explotación masiva de mayores cantidades de recursos minerales, desde Wisconsin hasta Siberia.

En el Sur, muchos gobiernos están más que dispuestos a vender sus derechos de primogenitura a las corporaciones transnacionales en nombre del “desarrollo”, a menudo bajo la presión de grandes deudas externas, mientras las grandes masas de campesinos sin tierra y de pequeños propietarios rurales, y los pobres de las ciudades, se ven forzados a saquear y agotar recursos y a contaminar el agua y el aire respectivamente, tan sólo para sobrevivir. Los expedientes ambientales de los “tigres” asiáticos, los “cachorros” del Sudeste de Asia, y de México, Brasil y otros centros de crecimiento latinoamericanos, no son muy estimulantes.

Hablando en términos prácticos, un paso necesario hacia el capitalismo sostenible -definido de una u otra manera como “ecológicamente racional o sagaz”- consistiría en presupuestos nacionales que obligaran a pagar impuestos elevados sobre insumos de materias primas (por ejemplo carbón, petróleo, nitrógeno) y sobre ciertos productos (automóviles, productos plásticos, envases desechables), complementados con una política de *etiqueta verde* que eximiría de impuestos a los productos genuinamente verdes (definidos según su bajo impacto ecológico en cada etapa del proceso de producción, distribución y consumo).

Otro paso consistiría en políticas nacionales de gasto que subsidien masivamente a la energía solar y a otras fuentes alternativas y benignas de energía; la investigación tecnológica encaminada a eliminar productos químicos tóxicos y otras sustancias en su fuente de origen; innovaciones en materia de tránsito masivo, salud ocupacional y seguridad laboral, y procedimientos de control y cumplimiento en los ámbitos nacional, regional y comunal; y una redefinición y reorientación generales de las prioridades en materia de ciencia y tecnología. Este tipo de presupuesto verde -con los cambios apropiados en los métodos de cálculo del ingreso nacional- no está siendo desarrollado en ninguna parte del mundo, salvo en el papel por parte de un pequeño grupo de economistas y activistas verdes.

A nivel del discurso sobre la “sostenibilidad”, las perspectivas para un capitalismo ecológicamente sagaz, que los Verdes puedan reconocer como tal, parecen problemáticas en el mejor de los casos. De hecho, tras una aparente convergencia de vocabulario, existe un desencuentro o brecha entre el discurso verde y el capitalista, enfrentados en un diálogo de sordos.

Un problema consiste en que el discurso de buena parte del movimiento ambientalista cuenta con el apoyo de capitales que buscan reverdecerse a sí mismos o, al menos, mostrar una imagen pública verde. Este discurso aspira a encontrar vías que lleven a las corporaciones a reformar sus prácticas económicas, haciéndolas compatibles con la sostenibilidad de los bosques y su biodiversidad, la calidad del agua, la preservación de la vida silvestre, las condiciones atmosféricas,

y demás. Aquí, la atención se concentra en los procesos de producción, la tecnología, el reciclaje y la reutilización y la eficiencia energética, así como en problemas de carácter más general, relacionados con la estructura del consumo, el financiamiento, el mercadeo y la organización corporativa. Por ejemplo, el *World Resources Institute*, de orientación reformista, planteó hace poco que la sostenibilidad presupone “una transformación sin precedentes” de la tecnología. Para los Verdes reformistas, por tanto, el problema consiste en cómo rehacer el capital en términos adecuados a la sostenibilidad de la naturaleza.

En las salas de reunión de las corporaciones, sin embargo, el problema se discute en otros términos. En un nivel superficial, el problema simplemente consiste en cómo presentar una imagen verde verosímil a los consumidores y al público -por ejemplo, la industria química norteamericana planeó gastar diez millones de dólares en 1992 para presentarse a sí misma como ambientalmente razonable y amistosa (*New York Times*, 12/8/1992). Se trata también de cómo reformar la producción de modo que se ahorren energía y materias primas, lo que constituye un problema esencialmente económico. Lejos de ser un problema para el capital en su conjunto, la eficiencia en el uso de la energía y de los materiales durante un período de lento crecimiento es económicamente deseable, y quizás lo sea también en lo ecológico. Para citar un caso, el 75% del aluminio producido por empresas norteamericanas proviene de envases y otros productos reciclados. Otro caso es el de nuevas prácticas en la industria de la madera, que produce postes y vigas a partir de árboles demasiado pequeños para ser convertidos en tablas, utilizando así lo que de otra manera sería un desecho. Del mismo modo, la retórica del “reciclaje” y los precios (selectivos) pueden ser utilizados para facilitar nuevas olas de obsolescencia planificada bajo el estandarte de la amistad hacia el ambiente -legitimando así el consumismo y preservando la rentabilidad.

Sin embargo, a un nivel más profundo, las corporaciones construyen el problema ambiental de un modo que resulta el extremo opuesto de lo que los Verdes suelen pensar acerca de la reforma. Se trata, aquí, del problema de rehacer la naturaleza de maneras consistentes con la rentabilidad sostenible y la acumulación de capital. “Rehacer la naturaleza” significa mayor acceso al medio natural, como “fuente” y como “vertedero”, lo cual tiene dimensiones políticas e ideológicas, así como económicas y ecológicas: por ejemplo, el asalto a las formas de vida de los pueblos indígenas.

“Rehacer la naturaleza” también significa volverla a trabajar o reinventarla, lo cual plantea aspectos políticos e ideológicos de importancia. Los ejemplos incluyen “plantaciones industriales maduras” de pino y abeto en el sureste y el noroeste de los Estados Unidos -un monocultivo que ha sido llamado “el equivalente forestal del ambiente urbano de edificación en altura” (Goldsmith, 1991: 94)¹; la alteración genética de alimentos para reemplazar las pérdidas de cosechas y aumentar el rendimiento de la tierra²; microorganismos utilizados en la industria de los

semiconductores para que “coman” desechos tóxicos, y plantas alteradas que limpian el suelo contaminado con plomo y otros metales. Cada uno de estos ejemplos, sin embargo, plantea sus propios peligros: la plantación forestal destruye la diversidad biológica, mientras los cambios genéticos en los alimentos y el uso de microorganismos para reducir costos contienen peligros biológicos desconocidos.

Aquí entramos en un mundo en el que el capital no se limita a apropiarse de la naturaleza, para convertirla en mercancías que funcionan como elementos del capital constante y del variable (para utilizar categorías marxistas). Se trata más bien de un mundo en el que el capital rehace a la naturaleza y a sus productos biológica y físicamente (y política e ideológicamente) a su propia imagen y semejanza³. Una naturaleza precapitalista o semi-capitalista es transformada en una naturaleza específicamente capitalista. Y así como el movimiento de los trabajadores impone al capital la necesidad de pasar de un modo de producción de valor basado en la plusvalía absoluta a otro de plusvalía relativa -por ejemplo, pasando de la ampliación de la jornada de trabajo a la reducción del costo de los salarios-, el movimiento verde puede estar forzando al capital a poner fin a su primitiva explotación de la naturaleza precapitalista, rehaciendo la naturaleza a la imagen del capital -también para disminuir los costos del capital, en especial los de reproducción de la fuerza de trabajo (o el costo de los salarios).

Visto de esta manera, en algún momento del futuro la naturaleza se tornará irreconocible como tal, o como la percibe la mayoría de las personas. Será, más bien, una naturaleza física tratada como si estuviera regida por la ley del valor y el proceso de acumulación capitalista mediante crisis económicas, como la producción de lápices o de comida rápida. La teoría del discurso tendrá mucho que decir, en ese momento, acerca del problema de la sostenibilidad, tal como lo hacen hoy la economía política y la ciencia ecológica. La razón consiste en que el proyecto capitalista de rehacer la naturaleza, aún en su infancia, es también un proyecto encaminado a rehacer (según parece) la ciencia y la tecnología a imagen del capital. Lo que esta imagen sea o llegue a ser dependerá de complejos problemas de representación, imágenes de la naturaleza, y de problemas de solidaridad social, legitimación y poder dentro de las comunidades científicas y universitarias.

Crisis de demanda: expansión y consumo

Una respuesta sistemática a la pregunta sobre la posibilidad de un capitalismo sostenible es: “no, a menos y hasta que el capital cambie su rostro de manera que pudieran tornarlo irreconocible para los banqueros, los gerentes de finanzas, los inversionistas de riesgo y los gerentes generales que se miran al espejo hoy”. La justificación de esta afirmación, ampliamente negada por políticos nacionales y por voceros de las grandes corporaciones, exige un breve recuento del funcionamiento del capitalismo, por qué funciona cuando lo hace, y por qué no funciona cuando no lo hace.

Hasta el surgimiento de la economía ecológica -la cual, aunque cuenta con precursores desde hace más de un siglo, aún tiene una presencia apenas marginal en la profesión-, los economistas debatían la sostenibilidad del capitalismo en términos puramente económicos, como capital de inversión, inversión y consumo, ganancias y salarios, costos y precios. En los modelos de crecimiento económico, el mundo físico o material aparecía sobre todo de dos maneras: primero, en forma de la teoría de la localización y la renta; segundo, bajo el concepto de “acelerador”, o de la cantidad de producto físico que la nueva capacidad productiva podría generar (por ejemplo, a una determinada tasa de uso, se necesitan tantas máquinas para producir tantos refrigeradores).

Desde un punto de vista económico, el capitalismo sostenible debe ser necesariamente un capitalismo en expansión, y como tal debe ser representado. Una economía capitalista basada en lo que Marx llamaba “reproducción simple” y lo que muchos Verdes llaman “mantenimiento” es una total imposibilidad -salvo en lo relativo a la fuerza de trabajo de mantenimiento doméstico, que no recibe paga, y al trabajo asalariado organizado por el estado. Las ganancias que ofrece el mantenimiento son mínimas, o no existen; la sostenibilidad capitalista depende de la acumulación y las ganancias. Una tasa general positiva de ganancia significa crecimiento del producto total (“producto nacional bruto”, según lo miden los sistemas capitalistas de contabilidad).

La ganancia, por ejemplo, es el medio de expansión de nuevas inversiones y tecnologías. La ganancia también funciona como un incentivo a la expansión. La ganancia y el crecimiento, por tanto, mantienen una relación de medios y fines, contenido y contexto, y el gerente financiero promedio no se preocupa en realidad por la diferencia entre ambos. Si bien existen muchas variantes de la teoría del crecimiento económico, todas presuponen que el capitalismo no puede permanecer inmóvil, que el sistema debe expandirse o contraerse o, en otras palabras, que alienta las crisis tanto como depende de ellas y que, en última instancia, debe “acumular o morir”, según lo dijera Marx⁴.

En el modelo más sencillo (e ingenuo) del capitalismo, la tasa de crecimiento o tasa de acumulación de capital depende de la tasa de ganancia⁵. Amayor tasa de ganancia (mientras todo lo demás permanece igual), más sostenible es el capitalismo. Una tasa de ganancia negativa genera problemas económicos: al menos una recesión, y en el peor de los casos una crisis general, deflación de los valores del capital, y una depresión. En este modelo, cualquier persona o situación que interfiera con las ganancias, la nueva inversión y la expansión de los mercados amenaza la sostenibilidad del sistema al crear el riesgo de una crisis económica de consecuencias económicas, sociales y políticas desconocidas e inimaginables.

En la teoría marxista tradicional, el capital es el peor enemigo de sí mismo. El capital pone en riesgo su propia sostenibilidad debido a lo que Marx llamó la “contradicción entre la producción social y la apropiación privada”. Una interpre-

tación de esta contradicción es la de que mientras mayor sea el poder del gran capital sobre los trabajadores, mayor será la explotación del trabajo (o la tasa de plusvalía), y mayores serán las ganancias potenciales producidas. Sin embargo, por esta misma razón también serán mayores las dificultades para realizar estas ganancias potenciales en el mercado, o para vender bienes a precios que reflejen los costos de producción más la tasa promedio de ganancia.

Aquí se identifica la contradicción entre el poder político del capital y la capacidad de la economía capitalista para funcionar sin problemas (o, en un caso límite, simplemente para funcionar). Esta “primera contradicción del capitalismo” (o “realización” o “crisis de demanda”) plantea que el intento de los capitales individuales de defender o restablecer sus ganancias incrementando la productividad del trabajo, aumentando la rapidez de los procesos productivos, disminuyendo los salarios o acudiendo a otras formas usuales de obtener mayor producción con un menor número de trabajadores, y pagándoles menos además, termina por producir, como un efecto no deseado, una reducción en la demanda final de bienes de consumo. Una menor cantidad de trabajadores, técnicos y otras personas vinculadas al proceso de trabajo produce más y, por tanto, está por definición en menor capacidad de consumir, descontando una deflación de los precios. De este modo, mientras mayores son las ganancias producidas, o la explotación del trabajo, menores son los beneficios realizados, o demanda de mercado, si todos los demás factores permanecen sin cambios. Por supuesto, los demás factores cambian constantemente: déficits en el presupuesto gubernamental, crédito hipotecario y de consumo, préstamos para negocios y una política exterior agresiva en materia comercial y financiera, entre otras posibilidades, pueden estimular la demanda para mantener “sostenible” al capitalismo.

Hoy en día, una economía sostenible presupone un sistema político y económico global con capacidad para identificar y regular esta “primera” contradicción -o contradicción “interna”- del capitalismo. Esto significa, en primer término y sobre todo, la capacidad para la regulación macroeconómica a escala global o, al menos, entre las potencias económicas del Grupo de los Siete (G7). Se trata, en otros términos, de un keynesianismo global del tipo instalado en las principales economías nacionales entre la década de 1950 y fines de la de 1970. Definido de esta manera práctica e inmediata, el capitalismo mundial podría resultar mucho menos sostenible de lo que piensan muchos economistas.

En primer lugar, los sistemas nacionales de regulación keynesiana se han debilitado o autodestruido desde fines de la década de 1970. En segundo lugar, el papel central de los Estados Unidos en la economía global hasta el período final de la Guerra Fría -como una suerte de caja registradora del mundo- se acerca a su fin. Esto significa que, hasta la débil recuperación de la recesión de 1990-1991, la economía norteamericana se veía impulsada por el gasto de consumo y el gasto militar, y por el endeudamiento público y privado. La recuperación posterior a

1991, sin embargo, es la primera desde 1876 que se ve encabezada por el gasto en exportaciones, con el gasto en inversión en un cercano segundo lugar. Todas las recuperaciones recientes de Alemania se han apoyado en las exportaciones, y el gobierno alemán ha declarado que lo mismo ocurrirá con cualquier recuperación de sus males presentes. Si Japón se recupera -y cuando lo haga- de sus actuales problemas económicos, las exportaciones se incrementarán a un ritmo superior al del consumo interno, la inversión y el gasto gubernamental. Por último, todas las llamadas nuevas economías industrializadas están orientadas a la exportación. Estos hechos sugieren que en un período en el que un Estados Unidos consumista no puede absorber los excedentes de bienes del mundo, será necesaria una gestión macroeconómica global de tipo keynesiano para evitar una deflación y una recesión general.

De hecho, existe una especie de macro-gestión, a cargo de los directores de bancos centrales y de los ministros de finanzas del G7, el Fondo Monetario Internacional y el Banco para Ajustes Internacionales. Este estado capitalista cuasi-global, sin embargo, está en manos del gran capital en general, y del capital financiero en particular. De aquí que, con la excepción de los intentos del G7 de disminuir las tasas de interés y estimular la demanda en países con excedentes de exportación (especialmente Japón), el estado global sigue una política anti-keynesiana, que obliga a capitales individuales y a países enteros a recortar costos e incrementar la eficiencia, y a disminuir el gasto gubernamental, respectivamente, sin dedicar reflexión alguna a los efectos de esta política en la sobreproducción de capital a escala global -del tipo identificado por Marx hace mucho tiempo ya, por no hablar de los peligros de guerras comerciales, formas creativas de trasladar a otros los costos de la ayuda exterior, creciente deterioro social, bloques regionales de comercio y desastre ecológico. Dicho de otra manera, no existe un Parlamento Global que apruebe leyes de salario mínimo y legislación protectora, ni Ministerios Mundiales de Trabajo, Bienestar Social y Ambiente, ni poder legítimo alguno que difunda el saber económico keynesiano a escala internacional. En cambio, en los Estados Unidos por ejemplo, el ex-presidente George Bush dijo que este país se convertirá en una “superpotencia exportadora”, y los asesores económicos del presidente Clinton aconsejan una política de exportaciones “cada vez más agresiva”.

Las perspectivas de una regulación global, organizada en un verdadero espíritu de cooperación, resultan hoy tan pobres como las de una regulación nacional ante las crisis de sobreproducción de la década de 1890: esto es, equivalen a cero. En aquellos días, las políticas nacionalistas de *dumping*, monopolio y colonialismo contribuyeron a generar dos guerras de rivalidad imperialista, y la Gran Depresión. Superficialmente, hoy podría haber dos factores mitigantes. Uno, que Europa es una entidad económica: Francia, por ejemplo, se une a Alemania en vez de combatir con ella en el plano económico. El otro consiste en que el capital ya no tiene un mero alcance nacional, sino cada vez más global, lo que teóri-

camente lo hace más dispuesto a la regulación global. Sin embargo, hasta ahora el G7 ha hecho un mal trabajo (que empeora año tras año) de regulación macroeconómica, y tanto el capital financiero global como la clase rentista que vive de los intereses del enorme montón de deuda acumulada en las décadas de 1970 y 1980 tienen el poder necesario para evitar que los gobiernos intenten la reflación de sus economías.

Crisis de costos: las condiciones de producción

Si bien este tipo de pensamiento económico sigue siendo válido en nuestros días, es -y siempre ha sido- unilateral y limitado. Esto se debe a que tal pensamiento presupone un abastecimiento ilimitado de lo que Marx llamó “condiciones de producción”. Este modelo tradicional da por supuesto que el capitalismo puede evitar cuellos de botella potenciales por el “lado de la demanda”, que el crecimiento está restringido únicamente por la demanda.

Sin embargo, si los costos del trabajo, los recursos naturales, la infraestructura y el espacio se incrementan de manera significativa, el capital enfrenta la posibilidad de una “segunda contradicción”, una crisis económica que surge del lado de los costos. Este es el caso, por ejemplo, de la “crisis del algodón” inglesa durante la Guerra Civil norteamericana, del aumento de los salarios por encima del incremento de la productividad en la década de 1960, y de los “choques petroleros” de la década de 1970. Aquí, sin embargo, nos preocupan fenómenos mucho más estructurados o genéricos de lo que podrían sugerir estos ejemplos aislados.

Las crisis de costos se originan de dos maneras. La primera ocurre cuando capitales individuales defienden o recuperan ganancias mediante estrategias que degradan las condiciones materiales y sociales de su propia producción, o que no logran mantenerlas a lo largo del tiempo. Este es el caso, por ejemplo, del descuido de las condiciones de trabajo (lo que termina por producir un incremento en los costos sanitarios), de la degradación de los suelos (que acarrea un descenso en la productividad de la tierra), o de desatender las infraestructuras urbanas en proceso de deterioro (aumentando así los costos derivados de la congestión y de la vigilancia policial), por mencionar tres ejemplos.

La segunda manera se presenta cuando los movimientos sociales exigen que el capital aporte más a la preservación y a la restauración de estas condiciones de vida, cuando demandan mejor atención de salud, protestan contra el deterioro de los suelos, y defienden los vecindarios urbanos de formas que incrementan los costos del capital o reducen su flexibilidad, para permanecer dentro de los mismos tres ejemplos. En este caso nos referimos a los efectos económicos, potencialmente negativos para los intereses del capital, derivados de los movimientos de trabajadores, del movimiento de mujeres, del movimiento ambientalista y de

los movimientos urbanos. Este problema de “costos adicionales” -y la amenaza que plantean a la rentabilidad- obsesiona a los economistas y a los ideólogos del capital vinculados al pensamiento dominante. Sin embargo, los dirigentes de los movimientos laborales y sociales rara vez discuten este tema en público.

En el mundo real, ambos tipos de crisis de costos se combinan e interactúan de maneras contradictorias y complejas sobre las cuales nadie ha teorizado. Por ejemplo, desde un punto de vista cuantitativo, nadie sabe con exactitud en qué medida los costos de la congestión urbana son el resultado del culto al automóvil y del desdén por el transporte colectivo, ni en qué medida son el resultado de las luchas de las comunidades por mantener a las autopistas lejos de su vecindad.

Necesitamos un abordaje teórico más refinado al problema que Polanyi llamó “tierra y trabajo”. De manera inadvertida, Marx proporcionó un punto de partida para un abordaje así mediante su concepto de “condiciones de producción”⁶. Como hemos visto, las condiciones de producción son cosas que no son producidas como mercancías de acuerdo con las leyes del mercado (ley del valor), pero son tratadas como si fueran mercancías. En otras palabras, se trata de “bienes ficticios” con “precios ficticios”.

De acuerdo a Marx, existen tres condiciones de producción: primero, la fuerza de trabajo humana, o lo que Marx llamó “las condiciones personales de producción”; segundo, el ambiente, o lo que Marx llamó “las condiciones naturales o externas de producción”; y por último, la infraestructura urbana (podemos agregar el “espacio”), o lo que Marx llamó “las condiciones generales, comunitarias, de producción”. El capitalismo sostenible requeriría que las tres condiciones estuvieran disponibles en el momento y en el lugar correctos, en las cantidades y con la calidad correctas, y con los precios ficticios correctos.

Como se ha señalado, la presencia de dificultades importantes en el abastecimiento de fuerza de trabajo, recursos naturales e infraestructura y espacio urbano plantea una amenaza a la viabilidad de unidades individuales de capital, e incluso a programas capitalistas enteros de carácter sectorial o nacional. De generalizarse, estas dificultades podrían llegar a amenazar la sostenibilidad del capitalismo al elevar los costos y afectar la flexibilidad del capital. De este modo, los “límites del crecimiento” no se presentan en primera instancia como el resultado de la escasez absoluta de fuerza de trabajo, materias primas, agua y aire limpios, espacio urbano y demás, sino como el resultado del *alto costo* de la fuerza de trabajo, los recursos, la infraestructura y el espacio. Esta amenaza inminente a la rentabilidad conduce al estado y al capital a intentar racionalizar los mercados de trabajo, de insumos, de combustible y de materias primas, así como a las normas de uso de la tierra urbana y rural, y al mercado de tierras, para reducir los costos de producción⁷.

Los obstáculos o la escasez que tienen origen del lado de la oferta plantean problemas especialmente difíciles a las empresas y a quienes formulan políticas en el capitalismo cuando la economía está débil, o cuando enfrenta una crisis de demanda o una competencia renovada por parte de otros países. El estancamiento o la caída de la rentabilidad obliga a los capitales individuales a intentar reducir el tiempo de retorno del capital, esto es, a acelerar la producción y reducir el tiempo necesario para vender sus productos.

Esta obsesión por hacer dinero con rapidez cada vez mayor para compensar la lentitud o la caída de ganancias se enfrenta, por ejemplo, a los mercados de trabajo organizados por los sindicatos, a los mercados de petróleo influenciados por la OPEP, y a la defensa tradicional de usos “ineficientes” del suelo y el agua por parte de la agricultura. Por un lado, el *capital dinero* busca más de sí mismo cada vez más rápido; por otro, aquello que Polanyi llamó “la sociedad”, y que nosotros podemos designar irónicamente como normas anticuadas de uso de la tierra y del trabajo, de la tierra y de los mercados de trabajo, combinado con la resistencia a la racionalización capitalista por parte de los movimientos sociales y de trabajadores, se constituye en obstáculos o “barreras a rebasar”. En última instancia, el capital debe enfrentar la indiferencia y la inercia social.

Una de las soluciones del capitalismo a este dilema, al menos en el corto plazo, es tan sencilla como económicamente destructiva. El *capital dinero* abandona “el circuito general del capital” -esto es, el largo y tedioso proceso de arrendar espacio para fábricas, comprar maquinaria y materias primas, alquilar tierra, localizar la fuerza de trabajo adecuada, organizar y llevar a cabo la producción, y poner en venta las mercancías- y encuentra la manera de involucrarse en aventuras especulativas de todo tipo. El *capital dinero*, basado en la expansión del crédito, o dinero que no puede encontrar medios de expresión en bienes y servicios verdaderos, salta por encima de la sociedad, por así decirlo, y busca expandirse por la vía más fácil, a través de la compra de tierras, las bolsas de valores, los mercados de bonos y otros mercados financieros.

De aquí resulta la anomalía económica de nuestro tiempo: el valor de lo que se demanda en concepto de plusvalía o ganancias aumenta con una rapidez mucho mayor que el valor real del capital fijo y circulante. Esto tiende a empeorar una mala situación económica, en la medida en que da lugar a un endeudamiento creciente y al riesgo de una implosión financiera. También se promueve el deterioro de las condiciones de producción ecológicas y de otro tipo, que tienden a ser descuidadas en la medida en que el capital financiero asume la hegemonía sobre los intereses productivos.

En términos puramente funcionales, durante períodos más tempranos del desarrollo del capitalismo existía suficiente fuerza de trabajo precapitalista, riqueza natural inexplorada y espacio. Esto era cierto tanto en los hechos como en términos de la percepción de las primeras generaciones de burgueses. Los precios (fic-

ticios) de la fuerza de trabajo, los recursos naturales y el espacio eran así mantenidos bajo control. Tampoco existían movimientos ambientalistas o movimientos urbanos que el capital no pudiera rebasar por sí mismo (con la ayuda del imperialismo y de la opresión estatal).

A lo largo del tiempo, el capital busca capitalizar a todo y a todos. En otros términos, todo encuentra cabida potencial en la contabilidad capitalista. Durante milenios, los seres humanos han venido “humanizando” la naturaleza, o creando una “segunda naturaleza”. Esto ha sido a menudo destructivo: deforestación y ciclos de inundaciones y sequías durante el sistema de plantaciones romano, las devastadoras consecuencias ecológicas de las Guerras Púnicas, y el agotamiento de los suelos y la escasez de agua en la civilización maya, constituyen ejemplos bien conocidos.

Sin embargo, en las formaciones sociales capitalistas esta segunda naturaleza es mercantilizada y valorizada al mismo tiempo en que está siendo degradada. Desde el punto de vista de quienes desean que el capitalismo sea ecológicamente sostenible, es aquí cuando empieza a aparecer el problema. Los mercados de trabajo se tensan, y el Norte debe depender de trabajo importado del Sur, con todos los problemas y costos económicos y sociales del caso. Ejemplos de esto se encuentran en el costo económico de instalar nuevos inmigrantes que usan un lenguaje diferente, y en los costos sociales del resurgimiento del racismo. Las materias primas y los bienes comunales incontaminados se tornan escasos, elevando lo que Marx llamaba “costos de los elementos de capital”: tal es el caso, por ejemplo, del abastecimiento doméstico de petróleo y gas, árboles y madera, y agua limpia, en los Estados Unidos. Y, finalmente, la infraestructura y el espacio urbanos se tornan escasos, lo que eleva los costos de congestión, la renta del suelo y los costos derivados de la contaminación. Los Angeles es un buen ejemplo; las ciudades de México y Taipei son ejemplos aún mejores.

En suma, la capitalización de las condiciones de producción en general, y de la naturaleza y el ambiente en particular, tienden a elevar el costo del capital y a reducir su flexibilidad. Como se ha señalado, existen dos razones principales para esto. Primero, una razón sistémica, que consiste en que los capitales individuales tienen pocos incentivos -o no tienen incentivos del todo- para utilizar las condiciones de producción de manera sostenible, sobre todo cuando se enfrentan a malos tiempos económicos creados por el propio capital. Segundo, y precisamente debido a esta primera razón, los movimientos de trabajadores, de ambientalistas y otros movimientos sociales desafían el control del capital sobre la fuerza de trabajo, el ambiente y lo urbano (y cada vez más también lo rural, sobre todo en el Sur). Los ejemplos en los Estados Unidos incluyen luchas regionales contra el uso de sustancias tóxicas, por la salud y la seguridad ocupacional, y por el derecho a conocer; la acción directa para salvar ríos silvestres y bosques primarios, y los movimientos contra las autopistas y contra el desarrollo urbano.

Expresada de manera sencilla, la segunda contradicción plantea que los intentos de los capitales individuales por defender o restaurar sus ganancias recortando o externalizando sus costos producen, como un efecto no deseado, la reducción de la “productividad” de las condiciones de producción, lo cual a su vez eleva los costos promedio. Los costos pueden aumentar para los capitales individuales en cuestión, para otros capitales, o para el capital en su conjunto.

Así, por ejemplo, el uso de plaguicidas químicos en la agricultura disminuye inicialmente los costos para terminar incrementándolos en la medida en que las plagas desarrollan resistencia a tales productos, y en que el uso de los mismos mata la vida del suelo. En Suecia se suponía que la monoproducción forestal sostenida mantendría los costos bajos; sin embargo, resultó que la pérdida de biodiversidad a lo largo de los años ha reducido la productividad de los ecosistemas forestales y el tamaño de los árboles. En Estados Unidos, la energía nuclear ofreció la promesa de reducir los costos energéticos. Sin embargo, las deficiencias en el diseño, problemas financieros, medidas de seguridad, y sobre todo la oposición popular a la energía nuclear, han terminado por incrementar los costos.

En lo que se refiere a las condiciones “comunitarias” de producción, las nuevas autopistas diseñadas para reducir los costos del transporte y de la movilización de los trabajadores tienden a elevar esos costos cuando atraen más tráfico y generan más congestión. Y, con relación a las condiciones “personales” de producción, es evidente que el sistema educativo norteamericano, que supuestamente debe incrementar la productividad del trabajo, produce tanta estupidez como aprendizaje, afectando a la vez la disciplina y la productividad.

Es importante resaltar que las condiciones de producción no son producidas de acuerdo con las leyes del mercado. Y la regulación del mercado sobre el acceso del capital a estas condiciones, cuando son producidas y si son producidas, es selectiva, parcial y a menudo deficiente. Por tanto, debe existir alguna agencia cuyo trabajo consista tanto en producir las condiciones de producción como en regular el acceso del capital a las mismas. En las sociedades capitalistas, esa agencia es el estado. Toda la actividad del estado, incluyendo virtualmente la actividad de todas sus agencias y todos sus rubros presupuestarios, está vinculada de uno u otro modo con la tarea de proveer al capital acceso a la fuerza de trabajo, a la naturaleza, o a la infraestructura y al espacio urbanos.

En los Estados Unidos, por ejemplo, están las burocracias laborales y educativas; el Departamento Nacional de Agricultura; el Servicio Nacional de Parques y otras agencias estatales similares; la Oficina Nacional de Tierras y la Oficina Nacional de Solicitudes; agencias de planificación urbana y autoridades de tráfico. Las funciones específicamente relacionadas con las tres condiciones de producción se enuncian a continuación.

Primero, con relación a la fuerza de trabajo, las reglamentaciones legales del trabajo infantil y las relativas a las horas y condiciones de trabajo, y a la seguridad en el trabajo.

Segundo, en relación con el ambiente, las leyes que regulan el acceso a tierras federales, el desarrollo de áreas costeras, y la contaminación.

Tercero, con respecto a la infraestructura y al espacio urbanos, las leyes de zonificación, la planificación del tráfico y las regulaciones sobre el uso de tierras.

Resulta difícil encontrar una actividad estatal o presupuestaria que no esté vinculada de una u otra manera a una o más condiciones de producción. Esto incluye también las funciones monetarias y militares, que protegen y facilitan el acceso “legítimo” a recursos y mercados necesarios para empresas capitalistas mineras, bancarias, mercantiles y de otro tipo. La guerra de George Bush en el Golfo Pérsico es apenas el último y más dramático papel de las fuerzas armadas en las sociedades capitalistas; en el ámbito supranacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los ejemplos más obvios de funciones monetarias orientadas a la expansión capitalista.

El manejo de las crisis de costos

¿Cuál es la solución a estas crisis originadas del lado de los costos, tanto desde el punto de vista de los capitales individuales como del capital en su conjunto? El peor caso ocurre cuando los capitales individuales, aprisionados entre costos crecientes y una demanda decreciente, recortan aún más los costos, intensificando a un tiempo la primera y la segunda contradicciones. Sin embargo, este resultado no es la única posibilidad.

Como se ha señalado, en relación con el ambiente existen múltiples ejemplos de capitales individuales que dan respuesta al consumismo verde: por ejemplo, ante la demanda pública de reducción del desperdicio y promoción del reciclaje, se encuentran nuevos usos para los productos desechables. Otro caso es el de las empresas que mejoran su capital de equipamiento cuando se ven forzadas a reducir sus contaminantes, y otro más es el de las empresas que se especializan en limpieza ambiental.

La mejor solución para el capital en su conjunto (*no* para la sociedad, ni siquiera para la “naturaleza” -lo cual presupondría una lógica de reciprocidad, no la lógica capitalista del intercambio de valor-) consiste en reestructurar las condiciones de producción de manera que incrementen su “productividad”. Puesto que el estado produce o regula el acceso a estas condiciones, los procesos de reestructuración suelen ser organizados y/o regulados por el estado. Ejemplos de esto son la prohibición del ingreso de automóviles al centro de las ciudades, para disminuir los costos de congestión y contaminación; el subsidio al manejo inte-

grado de plagas en la agricultura, para disminuir los costos de los alimentos y las materias primas; y el cambio de énfasis de la salud curativa a la preventiva -como en el caso de la lucha contra el SIDA en los Estados Unidos-, para disminuir los costos de la atención sanitaria.

Sin embargo, para obtener una solución verdadera sería necesario destinar enormes sumas de dinero a reestructurar la producción de manera que restauren o incrementen su “productividad” y logren así disminuir los costos del capital. La productividad de largo plazo se vería estimulada, pero a expensas de las ganancias a corto plazo. Nuevas industrias producirían bienes ambientalmente amistosos, transporte urbano y sistemas educacionales que -como los ejemplos antes mencionados- disminuirían efectivamente los costos del capital y de la canasta de consumo, además de la renta del suelo; al mismo tiempo, el nivel de demanda agregada se vería incrementado, atacando la primera contradicción por vías potencialmente no inflacionarias. Por contraste, si los nuevos sistemas de gestión forestal, el gasto en control de la contaminación, la planificación urbana y demás no tienen efecto sobre los costos, el resultado será un incremento en la demanda efectiva y en la inflación, o una reducción de las ganancias.

Hasta aquí acerca de la *idea* de sostener al capitalismo; la práctica es otro asunto. En los estados liberales democráticos, la lógica política normal del pluralismo y el compromiso previene el desarrollo de la planificación ambiental, urbana y social integrada. La lógica de la administración estatal o burocrática es anti-democrática y carece por tanto de sensibilidad hacia lo ambiental como hacia otros temas planteados desde abajo. Y la lógica del capital en auto-expansión es anti-ecológica, anti-urbana y antisocial. La combinación de las tres lógicas resulta contradictoria en lo que hace al desarrollo de soluciones políticas a la crisis de las condiciones de producción. De aquí que las posibilidades de una “solución capitalista” a la segunda contradicción sean remotas.

Dicho de otra manera, en ningún país capitalista desarrollado existe una agencia estatal o mecanismo de planificación de tipo corporativo que se ocupe del planeamiento ecológico, urbano y social integrado. La idea de un capitalismo ecológico, o de un capitalismo sostenible, no ha sido teorizada siquiera de manera coherente, por no hablar de que se haya visto plasmada en una infraestructura institucional. ¿Dónde está el estado que dispone de un plan ambiental racional? ¿De planeamiento interurbano e intra-urbano? ¿De planificación en materia de salud y educación vinculada orgánicamente al planeamiento ambiental y urbano? En ninguna parte. En cambio, existen aproximaciones parciales, fragmentos de planificación regional en el mejor de los casos, y asignación irracional de botines políticos en el peor.

Cada día, por tanto, nuevos encabezados anuncian otra crisis de atención sanitaria, otra crisis ambiental, otra crisis urbana. En muchas regiones, la imagen que tenemos es la de una fuerza de trabajo cada vez más inculta, muchos de cuyos in-

tegrantes carecen de vivienda debido a los bajos salarios y los altos alquileres, y viven atemorizados en una ciudad contaminada, inmovilizados por el hacinamiento, y sin poder obtener ni siquiera agua potable. Esta imagen quizás no encaje en Roma o Nueva York aún, pero se acerca a la realidad de la Ciudad de México y de Nueva Delhi, las cuales son parte del mundo capitalista en todo sentido.

Consecuencias ecológicas de una depresión económica general

Como quiera que se defina la sostenibilidad desde una perspectiva ecológica, una cosa parece evidente. Si el capitalismo no es sostenible en términos de las regulaciones macroeconómicas internacionales, habrá una crisis global, una deflación general de los valores del capital, y una depresión. Ante esta eventualidad, nadie sabe o puede saber cómo responderán los capitales individuales, los gobiernos y las agencias internacionales.

Puede ocurrir que grandes presiones económicas provenientes de la demanda (o de los costos, o de ambos a la vez), surgidas a consecuencia de la sobreproducción de capital (o de la subproducción, o de ambas) fueren a los capitales individuales a tratar de restaurar las ganancias mediante una mayor externalización de sus costos, esto es, transfiriendo mayores costos al ambiente, la tierra y las comunidades, mientras los estados y las agencias internacionales observan impotentes. De hecho, existe amplia evidencia en el sentido de que la lentitud en el crecimiento económico a partir de mediados de la década de 1970 ha dado lugar a una transferencia de costos del tipo descrito, en particular, por parte de las corporaciones transnacionales. También existe evidencia en el sentido de que en muchos casos esto ha resultado contraproducente, en cuanto la transferencia de costos por parte de un capital ha incrementado los costos de otros capitales. De igual modo, puede demostrarse que en muchos casos las luchas ambientales y la regulación ambiental han forzado a capitales individuales a internalizar costos que de otro modo hubieran recaído sobre el ambiente. Existe una suerte de guerra en marcha entre el capital y los movimientos ambientalistas -una guerra en la que estos movimientos podrían tener el efecto (intencional o no) de salvar al capital de sí mismo a la larga, al forzarlo a encarar los efectos negativos de corto plazo de la transferencia de costos.

Por otra parte, también existe la posibilidad -por improbable que sea- de que una verdadera depresión económica ofrezca la oportunidad de un programa general de restauración ambiental. En los Estados Unidos de la década de 1930, el *New Deal* creó las condiciones políticas para dos tipos de cambio ambiental. El primero consistió en los esfuerzos encaminados a restaurar los suelos degradados de las Grandes Praderas y las tierras ecológicamente deterioradas del Sur y el Oeste. En este sentido, la depresión fue un evento ecológicamente “adecuado”.

El segundo tipo de cambio ambiental consistió en los esfuerzos, aún mayores, realizados para iniciar o acelerar gigantescos proyectos de infraestructura, como las grandes presas y otras obras hidráulicas, así como grandes puentes y túneles, que resultaron indispensables para la urbanización en el Oeste y para la suburbanización en todo el país después de la Segunda Guerra Mundial. Sin estos proyectos, la suburbanización, el consumismo y la cultura del automóvil no podrían haber florecido en las décadas de 1950 y 1960. De manera muy importante, estos proyectos contribuyeron a crear la estructura contemporánea del consumo individual, que es ecológicamente inadecuada.

La próxima depresión podría empeorar mucho más las condiciones ecológicas; o podría ofrecer la oportunidad para vastas transformaciones en la estructura del consumo individual y social como, por ejemplo, a través del desarrollo de ciudades verdes, la integración de las ciudades con su entorno agrícola, transporte público que la gente desee utilizar, y demás. O ambas cosas, en distinto grado, en diferentes lugares. Lo que finalmente ocurra, por supuesto, se verá decidido por el curso de la lucha política, la adaptación institucional y los tipos de innovación tecnológica.

Todo esto quiere decir que la destrucción ambiental, los movimientos ambientalistas y otros movimientos sociales relacionados con ellos, las políticas y presupuestos de gobierno, las políticas de los organismos internacionales y las condiciones económicas, se encuentran todos tan interrelacionados entre sí como las partes de cualquier ecosistema modelado por profesionales de la ecología. Cualquiera que intente reflexionar acerca de estas interrelaciones se encontrará con las mismas dificultades epistemológicas y metodológicas que enfrentan los ecólogos cuando intentan modelar el destino de alguna especie en particular, esto es, el problema del atomismo y el reduccionismo frente al holismo.

Peor aún: a diferencia de las águilas calvas y de los microorganismos, la gente tiende a organizarse políticamente en ocasiones. Por tanto, el análisis de los efectos ecológicos de una depresión general hecho a partir de una estricta aplicación de la teoría de sistemas tendría una utilidad discutible. En última instancia, todo depende del equilibrio de fuerzas políticas, de las visiones de aquellos que desean transformar nuestras relaciones con la naturaleza y, por tanto, de las relaciones materiales que mantenemos unos con otros -en breve, de los objetivos políticos del movimiento ambientalista, de los trabajadores, de las mujeres, y de otros movimientos sociales. La pregunta “¿Es posible el capitalismo sostenible?” constituye así, tanto en primera como en última instancia, un problema político.

Las condiciones en el Sur

La crisis de las condiciones de producción es especialmente severa en el Sur: de allí el origen del discurso sobre el “desarrollo sostenible” que se ha converti-

do en un campo de lucha ideológica y política de creciente importancia. Como se ha visto, prácticamente todo el mundo utiliza esa expresión con intenciones y significados diferentes.

Para los ambientalistas y los ecólogos, la “sostenibilidad” consiste en el uso de recursos renovables únicamente, así como de bajos niveles o ausencia total de contaminación. De hecho, el Sur podría estar más cerca que el Norte de una “sostenibilidad” así entendida, pero el Norte posee mayores recursos de capital y tecnología que el Sur para alcanzar ese objetivo.

El capital, por supuesto, utiliza el término para designar ganancias sostenidas, lo que presupone la planificación de largo plazo de la explotación y el uso de los recursos renovables y no renovables, y de los “bienes comunales globales”. Los ecólogos definen “sostenibilidad” en términos de la preservación de sistemas naturales, humedales, protección de las áreas silvestres, calidad del aire, y demás. Sin embargo, estas definiciones tienen poco o nada que ver con la rentabilidad sostenible. De hecho, hay una correlación inversa entre la sostenibilidad ecológica y la rentabilidad de corto plazo. La “sostenibilidad” de la existencia rural y urbana, los mundos de los pueblos indígenas, las condiciones de vida de las mujeres, y la seguridad en los puestos de trabajo también están inversamente correlacionados con la rentabilidad a corto plazo -si es que la historia del siglo XX tiene algo que enseñarnos.

Con independencia del problema de si es deseable o no que el Sur siga la senda industrial y consumista del Norte, existe la posibilidad de que lo haga. En la India, Brasil y México (por mencionar tres casos) el capitalismo industrial se desarrolla a cuenta de una vasta pobreza y miseria, y de la erosión de la estabilidad ecológica, como quiera que ésta sea definida. Los países del Extremo Oriente lo están haciendo bien, en términos económicos, y algunos países del sudeste de Asia lo están haciendo aún mejor, en lo que se refiere al crecimiento del PBI. Sin embargo, estas regiones aún deben probar que pueden ser potencias industriales y pagar además buenos salarios, proporcionar condiciones decentes de trabajo, políticas sociales progresivas y protección ambiental significativa.

La mayor parte del resto del Sur (incluyendo las colonias interiores del norte y del este de Asia) constituye una zona de desastre económico, social y ecológico. Existen muchas barreras al desarrollo capitalista en el Sur, como por ejemplo mercados débiles debido a una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso, la falta de una reforma agraria que favorezca a los pequeños y medianos agricultores, e inestabilidades en la oferta y en la demanda de materias primas. Además, existen problemas de endeudamientos y crisis de balanza de pagos, por no hablar de la conservación de bloques dominantes de intereses creados y de gobiernos inestables.

Estos problemas existen con independencia del estado de las condiciones ecológicas en particular, y de las condiciones de producción en general. No hace falta decir que esta situación genera una permanente inestabilidad social y política; nuevos patrones migratorios hacia el Norte; un incremento de los refugiados económicos y ecológicos y demás, todo lo cual termina por convertirse en problemas para el Norte.

Posibilidades políticas

La mayoría de las administraciones de centroderecha y derecha que han gobernado el mundo desde fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, y a lo largo de la de 1990, son incapaces de dirigir el desarrollo capitalista de manera que mejoren las condiciones de vida y trabajo, las ciudades o el ambiente. Estos gobiernos están demasiado comprometidos con la tarea de expandir el “libre mercado” y la división internacional del trabajo; desregular y privatizar la industria; imponer “ajustes” económicos en el Sur y “terapias de choque” en los antiguos países socialistas, marginando de este modo a la mitad de la población de algunos países del Tercer Mundo, y pretendiendo que el “mercado” y el neoliberalismo en general resolverán la creciente crisis económica. En general, las cosas empeorarán antes de que mejoren, sobre todo en el Sur.

Entretanto, se ha producido un crecimiento de diversos movimientos “verdes” y “rojiverdes” en diversos países. Algunas centrales sindicales en determinados países están planteando problemas ambientales con mayor seriedad. Por otra parte, los movimientos ambientalistas plantean hoy temas políticos y sociales que hace cinco o diez años ignoraban o subestimaban. En una multiplicidad de formas, el movimiento de los trabajadores y las feministas, los movimientos urbanos, los movimientos ambientalistas y los de minorías oprimidas se han organizado en torno a los grandes problemas de las condiciones de vida.

Si bien las perspectivas de un capitalismo sostenible son precarias, podría haber motivos de esperanza para algún tipo de socialismo ecológico -una sociedad que preste verdadera atención a la ecología y a las necesidades de los seres humanos en su vida cotidiana, así como a temas feministas, a la lucha contra el racismo y los problemas generales de la justicia social y la equidad. Globalmente, es en torno a estos temas que existe movimiento y organización, agitación y acción, lo cual puede ser explicado en términos de las contradicciones del capitalismo y de la naturaleza del estado capitalista antes discutidas.

Políticamente, esto quiere decir que, más temprano que tarde, el movimiento de los trabajadores, el feminismo, el ambientalismo, el movimiento urbano y otros movimientos sociales necesitarán combinarse en una sola y poderosa fuerza democrática -una fuerza que sea políticamente viable y capaz, también, de re-

formar la economía, la política y la sociedad⁸. Por separado, los movimientos sociales son relativamente impotentes ante la fuerza totalizadora del capital global. Esto sugiere la necesidad de tres estrategias generales relacionadas entre sí.

La primera consiste en el desarrollo consciente de una esfera pública común, un espacio político, una suerte de poder dual, en el que las organizaciones de las minorías, de los trabajadores, de las mujeres, de los movimientos urbanos y de los ambientalistas puedan trabajar económica y políticamente. Aquí podrían desarrollarse no ya las alianzas tácticas temporales entre movimientos y dirigentes de movimientos que tenemos hoy, sino alianzas estratégicas, incluyendo alianzas electorales. Una sociedad civil fuerte, que se defina a sí misma en términos de sus “bienes comunales”, su solidaridad y sus luchas contra el capital y el estado, así como de impulsos y formas democráticas al interior de alianzas y coaliciones de movimientos organizados -y dentro de cada organización- es el primer prerequisite de una sociedad y una naturaleza sostenibles.

El segundo prerequisite consiste en el desarrollo consciente de alternativas económicas y ecológicas dentro de esta esfera pública, o estos “nuevos bienes comunales” -alternativas como ciudades verdes, producción que no contamine, formas biológicamente diversificadas de silvicultura y agricultura y demás, cuyos detalles técnicos son cada vez más y mejor conocidos hoy. El tercero consiste en organizar luchas para democratizar los centros de trabajo y la administración del estado, de modo que se puedan situar dentro del cascarón de la democracia liberal contenidos sustantivos de tipo ecológico, progresivo. Esto presupone que los movimientos no sólo utilicen medios políticos para lograr objetivos económicos, sociales y ecológicos, sino además que coincidan en los objetivos políticos mismos, en especial en la democratización de algunos aparatos de estado nacionales e internacionales, y en la eliminación de otros.

Estas ideas podrían parecer tan irreales como la de un capitalismo sostenible. Quizás ése sea el caso. Sin embargo, debemos recordar que mientras las estructuras existentes del capital y del estado sólo parecen ser capaces de reformas ocasionales, los movimientos sociales crecen día a día en todo el mundo -de aquí que en algún momento exista la posibilidad de una crisis social y política generalizada, en la medida en que las demandas de estos movimientos chocan con las estructuras políticas y económicas existentes, orientadas hacia la ganancia. Al llegar ese momento, aparecerán toda clase de “formas sociales mórbidas”.

Algunos dirán que esto es precisamente lo que está ocurriendo en nuestros días -que los tejidos político y social se están desgarrando, y que el resurgimiento del racismo, el nativismo, la discriminación contra los trabajadores extranjeros, las represalias machistas y anti-ambientalistas, y otras actitudes y tendencias reaccionarias, se están transformando en peligros cada vez mayores. Otros vinculan el renacimiento del populismo de derecha y la reacción a giros derechistas en las principales corrientes políticas y económicas. Existen otros análisis de la ac-

tual situación política mundial -incluyendo el que afirma que el planeta asiste a una guerra de los ricos contra los pobres, una rebelión de los acomodados contra las demandas de los desposeídos, el estado de bienestar, las políticas económicas redistributivas, y demás por el estilo. Incluso, todo esto puede ser cierto.

Cualquiera sea el caso, desde el punto de vista de los progresistas, “verdes-rojos” o izquierdistas, y de las feministas, lo que menos necesitamos es faccionalismo, sectarismo, “líneas correctas” -en cambio, necesitamos examinar críticamente todas las fórmulas políticas desgastadas por el tiempo y desarrollar un espíritu ecuménico para “celebrar nuestros bienes comunales, viejos y nuevos, tanto como nuestras diferencias”.

Bibliografía

Goldsmith, Edward et al. 1991 *The Imperialist Planet* (Cambridge, Massachusetts: MIT Press).

O'Connor, James 1998 "Is sustainable capitalism possible?", en *Natural Causes. Essays on ecological marxism* (New York, London: The Guilford Press).

Polanyi, Karl (1944) *La Gran Transformación* (Nueva York: Farrar y Rinehart).

Notas

1 (Goldsmith, 1991: 94). La mayor parte de la madera en los Estados Unidos es producida en plantaciones industriales.

2 El trigo ha sido alterado genéticamente por la Universidad de la Florida y la Compañía Monsanto para incrementar los rendimientos. Para ello, se introdujo en el trigo un gen externo, que produce una enzima que hace a muchos herbicidas inofensivos para la planta. Todos los cultivos -maíz, arroz, soja y otros alimentos, incluyendo una papa que mata a su propio parásito, el escarabajo de la papa de Colorado, al emitir una proteína fatal para el insecto- ya han sido genéticamente alterados. Por supuesto, el gen introducido en el trigo es un secreto comercial (*New York Times*, 28/5/1992).

3 No se trata ya únicamente de que el capital se apropie de lo que se encuentra en la naturaleza, para descomponerlo y recombinar sus elementos en una mercancía, sino más bien de crear algo que antes no existía. Estoy consciente de que no existe una línea divisoria clara entre ambas cosas pero, aun así, existe una diferencia cualitativa que se hace evidente al comparar los extremos.

4 Todas las teorías del crecimiento presuponen ciertas relaciones entre la economía "verdadera" y la del dinero, la producción física y los ingresos, y los incrementos en la inversión y el consumo de bienes, por un lado, y las ganancias y salarios, por el otro. Las desproporciones entre las tasas de inversión y consumo, y de ganancias y salarios, pueden ocasionar problemas económicos ("crisis de desproporcionalidad"). El principal tipo de crisis inherente al capitalismo, sin embargo, es la "crisis de realización". Los marxistas perciben las crisis como inherentes al capitalismo. Sin embargo, el sistema sólo es dependiente de las crisis en el sentido de que la crisis obliga a la reducción de costos, la "reestructuración", los despidos masivos y otros cambios que hacen al sistema más "eficiente", esto es, más rentable. Marx escribió que "el capital se acumula mediante las crisis", indicando que las crisis constituyen oportunidades tanto para la liquidación de algunos capitales como para la aparición de nuevos capitales y la reorganización de viejos capitales; esto, sin mencio-

nar la difusión de tecnología nueva y más “eficiente” en el sistema (como la informática). Antes del desarrollo de la economía ecológica, el problema de definir con precisión qué es el crecimiento era generalmente desdeñado. Hoy, muchos economistas están dispuestos a admitir que el crecimiento no sólo incluye algún vector de producción (bienes, servicios, incremento de inventarios de bienes duraderos) sino, además, la generación de “desechos” y el incremento de los inventarios de desechos duraderos. Esto complica aún más un sistema de contabilidad de ingresos ya de por sí complejo y arbitrario.

5 “De la manera más sencilla” en parte debido a que, si bien existe una tendencia general que lleva a las tasas de ganancia de diferentes industrias a ser comparables en términos muy generales (a través del movimiento del capital desde los sectores de baja rentabilidad hacia los de rentabilidad elevada), las tasas de ganancia varían mucho entre una industria y otra, e incluso entre una y otra unidad de capital. Existen muchas razones para esto, entre las cuales (y cabe considerarla la más importante) está la de que los grandes capitales no sólo se apropian de ganancias mayores -definidas en términos absolutos o totales- que las que corresponden a los pequeños capitales, sino además a que los grandes “obtienen” una *tasa* de ganancia mayor que la de los pequeños. Esto se debe a que normalmente los capitales pequeños no pueden competir con los grandes, mientras los grandes sí pueden competir con los pequeños, y entre sí.

6 “Inadvertidamente”, porque Marx utilizó el concepto de “condiciones de producción” de maneras diferentes e inconsistentes; nunca soñó con que el concepto podría ser utilizado, o lo sería, como lo hago en este capítulo, y nadie *podría* haberlo utilizado así antes de que apareciera *La Gran Transformación*, de Karl Polanyi (1944).

7 Esta “racionalización” también incluye la “reprivatización”, definida como un giro del trabajo pagado al trabajo no pagado en el hogar y en la comunidad, o el renacimiento de las ideologías de “autoayuda” que descargan una parte mayor del peso de la reproducción de la fuerza de trabajo y de las condiciones urbanas y ambientales de vida sobre lo que Martin O'Connor llama “subsistencia autónoma”, siempre un soporte fundamental de la acumulación capitalista, que asume mayor importancia en períodos de crisis. El asunto conduce al problema, más amplio, de si el trabajo doméstico equivale a la explotación de las mujeres por los hombres, funciona como un subsidio al capital, etc., temas que fueron muy debatidos por feministas, marxistas y marxistas feministas en la década de 1970.

8 Nadie sabe ni puede saber en qué momento se desarrollará “una sola y poderosa fuerza democrática” o, incluso, si llegará a desarrollarse del todo. Será necesario ofrecer respuesta a preguntas muy difíciles, en la teoría y en la práctica. Por ejemplo, si el concepto mismo de tal “fuerza” se encuentra fatal-

mente arraigado en el terreno de la tradición modernista/humanista de la filosofía política occidental, una tradición “liberal” que ha sido en realidad poco tolerante con la “diferencia”, si bien permanece firmemente arraigada en lo que atañe a los derechos del individuo frente al estado. Algunos, como dijera Martin O’Connor, creen que es importante “en este momento del tiempo, esto es, a fines del siglo XX, explorar lo que significa contar con la coexistencia de muchas voces, a menudo discordantes, que coinciden en su repudio a la dominación del capital aunque difieren en muchas otras cosas. Este es un aspecto del *realismo*, de cosas que “probablemente empeorarán antes de que mejoren”. Personalmente, estoy de acuerdo, siempre y cuando se entienda que podría no haber tiempo para atender a todas las tensiones, y escuchar a plenitud y mutuamente la pluralidad de las voces, las diferentes bases de conocimiento, etc. presentes entre y dentro de los movimientos sociales hoy existentes. La necesidad de la unidad *contra* el capital y *por* una sociedad ecológica, libre de explotación y socialmente justa podría ser demasiado grande, dada la configuración de fuerzas políticas del presente, para demorar el desarrollo de una estrategia política unificada realmente capaz de confrontar al capital global y el cuasi-estado global en desarrollo (es decir, el FMI, el Banco Mundial).

*La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo **

Roberto P. Guimarães**

Modernidad, medio ambiente y ética, las tensiones del nuevo paradigma de desarrollo

Existen personas que lo único que quieren es tener un auto importado. Para mí, me basta con un Volkswagen Escarabajo, pues los autos son máquinas usadas para que la gente se pueda mover. Yo quiero, por eso mismo, tener el *poder* de comprar un auto importado, para tener el *placer* de no comprarlo...

Rui Lopes Viana Filho, 16 años, Medalla de Oro,
Olimpíada Internacional de Matemática

Contrariamente a aquello de lo que nos intentan convencer los curadores de la “posmodernidad”, acercarse a la complejidad y a los valores que caracterizan a la sociedad de fines de milenio *no* requiere de conocimientos y capacidad de análisis altamente sofisticados. La sabiduría de saber afrontar las disyuntivas actuales sin perder la adecuada perspectiva ética y humana llega a sorprender por la profunda sencillez que suele manifestarse. Quizás sea por ello que a ese joven matemático no le hayan sido necesarias más que unas cuantas palabras para resumir la crisis actual y, al mismo tiempo, posicionarse ante ella. En efecto, las relaciones entre *modernidad* y *medio ambiente* constitu-

* Una primera versión ha sido publicada en la revista *Ambiente & Sociedade*, N° 2, 1998 (Campinas, Brasil) primer semestre, 5-24. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la CEPAL.

** Licenciado en Administración Pública, Maestro y Doctor en Ciencia Política, investigador de la División Medio Ambiente y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile.

yen las verdaderas *tensiones* provocadas por la trayectoria de la civilización occidental, aunque en un sentido más amplio que el empleado por Thomas Kuhn (1977) para designar la necesidad de un conocimiento *convergente* para superar la razón científica y trascender paradigmas vigentes. Modernidad y medio ambiente representan, pues, el resultado de una misma dinámica, el progresivo protagonismo del ser humano en relación a las superestructuras, a la par de la progresiva centralidad que asume replantearse las relaciones entre seres humanos y naturaleza. Ello, no obstante que la preocupación por el medio ambiente nos obligue a objetar tan profundamente la modernidad actual que este cuestionamiento lleve a instaurar los fundamentos mismos de un nuevo paradigma de desarrollo.

Si medio ambiente y modernidad se han nutrido de la misma fuente civilizatoria para llegar a constituir los verdaderos dilemas o desafíos del nuevo milenio, es el contenido valórico o la *ética* de esa crítica lo que funciona como la amalgama que confiere significado y dirección a esa “tensión”. Como señala acertadamente Peter Taylor, así como el socialismo representó la resistencia anti-sistémica a la modernidad “industrial” hegemónica a mediados del siglo pasado construida por Inglaterra, el ambientalismo representa hoy la resistencia a la modernidad del “consumo” cien años más tarde, construida ahora bajo la hegemonía de los Estados Unidos (Taylor, 1997). Ambas dinámicas de resistencia sólo pudieron trascender como paradigmas de conocimiento y de acción política en la medida en que pudieron hacerse cargo de las opciones éticas que de éstas resultaban.

Como sintetiza muy bien Rui Lopes, el saber ubicar en su verdadera dimensión el rol de un auto en la sociedad (es decir, independientemente del status adicional por ser “importado”) ya constituye, de por sí, un acto de extrema lucidez. Sin embargo, ejercer la potestad de optar por otra alternativa para satisfacer sus necesidades, además del *poder* social (moneda de canje en la modernidad del consumo), le confiere al ser humano el *placer* como individuo (medida de bienestar de una sociedad sustentable). En definitiva, se impone reconocer que el componente ético y de justicia social que caracteriza de una manera medular ambas opciones de resistencia a la modernidad se las hace también enlazadas en su carácter contra-sistémico respecto de la acumulación capitalista. Al propósito original del socialismo de anteponer un límite social a la racionalidad económica de la modernidad del siglo pasado, se añade ahora el límite eco-social a través del cual el ambientalismo antepone la biosfera a la lógica económica del mercado.

Quizás ésta no sea la oportunidad más adecuada para discutir las respectivas trayectorias de esos dos movimientos de resistencia. Aún así, corresponden un par de aclaraciones. Desde luego, si es correcto señalar que el socialismo ha sido superado por lo menos en sus manifestaciones “reales” modernas, esto no necesariamente implica idéntico e inexorable destino para el ambientalismo. El socialismo construido en el siglo XX respondía a una modernidad de cien años antes (la del “ciudadano”), a través de formas organizativas (partidistas) de ese entonces:

modernidad ésta que fue sobrepasada por la modernidad contemporánea (la del “consumidor”). El ambientalismo, en cambio, no pretende constituirse como un movimiento político partidista o como una vía única y exclusiva de resistencia a la nueva modernidad -lo cual, dicho sea de paso, explica en buena medida el fracaso de los partidos verdes en general. Al plantearse como organizaciones de la sociedad civil que se dirigen al ser humano antes que al ciudadano o al consumidor, el ambientalismo aspira a mucho más que al poder. ¡Aspira, sencillamente, a cambiar la política misma! Tal como indica el lema del partido verde germano: “no estamos a la derecha ni a la izquierda; estamos simplemente adelante”.

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas han logrado abrirse un espacio propio en el territorio hasta entonces dominado por las corporaciones y por las organizaciones gubernamentales y partidistas. Adiferencia de las proyecciones partidistas del socialismo, las ONG se dedican a problemas de carácter supranacional, y su *modus operandi* es también globalizante. Para ponerlo de una forma muy gráfica, la “Internacional Verde” (¡si hubiera una!) no estaría conformada por partidos que actúan en los marcos de la política nacional, sino que albergaría las más variadas organizaciones, con distintas idiosincrasias culturales, orientaciones políticas diferenciadas y clientelas igualmente disímiles en cuanto a su extracción social. Por último, las ONG, cuya membresía en muchas partes supera a la de los partidos, han logrado introducir nuevas dimensiones en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, han logrado cambiar la forma y el contenido de las negociaciones internacionales, han generado nuevas áreas del conocimiento -la economía ecológica, por ejemplo- y han logrado colocar las interrelaciones “seres humanos-naturaleza” en el centro de la agenda pública.

A raíz de esas reflexiones, las secciones que siguen tienen por objetivo, por un lado, sugerir algunos temas para el examen de las relaciones entre globalización y mercado -guión y escenario donde se manifiesta la modernidad hegemónica actual- y, por el otro, proponer una aproximación desde la política al llamado “desarrollo sustentable”, lo cual representa una evidente “puesta en escena” de la modernidad y del medio ambiente.

Globalización, medio ambiente, mercado y democracia

El proceso de globalización comprende fenómenos diferenciados que se prestan a distintas interpretaciones, muchas veces contradictorias. Algunos lo definen en términos exclusivamente *económicos* (creciente homogeneización e internacionalización de los patrones de consumo y de producción), *financieros* (la magnitud e interdependencia crecientes de los movimientos de capital) y *comerciales* (creciente exposición externa o apertura de las economías nacionales). Otros, en tanto, acentúan el carácter de la globalización en sus dimensiones *políticas* (propagación de la democracia liberal, ampliación de los ámbitos de la libertad indi-

vidual, nuevas formas de participación ciudadana) e *institucionales* (predominio de las fuerzas de mercado, creciente convergencia en los mecanismos e instrumentos de regulación, mayor flexibilidad en el mercado laboral). Existen también los que prefieren poner de relieve la velocidad del *cambio tecnológico* (sus impactos en la base productiva, en el mercado de trabajo, y en las relaciones y estructuras de poder), y la revolución de los *medios de comunicación* (masificación en el acceso y circulación de informaciones, mayores perspectivas para la descentralización de decisiones, posible erosión de identidades culturales nacionales).

Haciendo uso de otro tipo de aproximación a esos fenómenos como un *proceso* y no como un conjunto de *vectores* específicos, no son pocos los analistas que se acercan a la globalización desde la perspectiva de la *sustentabilidad* del desarrollo. Estos cuestionan, por ejemplo, la racionalidad económica del proceso *vis à vis* la lógica y los tiempos de los procesos naturales (el capital se ha globalizado, no así el trabajo ni los recursos naturales), y ponen en tela de juicio las posibilidades de la globalización basada en un modelo de crecimiento económico ascendente e ilimitado, en circunstancias en que se agotan muchos de los recursos naturales (fuentes no renovables de energía, fauna, flora, etc.) y se debilitan procesos vitales para la estabilidad del ecosistema planetario (ozono, clima, etc.). Los que se inscriben en esa corriente apuntan, además, a la insustentabilidad social del estilo actual de desarrollo en situaciones de creciente exclusión provocadas, o al menos exacerbadas, por la misma globalización.

Se podría afirmar, desde una perspectiva *socio-ambiental*, que el carácter de la globalización, o por lo menos la difusión de la ideología neoconservadora que sostiene la modernidad hegemónica en estos días, sólo les deja a nuestras sociedades optar por dos caminos alternativos. O bien se integran, en forma subordinada y dependiente, al mercado-mundo, o no les quedará otra que la ilusión de la autonomía pero con la realidad del atraso. Sin embargo, el verdadero problema que se debe debatir no es la obvia existencia de tendencias hacia la inserción en la economía globalizada, sino qué tipo de inserción nos conviene, qué tipo de inserción permite tomar las riendas del crecimiento en bases nacionales y qué tipo de inserción permite mantener la identidad cultural, la cohesión social y la integridad ambiental en nuestros países (véase, entre otros, Calcagno, 1995).

La globalización ha acentuado también las tendencias a “parametrizar” todos los fenómenos socio-ambientales, para luego reintegrar crematísticamente la naturaleza en la economía. Las principales críticas a intentos recientes de valoración como el llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de investigadores norteamericanos, que estimó que el valor económico promedio de los servicios prestados por la biosfera ascendería a casi el doble del PBI mundial en 1997 (Constanza et al. 1997), apuntan a que éstos suponen equivocadamente que los ciclos ecológicos obedecen a los tiempos y procesos económicos, sociales y culturales. No se debe empero tomar esa postura como una descalificación absoluta de la valo-

ración de los servicios ambientales y de los recursos naturales. Lo censurable es precisamente el fundamentalismo neoconservador de querer absolutizar el mercado, reduciendo de esa forma todo el desafío de la sustentabilidad a una cuestión de asignación de “precios correctos” a la naturaleza. Por supuesto, es mejor tener alguna noción del valor económico que poseen los bienes y servicios ambientales, por más arbitraria que sea ésta, que no disponer de ninguna herramienta que asista a la toma de decisiones en esa área. Como dice Paul Hawken, “mientras no existe ningún modo ‘correcto’ para valorar un bosque o un río, sí *existe* una forma incorrecta, que es no asignar ningún valor” (Prugh et al., 1995: XV).

Sin embargo, hay que reiterar, en primer lugar, el carácter precisamente arbitrario que posee cualquier ejercicio de valoración ambiental. Eso significa que el grado de arbitrariedad de esa valoración será menos pernicioso desde el punto de vista social y ambiental cuanto más se logre poner de relieve y dotar de transparencia los instrumentos y mecanismos de decisión que definen tal valoración. Por otro lado, la valoración misma debe respetar límites muy claros antepuestos por la ética del desarrollo, sin los cuales se pierde de vista que el objetivo último de la valoración *no* es el mercado de las transacciones entre consumidores, sino la mejoría de las condiciones de vida de los seres humanos. El problema, para las generaciones futuras obviamente, de recibir mayores dotaciones de capital construido a cambio de menores dotaciones de capital natural sin poder expresar sus deseos de que así sea, se resume a que el proceso de globalización torna homogéneos valores, prácticas y costumbres culturales disímiles. El “valor” de la destrucción del bosque chileno, o de la Amazonia brasileña, es muy distinto para los chilenos y brasileños que para los norteamericanos, japoneses, malayos y otros, mientras que los “beneficios” -siempre que uno acoja a la globalización como una hipótesis optimista- puede que sean globales.

Además de consideraciones de orden socio-ambiental, correspondería rescatar también de la maraña conceptual que oscurece el debate sobre la globalización algunos aspectos de naturaleza *sociopolítica*. Como el proceso de hegemonización de la nueva modernidad ha cobrado fuerza a partir de la caída del Muro de Berlín, algunos se apresuraron en declarar “el fin de la historia”, colocando en un mismo plano la liberalización de los mercados con la democracia (Fukuyama, 1990), lo que constituye una interpretación engañosa y simplista de la verdad histórica del liberalismo, el cual ha separado siempre al liberalismo económico del liberalismo político. Que la crisis económica, precisamente la de las economías de mercado central planificado, haya sido responsable por la caída del estado autoritario, no puede llevar al disparate de concluir que será esa forma específica de funcionamiento de la economía internacional la que proveerá las fundaciones de un nuevo tipo de sociedad y de un nuevo ordenamiento político del estado. El mercado nunca ha sido un principio fundacional de la organización social aunque, por cierto, condicione el comportamiento *económico* de los actores sociales en cuanto productores y consumidores.

Tampoco hay que perder de vista la metamorfosis de nuestra percepción respecto del mercado. Como nos recuerda Fernando Henrique Cardoso (1995), en los siglos XVII y XVIII el mercado se expandió por la vía del comercio, convirtiéndose en un elemento “civilizador” para contener el arbitrio de la aristocracia. En consecuencia, en el siglo pasado no se veía al mercado como un modelo en oposición al estado, sino como un instrumento de transformación de las relaciones sociales hacia niveles superiores de sociabilidad. En el presente siglo, en cambio, es precisamente el estado quien pasa a ser considerado como el contrapunto bondadoso para contener las fuerzas ciegas del mercado, que, abandonadas a sí mismas, serían incapaces de realizar la felicidad humana. Pareciera, en tanto, que en la actualidad de nuevo se considera al mercado como sinónimo de libertad y de democracia.

La economía de mercado que, en verdad, ha estado desde siempre con nosotros aunque con distintos matices, es excelente generadora de riqueza, pero es también productora de profundas asimetrías sociales (véase, al respecto, Guimarães, 1990[b]). Por eso mismo, el estado (o el nombre que se quiera dar a la regulación *pública*, extra-mercado) no puede renunciar a su responsabilidad en áreas claves como la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la preservación del medio ambiente y del patrimonio biogenético, y traspasarlas al mercado. Esto no contradice la tendencia a la expansión del liberalismo económico, que también obedece a una evolución histórica más que a un capricho ideológico, pero supone adaptar la economía de mercado a las condiciones y posibilidades reales del mundo en desarrollo. Nadie cuestiona que el estado latinoamericano se encuentra en la actualidad sobredimensionado, sobre-endeudado y sobre-rezagado tecnológicamente. Antes que una simple consecuencia de la incuria de gobernantes populistas “irresponsables”, como intentan convencernos los nostálgicos del autoritarismo y los apóstoles del neoliberalismo, tales predicamentos han sido el resultado de una realidad histórica de consolidación de sociedades nacionales y de “despegue” de un crecimiento que no se puede descalificar a la ligera.

Para complicar aún más las cosas, el resultado de la globalización y de la sacralización del mercado conduce precisamente a generalizar las críticas hacia los políticos y sus organizaciones. Y es en el vacío de la política que los grupos económicos, los medios de comunicación de masas y los resquicios oligárquicos del pasado reciente enquistados en los nichos clientelistas del estado, todos travestidos en agentes de la modernidad basada en la ideología neoliberal, pasan a definir la agenda pública y a actuar como poderes fácticos de gran influencia en la resolución de los problemas nacionales. No obstante, desde una perspectiva democrática, no existen postulaciones capaces de defender sólidamente la tesis de que la elaboración y gestión de la vida pública pueda realizarse sin la mediación de la política. Los partidos políticos, a su vez, son insustituibles para la profundización de la democracia, para el mantenimiento del consenso mínimo alrededor de un proyecto nacional y para la transformación del estilo de desarrollo concentrador

y excluyente todavía vigente, razones por las cuales es fundamental recuperar el prestigio de la actividad y de las instituciones políticas en nuestros países (véase, al respecto, Guimarães y Vega, 1996).

Ello cobra aún más importancia cuando se reconoce que la gobernabilidad, que se definía hasta hace muy poco en función de la transición de regímenes autoritarios a democráticos, o en función de los desafíos antepuestos por los desequilibrios macroeconómicos, se funda hoy en las posibilidades de superación de la pobreza, de la marginalización y de la desigualdad. Las nuevas bases de convivencia que proveen de gobernabilidad al sistema político requieren por tanto de un nuevo *paradigma de desarrollo* que coloque al ser humano en el centro del proceso de desarrollo, que considere el crecimiento económico como un medio y no como un fin, que proteja las oportunidades de vida de las generaciones actuales y futuras y que, por ende, respete la integridad de los sistemas naturales que permiten la existencia de vida en el planeta.

Entre tanto, antes de precisar los contornos de ese nuevo paradigma, conviene incorporar explícitamente las dimensiones *territoriales* de la sustentabilidad, puesto que “desarrollo regional” y “desarrollo sustentable” constituyen dos caras de una misma medalla. En ese sentido, uno de los principales desafíos de las políticas públicas en la actualidad se refiere, precisamente, a la necesidad de *territorializar* la sustentabilidad ambiental y social del desarrollo -el “pensar globalmente pero actuar localmente”- y, a la vez, *sustentabilizar* el desarrollo de las regiones, es decir, garantizar que las actividades productivas contribuyan de hecho a la mejoría de las condiciones de vida de la población y protejan el patrimonio biogenético que habrá que traspasar a las generaciones venideras (véase, entre otros, Guimarães, 1998).

Desarrollo regional y sustentabilidad, dos caras de una misma moneda

Tiene razón Sergio Boisier (1997) cuando señala que vivimos hoy la paradoja de constatar que la aceleración del crecimiento económico, en los últimos tiempos, va de la mano con la desaceleración del desarrollo. Mientras se mejoran los índices macroeconómicos, vemos deteriorarse los indicadores que miden evoluciones cualitativas entre sectores, territorios y personas, una suerte de “esquizofrenia” en donde el papel intermediario del crecimiento en cuanto acumulación de riqueza, como *medio* para dar lugar al desarrollo, se ha ido transformando más y más en un fin en sí mismo. La acumulación de la riqueza “monetaria” ha asumido un protagonismo tan intenso en las últimas décadas que la atención de los actores que buscan el fortalecimiento de los territorios subnacionales se ha concentrado casi exclusivamente en crear condiciones favorables para atraer más inversiones desde afuera de sus respectivos territorios. En un contexto de creciente

globalización comercial y de creciente movilidad de capital en tiempo real, pareciera que la “cometa” regional a que hace referencia Boisier depende cada vez más de la brisa *exógena* para que pueda alzar vuelo.

La clave, en tanto, para entender la dialéctica entre las dimensiones exógenas y endógenas de los procesos tanto de *crecimiento* como de *desarrollo*, estaría en que puede que la globalización engendre efectivamente un único *espacio* (transnacional), pero lo hace a través de múltiples *territorios* (subnacionales). El hecho de que el proceso de crecimiento esté cada vez más dependiente de factores exógenos no le quita la especial gravitación de variables endógenas para que ocurra el desarrollo. Sin contrariar la naturaleza exógena del crecimiento, es cierto que los países y territorios subnacionales pueden complementar, endógenamente, esa tendencia. A la lógica transnacional de circulación del capital, por ejemplo, favorecer estrategias de promoción territorial que, a través de la adopción de actitudes e imágenes corporativas, logren sustituir la tradicional actitud de recepción de capital (lo que Boisier llama “cultura del trampero”) por una actitud más agresiva y sistémica, de búsqueda de capital (la “cultura del cazador”). Decimos sistémica, precisamente porque ésta supone otros cambios territoriales que aumentan la *tasa de endogeneización* del crecimiento. A título ilustrativo, la promoción territorial y la búsqueda de capital suponen, más que la tradicional y autodestructiva estrategia de “guerra fiscal” entre regiones, la acumulación de conocimiento científico sobre el propio territorio -lo que fortalece a los sistemas locales de desarrollo científico y tecnológico- e implican también cambios en áreas tales como la infraestructura de circulación de conocimiento, la mejoría de la infraestructura social y otras.

Para captar mejor lo señalado recién, quizás sea útil nutrirse del enfoque de la *teoría de la dependencia*, una “sociología” del desarrollo genuinamente latinoamericana, formulada en los años sesenta y setenta y cuyos exponentes más destacados fueron Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969). Utilizando como ejemplo el caso específico del progreso técnico, uno podría decir que éste no ocurre endógenamente siquiera en la escala *nacional* del desarrollo, puesto que lo que caracteriza a la situación de dependencia de nuestras sociedades es precisamente el hecho de que el proceso de generación de progreso técnico ocurre al revés de lo “normal” (es decir, el patrón histórico seguido en los países centrales), dificultando su difusión intersectorial. Para ponerlo en los términos de Celso Furtado (1972), lo que caracteriza a la situación de dependencia es la “deformación en la composición de la demanda”. En los países centrales es el progreso técnico *endógeno* el que pone en movimiento el proceso de crecimiento al dar soporte material para la acumulación de capital y acarrear la composición final de la oferta (uno “inventa” el motor de combustión interna, logra interesar inversionistas y luego se “crea” un mercado de, por ejemplo, automóviles). Mientras, en países situados en la periferia del sistema capitalista son los cambios en la estructura de la demanda los que requieren del progreso técnico y permiten la acumula-

ción de capital (los sectores de mayores recursos importan pautas de consumo que incluyen, por ejemplo, la demanda de automóviles), que requieren la importación de maquinarias y equipos (paquetes tecnológicos exógenos y cerrados) y que alimentan la acumulación de capital (fundada, en la mayoría de los casos, y frecuentemente, en el ahorro igualmente exógeno).

Si lo anterior revela la orientación exógena del proceso de *crecimiento*, podría decirse que el *desarrollo* responde mucho más a variables de carácter endógeno y que depende, fundamentalmente, de *cuatro* dimensiones (cf. Boisier, 1993). En términos *políticos*, se manifiesta en la capacidad que demuestren los actores sociales de negociar y determinar las decisiones relevantes para el desarrollo del territorio donde operan, mientras que el ingenio de éstos por apropiarse del excedente y de las inversiones en el territorio revela la endogeneidad *económica* del desarrollo. La competencia del sistema técnico de investigación de una región para generar sus propias innovaciones constituye la dimensión *científico-tecnológica* de tal proceso, del mismo modo en que la dimensión *cultural* descansa sobre la existencia de una identidad propia, además de los mecanismos, códigos y pautas tradicionales de transmisión de valores y normas de conducta, definidos territorialmente. Desde la perspectiva de la sustentabilidad, se podría agregar al listado de Boisier la dimensión *ecológica* (igualmente endógena) del desarrollo, puesto que todas las dimensiones señaladas anteriormente están condicionadas por una dotación de recursos naturales y de servicios ambientales también definida territorialmente. En definitiva, si bien *no* es la riqueza natural lo que garantiza la endogeneidad del desarrollo (¡que lo digan los países pobres económica y políticamente, pero riquísimos en recursos naturales!), sostengo que sin ella no hay cómo “poner los ‘controles de mando’ del desarrollo territorial dentro de su propia matriz social” (Boisier, 1993: 7).

Puede que esa última afirmación suene un poco pretenciosa, pero contiene mucho de verdad. Si hay algo que la historia de las relaciones entre seres humanos y naturaleza nos enseña es precisamente que el ser humano se ha ido independizando gradual pero inexorablemente de la base de recursos como factor determinante de su nivel de bienestar (entre otros, por medio de la incorporación de medioambientes ajenos y alejados del suyo). Tomando en cuenta que ha sido nada menos que esa faceta de la evolución humana lo que ha socavado las fundaciones ecopolíticas (es decir, ecológicas e institucionales) de la civilización occidental, la transición hacia la sustentabilidad debiera conllevar también una mayor gravitación de la riqueza natural local para el proceso de desarrollo, lo cual... ¡voilà! hace que con lo anterior se constituya una aseveración (¿advertencia?) más que justificada, presumida o no.

Transición ecológica y crisis de civilización

Incorporar pues un marco ecológico en nuestra toma de decisiones económicas y políticas -para tener en cuenta las repercusiones de nuestras políticas públicas en la red de relaciones que operan en los ecosistemas- puede constituir, de hecho, más que una aspiración, una necesidad biológica. Ha llegado el momento de reconocer que las consecuencias ecológicas de la forma en que la población utiliza los recursos de la tierra están asociadas con el patrón de relaciones entre los propios seres humanos (cf. Lewis, 1947). De hecho, la necesidad de tránsito hacia un estilo de desarrollo sustentable implica un cambio en el propio modelo de civilización hoy dominante, particularmente en lo que se refiere al patrón *ecocultural* de articulación “sociedad-naturaleza”. Es por ello que no tiene cabida intentar desvincular los problemas del medio ambiente de los problemas del desarrollo, puesto que los primeros son la simple expresión de las falencias de un determinado estilo de desarrollo. La adecuada comprensión de la crisis supone pues el reconocimiento de que ésta se refiere al agotamiento de un estilo de desarrollo ecológicamente depredador, socialmente perverso, políticamente injusto, culturalmente alienado y éticamente repulsivo. Lo que está en juego es la superación de los paradigmas de la modernidad que han estado definiendo la orientación del proceso de desarrollo. En ese sentido, quizás la modernidad emergente en el Tercer Milenio sea la “modernidad de la sustentabilidad”, en donde el ser humano vuelva a ser parte (antes que estar aparte) de la naturaleza.

Uno de los estudiosos que mejor ha captado la singularidad de nuestro tiempo y la especificidad de la actual “crisis de civilización” ha sido sin duda John Benett (1976), quien la ha caracterizado como una “transición ecológica” que empezó a partir de la Revolución Agrícola, hace nueve mil años. Entre otros aspectos, la transición involucra en términos *tecnológicos* la tendencia a utilizar cantidades cada vez mayores de energía, aunque con niveles cada vez más elevados de entropía. En sus dimensiones *filosóficas*, la transición ha llevado a la sustitución de “imágenes” tales como de contemplación y respeto por la naturaleza y su reemplazo por la instrumentalización del mundo natural. *Ecológicamente*, se ha caracterizado por la incorporación de la naturaleza en la cultura, así como por el quiebre de las relaciones de subsistencia local, lo cual significa no sólo la acumulación de bienes para fines no relacionados con la supervivencia biológica, sino la posibilidad de lograrla a través de la incorporación de ambientes naturales cada vez más apartados de la comunidad local.

Es cierto que en términos estrictamente ecológicos, referidos a la base territorial de la sociedad, el advenimiento de la Revolución Agrícola representó sin duda la más grande agresión que el ser humano jamás haya sido capaz de infligirle a la naturaleza (excepto las armas nucleares, por supuesto). La práctica agrícola y ganadera, al promover la especialización de la flora y de la fauna, contravino las leyes más fundamentales del funcionamiento de los ecosistemas, tales como

las de diversidad, de resiliencia, de capacidad de adaptación, de capacidad de soporte y de equilibrio. Como si lo anterior fuera poco, a la Revolución Agrícola le siguieron procesos de profundización de las agresiones antrópicas, los cuales han culminado con la Revolución Industrial del siglo pasado y la Revolución de la Informática de décadas recientes. Pese a ello, nadie estaría políticamente dispuesto -o suficientemente insano, conforme sea el caso- para sugerir que los procesos iniciados por la Revolución Agrícola podrían (¡o debieran!) ser revertidos. No se puede siquiera imaginar una comunidad civilizada sin que hubiera ocurrido esa evolución en la ocupación del planeta, pero hay que asumir plenamente las consecuencias de ello. Como advirtió con mucha propiedad Margaret Mead (1970), debemos considerar “los modos de vida de nuestros antepasados como una situación a la cual jamás seremos capaces de retornar; pero podemos rescatar esa sabiduría original de un modo que nos permita comprender mejor lo que está sucediendo hoy día, cuando una generación casi inocente de un sentido de historia tiene que aprender a convivir con un futuro incierto, un futuro para el cual no ha sido educada”.

Dos aspectos merecen destacarse respecto de la transición ecológica. Por una parte, hay que anotar la *velocidad* y la *magnitud* de las transformaciones. Si entre la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial transcurrieron centenares de siglos y se invirtió la proporción entre productos de origen natural y modificado, entre ésta y la Revolución de la Informática no alcanzó a mediar un siglo, y pasaron a predominar los insumos de conocimiento. Entre las múltiples consecuencias de esos procesos cabe recordar que los tiempos de respuesta de los sistemas naturales son bastante más lentos que el ritmo de las transformaciones señaladas.

Por otro lado, la *dirección* y el *contenido* de los cambios son igualmente revolucionarios. Entre las diversas características de la transición ecológica, corresponde poner en relieve los componentes *tecnológicos* y *ecológicos* de la transición. Las expresiones tecnológicas del “gran ciclo” que empezó hace nueve mil años revelan que, pese a la creciente sofisticación tecnológica de las sucesivas civilizaciones, utilizamos cantidades cada vez más ingentes de energía, y con niveles igualmente formidables de ineficiencia (es decir, con más entropía). Más sobrio todavía para la sustentabilidad de la especie en el planeta es darse cuenta del componente *ecológico* de la transición. En primer lugar, la Revolución Agrícola, al sentar las bases para el primer ordenamiento territorial *strictu sensu*, permitió que las poblaciones pasasen a depender cada vez menos del entorno inmediato para su supervivencia, lo cual dio lugar al establecimiento de patrones de consumo que favorecieron, entre otros, a las aglomeraciones humanas, luego villas, luego ciudades, luego megalópolis. En segundo lugar, ha sido posible para los seres humanos, gracias a la generación de excedentes, adoptar patrones de consumo y acumular bienes cada día menos relacionados con su supervivencia biológica. Tercero, y como resultado de esas dos dinámicas, la sociedad en su conjunto pudo independizarse cada vez más del medio ambiente cercano, logrando per-

petuar patrones de consumo que, aunque pudiesen ser insustentables en el largo plazo, podrían mantenerse, en el corto plazo, mediante la incorporación de ambientes (territorios) foráneos y/o apartados de la comunidad local -por intermedio de la guerra, del comercio o de la tecnología.

La evolución descrita conduce a la revelación de que lo que determina en definitiva la calidad de vida de una población y, por ende, su sustentabilidad, *no* es únicamente su entorno natural sino la *trama de relaciones* entre cinco componentes que configuran un determinado modelo de ocupación del territorio y que configuran el POETA de su sustentabilidad. Haciendo uso de una imagen sugerida inicialmente por Otis Duncan (1961), se puede proponer que la sustentabilidad de una comunidad depende de las *interrelaciones* entre:

Población (tamaño, composición, densidad, dinámica demográfica);

Organización social (patrones de producción, estratificación social, patrón de resolución de conflictos);

Entorno (medio ambiente físico y construido, procesos ambientales, recursos naturales);

Tecnología (innovación, progreso técnico, uso de energía);

Aspiraciones sociales (patrones de consumo, valores, cultura).

La malla que contiene la ecuación del POETA permite entender, por ejemplo, por qué un país como Japón debiera estar en el ranking de los más pobres del planeta desde la perspectiva estrictamente ambiental y demográfica. En efecto, Japón posee una altísima densidad demográfica para su territorio y éste es extremadamente pobre en recursos naturales y en fuentes tradicionales de energía. Pese a ello, Japón se ubica entre los países más desarrollados del mundo gracias, principalmente, a su organización social y tejido tecnológico. Se podría especular con que el tipo de organización social japonesa, con altos niveles de homogeneidad social, y las características de las aspiraciones sociales de sus habitantes, con altos componentes de equidad, explican en buena medida la “necesidad” histórica de la sociedad japonesa de alcanzar niveles elevados de eficiencia energética y de creciente contenido de progreso técnico en sus patrones de producción, para poder satisfacer de ese modo las necesidades de consumo de su población. Dicho de otra forma, el patrón de consumo japonés responde a, y a la vez determina, la existencia de un patrón de producción que esté acorde con las aspiraciones sociales de los japoneses y se adapte a (más bien, supere) sus limitaciones ambientales y territoriales. Es la perfecta convergencia entre producción y consumo lo que otorga sustentabilidad a Japón; y es la posibilidad de incorporación de territorios muy apartados del suyo lo que le confiere un signo de sustentabilidad aparentemente *dura* a un estilo de desarrollo que, de otra forma, sería extremadamente débil y frágil (véase, sobre ese aspecto, Pearce y Atkinson, 1993; para una visión crítica, véase Martínez-Allier, 1995).

Como vimos anteriormente, el patrón histórico de inserción de las economías periféricas en el sistema capitalista acrecienta una dificultad extra para la sustentabilidad en el mundo en desarrollo. Históricamente, tales países se han insertado en la economía mundial como exportadores de productos primarios y de recursos naturales. Fuertemente dependientes de importaciones de productos industrializados, la demanda, o mejor dicho, el patrón de consumo en los países periféricos es un simple reflejo del consumo de las élites de los países industrializados. Sobre la base de esta *(de)formación de la demanda*, imitativa de la élite y sin relación alguna con las necesidades básicas de las poblaciones locales, el sistema económico procede a la *formación de capital*, en la mayoría de los casos, ingresos por exportaciones o por endeudamiento externo (el ahorro interno es insuficiente). El progreso técnico, verdadero motor del crecimiento autónomo, es importado en los países dependientes como un paquete cerrado, sin dar lugar a un genuino proceso de innovación tecnológica nacional.

Brasil constituye un ejemplo paradigmático de lo que acaba de decirse. Como es de conocimiento de todos, el país es uno de los campeones mundiales de crecimiento económico, con tasas anuales muy cercanas al 10% y que sólo son superadas, en los últimos cien años, por las de Japón. No debiera sorprender, sobre ese aspecto, que los indicadores socioeconómicos de Brasil, que sólo superaban los de Haití en la década del cincuenta, permitiesen al país disputar hoy un puesto en las *top ten* de la economía mundial. Sin embargo, al examinar más de cerca el “milagro” brasileño de los años setenta, salta a la vista su insustentabilidad intrínseca. Prácticamente no hay innovación tecnológica o acumulación de capital en bases nacionales como para justificar ese desempeño económico. Lo que persiste es la importación de un modelo cerrado que incluye desde el patrón de producción al patrón de consumo y a la generación de conocimiento, pasando por el aumento de exportaciones a cualquier costo y, cuando éstas no son suficientes, por el endeudamiento externo en sustitución al ahorro interno. Está de más mencionar aquí las implicaciones socioambientales de ese modelo (véase, entre otros, Guimarães, 1991[b]).

La *transición ecológica* se caracteriza, en resumidas cuentas, por una verdadera revolución en los patrones de producción y de consumo, la cual nos ha vuelto menos sintonizados con nuestras necesidades biológicas, más alienados respecto de nosotros mismos y de nuestros socios en la naturaleza, y más urgidos en el uso de cantidades crecientes de recursos de poder para garantizar la incorporación (y destrucción) de ambientes extra-nacionales que permitan garantizar la satisfacción de los patrones actuales (insustentables) de consumo. En ese sentido, la sustentabilidad de un determinado territorio estará dada, en su expresión ambiental, por el nivel de dependencia de éste en relación a ambientes foráneos y, en términos socioambientales, por la distancia entre la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes y los patrones de consumo conspicuo de las élites. Podríamos incluso afirmar, como lo han sugerido Guimarães y Maia (1997), que la “piedra filoso-

fal” de la sustentabilidad descansa precisamente sobre los patrones de producción y de consumo, los cuales determinan cómo una sociedad incorpora la naturaleza, otorgándole (o no) sustentabilidad a su sistema socioeconómico.

La sustentabilidad como un nuevo paradigma de desarrollo

Pese a que la verdadera transición ecológica empezó hace más de nueve mil años, y que la ecopolítica ha estado con nosotros desde los albores del tiempo, sólo hace muy poco hemos despertado a los desafíos de la sustentabilidad -al fin y al cabo, si “antes de todo era el caos” (no confundir con una referencia bíblica a la existencia de economistas antes mismo de la creación... puntualizamos apenas la extrema entropía que caracterizó al Big Bang), también es un hecho que Adán y Eva fueron expulsados del Edén a raíz de un acto ostensiblemente ecológico... La noción moderna de desarrollo sustentable tiene su origen en el debate iniciado en 1972 en Estocolmo y consolidado veinte años más tarde en Rio de Janeiro. Pese a la variedad de interpretaciones existentes en la literatura y en el discurso político, se ha adoptado internacionalmente la definición sugerida por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Brundtland (1987). El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Afirmar que los seres humanos constituyen el centro y la razón de ser del proceso de desarrollo implica abogar por un nuevo estilo de desarrollo que sea ambientalmente sustentable en el acceso y uso de los recursos naturales y en la preservación de la biodiversidad; que sea socialmente sustentable en la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales y que promueva la justicia y la equidad; que sea culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad que, pese a su evolución y reactualización permanente, determinan la integración nacional a través de los tiempos; y que sea políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar el acceso y la participación de todos en la toma de decisiones públicas. Este nuevo estilo de desarrollo tiene como norte una nueva ética del desarrollo, una ética en la cual los objetivos económicos del progreso estén subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas.

Tratemos de desmenuzar aunque sea someramente la definición enunciada, con el objeto de dejar en claro los componentes básicos del nuevo paradigma de desarrollo y de vislumbrar, de ese modo, sus implicaciones para la formulación de políticas públicas. Desde luego, la interpretación introducida recién se refiere a un paradigma de *desarrollo* y no de crecimiento. Ello por dos razones fundamentales. En primer lugar, por establecer un límite ecológico inter-temporal muy

claro al proceso de crecimiento económico. Contrarrestando la noción comúnmente aceptada de que no se puede acceder al desarrollo sustentable sin crecimiento -trampa conceptual que no logró evadir ni siquiera el propio Informe Brundtland (véase, por ejemplo, Goodland et al. 1992)- el paradigma de la sustentabilidad parte de la base de que el crecimiento, definido mayormente como incremento monetario del producto y tal como lo hemos estado experimentando, constituye un componente intrínseco de la *insustentabilidad* del estilo actual. Por otro lado, el nuevo paradigma pone de relieve que para que exista el desarrollo son necesarios, más que la simple acumulación de bienes y de servicios, cambios *cualitativos* en la calidad de vida y en la felicidad de las personas, aspectos que, más que las dimensiones mercantiles del mercado, incluyen dimensiones sociales, culturales, estéticas y de satisfacción de necesidades materiales y espirituales. Se justifica reproducir el pensamiento de Herman Daly al respecto:

“Las afirmaciones de lo imposible son el fundamento mismo de la ciencia. Es imposible viajar a más velocidad que la de la luz, crear o destruir materia-energía, construir una máquina de movimiento perpetuo, etc. Respetando los teoremas de lo imposible evitamos perder recursos en proyectos destinados al fracaso. Por eso los economistas deberían sentir un gran interés hacia los teoremas de lo imposible, especialmente el que ha de demostrarse aquí, que es imposible que la economía del mundo crezca liberándose de la pobreza y de la degradación ambiental. Dicho de otro modo, el crecimiento sostenible es imposible. En sus dimensiones físicas, la economía es un subsistema abierto del ecosistema terrestre que es finito, no creciente y materialmente cerrado. Cuando el subsistema económico crece, incorpora una proporción cada vez mayor del ecosistema total, teniendo su límite en el ciento por ciento, si no antes. Por tanto, su crecimiento no es sostenible. El término ‘crecimiento sostenible’ aplicado a la economía, es un mal *oxymoron*; autocontradictorio como prosa y nada evocador como poesía” (1991: 47).

En segundo lugar, por añadidura a lo que se acaba de afirmar, la sustentabilidad del proceso de desarrollo sólo estará dada en la medida en que se logre preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera y, a la vez, se preserve la biodiversidad del planeta. Este último aspecto es de suma importancia porque significa que, para que sea sustentable, el desarrollo tiene que transitar del actual antropocentrismo al biopluralismo, otorgando a las demás especies el mismo derecho “ontológico” a la vida, lo cual, dicho sea de paso, no contradice el carácter antropocéntrico del crecimiento económico al que se hizo alusión anteriormente, sino que lo amplifica. En resumidas cuentas, la sustentabilidad *ecoambiental* del desarrollo se refiere tanto a la base física del proceso de crecimiento, objetivando la conservación de la dotación de recursos naturales incorporada a las actividades productivas, como a la capacidad de sustento de los ecosistemas, es decir, la manutención del poten-

cial de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas y de los desechos de las actividades productivas.

Pero no basta con que el desarrollo promueva cambios cualitativos en el bienestar humano y garantice la integridad ecosistémica del planeta para que sea considerado sustentable. Nunca estará de más recordar que “en situaciones de extrema pobreza el ser humano empobrecido, marginalizado o excluido de la sociedad y de la economía nacional no posee ningún compromiso para evitar la degradación ambiental, si es que la sociedad no logra impedir su propio deterioro como persona” (Guimarães, 1991[b]: 24). Asimismo, tal como hizo ver muy atinadamente Claudia Tomadoni (1997), “en situaciones de extrema opulencia, el ser humano enriquecido, ‘gentrificado’ y, por tanto, incluido y también ‘gethificado’ en la sociedad y en la economía, tampoco posee un compromiso con la sustentabilidad”. Ello porque la inserción privilegiada de éstos en el proceso de acumulación, y por ende en el acceso y uso de los recursos y servicios de la naturaleza, les permite transferir los costos sociales y ambientales de la *insustentabilidad* a los sectores subordinados o excluidos. Ello implica, especialmente en los países periféricos, con graves problemas de pobreza, desigualdad y exclusión, que los fundamentos *sociales* de la sustentabilidad suponen postular como criterios básicos de política pública los de la justicia distributiva, para el caso de bienes y de servicios, y los de la universalización de cobertura, para las políticas globales de educación, salud, vivienda y seguridad social. Lo mismo se aplica, en aras de la sustentabilidad social, a los criterios de igualdad de género, reconociéndose como un valor en sí mismo, y por tanto por encima de consideraciones económicas, la incorporación plena de la mujer en la ciudadanía económica (mercado), política (voto) y social (bienestar).

En cuarto lugar, el nuevo paradigma postula también la preservación de la diversidad en su sentido más amplio -la *sociodiversidad* además de la *biodiversidad*-, es decir, el mantenimiento del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad que permiten la reproducción del tejido social y garantizan la integración nacional a través de los tiempos. Ello incluye, desde luego, la promoción de los derechos constitucionales de las minorías y la incorporación de éstas en políticas concretas tales como las de educación bilingüe, demarcación y autonomía territorial, religiosidad, salud comunitaria, etc. Apuntan en esa misma dirección, la del componente *cultural* de la sustentabilidad, las propuestas de introducción de derechos de conservación agrícola, equivalente a los derechos reconocidos en relación a la conservación y uso racional del patrimonio biogenético, en el sentido de establecer criterios económicos de propiedad intelectual para que tanto “usuarios” como “detentadores” de biodiversidad compartan sus beneficios, transformándolos de esa forma en corresponsables por su conservación. En verdad, un mundo crecientemente globalizado económica y comercialmente lleva a una creciente especialización agrícola en base a especies o variedades de mayor productividad, con la consecuente pérdida de diversidad. Esto significa que, en

pos de la sustentabilidad cultural de los sistemas de producción agrícola, hay que aplicar criterios extra-mercado para que éste incorpore las “externalidades” de los sistemas de producción de baja productividad desde la óptica de los criterios económicos de corto plazo, pero que garantizan la diversidad de especies y variedades agrícolas, y que aseguran, además, la permanencia en el tiempo de la cultura que sostiene formas específicas de organización económica para la producción.

En quinto lugar, el fundamento *político* de la sustentabilidad se encuentra estrechamente vinculado al proceso de profundización de la democracia y de construcción de la ciudadanía, y busca garantizar la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo. Esta se resume, a nivel micro, en la democratización de la sociedad, y a nivel macro, en la democratización del estado. El primer objetivo supone el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, la redistribución de activos y de información hacia los sectores subordinados, el incremento de la capacidad de análisis de sus organizaciones, y la capacitación para la toma de decisiones; mientras que el segundo se logra a través de la apertura del aparato estatal al control ciudadano, la reactualización de los partidos políticos y de los procesos electorales, y la incorporación del concepto de responsabilidad política en la actividad pública. Ambos procesos constituyen desafíos netamente políticos, los cuales sólo podrán ser enfrentados a través de la construcción de alianzas entre diferentes grupos sociales, de modo de proveer la base de sustentación y de consenso para el cambio de estilo.

Privilegiar, en la dimensión política de la sustentabilidad, la democratización del estado por sobre la democratización del mercado, se debe más que a una motivación ideológica, a una constatación pragmática. La verdad es que el estado sigue ofreciendo una contribución al desarrollo capitalista que es, a la vez, única, necesaria e indispensable. Única porque trasciende la lógica del mercado mediante la salvaguardia de valores y prácticas de justicia social y de equidad, e incorpora la defensa de los llamados derechos difusos de la ciudadanía; necesaria porque la propia lógica de la acumulación capitalista requiere de la oferta de “bienes comunes” que no pueden ser producidos por actores competitivos en el mercado; e indispensable porque se dirige a las generaciones futuras y trata de aspectos y procesos caracterizados por ser no-sustituibles o por la imposibilidad de su incorporación crematística al mercado.

Es más: tomando en cuenta las distancias económicas y sociales entre los diversos sectores de la sociedad, con sus secuelas de polarización, desconfianza y resentimiento, el estado sigue representando, aunque con serios problemas de legitimidad, como un actor privilegiado para ordenar la pugna de intereses y orientar el proceso de desarrollo, y para que se pueda, en definitiva, forjar un pacto social que ofrezca sustento a las alternativas de solución de la crisis de sustentabilidad. Conviene recordar que las dificultades provocadas por situaciones extremas de desigualdad social y de degradación ambiental no pueden ser definidas como problemas individuales, constituyendo de hecho problemas sociales, colec-

tivos. No se trata simplemente de garantizar el acceso, vía el mercado, a la educación, a la vivienda, a la salud, o a un ambiente libre de contaminación, sino de recuperar prácticas colectivas (solidarias) de satisfacción de estas necesidades

No se puede dejar de destacar, a ese respecto, que “acorralado” o habiendo sobrevivido a su casi “extinción” en manos de los apóstoles del neoliberalismo (cf. Guimarães, 1990[a] y 1996, respectivamente), el estado se presenta sin duda “herido de muerte”. Su principal amenaza proviene del entorno externo. La internacionalización de los mercados, de la propia producción, y de los modelos culturales, pone en entredicho la capacidad de los estados para mantener la unidad e identidad nacional, provocando la fragmentación de su poder monopolista para manejar las relaciones externas de la sociedad, y fortaleciendo los vínculos transnacionales entre segmentos dominantes de la sociedad. De persistir la tendencia verificada en la década pasada, cuando el estado asumió muchos de estos vínculos (por ejemplo, la negociación de la deuda externa privada), existiría el riesgo de tornar las políticas llevadas a cabo por el estado en nada más que la ambulancia que recoge los heridos y desechables de una globalización neoconservadora, en un contexto en el cual gran parte de las decisiones que son fundamentales para un país y para la cohesión social se toman fuera de su territorio y mediante actores totalmente ajenos a su realidad económica.

Por último, lo que une y le da sentido a esta comprensión específica de la sustentabilidad es la necesidad de una nueva *ética* del desarrollo. Además de importantes elementos morales, estéticos y espirituales, esta concepción guarda relación con al menos dos fundamentos de la justicia social: la justicia *productiva* y la justicia *distributiva*. La primera se dirige a garantizar las condiciones que permiten la existencia de igualdad de oportunidades para que las personas participen en el sistema económico, la posibilidad real por parte de éstas para satisfacer sus necesidades básicas, y la existencia de una percepción generalizada de justicia y de tratamiento acorde con su dignidad y con sus derechos como seres humanos. La ética en cuanto materialización a través de la justicia distributiva se orienta a garantizar que cada individuo reciba los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de los demás individuos (Wilson, 1992).

Tener mayor claridad respecto del significado del nuevo paradigma, si bien contribuye a superar las ambigüedades del discurso sobre desarrollo sustentable, todavía abre nuevos interrogantes. Entre otros, hay que plantearse el rol de los actores sociales, para poder así distinguir los actores de la sustentabilidad y los actores cuya orientación de acción o comportamientos concretos contribuye a profundizar la *insustentabilidad* del actual estilo. Surgen también importantes interrogantes sobre cómo incorporar la lógica de la sustentabilidad en las políticas públicas o, mejor dicho, sobre cómo, a partir de la lógica misma de las políticas sectoriales, tornarlas más sustentables.

Actores y criterios de sustentabilidad

No obstante la importante evolución del pensamiento mundial respecto de la crisis del desarrollo que se manifiesta en el deterioro del medio, el recetario para la superación de la crisis todavía obedece a la farmacopea neoliberal, y sigue incluyendo los programas de ajuste estructural, de reducción del gasto público, y de mayor apertura en relación al comercio y a las inversiones extranjeras. La verdad de los hechos es que, con mayores o menores niveles de sofisticación, las alternativas de solución de la crisis suponen cambios todavía marginales en las instituciones y reglas del sistema económico y financiero internacional, mientras que la evolución del debate mundial indica la necesidad de imprimir un cambio profundo en nuestra forma de organización social y de interacción con los ciclos de la naturaleza (véase, por ejemplo, Rich, 1994 y Guimarães, 1992). En resumidas cuentas, la fuerza que ha cobrado el discurso de la sustentabilidad encierra múltiples paradojas.

Desde luego, el desarrollo sustentable asume importancia en el momento mismo en que los centros de poder mundial declaran la falencia del estado como motor del desarrollo y proponen su reemplazo por el mercado, mientras declaran también la falencia de la planificación. Al revisarse con atención los componentes básicos de la sustentabilidad -la manutención del stock de recursos y de la calidad ambiental para la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones actuales y futuras- se constata, entretanto, que la sustentabilidad del desarrollo requiere precisamente de un mercado regulado y de un horizonte de largo plazo. Entre otros motivos, porque actores y variables como “generaciones futuras” o “largo plazo” son extraños al mercado, cuyas señales responden a la asignación óptima de recursos en el corto plazo. Lo mismo se aplica, con mayor razón, al tipo específico de escasez actual. Si la escasez de recursos naturales puede, aunque imperfectamente, ser afrontada en el mercado, elementos como el equilibrio climático, la capa de ozono, la biodiversidad o la capacidad de recuperación del ecosistema trascienden a la acción del mercado.

Por otra parte, y en cierta medida fortaleciendo lo que se afirmó recién, es en verdad impresionante, por no decir contradictoria desde el punto de vista sociológico, la unanimidad respecto de las propuestas en favor de la sustentabilidad. Resulta imposible encontrar un solo actor social de importancia en contra del desarrollo sustentable. Si no fuera ya suficiente con el sentido común respecto del vacío que suele acompañar a los consensos sociales absolutos, el pensamiento mismo sobre el desarrollo, como así también la propia historia de las luchas sociales que lo ponen en movimiento, evoluciona en base a la pugna entre actores cuya orientación de acción oscila entre la disparidad y el antagonismo. Es así, por ejemplo, que la industrialización se ha contrapuesto, durante largo tiempo, a los intereses del agro, desplazando el eje de la acumulación del campo a la ciudad, del mismo modo en que el avance de los estratos de trabajadores urbanos provo-

có efectos negativos para la masa campesina. No se trata de sugerir aquí una visión de la historia en que los antagonismos entre clases o estratos sociales se cristalicen a través del tiempo. De hecho, el capital agrícola se ha vinculado cada vez más fuertemente al capital industrial, mientras que el campesino se ha ido transformando gradualmente en trabajador rural, con pautas de conducta semejantes a las de su contraparte urbana. Así y todo, hay que plantearse la pregunta: ¿cuáles son los actores sociales promotores del desarrollo sustentable? No es de esperar que sean los mismos que constituyen la base social del estilo actual, los cuales tienen, por supuesto, mucho que perder y muy poco que ganar con el cambio.

Resulta inevitable sugerir, principalmente para los países periféricos, que el paradigma del desarrollo sustentable sólo se transformará en una propuesta alternativa de política pública en la medida en que sea posible distinguir sus componentes reales, es decir, sus contenidos sectoriales, económicos, ambientales y sociales. No cabe duda, por ejemplo, que uno de los pilares del estilo actual es precisamente la industria automotriz, con sus secuelas de congestión urbana, quema de combustibles fósiles, etc. Ahora bien, lo que podría ser considerado sustentable para los empresarios (por ejemplo, vehículos más económicos y dotados de convertidores catalíticos) no necesariamente lo sería desde el punto de vista de la sociedad (por ejemplo, transporte público eficiente). Lo mismo ocurre en relación a los recursos naturales. Para el sector productor de muebles o exportador de maderas, podría ser considerada sustentable la explotación forestal que promueva la sustitución de la cobertura natural por especies homogéneas, puesto que el mercado responde a, e incentiva, la competitividad individual fundada en la rentabilidad óptima de los recursos. Mientras, para el país, puede que sea sustentable precisamente la preservación de estos mismos recursos forestales, garantizando su diversidad para investigaciones genéticas, para la manutención cultural de poblaciones autóctonas, etc., otorgándose de paso una menor rentabilidad a la exportación de maderas o mueblería.

Una aproximación más bien lógico-formal al interrogante de los “actores” detrás de una estrategia de desarrollo sustentable sería la de utilizar los propios fundamentos económicos del proceso productivo: capital, trabajo y recursos naturales. Históricamente, dos de éstos, capital y trabajo, han gozado de una base social directamente vinculada a su evolución, es decir, “portadora” de los intereses específicos a tales factores. Así, la acumulación de capital financiero, comercial o industrial pudo nutrirse y a su vez sostener el fortalecimiento de una clase capitalista, mientras la incorporación de la naturaleza a través de las relaciones de producción pudo favorecerse y, a su vez, favoreció la consolidación de una clase trabajadora. Para no alargar demasiado el argumento, basta con recordar que el desarrollo de las luchas sociales se ha dado, en términos históricos, a través de la pugna entre socialismo y capitalismo, aún cuando algunos autores confundan el agotamiento del autoritarismo y la victoria de la democracia con el “fin de la historia” de las luchas sociales. El dilema actual de la sustentabilidad se resumiría,

por consiguiente, en la inexistencia de un actor cuya razón de ser social fuesen los recursos naturales, fundamento al menos de la sustentabilidad ecológica y ambiental del desarrollo. Esto se vuelve aún más complejo al considerar que, en lo que se dice en relación con el capital y el trabajo, sus respectivos actores detentan la propiedad de los respectivos factores, mientras la propiedad de algunos de los recursos naturales y de la mayoría de los procesos ecológicos es, por lo menos en teoría, pública.

En resumen, podría decirse que convivimos todavía con dos realidades contrapuestas. Por un lado, todos los actores parecen concordar en que el estilo actual se ha agotado y es decididamente insustentable, no sólo desde el punto de vista económico y ambiental, sino principalmente en lo que se refiere a la justicia social. Por el otro, no se adoptan las medidas indispensables para la transformación de las instituciones económicas, sociales y políticas que dieron sustento al estilo vigente. Cuando mucho, se hace uso de la noción de sustentabilidad para introducir lo que equivaldría a una restricción ambiental en el proceso de acumulación, sin afrontar todavía los procesos institucionales y políticos que regulan la propiedad, control, acceso y uso de los recursos naturales y de los servicios ambientales. Tampoco se hacen evidentes las acciones indispensables para cambiar los patrones de consumo en los países industrializados, los cuales, como es sabido, determinan la internacionalización del estilo. Hasta el momento, lo que se ve son transformaciones sólo cosméticas, tendientes a “enverdecer” el estilo actual, sin de hecho propiciar los cambios a que se habían comprometido los gobiernos representados en Rio. Un fenómeno por lo demás conocido por sociólogos y politólogos, que lo clasifican como de *conservadurismo dinámico* (véase, por ejemplo, Schon, 1973). Antes que una teoría conspirativa de grupos o estratos sociales, se trata simplemente de la tendencia inercial del sistema social para resistir al cambio, promoviendo la aceptación del discurso transformador precisamente para garantizar que nada cambie, en una suerte de “gatopardismo” posmoderno.

Adoptando una postura quizás más optimista respecto de la capacidad de la élite y de los llamados “poderes fácticos” para adaptarse a fuentes de cuestionamiento de su poder (el aludido *conservadurismo dinámico*), podríamos sugerir que antes del resultado de una conspiración deliberada de los grupos que más se benefician del actual estilo, el desarrollo sustentable está padeciendo de una patología común a cualquier propuesta de transformación de la sociedad demasiado cargada de significado y simbolismo. En otras palabras, por detrás de tanta unanimidad yacen actores reales que comulgan visiones bastante particulares de la sustentabilidad. Tomemos una ilustración por lo demás muy cercana al corazón de los proponentes de la sustentabilidad: la Amazonia (véase al respecto Guimarães, 1997[b]).

Lo sugerido recién permitiría entender, por ejemplo, por qué un *empresario maderero* puede discurrir sobre la necesidad de un “manejo sustentable” del bos-

que amazónico y estar refiriéndose preferentemente a la sustitución de la cobertura natural por especies homogéneas, o sea, para garantizar la “sustentabilidad” de las tasas de retorno de la inversión en actividades de extracción de madera. Mientras, un dirigente de una *entidad preservacionista* defiende con igual ardor medios para precisamente prohibir cualquier tipo de exploración económica y hasta de presencia humana en extensas áreas de bosque primario, es decir, para garantizar la “sustentabilidad” de la biodiversidad natural (algunos más cínicos dirían que no debiera permitirse siquiera la presencia de monos... ¡en una de esas se produce la evolución y se transforman en humanos!). Todo lo anterior podría estar sucediendo mientras un *dirigente sindical* está razonando, con igual énfasis y sinceridad de propósitos que el empresario y el preservacionista, en favor de actividades de extracción vegetal de la Amazonia como un medio para garantizar la “sustentabilidad” socioeconómica de su comunidad (por ejemplo, las llamadas “reservas extractivistas” que se hicieron famosas mundialmente gracias a la lucha de Chico Mendes en Brasil). Por último, en algún lugar cercano en donde los tres actores anteriormente citados se encuentran arengando a la gente, quizás en la misma reunión, podemos encontrar a un *indigenista* explayándose sobre la importancia de la Amazonia para la “sustentabilidad” cultural de prácticas, valores y rituales que otorgan sentido e identidad a la diversidad de etnias indígenas.

En resumen, el empresario puede fundamentar sus posiciones en favor del desarrollo sustentable de la Amazonia en imágenes del bosque como una *despensa*, el preservacionista como un *laboratorio*, el sindicalista como un *supermercado* y el indigenista como un *museo*. Para tornar las cosas aún más complicadas, lo cierto es que ¡todas esas imágenes revelan lecturas y realidades más que legítimas respecto de lo que significa la sustentabilidad! El desafío que se presenta por tanto para el gobierno y la sociedad, para los tomadores de decisión y los actores que determinan la agenda pública es, precisamente, el de garantizar la existencia de un proceso transparente, informado y participativo para el debate y la toma de decisiones en pos de la sustentabilidad. Ello para que sea posible formular políticas de desarrollo que, como máximo y en términos ideales, promuevan un modelo social y ambientalmente adecuado de uso de los recursos naturales, tanto para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población actual como para aumentar las oportunidades para que las generaciones futuras mejoren su propia calidad de vida. Como mínimo, y a partir de la constatación de que los intereses sociales son, por definición, diferenciados y muchas veces contradictorios, el formular políticas de desarrollo que proyecten un norte para la sociedad y, en base a esa visión del futuro, logren establecer prioridades y criterios para justificar la selección de una alternativa que satisfaga determinadas necesidades de actores específicos, y no otras.

La realidad actual sugiere pues la necesidad de superar enfoques parciales, hasta cierto punto ingenuos y “naturalistas” acerca de la sustentabilidad. Y sustituirlos por el reconocimiento de que los problemas ecológicos revelan disfuncio-

nes de carácter social y político (los padrones de relación entre seres humanos y la forma en que está organizada la sociedad en su conjunto), y son el resultado de distorsiones estructurales en el funcionamiento de la economía (los padrones de consumo de la sociedad y la forma en que ésta se organiza para satisfacerlos). Pareciera oportuno, por consiguiente, delinear algunos criterios operacionales de sustentabilidad de acuerdo con la definición sugerida. Tal procedimiento da lugar a la preparación para el aterrizaje del paradigma de la sustentabilidad en el reino concreto de las políticas públicas, lo que permite, adicionalmente, diferenciar actores e intereses de un modo más preciso. Por limitaciones de espacio, la presentación estará limitada a la enunciación no exhaustiva de criterios aplicables exclusivamente a las dimensiones *ecológicas* y *ambientales* de la sustentabilidad (para otras dimensiones véase, por ejemplo, Guimarães, 1997[a]).

La sustentabilidad *ecológica* del desarrollo se refiere a la base física del proceso de crecimiento y objetiva la conservación de la dotación de recursos naturales incorporada a las actividades productivas. Haciendo uso de la propuesta inicial de Daly (1990, véase también Daly y Townsend, 1993), se pueden identificar por lo menos dos criterios para su operacionalización a través de las políticas públicas. Para el caso de los recursos naturales *renovables*, la tasa de utilización debiera ser equivalente a la tasa de recomposición del recurso. Para los recursos naturales *no renovables*, la tasa de utilización debe equivaler a la tasa de sustitución del recurso en el proceso productivo, por el período de tiempo previsto para su agotamiento (medido por las reservas actuales y por la tasa de utilización). Tomándose en cuenta que su propio carácter de “no renovable” impide un uso indefinidamente sustentable, hay que limitar el ritmo de utilización del recurso al período estimado para la aparición de nuevos sustitutos. Esto requiere, entre otros aspectos, que las inversiones realizadas para la explotación de recursos naturales no renovables, a fin de resultar sustentables, deben ser proporcionales a las inversiones asignadas para la búsqueda de sustitutos, en particular las inversiones en ciencia y tecnología.

La sustentabilidad *ambiental* se refiere a la relación con la manutención de la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir, a la capacidad de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas. Haciendo uso del mismo razonamiento anterior, el de ilustrar formas de operacionalización de concepto, dos criterios aparecen como obvios. En primer lugar, las tasas de emisión de desechos como resultado de la actividad económica deben equivaler a las tasas de regeneración, las cuales son determinadas por la capacidad de recuperación del ecosistema. A título de ilustración, el alcantarillado doméstico de una ciudad de 100 mil habitantes produce efectos dramáticamente distintos si es lanzado en forma dispersa a un cuerpo de agua como el Amazonas, que si fuera desviado hacia una laguna o un estero. Si en el primer caso el sumidero podría ser objeto de tratamiento sólo primario, y contribuiría como nutriente para la vida acuática, en el segundo caso ello provocaría graves perturbaciones, y habría que

someterlo a sistemas de tratamiento más complejos y onerosos. Un segundo criterio de sustentabilidad ambiental sería la reconversión industrial con énfasis en la reducción de la entropía, es decir, privilegiando la conservación de energía y el uso de fuentes renovables. Lo anterior significa que tanto las “tasas de recomposición” (para los recursos naturales) como las “tasas de regeneración” (para los ecosistemas) deben ser tratadas como “capital natural”. La incapacidad de sostenerlas a través del tiempo debe ser tratada, por tanto, como consumo de capital, o sea, *no* sustentable.

Reduccionismo economicista y la ética de la sustentabilidad

Los comentarios introducidos hasta aquí requieren todavía de una reflexión más general respecto del fundamento *ético* que cimienta el paradigma de la sustentabilidad, puesto que cuestionan también el economicismo que contamina el pensamiento contemporáneo sobre la globalización y el proceso de desarrollo. La economía necesita, al respecto, rescatar su identidad y sus propósitos iniciales, sus raíces como *oikonomia*, el estudio del aprovisionamiento del *oikos*, o del hogar humano, por una feliz coincidencia, la misma raíz semántica de la ecología. Desgraciadamente, con la aceleración de los tiempos de la modernidad, la economía ha dejado de estudiar los medios para el bienestar humano, convirtiéndose en un fin en sí mismo. Una ciencia en la cual todo lo que no posea valor monetario, todo aquello para lo que no se pueda establecer un precio, carece de valor. Esto se está convirtiendo en uno de los fetiches más perniciosos de los tiempos modernos y muchos de nosotros lo aceptamos sin siquiera esbozar reacción alguna, pese a las advertencias de economistas de la estatura del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen (1986, 1989):

“Se asigna un ordenamiento de preferencias a una persona, y cuando es necesario se supone que este ordenamiento refleja sus intereses, representa su bienestar, resume su idea de lo que debiera hacerse y describe sus elecciones. (...) En efecto, el hombre puramente económico es casi un retrasado mental desde el punto de vista social. La teoría económica se ha ocupado mucho de ese tonto racional arrellanado en la comodidad de su ordenamiento único de preferencias para todos los propósitos” (1986: 202).

A pesar de nuestra ceguera, una ceguera muchas veces interesada -cuando vendemos nuestros valores y nuestra capacidad crítica a cambio de una cuota extra de consumismo y de acumulación material- la realidad empírica nos demuestra que la acumulación de riqueza, es decir, el crecimiento económico, no constituye y jamás ha constituido un requisito o precondition para el desarrollo de los seres humanos. Es más. Las opciones humanas de bienestar se proyectan mucho más allá del bienestar económico, puesto que es el *uso* que una colectividad hace de su riqueza, y no la riqueza misma, el factor decisivo.

Los números nos indican con suficiente claridad que países con niveles equivalentes de riqueza económica poseen niveles de bienestar radicalmente distintos. Si lo anterior no fuera suficiente, bastaría con recordar que las cuatro décadas de la post-guerra revelan el dinamismo más impresionante ya registrado por la economía mundial y, particularmente, por las economías latinoamericanas, sin que esta acumulación de riqueza haya significado mucho más que la acumulación de la exclusión, de las desigualdades sociales y del deterioro ambiental. De hecho, se ha acrecentado la brecha de equidad en términos globales, con la distancia entre ricos y pobres saltando de treinta veces en 1960 a sesenta y tres veces en 1990, y a setenta y nueve veces en 1999, poniendo en tela de juicio las teorías que postulan que el simple proceso de crecimiento puede resolver los problemas de inequidad y de injusticia social. Si esa realidad ya había llevado al PNUD a afirmar que “nadie debiera estar condenado a una vida breve o miserable sólo porque nació en la clase equivocada, en el país equivocado o con el sexo equivocado” (1994:17), en su edición más reciente concluye que “las nuevas reglas de la globalización -y los actores que las escriben- se orientan a integrar los mercados globales, descuidando las necesidades de las personas que los mercados no son capaces de satisfacer. Este proceso está concentrando poder y marginando a los países y personas pobres” (2000: 30)

De hecho, no debiera ser necesaria una argumentación en base empírica para justificar tal afirmativa. El propio acercamiento a ese tema por parte de algunos de los “padres” de la economía neoclásica deja clara la postura defendida en esta oportunidad. Como nos recuerda José Manuel Naredo (1998:3), “cuando el término ‘desarrollo sostenible’ está sirviendo para mantener en los países industrializados la fe en el crecimiento y haciendo las veces de burladero para escapar a la problemática ecológica y a las connotaciones éticas que tal crecimiento conlleva, no está de más subrayar el retroceso operado al respecto citando a John Stuart Mill, en sus *Principios de Economía Política* (1848) que fueron durante largo tiempo el manual más acreditado en la enseñanza de los economistas”. Conviene reproducir en extenso, por su actualidad, el pensamiento de Stuart Mill, curiosamente, enunciado en la misma fecha en que salía a la luz pública el *Manifiesto Comunista* de Karl Marx y Friedrich Engels:

“No puedo mirar al estado estacionario del capital y la riqueza con el disgusto que por el mismo manifiestan los economistas de la vieja escuela. Me inclino a creer que, en conjunto, sería un adelanto muy considerable sobre nuestra situación actual. Confirmando que no me gusta el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que aplastar, dar codazos y pisar los talones al que va delante, característicos del tipo de sociedad actual, e incluso que constituyen el género de vida más deseable para la especie humana (...) No veo que haya motivo para congratularse de que personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita ser, hayan doblado sus medios de consumir

cosas que producen poco o ningún placer, excepto como representativos de riqueza, (...) sólo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de producción un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita desde el punto de vista económico es una mejor distribución. (...) Sin duda es más deseable que las energías de la humanidad se empleen en esta lucha por la riqueza que en luchas guerreras, (...) hasta que inteligencias más elevadas consigan educar a las demás para mejores cosas. Mientras las inteligencias sean groseras necesitan estímulos groseros. Entre tanto debe excusársenos a los que no aceptamos esta etapa muy primitiva del perfeccionamiento humano como el tipo definitivo del mismo, por ser escépticos con respecto a la clase de progreso económico que excita las congratulaciones de los políticos ordinarios: el aumento puro y simple de la producción y de la acumulación” (1899: 641-42).

En síntesis, no tiene sentido intentar refundar una nueva sociedad, desde la perspectiva de la ética de la sustentabilidad, sobre la base de un movimiento de expansión de mercados impulsado por el desarrollo tecnológico. Lo único que produce el afán del crecimiento ilimitado, basado en la creencia en el desarrollo tecnológico igualmente ilimitado, es la alienación de los seres humanos, convirtiéndolos en *robots* que buscan sin cesar la satisfacción de necesidades cada vez menos relacionadas con las necesidades de supervivencia y de crecimiento espiritual. Pese a que hemos sido llevados a creer ciegamente que mientras más nos transformemos de ciudadanos en consumidores, más nos acercaremos a la libertad y a la felicidad, la verdad es que nos tornamos menos humanos en el camino.

Vienen de inmediato a la mente las palabras de Marx, escritas desde una posición ideológica opuesta a la de Stuart Mill y cuando la internacionalización del capitalismo se encontraba todavía gateando. Reflexionando sobre la propiedad privada y la distinción entre *ser* y *tener*, decía Marx: “la propiedad privada nos ha vuelto tan estúpidos y parciales que un objeto sólo es nuestro cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando directamente lo comemos, lo bebemos, lo usamos, lo habitamos, etc., en resumen, cuando lo utilizamos de alguna manera. Así, todos los sentidos físicos e intelectuales han sido reemplazados por la simple alienación de todos estos sentidos; cuanto menos *seas* y cuanto menos expreses tu vida, tanto más *tiendes* y más alienada está tu vida (...) todo lo que el economista te quita en la forma de vida y de humanidad, te lo devuelve en la forma de dinero y riqueza” (Marx, 1975).

En contraste con el ser que *tiene* pero no *es*, advirtió Erich Fromm un siglo más tarde (1978:34): “el amor [y la solidaridad] no es algo que se pueda tener, sino un *proceso*. (...) Puedo amar, puedo estar enamorado, pero no tengo (...) nada; de hecho, cuanto menos tenga, más puedo amar”. Contrariamente al precepto máximo del neoliberalismo “consumo, ergo soy”, con su corolario de “si yo soy consumidor, soy un ciudadano libre”, señalaba Fromm hace más de dos décadas:

“Tener libertad no significa liberarse de todos los principios guías, sino la libertad *para crecer* de acuerdo con las leyes de la estructura de la existencia humana; en cambio, la libertad en el sentido de no tener impedimentos, de verse libre del anhelo de tener cosas y el propio ego, es la condición para amar y ser productivo” (Fromm, 1978:150).

Bibliografía

- Benett, John W. 1976 *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation* (Nueva York: Pergamon Press).
- Boisier, Sergio 1993 “Desarrollo Regional Endógeno en Chile: ¿Utopía o Necesidad?”, en *Ambiente y Desarrollo* (Santiago) Año 2, N° 9, Junio.
- Boisier, Sergio 1997 *El Vuelo de Una Cometa. Una Metáfora para Una Teoría del Desarrollo Regional* (Santiago de Chile: ILPES, LC/IP/G.103) Serie Ensayos, Documento 97/37, 31 de Enero.
- Brundtland, Gro Harlem 1987 *Our Common future: From One Earth to One World* (Nueva York: Oxford University Press).
- Calcagno, Alfredo E. y Alfredo F. Calcagno 1995 *El Universo Neoliberal: Recuento de sus Lugares Comunes* (Buenos Aires: Alianza Editorial).
- Cardoso, Fernando Henrique 1995 “Estado, Mercado, Democracia: ¿Existe una Perspectiva Latinoamericana?”, en *Socialismo y Participación* (Lima) N° 71, Septiembre, 85-94.
- Cardoso, Fernando Henrique y Enzo Faletto 1969 *Dependencia y Desarrollo en América Latina: Ensayo de Interpretación Sociológica* (México: Siglo Veintiuno Editores).
- Constanza, Robert et al. 1997 “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital”, en *Nature* (Londres) Vol. 387, N° 6230, 15 de Mayo, 253-55.
- Daly, Herman E. 1990 “Operational Principles for Sustainable Development”, en *Ecological Economics* (Solomons) Vol. 2, N° 1, Abril, 1-6.
- Daly, Herman E. 1991 “Crecimiento Sostenible: Un Teorema de la Imposibilidad”, en *Desarrollo* (Madrid) N° 20, 47.
- Daly, Herman E. y Kenneth N. Townsend 1993 *Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics* (Cambridge: Massachusetts: MIT Press).
- Duncan, Otis D. 1961 “From Social System to Ecosystem”, en *Sociological Inquiry* (Chicago) N° 31, Invierno, 140-149.
- Fromm, Erich 1978 *¿Tener o Ser?* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Fukuyama, Francis 1990 “¿El Fin de la Historia?”, en *Estudios Públicos* (Santiago) N° 37, Verano, 5-31.
- Furtado, Celso 1972 *Formação Econômica do Brasil* (São Paulo: Editora Nacional).
- Goodland, Robert et al. 1992 *Desarrollo Económico Sostenible: Avances sobre el Informe Brundtland* (Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores).
- Guimarães, Roberto P. 1990[a] “El Leviatán Acorralado: Continuidad y Cambio en el Papel del Estado en América Latina”, en *Estudios Internacionales* (Santiago de Chile) N° 63, Abril-Mayo, 45-81.

- Guimarães, Roberto P. 1990[b] “Desarrollo con Equidad ¿Un Nuevo Cuento de Hadas para los Años Noventa?”, en *SINTESES: Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas* (Madrid) N° 10, Enero-Abril, 15-68.
- Guimarães, Roberto P. 1991[a] *The Ecopolitics of Development in the Third World: Politics and Environment in Brazil* (Boulder y Londres: Lynne Rienner Publishers).
- Guimarães, Roberto P. 1991[b] “O Brasil e o Desafio do Desenvolvimento Sustentável”, en Guimarães, Roberto P. (coord. téc.) *O Desafio do Desenvolvimento Sustentável: Relatório Nacional do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento* (Brasília: Secretaria de Imprensa da Presidência da República) 13-24.
- Guimarães, Roberto P. 1992 “El Discreto Encanto de la Cumbre de la Tierra: Una Evaluación Impresionista de la Conferencia de Río”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 122, Noviembre-Diciembre, 86-103.
- Guimarães, Roberto P. 1996 “¿El Leviatán en Extinción? Notas sobre la Reforma del Estado en América Latina”, en *Pretextos* (Lima) N° 9, Noviembre, 115-43.
- Guimarães, Roberto P. 1997[a] “Desenvolvimento Sustentável: Da Retórica à Formulação de Políticas Públicas”, en Becker, Bertha K. y Mariana Miranda (orgs.) *A Geografia Política do Desenvolvimento Sustentável* (Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro) 13-44.
- Guimarães, Roberto P. 1997[b] “Cooperativismo e Desenvolvimento Sustentável”, presentado como conferencia de apertura del *Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable Cooperativo en los Países de la Cuenca Amazónica* (Manaus) 10 al 12 de Diciembre.
- Guimarães, Roberto P. 1998 *Aterrizando una Cometa: Indicadores Territoriales de Sustentabilidad* (Santiago de Chile: ILPES, LC/IP/G.120) 6 de Agosto.
- Guimarães, Roberto P. y Juan Enrique Vega 1996 “Partidos Políticos y Gestión Estratégica del Estado”, en *Boletín del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social* (Santiago de Chile) N° 2, Agosto, 9-13.
- Guimarães, Roberto P. y Kátia D. Maia 1997 “Padrões de Produção e Padrões de Consumo: Dimensões e Critérios de Formulação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável”, en Leroy, Jean-Pierre; Kátia D. Maia y Roberto P. Guimarães (orgs.) *Brasil Século XXI: Os Caminhos da Sustentabilidade Cinco Anos Depois da Rio-92* (Rio de Janeiro: FASE) 385-97.
- Kuhn, Thomas 1977 *The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change* (Chicago: The University of Chicago Press) 225-39.
- Lewis, Clive S. 1947 *The Abolition of Man: How Education Develops Man's Sense of Morality* (Nueva York: Macmillan Publishing Company).

- Martinez-Allier, Joan 1995 "The Environment as a Luxury Good or Too Poor to Be Green?", en *Ecological Economics* (Amsterdam) Vol. 1, Año 13, 1-10.
- Marx, Karl 1975 *Marx y Su Concepto del Hombre* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Mead, Margaret 1970 *Culture and Commitment* (Nueva York: Doubleday).
- Mill, John Stuart 1899 *Principles of Political Economy with some of their applications to Social Philosophy* (Nueva York: The Colonial Press, dos volúmenes, edición revisada del original de 1848).
- Naredo, José Miguel 1998 *Sobre el Origen, el Uso y el Contenido del Término Sostenible*, versión electrónica <http://www.habitat.aq.upm.es>.
- Pearce, David y Gordon Atkinson 1993 "Capital Theory and the Measurement of Sustainability", en *Ecological Economics* (Amsterdam) Vol. 2, Nº 8, 103-108.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 1990 *Informe sobre el Desarrollo Humano* (México: Fondo de Cultura Económica).
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 1994 *Informe sobre el Desarrollo Humano* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Prugh, T. et al 1995 *Natural Capital and Human Economic Survival* (Solomons, MD.: International Ecological Economics Society Press).
- Rich, Bruce 1994 *Mortgaging the Earth: the World Bank, Environmental Impoverishment and the Crisis of Development* (Boston: Beacon Press).
- Schon, Donald 1973 *Beyond the Stable State* (Nueva York: W. W. Norton).
- Sen, Amartya 1986 "Los Tontos Racionales", en Han, Frank y Holis Martin (eds.) *Filosofía y Teoría Económica* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Sen, Amartya 1989 *Sobre Ética y Economía* (México: Alianza Editorial).
- Taylor, Peter J. 1997 "Modernities and Movements: Antisystemic Reactions to World Hegemony", en *REVIEW: A Journal of the Fernand Braudel Center* (Binghamton) Nº 1, Invierno, 1-17.
- Tomadoni, Claudia 1997 "Investigadora del Programa Geográfico (PRO-GEO) de la Universidad Nacional de Córdoba", en comentario hecho durante la *Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano* (Córdoba: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba) 1º de Octubre.
- Wilson, John O. 1992 "Socio-Economic Justice", en Ekins, Paul y Manfred Max Neef (eds.) *Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation* (Londres y Nueva York: Routledge) 54-59.

Naturaleza, sociedad e historia en América Latina

Guillermo Castro Herrera*

Uno de los problemas más graves que plantea la crisis por la que atraviesa América Latina consiste en la exacerbación de una economía de rapiña¹ que propicia un constante incremento en el ritmo de destrucción a que se ven sometidos los recursos humanos y naturales de los que tendrá que depender la región para encontrar salida a sus problemas. Esa situación, por otra parte, es menos novedosa de lo que quizás parece a primera vista: ya en 1990 se empezaba a reconocer la presencia de sus manifestaciones “desde mucho antes de la crisis, tanto en las acciones humanas como en los fenómenos naturales”, aunque por entonces era aún reciente un cambio en “la percepción y calificación” de esos “impactos negativos del deterioro ambiental” (CEPAL, 1992: 21).

En el debate asociado a ese cambio de percepción figura de manera destacada el problema planteado por la coincidencia de los procesos de deterioro social y degradación ambiental que caracterizaron la última década del siglo XX en América Latina. En el primer caso, por ejemplo, si en 1993 “un importante aumento en la incidencia de la pobreza”, aunado a “un deterioro de la distribución del ingreso” en todos los países de la región, daba lugar a que “casi 200 millones de personas sólo pueden acceder a los mínimos necesarios, mientras 94 millones de latinoamericanos sólo cuentan con recursos económicos para comer lo mínimo indispensable” (Rosenthal, 1993)², en el 2000 se señalaba que no menos de 220 millones de latinoamericanos vivían en esa situación (CEPAL, 2000: 1).

* Licenciado en Letras, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1973. Maestro en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM, 1980. Doctor en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía, UNAM, 1995.

Por lo que toca al mundo natural, a su vez, la dramática situación de deterioro descrita en múltiples documentos preparados de cara a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente realizada en Río de Janeiro en 1992³ evolucionó en términos muy semejantes. De este modo, en la edición latinoamericana del informe *GEO 2000 - Perspectivas del Medio Ambiente*, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se sostenía que:

“Las dos causas principales de principales de la degradación ambiental en el mundo son la pobreza persistente de la mayoría de los habitantes del planeta y el consumo excesivo por parte de la minoría. En los países de América Latina y el Caribe -al igual que en otras regiones similares del mundo- existe un conjunto de presiones socioeconómicas similares que afectan el ambiente: la pobreza y la desigualdad de ingresos están entre las más graves” (PNUMA, 2000: 9)⁴.

La respuesta usual a las preguntas que resultan de la relación que pueda existir entre esos procesos consiste, como sabemos, en afirmar que la pobreza social es un importante factor en el empobrecimiento del mundo natural. En esa perspectiva, la reducción de la pobreza -especialmente a través del crecimiento económico, como se lo entiende en las políticas de “ajuste estructural” y reforma del estado promovidas por las instituciones financieras internacionales y ejecutadas con singular entusiasmo por la mayoría de los gobiernos de la región-, debería bastar para preservar a la naturaleza de un deterioro aún mayor. Desde muy temprano, sin embargo, otras opiniones -planteadas desde una perspectiva distinta, más complicadas en sus implicaciones políticas, económicas y culturales para nuestras sociedades, y bastante menos populares entre los gobiernos y los principales medios de comunicación de nuestras sociedades- pusieron aquellas certezas aparentes en cuestión.

Aquí, científicos sociales de trayectorias académicas y enfoques ideológicos muy distintos -como Fernando Tudela en México, y Juan Jované en Panamá, por ejemplo- coincidieron en que el empobrecimiento social y el del mundo natural son el resultado de un mismo conjunto de causas estructurales que han venido operando a lo largo de períodos muy prolongados en la región (Jované, 1992; Tudela, 1991: 14-16). Con ello, los problemas de las que hablamos son el resultado de las formas en que nuestras sociedades han sido organizadas para cumplir determinadas funciones dentro del sistema mundial realmente existente, en particular a lo largo de los últimos ciento cincuenta años⁵. Desde muy temprano, pues, pareció evidente que un mayor crecimiento económico -de ocurrir en el marco de esas formas de organización- no podría garantizar por sí mismo la solución del problema planteado y, por el contrario, bien podría contribuir a agravarlo aún más.

En este sentido, cuando observamos que en 1991 los diez productos más importantes de exportación de América Latina eran esencialmente los mismos que en 1891 -en cantidades mucho mayores, por supuesto, y con precios unitarios mu-

cho menores⁶-, resalta aún más el contraste entre el optimismo oficial y los reiterados fracasos de nuestras tecnoburocracias en sus intentos para dar respuesta a los crecientes problemas ambientales de nuestra región. La presencia simultánea de aquellas continuidades y estas ineficiencias, además, planteaba la necesidad de intentar la construcción de una perspectiva de análisis en el estudio de nuestra historia que nos facilitara entender mejor, en su origen y sus tendencias, el severo deterioro ambiental que hacia 1995 llevó al geógrafo Pedro Cunill a afirmar que el proceso de desarrollo ocurrido en la región entre 1930 y 1990 había desembocado en “transformaciones geohistóricas que han ocasionado como secuela ambiental el fin de la ilusión colectiva de preservar a Latinoamérica como un conjunto territorial con extensos espacios virtualmente vírgenes y recursos naturales ilimitados” (Cunill, 1996: 9)⁷.

Tareas cumplidas

De esta manera, cuando la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM me aceptó en 1992 en su programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, me propuse trabajar -a partir de mi propia experiencia en programas de colonización del bosque tropical húmedo como funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá- en la creación de un modelo teórico que pudiera contribuir al estudio en perspectiva histórica de los problemas ambientales de nuestra región. Para ello -y sin conocer aún el trabajo de autores como Donald Worster, Richard White, Alfred Crosby y James O'Connor- acudí a dos fuentes principales. Por un lado, a algunos aportes latinoamericanos tempranos, que esperaban quizás por una lectura de conjunto⁸; por otro, a nuestra tradición académica, con su énfasis en las nociones de estructura y proceso, y su concepción de los fenómenos a estudiar como expresión de las relaciones que subyacen tras ellos⁹.

En esta tradición, como sabemos, ser “objetivo” significa en lo más esencial ser lógicamente leal al “objeto de estudio” que ha sido definido como una “constelación de relaciones” que, por razones culturales, resultan especialmente significativas para el investigador. Esa “constelación”, a su vez, sólo expresa su verdadera riqueza de significado en cuanto se hace explícita su relación con el conjunto de la “galaxia” de conocimiento pertinente al campo de estudio en el que se trabaja, de lo que a su vez resulta una tensión característica entre la necesidad de construir conceptos muy específicos para el estudio, y la de producir resultados abiertos que puedan ser incorporados a visiones de la realidad tan integrales como sea posible.

De este modo, la “constelación” que yo buscaba debía ser establecida en el interior de una “galaxia” en la que lo ambiental se definiera por su relación con lo social, lo económico, lo político y lo cultural¹⁰. Esto, a su vez, me llevó a definir tres problemas básicos para la creación del modelo teórico en que deseaba trabajar. Esos problemas fueron:

La definición del campo de relaciones que resultara de la interacción entre las sociedades latinoamericanas y el medio natural en el que se desenvuelve su existencia, hecha en términos que facilitaran la identificación de un conjunto de categorías con las cuales interrogar a un amplio número de fuentes acerca del origen histórico de los problemas ambientales contemporáneos en la región.

La construcción, con la ayuda de las categorías así identificadas, de un conjunto articulado de preguntas a plantear al campo de relaciones previamente definido, cuyas respuestas permitieran caracterizarlo en sus distintas etapas de desarrollo.

La creación de un esquema de periodización que facilitara la organización de esas respuestas tanto en lo relativo a la caracterización de los rasgos básicos de cada etapa en el desarrollo del campo, como en la identificación de las relaciones de cambio y continuidad entre esas etapas a lo largo del tiempo.

Para la definición inicial del campo de estudio resultó de extraordinaria utilidad el concepto de “medio ambiente” elaborado por Osvaldo Sunkel en 1980: “el ámbito biofísico natural y sus sucesivas transformaciones, así como el despliegue espacial de las mismas” (Sunkel, 1980)¹¹. Esta perspectiva permitía concebir a una historia ambiental como el resultado de la investigación de los procesos de transformación artificial de “medio biofísico natural” y sus expresiones en el espacio, que resultaban de estilos de desarrollo sucesivos en una región dada. A partir de allá, se hacía necesario indagar en la identificación de los medios y tareas necesarios para el diálogo entre una historia ambiental concebida de tal manera, y otras disciplinas del campo de las ciencias humanas. Esto me llevó a distinguir en la “constelación” a la que había llamado “medio ambiente” tres campos de relación -el mundo natural, la sociedad y la producción- que en su interacción generaban además un cuarto campo, el de la cultura, entendida -con Antonio Gramsci- como una visión del mundo dotada de una ética acorde a su estructura, enfatizando lo estrecho de los vínculos entre la acción, el pensamiento y las creencias.

La historia ambiental emergió de esa interacción como parte de la cultura, dentro de la cual se constituye como un espacio de diálogo entre las ciencias que integran los campos de lo “humano” y lo “natural”, según la vieja división que todavía pervive de algún modo entre nosotros. Esa interacción entre lo natural, lo social y lo productivo, por otra parte, es diferente en sociedades diferentes, tanto a lo largo del tiempo común que todas comparten en la evolución de la especie humana, como en los “tiempos” que puedan coexistir dentro de una misma era histórica. En el caso del sistema mundial que conocemos hoy, por ejemplo, cabría afirmar que en sociedades que usualmente consideramos primitivas lo natural resulta hegemónico; en otras, subdesarrolladas pero bien organizadas, predomina la esfera de lo social -y lo hace además a niveles muy altos en tiempos de especial tensión, como en el Vietnam del Norte en las décadas de 1960 y 1970, y la Cuba de la década de 1990. Finalmente, en sociedades como las de la cuenca del Atlán-

tico Norte (y en Japón), la hegemonía parece corresponder a la esfera de lo tecnológico, que impone su lógica y sus necesidades a las otras dos.

Una interacción así, por supuesto, es por naturaleza conflictiva, y el equilibrio que resulte de ella es siempre transitorio y relativo a múltiples factores internos y externos al modelo, ya sea al nivel de cada sociedad, o al de las regiones en que esas sociedades existen. De este modo, por ejemplo, no existe verdadera contradicción entre el alto nivel de racionalidad en el campo de la tecnología en las sociedades noratlánticas y la (aparente) irracionalidad de la “economía de rapiña” que permite a las regiones periféricas abastecer al centro del sistema con recursos naturales y trabajo humano abundantes y baratos.

En este sentido, en lo que toca al problema que nos interesa, cabe preguntar por qué las esferas de lo natural, lo social, lo económico y lo cultural ingresan a un estado particular de (relativo) equilibrio en una sociedad, región o civilización dadas, cuáles son los límites de ese equilibrio, y cuál es el papel desempeñado por diferentes factores -económicos, culturales, políticos y naturales- en el proceso. De un modo más preciso, esto suponía hacer referencia a cinco problemas principales:

Los rasgos característicos del medio biofísico natural en su relación con las modalidades de artificialización de que es objeto a lo largo de etapas sucesivas.

Las formas de organización social y del espacio correspondientes a los estilos de desarrollo subyacentes tras esas modalidades de artificialización del medio natural, y sus correspondientes expresiones en paisajes característicos.

La racionalidad histórica de esos estilos, definida a partir de los propósitos que los animan, y de los conflictos internos y externos y las modalidades de ejercicio del poder que sus formas características de organización social han debido enfrentar y resolver en su desarrollo.

Las circunstancias que originan y orientan las transiciones entre esos estilos, incluyendo tanto las relativas a la creación de premisas sociopolíticas para el paso de uno a otro, como las que determinan la posibilidad de rearticulación de elementos de cada uno en los subsiguientes.

Los términos en que los factores antes mencionados explican y condicionan nuestras posibilidades de comprensión de los problemas ambientales contemporáneos en América Latina, y nuestras opciones de acción frente a esos problemas.

Desde el campo de relación así definido, procedimos a formular un esquema general de periodización que facilitara una visión de conjunto del proceso sometido a estudio. En el caso de la América que hoy llamamos latina -cuya conformación histórica se inicia tras su incorporación a la economía-mundo europea en el siglo XVI-, parece útil plantear ese esquema de periodización a partir de dos grandes fases, dos sub-fases adicionales dentro de cada una de ellas, y los períodos de transición entre unas y otras, todo lo cual se expresa en los siguientes términos:

Fase I: el desarrollo separado (¿20.000 a.C./Siglo XVI d.C.).

Subfase 1: del poblamiento original al desarrollo de la agricultura (20.000 a.C./7.000-5.000 a.C.).

Subfase 2: del desarrollo de la agricultura al surgimiento de estados tributarios de base agraria (900 a.C./siglo XVI d.C.).

Fase II: el desarrollo articulado a la economía-mundo europea y el mercado mundial (siglo XVI/siglo XX d.C.).

Subfase 3: el desarrollo en la periferia de la economía-mundo europea (siglo XVI/circa 1870).

Subfase 4: el desarrollo articulado al mercado mundial contemporáneo (circa 1870/2000).

Es evidente que este esquema señala apenas momentos en el desarrollo de estructuras de larga duración. Aun así, cada una de las fases y sub-fases indicadas se caracteriza por modalidades diferentes de organización social –asociadas por un lado a los propósitos que guiarán la relación con la naturaleza, y por otra a cambios demográficos, económicos y tecnológicos que dan lugar a una presión creciente sobre los recursos naturales-, que se expresan como grandes tendencias generales en el desarrollo histórico en los siguientes términos:

Fase I	Fase II
Desarrollo separado	Desarrollo articulado
Endodeterminado	Exodeterminado
Autosuficiente	Dependiente
Disperso	Centralizado
Diversificado	Especializado
De policultivo y recolección	De monoproducción

Utilizando la noción de “economía de rapiña” en lo que hace a la relación de las sociedades latinoamericanas con el mundo natural, y la de “sistema mundial” en lo que se refiere a las relaciones de estas sociedades entre sí y con las que hegemonizan sus economías, este esquema facilitó la creación de un esquema de interpretación de conjunto del proceso histórico que nos interesa.

En el marco de dicho esquema, una historia ambiental de América Latina ha de tomar en consideración las peculiaridades que marcan el proceso de formación del medio biofísico natural americano -al menos desde la formación del istmo de Pa-

namá y la unión de los componentes norte y sur del continente, hace entre cuatro y cinco millones de años-, y su poblamiento por humanos ya evolucionados hace unos veinte mil años. Las modalidades de relación con el medio natural a lo largo del período de desarrollo separado permitieron sustentar procesos civilizatorios muy diversos, a partir de una base ecológica que combinaba de manera muy eficiente la agricultura con la recolección, cuya influencia en los desarrollos socioculturales de esas civilizaciones aún está pendiente de verdadera evaluación¹².

El paso al desarrollo articulado en la economía-mundo europea a partir del siglo XVI alteró sustancialmente tanto aquella base ecológica como las modalidades de relación con el mundo natural asociadas a la misma, inaugurando una situación que combinaba la producción diversificada para el autoconsumo y el mercado interior en amplias extensiones, con la producción especializada para el mercado exterior en enclaves bien delimitados, que pasaron a ser objeto de las formas más primitivas de economía de rapiña que ha conocido la región¹³.

Esa combinación de producción “tradicional” para el propio consumo y producción “especializada en enclaves” para el mercado exterior se prolonga, como rasgo relevante, en la relación “sociedad-mundo natural” hasta la década de 1880 cuando, mediante el ingreso masivo de capitales y tecnología provenientes del mundo noratlántico a partir de las condiciones creadas por el triunfo de la Reforma Liberal -en particular, mercados de tierra y de trabajo-, se establecen las premisas que harán de la economía de rapiña la forma hegemónica de relación con la naturaleza hasta nuestros días.

Este último período histórico constituye el punto de partida usual en los análisis de corte tecnoburocrático que dedican algún interés a los antecedentes históricos de nuestros problemas ambientales contemporáneos, sobre todo en lo que hace a la subfase que se inaugura a partir de la gran crisis de 1930 y con el inicio de la llamada industrialización por sustitución de importaciones. De este modo, por ejemplo, incluso un libro en tantos sentidos tan valioso como *Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina - Una visión evolutiva*, dedica apenas veinticuatro de sus doscientas treinta y un páginas al examen de lo que va del poblamiento original de las Américas a la consolidación del llamado “modelo de crecimiento hacia fuera”¹⁴.

Sin embargo, cada vez es más evidente la necesidad de una visión más amplia, sobre todo en su capacidad de ubicar las rupturas que permiten identificar períodos históricos distintos y sucesivos en su relación con las continuidades que otorgan unidad y sentido al proceso histórico en su conjunto. La atención a esta necesidad resulta imprescindible para plantear la crisis que enfrentamos en su dimensión y significado más trascendentales y define, por tanto, algunas de las principales tareas pendientes en la construcción de una historia ambiental latinoamericana.

Tareas pendientes

Estamos en el mundo y cambiamos con él, sin duda. El problema radica en establecer nuestro papel en cada uno de los momentos de ese cambio. Es evidente en ese sentido, por ejemplo, que nuestros problemas ambientales forman parte de una crisis más amplia, que carece de verdaderos precedentes en la historia de nuestra especie. En efecto, las crisis ambientales del pasado -en la Mesopotamia, en Mesoamérica, o en la cuenca del Mediterráneo- tuvieron un carácter local o regional, afectaron modalidades específicas de relación con la naturaleza, y se desarrollaron de manera gradual. La de nuestro tiempo, en cambio, tiene un alcance global; afecta a todas las modalidades contemporáneas de relación de los humanos con el mundo natural; se desarrolla con intensidad creciente; y además, se torna ya en una crisis ecológica a través de procesos como el desgaste de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, la pérdida de biodiversidad y la contaminación masiva del aire, el agua y los suelos del planeta.

Los hechos de esta crisis -en particular, su capacidad para combinar el crecimiento económico con el deterioro social y la degradación ambiental- han contribuido de manera decisiva a poner en cuestión la vieja teoría del desarrollo¹⁵. En la práctica, lo que hoy se entienda por “desarrollo” en América Latina ha dejado ya de sugerir la necesidad de algún tipo de vínculo deseable entre el crecimiento económico, el bienestar social, la participación política y la autodeterminación nacional, por no hablar de una relación más responsable con el mundo natural. Más aún, si entre las décadas de 1950 y 1970 la expresión “países en desarrollo” significó a un tiempo una modalidad específica de relación entre las naciones de la periferia y las del centro del sistema mundial, y una asignación de sentido a esa relación, eso pertenece ya al pasado.

Nada expresa de manera tan dramática esa crisis de pensamiento como el desplazamiento de la teoría del desarrollo por los llamados a luchar por un desarrollo humano sostenible, que a fin de cuentas no expresa sino la inviabilidad, en el marco del sistema mundial realmente existente, de las nobles metas que aquella teoría alguna vez propuso. En este sentido, aún con toda su ambigüedad, la demanda de un desarrollo humano sostenible apunta a una necesidad verdadera, que a fin de cuenta sólo podrá ser resuelta transformando la circunstancia que la origina. En esto han venido a coincidir, por otra parte, segmentos cada vez más amplios de los movimientos ambientalistas de ambas partes del hemisferio que, al vincular la lucha contra la degradación ambiental a la crítica al deterioro social, ponen en cuestión las formas dominantes en la organización del sistema mundial.

De este modo, y ante las características ya indicadas de la crisis contemporánea, tanto la sustentabilidad como el desarrollo han venido a ser nociones sujetas a un proceso de replanteamiento que discurre a lo largo de un diálogo entre culturas obligadas a reconocerse en sus afinidades y diferencias si desean sobrevivir. Es mejor, con toda evidencia, que ese diálogo resulte del ejercicio de una volun-

tad consciente que del choque inevitable entre realidades y demandas antagónicas. Para ello –y en particular en el caso del hemisferio que habitamos– resulta imprescindible facilitar la comprensión de la historicidad del debate en que el diálogo tiene lugar para contribuir a llevarlo más allá de su tendencia a encarar el deterioro ambiental como el resultado de un manejo poco eficiente de los recursos naturales, antes que como un problema que pone en evidencia la necesidad de entender de manera nueva el origen y la racionalidad de las formas de relación con la naturaleza que sustentan al modelo de crecimiento económico vigente.

En un debate así historizado, corresponde a una historia ambiental latinoamericana la tarea de caracterizar las diferencias entre nuestros ambientalismos y los de las sociedades nortatlánticas, para facilitar la identificación de las presencias y ausencias en el diálogo, y la adecuada evaluación de aquella pluralidad sin la cual América Latina no podrá aportar ideas e iniciativas realmente nuevas en la búsqueda de mecanismos globales de cooperación. Porque ocurre que, en efecto, en ambos mundos está planteada ya la demanda de un *ethos* nuevo, distinto y antagónico al de la economía de rapiña, en el que un uso previsor de los recursos naturales se vincule a la necesidad de incorporar a las mayorías sociales a la solución de sus propios problemas, en particular aquellos en los que la pobreza y la marginación social y política contribuyen a hacer aún más graves los procesos de deterioro que ya afectan al mundo natural de la región.

Este tipo de coincidencias entre ambos mundos constituye una reserva aún poco conocida de elementos que, sin duda, facilitarán mucho el diálogo entre nosotros mismos y con aquellos que enfrentan problemas y preocupaciones de origen semejante en sus propias regiones. Por lo mismo, la incorporación de esa reserva cultural al debate en curso se ha convertido ya en una tarea –tan urgente como fascinante– que espera por las contribuciones de un amplio número de disciplinas de las ciencias humanas y naturales de nuestra región¹⁶. Y esto, en América Latina, supone en primer término rescatar la legitimidad negada por los estados oligárquicos de ayer y de hoy a las múltiples expresiones del ambientalismo popular a que se refieren autores como Fernando Mires (1990), y superar finalmente la escisión que, tanto en lo cultural como en lo social y lo económico, caracteriza a nuestras relaciones con el mundo natural.

Todo esto implica que una historia ambiental latinoamericana deberá desarrollarse a sí misma a través del impulso por avanzar mucho más en la continuación de los esfuerzos pioneros de autores como Nicolo Gligo y Jorge Morello, entre nosotros, y Donald Worster, Alfred Crosby y Richard Grove, en el mundo nortatlántico, entre muchos otros¹⁷. Y eso significa, también, la búsqueda de nuevas formas de comunicación y colaboración entre las ciencias naturales y las humanas, de modo que resulte posible combinar sus aportes en un nuevo tipo de empresa intelectual, capaz de apuntar a un problema aún más amplio, y a una promesa todavía más rica.

Parece ser, en efecto, que los académicos de América Latina no estamos solos en la pérdida creciente de nuestra capacidad para ejercer el modo ecuménico de aprendizaje y razonamiento que caracterizó en otros tiempos a hombres como José Martí y Charles Darwin, para señalar ejemplos en ambas riberas del Atlántico, o del propio Martí y Henry David Thoreau, para mencionarlos en este hemisferio. Y, sin embargo, el tipo de desafíos que enfrentamos hoy está creando con rapidez una nueva circunstancia que podrá contribuir a restaurar a las ciencias humanas en el lugar que merecen como eje fundamental de la cultura creada por nuestra especie.

Para que ello llegue a ser posible, hoy es más necesario que nunca que empecemos a trabajar con aquellos que podrían facilitarnos el conocimiento de lo que para nosotros es aún el lado oculto de la cultura ecológica del norte. Aquella que se permite plantear la necesidad de enfrentar el hecho de que “a pesar de toda la retórica en contrario, no se puede tener lo mejor de dos vidas posibles -no es posible maximizar la riqueza y el predominio, y maximizar al mismo tiempo la democracia y la libertad. El desdén por reconocer este hecho ha sido un rasgo característico de los Estados Unidos y del conjunto de Occidente, derivado de la inocencia y las ensoñaciones de la juventud. Pero ya no puede ser así. Es necesario hacer una clara opción consciente” (Worster, 1992: 334).

Así definido, ese diálogo facilitaría mucho la identificación de los obstáculos y oportunidades de orden político y cultural para una cooperación internacional que pudiera incluir a las sociedades involucradas, y no sólo a sus gobiernos. Se trata, en breve, de hacer -y no sólo de escribir- una historia planetaria capaz de ir más allá de la tendencia, hoy dominante, a considerar a la biosfera como un mero contexto para el desarrollo de relaciones económicas y políticas entre las sociedades humanas.

Una perspectiva a un tiempo ambiental e histórica como ésta podrá ser, de hecho, la más adecuada para promover una política de colaboración internacional capaz de enfrentar el deterioro de la biosfera con el énfasis que requieren los problemas asociados al reparto equitativo de costos, beneficios y esfuerzos entre las regiones involucradas. Y esto no sería poca cosa en una circunstancia marcada por el conflicto creciente entre la capacidad cada vez mayor de identificación y previsión de problemas que nuestra civilización ha logrado en el plano del conocimiento, y su creciente incapacidad para producir reacciones políticas de alcance equivalente.

Este programa de trabajo, si llega a ejecutarse, tendría que ser traducido a una pluralidad de iniciativas de investigación, debate y organización, conservando siempre su carácter multidisciplinario mediante un enfoque que combine a un tiempo la investigación histórica de largo plazo hacia el pasado y el análisis de las tendencias de mediano plazo en el desarrollo de los acontecimientos que la crisis ha puesto en marcha. En tanto seamos capaces de actuar en este sentido como

gente de cultura, comprometida con la sobrevivencia y el bienestar de nuestras sociedades, habremos contribuido a la solución de uno de los grandes problemas de nuestra región en nuestro tiempo. Como latinoamericanos, además, habremos sabido atender a la advertencia que nos legara Simón Bolívar en el contexto de otra crisis, también decisiva en nuestra historia: “Ala sombra de la ignorancia trabaja el crimen”. Y no cabe duda que, sabiendo al menos cuánto está aún por ser hecho, dejar de hacer será el crimen mayor de nuestro tiempo.

Bibliografía

- Bagú, Sergio 1989 *Tiempo, Realidad Social y Conocimiento* (México: Siglo XXI).
- Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1991 *Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Brailovsky, Antonio y Dina Foguelman 1997 *Memoria Verde. Historia ecológica de la Argentina* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana).
- Braudel, Fernand 1986 *La Dinámica del Capitalismo* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Brunhes, Jean 1953 (1910) *La Geografía Humana* (Barcelona: Editorial Juventud) Edición abreviada por Mme. M. Jean-Brunhes Delamarre y Pierre Deffontaines.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 1991 *Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe (1991)* (Santiago de Chile).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 1991 *El Desarrollo Sustentable: Transformación Productiva, Equidad y Medio Ambiente* (Santiago de Chile).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 1992 “Antecedentes y propuestas para un desarrollo ambientalmente sustentable”, en *CEPAL. Reseñas de Documentos sobre Desarrollo Ambientalmente Sustentable* (Santiago de Chile) Serie INFOPLAN: Temas Especiales del Desarrollo, 21.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2000 “Síntesis”, en *Panorama Social de América Latina, 1999-2000*, en www.eclac.org.
- Crosby, Alfred 1990 *Ecological Imperialism. The biological expansion of Europe, 900-1900* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Cunill, Pedro 1996 *Las Transformaciones del Espacio Geohistórico Latinoamericano, 1930-1990* (México: Fondo de Cultura Económica).
- García Martínez, Bernardo y Alba González Jácome (compiladores) 1999 *Estudios sobre Historia y Ambiente en América Latina* (México: El Colegio de México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia) Tomo 1: Argentina, Bolivia, México, Paraguay.
- Gligo, Nicolo y Jorge Morello 1980 “Notas sobre la historia ecológica de América Latina”, en Sunkel, O. y N. Gligo (compiladores) *Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina. El Trimestre Económico* (México: Fondo de Cultura Económica) N° 36, 2 tomos.

Grove, Richard 1990 "Colonial conservation, ecological hegemony and popular resistance: towards a global synthesis", en *Imperialism and the Natural World* (Manchester and New York: Manchester University Press).

Grove, Richard 1992 "Origins of Western Environmentalism", en *Scientific American* Vol. 267, N° 1, July.

Herrera, Ligia 1990 "El impacto sobre el medio ambiente de las actividades ganaderas en Panamá", en *Cuadernos Nacionales. Medio Ambiente y Desarrollo en Panamá* (Panamá: Universidad de Panamá, Instituto de Estudios Nacionales) N° 4, Mayo.

Jaén Suárez, Omar 1978 *La Población del Istmo de Panamá. Del siglo XVI al siglo XX* (Panamá: edición del autor).

Jaén Suárez, Omar 1981 *Hombres y Ecología en Panamá* (Panamá: Editorial Universitaria, Smithsonian Tropical Research Institute).

Jované, Juan 1992 *Ajuste y Medio Ambiente* (Panamá: CECADES).

Mires, Fernando 1990 *El Discurso de la Naturaleza. Ecología y política en América Latina* (San José de Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones).

Olivier, Santiago R. 1986 *Ecología y Subdesarrollo en América Latina* (México: Siglo XXI).

Ortiz de Montellano, Bernardo 1993 *Medicina, Salud y Nutrición Aztecas* (México: Siglo XXI).

Ortiz Monasterio, Fernando; Fernández, Isabel; Castillo, Alicia; Ortiz Monasterio, José y Alfonso Bulle Goyri 1987 *Tierra Profanada. Historia Ambiental de México* (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología).

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 2000 *GEO 2000. Perspectivas del Medio Ambiente* (San José de Costa Rica).

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) 1990 *Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina. Una visión evolutiva* (Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) 20-21.

Quijano, Aníbal 1992 "Colonialidad y modernidad-racionalidad", en Bonilla, Heraclio (compilador) *Los Conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas* (Colombia: Tercer Mundo Editores, FLACSO Ecuador, Ediciones Libri Mundi).

Rosenthal, Gert 1993 “Sección Ideas”, en *Excelsior* (México, D.F.) 9 de Noviembre.

Sunkel, O. y N. Gligo 1980 (compiladores) *Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina. El Trimestre Económico* (México: Fondo de Cultura Económica) N° 36, 2 tomos.

Sunkel, Osvaldo 1980 “Introducción. La interacción entre los estilos de desarrollo y el medio ambiente en América Latina”, en *Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina. El Trimestre Económico* (México: Fondo de Cultura Económica) N° 36, 2 tomos.

Tudela, Fernando 1991 “Diez tesis sobre desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe”, en *Ecológicas* (México) Boletín Bimestral del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas A.C., Año 2, Vol. 2, Septiembre/Octubre, 14-16.

Wallerstein, Immanuel 1989 *El Moderno Sistema Mundial* (México: Siglo XXI) 2 T.

Wallerstein, Immanuel 1992 *Geopolitics and Geoculture* (París: Cambridge University Press, Cambridge; Editions de la Maison des Sciences de L’Homme).

Worster, Donald 1990 “Transformations of the Earth: Toward an Agroecological Perspective in History”, en *Journal of American History*, March.

Worster, Donald 1992 *Rivers of Empire. Water, aridity and the growth of the American West* (Oxford: Oxford University Press).

Notas

1 La expresión ha sido tomada de Brunhes (1953). El autor, a su vez, elaboró el concepto a partir de su previa formulación como “*tropikal raubwirstchaft*” por geógrafos alemanes a fines del siglo XIX.

2 El autor agregaba enseguida que nadie “puede negar que el costo social del ajuste económico ha sido muy elevado”.

3 Un caso particularmente impactante, por ejemplo, era (y es) el de la deforestación de América Latina, que entre 1960 y 1990 había afectado unos 2 millones de km² -equivalentes a la totalidad del territorio mexicano- y continuaba a una tasa cercana a los 50 mil km² por año. Combinada con técnicas inadecuadas de utilización y conservación de suelos, la deforestación había contribuido además a que, a principios de la década de 1980, unos 2,08 millones de km² de territorio -equivalentes al 10% de la superficie total de la región- se encontraran “en proceso moderado o grave de desertificación” (PNUM,

AECI y MOPU, 1990: 20-21). Otro caso relevante en esta documentación fue BID y PNUD (1991).

4 La edición en línea del informe general puede obtenerse en www.grida.no/geo2000.

5 Se utiliza aquí la noción de sistema mundial a partir de su elaboración por Wallerstein (1989 y 1992), y de la discusión del primero de esos textos por Braudel (1986).

6 Desde azúcar a petróleo, todos provenientes del sector primario-exportador de nuestras economías (CEPAL, 1991).

7 En el caso de Panamá, por ejemplo, la Dra. Ligia Herrera, geógrafa, ha señalado el hecho de que se hubiera destruido tanta selva tropical entre 1950 y 1980 como entre 1550 y 1950, creándose ya la posibilidad de que la cobertura boscosa del país se vea severamente reducida para el año 2000. Por supuesto, la explicación más sencilla consiste en culpar de esa destrucción a la ignorancia y la irresponsabilidad de los campesinos. Sin embargo, la investigación de la Dra. Herrera demostraba que los principales agentes de esa devastación eran en realidad los grandes terratenientes dedicados a la ganadería extensiva, y que el predominio de esa actividad se encontraba íntimamente vinculado en sus formas, sus propósitos y sus ritmos de desarrollo a la manera en que la vida económica, social y política del país habían venido siendo organizadas a partir de la construcción del Canal de Panamá por el estado norteamericano. Aun así, el problema distaba mucho de agotarse en ese nivel, se proyectaba mucho más hacia el pasado y, ciertamente, no era exclusivamente panameño, sino latinoamericano, ni meramente económico, sino -y al propio tiempo- social, político y cultural (Herrera, 1990). Hay importantes observaciones también en Jaén Suárez (1978 y 1981).

8 Por ejemplo: Gligo y Morello (1980); Olivier (1986); Ortiz Monasterio, Fernández, Castillo, Ortiz Monasterio Bulle Goyri (1987). Ejemplos más recientes incluyen a García Martínez y González Jácome (1999) y Brailovsky y Fogelman (1997).

9 Al respecto, por ejemplo, Bagú (1989).

10 Esto es, integrada por un conjunto de campos de estudio como los formados por: a) una forma característica de organización de los seres humanos con vistas a producir y reproducir su propia existencia, a la que normalmente designamos como “la sociedad”; b) una forma característica de organización de las relaciones de producción, intercambio y consumo internas y externas a esa sociedad, a la que normalmente designamos como “la economía”; c) una forma peculiar de institucionalización de las relaciones de poder asociadas a aquella organización social y económica, y de ejercicio del poder así institu-

cionalizado por quienes lo detentan -o de lucha por obtenerlo por quienes están excluidos del mismo-, a la que normalmente llamamos “la política”; d) una forma característica de conciencia de sí de esa sociedad, y de sus relaciones con otros grupos humanos y con el mundo natural, capaz de expresarse en conductas y manifestaciones materiales características, a la que usualmente llamamos “la cultura”; e) una forma característica de organización y desarrollo de las relaciones entre esa sociedad y su ámbito natural, a la que -en este caso y para estos propósitos de estudio- llamamos “ambiente humano”.

11 Se trata del más valioso aporte temprano a la discusión del tema en la región, de consulta imprescindible a veinte años de haber sido publicado.

12 Dos ejemplos recientes de esta evaluación nueva de aquel proceso civilizatorio son, en el plano ecoantropológico y en el cultural, Ortiz de Montellano (1993) y Quijano (1992).

13 Un caso característico aquí es el del desarrollo de la economía de plantación, asociada a la explotación del trabajo esclavo. Las consecuencias de largo plazo van desde la conformación de regiones socioculturales completas tenazmente ambiguas, pero no por ello menos tangibles -como aquella a la que se alude en la observación de que el Caribe está donde la esclavitud estuvo-, hasta la formación de paradigmas de vasto alcance económico y científico, como el que identifica al monocultivo masivo como la forma más eficiente de explotación agrícola en los trópicos.

14 Otro es el caso de *El Desarrollo Sustentable: Transformación Productiva, Equidad y Medio Ambiente*, en su momento el documento insignia de la CEPAL en el debate, cuyo examen de los antecedentes del problema que trata se remonta apenas a 1971 (1991[a]: 15-17).

15 Ya en 1980 Osvaldo Sunkel definía el desarrollo, en la perspectiva de sus relaciones con el medio ambiente, como “un proceso de transformación de la sociedad caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura de clases y grupos y en la organización social, transformaciones culturales y de valores, y cambios en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los niveles de vida”, agregando enseguida que tal definición intentaba “resumir procesos reales” para “identificar como ‘desarrollo’ un estilo internacional ascendente que (...) contiene muchos rasgos negativos y peligros para el futuro” (Sunkel, 1980: 10-11).

16 Y no es la menor de las dificultades que presenta esta tarea que, para ser lograda, deba ser asumida en términos muy distintos a los que caracterizan la racionalidad de nuestras burocracias gubernamentales, tan proclives siempre a encerrarse a sí mismas -y a sus sociedades- en la búsqueda de soluciones

“prácticas”, de corto plazo, bajo costo y buena imagen en los medios de comunicación.

17 De especial importancia, en esta perspectiva, es el ensayo de Worster (1990). La obra más conocida de Crosby es *Ecological Imperialism. The biological expansion of Europe, 900-1900* (1990). De Grove cabe citar aquí ensayos como “Colonial conservation, ecological hegemony and popular resistance: towards a global synthesis” (1990) y “Origins of Western Environmentalism” (1992), en los que destaca el papel del colonialismo europeo de los siglos XVIII y XIX en África, Asia y América Latina en la conformación del ambientalismo en tanto que movimiento social y cultural.

*As antinomias discursivas da Ecologia Política
(uma análise baseada na experiência do Partido Verde no
Rio de Janeiro, 1986-1992)*

Célia Dias*

O estilo de articulação discursiva dos ambientalistas políticos ou Verdes tem sido responsável, em grande medida, pelos sucessos e fracassos de suas interpelações políticas. A nosso ver, os sucessos se vinculam à sua capacidade de se ligar a diferentes tradições e propostas políticas, constituindo assim interpelações potencialmente hegemônicas (Laclau & Mouffe, 1987); os fracassos decorrem das ambigüidades e contradições contidas nesse discurso. Sobre esse tema, discorreremos neste artigo, fundamentado especialmente na pesquisa que deu origem à nossa dissertação de mestrado, que trata da formação do Partido Verde no Rio de Janeiro e seu desempenho (Dias, 1993).

O discurso político se constitui de princípios articuladores gerais (Nação, Democracia, etc.), vinculados a valores vigentes no imaginário político de cada sociedade. Tais princípios não têm conteúdo imediato, muito menos vínculo direto com os diferentes interesses e posições de poder social. Esses vínculos se manifestam, em todo caso, nas articulações discursivas que os referem.

A “crítica ecológica”, o discurso da Ecologia Política, pode ser exemplo disso? Sim, porque o mesmo princípio básico (“respeito à Natureza”) pode-se articular em uma infinidade de posições (respeito aos animais, contra a humanidade; respeito à humanidade, considerada parte da natureza, dentre outras), e de cada uma delas podem derivar diferentes representações da política e das possíveis estratégias de ação.

* Doutoranda do CPDA/UFRRJ; professora da Universidade Estácio de Sá, Niterói, RJ.

Se a “ideologia” for percebida como uma articulação de elementos, retirar-se-á dela seu caráter emblemático, de “bandeira”, e ela passará a ser considerada espaço de luta. O discurso ambientalista estará também no campo da disputa, na luta pela constituição dos sujeitos no espaço político. A presença de elementos de procedência ambiental não supõe a vinculação desse discurso com nenhuma forma política determinada. Para André Gorz (1994), este é um dos maiores desafios da Ecologia Política: se não puser em pauta a democracia, ela trará consigo, implicitamente, o cientificismo e o perigo potencial de uma ditadura tecnocrática, em nome da “gestão ambientalmente correta”¹.

“Os elementos ideológicos considerados isoladamente não têm uma conotação de classe necessária e esta conotação é apenas o resultado da articulação daqueles elementos em um discurso ideológico concreto” (Laclau, 1978: 105). Dessa forma, para analisarmos que vínculo um discurso político tem com a estrutura de classes sociais, é necessário notar o que compõe a unidade distintiva de um discurso ideológico, seu princípio unificador, isto é, o “sujeito” interpelado e, assim, constituído como tal.

Se a função da ideologia for constituir indivíduos sujeitos, a crise ideológica então se traduzirá em uma crise de identidade dos agentes sociais. A partir dessa crise, cada setor em luta tentará reconstruir uma nova unidade ideológica, com base na recomposição de um “sistema de narração” (a convocação ecológica em defesa do meio ambiente, por exemplo). Esse “sistema de narração” terá a finalidade de articular um discurso com alguma consistência, com alvos definidos, e a de desarticular os discursos ideológicos das forças antagônicas que estiverem atuando sobre os mesmos alvos, ou a partir dos mesmos materiais. A crítica irá consistir na tentativa de ruptura dos elementos que articulam o discurso das forças antagônicas e lhe dão nexos, visando a “desconstruir” um campo de idéias e a construir/reconstruir outro.

O discurso ambientalista não tem uma referência classista imediata; no entanto, ele é sempre crítico, isto é, questiona aspectos condenáveis da sociedade atual e passada (sua forma de organização social da produção) e propõe mudanças para o futuro (mesmo que sejam apenas para proteger os animais). O ecocapitalismo empresarial tem críticas a fazer ao capitalismo sujo, predatório; por isso, a impugnação ambiental poderá ser utilizada pelos meios competitivos, com o apoio dos consumidores, se forem capazes de converter sua produção em processos menos poluidores e convencer a opinião pública e os governos da necessidade de incluírem-se cláusulas de proteção ambiental, proteção ao consumidor, dentre outras, nos acordos comerciais internacionais. Da mesma forma, na conjuntura do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), empresários dos EUA e do Canadá (junto com movimentos sociais e sindicatos) se opuseram à integração com o México, alegando que, nesse país, os processos produtivos não satisfaziam normas básicas de proteção ambiental (Bresser Pereira, 1993).

Fazendo uma incursão na política, o discurso ambientalista poderá se articular com diferentes tradições e propostas, segundo as “clivagens” da cultura política e a configuração dos campos partidários nacionais. Poderá se articular, por exemplo, com tradições liberal-democráticas constituídas em “senso comum” de uma cultura política (Estados Unidos) e evoluir, até radicalizar, no sentido dos direitos individuais do cidadão. Isto é, incorporando as atribuições de cidadania individual, tão cara aos americanos, e fazendo uma ponte com os “direitos do consumidor”, o direito de viver em um meio ambiente protegido, não degradado, etc. (Boockhin, 1991). Também poderá se articular com um socialismo tradicional pós-queda do muro: Cuba poderá incorporar o ambientalismo, já que a concepção de socialismo baseada no desenvolvimento das forças produtivas foi deslegitimada.

A tradição democrática européia pode desenvolver a dimensão ambiental em sujeitos políticos coletivos novos (*Grünen*, na Alemanha) ou tradicionais (o PDS italiano, movimentos sindicais), como incorporação de uma nova dimensão social a uma concepção já social da política e da cidadania (ligada também à crítica às formas políticas tradicionais). Em geral, o surgimento dos partidos Verdes europeus e o seu sucesso se vinculam à capacidade dos partidos tradicionais de esquerda de incorporar as novas reivindicações sociais².

Um caso interessante, ocorrido na França, no século XX, é justamente analisado por Lipietz (1999). Na década de 70, os partidos da esquerda tradicional tiveram habilidade para conter o descontentamento e a rebeldia pós-sessenta e oito dentro de suas fileiras, e a proposta do Partido Verde não teve maior incremento. Na década de 80, no entanto, com a crise do Leste europeu e com o Partido Socialista no governo adotando a política de ajuste conservador, *Les Verts* passaram a ser uma alternativa efetiva, com sucesso eleitoral.

Na crise dos países do Leste, a crítica ambiental uniu-se, sobretudo depois de Chernobyl, à crítica ao modelo econômico e político vigente, especialmente à tomada vertical de decisões e às concepções produtivistas.

No Brasil, o incremento da crítica ambientalista está ligado à crise do modelo de desenvolvimento e do esquema político militar-tecnocrático-empresarial, à abertura e politização de novos espaços públicos, ao surgimento de novos sujeitos políticos e sociais e à dificuldade das organizações existentes de estabelecer relações com esses novos sujeitos e atender às suas reivindicações (Dias, 1993).

Considerando essas idéias e definições, podemos pensar na entrada do Partido Verde brasileiro no cenário político, tendo como elemento central de seu discurso a interpelação ambientalista.

O Partido Verde foi criado em janeiro de 1986, no Rio de Janeiro, e teve seu apogeu em 1989, quando se cogitou a candidatura à vice-presidência da República de um de seus fundadores, o ex-guerrilheiro Fernando Gabeira, na

fórmula eleitoral em aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT), junto com Luiz Inácio Lula da Silva. Essa candidatura recebeu forte apoio de dentro do PT; a proposta fracassou devido à oposição de setores que rejeitavam não a crítica ambientalista do PV, mas o conteúdo de crítica aos costumes implícito no partido e na figura de Gabeira: defesa das minorias sexuais, da legalização do uso de drogas, do aborto, etc. Desde então, o Partido Verde desandou caminhos, não conseguiu transcender a política do Rio de Janeiro, às vezes realizando alianças espúrias, e Gabeira se eternizou na bancada de deputados federais.

Podemos, inicialmente, considerar que o PV foi, no período referido (1985-1989), o enunciador da principal interpelação ambiental da esquerda brasileira (mas não a única, se considerarmos que a ausência de preocupações nesse campo pode ser também um tipo de interpelação, a negativa da pertinência do tema). O partido trouxe para o debate de então a discussão ecológica internacional e tentou associá-la às questões prioritárias do cenário político-social brasileiro: crítica ao modelo de desenvolvimento e à destruição do ambiente natural, fruto desse modelo; crítica à forma de fazer política; dentre outras. Por ter sido formado principalmente por ex-exilados com origem política de esquerda, a tradição marxista-leninista e a esquerda tradicional -representada, principalmente, pelo Partido Comunista Brasileiro/PCB- tornaram-se alvos prioritários da crítica à política, por não incorporarem essas questões ao seu discurso e às suas práticas políticas.

Partiu do PV a primeira interpelação nesse sentido na política brasileira. Nessa época, porém, já existia uma nova esquerda partidária, basicamente o Partido dos Trabalhadores. Mesmo que de forma muito tímida, o PT passou a incorporar elementos da preocupação ecológica ao seu discurso de ação política; exemplo disso foi, de fato, a proposta de ter Gabeira como companheiro de Lula na fórmula eleitoral em aliança, apoiada por figuras de grande importância, como José Genoíno e José Dirceu, em nome da incorporação do tema ambiental pelo Partido dos Trabalhadores.

Essa interpelação, denominada por nós “ambientalista”, acabou sendo muito mais ampla que a defesa da natureza enquanto tal, posto que congregou os ditos valores “pós-materialistas” (Kitschelt, 1990): defesa da vida no sentido geral; defesa das liberdades individuais de expressão de homens e mulheres; crítica contundente ao modo de vida consumista. Exemplo disso é o manifesto inaugural, que ampliou as responsabilidades do partido para além da esfera ecológica e propôs que se travasse “a luta mais ampla contra a opressão, a desigualdade, a fome, a miséria, a prepotência das elites, a corrupção, o atraso cultural e os resquícios do autoritarismo” (Partido Verde, 1986).

O discurso ambientalista do PV convocava ao questionamento dos mais caros valores da sociedade de consumo, pregando mudanças na visão do mundo, uma nova concepção de homem, mudanças nos hábitos pessoais e nos

comportamentos sociais. A democracia participativa e a redefinição do conceito de desenvolvimento seriam também temas abordados pelos Verdes.

Essa interpelação feita pelo PV tentou construir uma nova articulação político-ideológica, com base no discurso ambientalista. Os alvos, a princípio, eram setores da classe média (campo dos Verdes em todo o mundo, em sua maioria jovens, com alto grau de escolaridade, em condições de subsistência razoavelmente resolvidas, mais abertos, portanto, a outras preocupações, além das econômicas) e os ditos novos movimentos sociais, como os de mulheres, negros, homossexuais, setores contraculturais, agricultores alternativos de comunidades rurais, setores urbanos preocupados com a qualidade de vida nas grandes cidades (e dispostos a lutar contra a poluição urbana, contra a contaminação dos alimentos por agrotóxicos, pela preservação de áreas verdes locais, etc.). Setores ligados à espiritualidade (como os adeptos do Santo Daime), que questionam o modo de vida consumista, também foram chamados a integrar a luta dos Verdes. Inicialmente, foram esses os sujeitos interpelados pelo Partido Verde; estes poderiam se constituir (=colocar-se na) na política pelo PV.

A construção dessa nova entidade político-ideológica baseada na interpelação ambientalista acabou por desconsiderar a visão “tradicional” da sociedade de classes. A questão ambiental passou a ser tratada não como oriunda de contradições de classe, mas como estando acima das classes, sem, contudo, negar a existência destas e, portanto, de seus conflitos. A presença de conteúdos classistas no discurso ecológico -como a luta de classes- pode aparecer, por exemplo, em forma de atribuição de responsabilidade pelos crimes ecológicos, na própria definição de crise ambiental, na identificação dos sujeitos intimados (‘provocados’) para a luta pela modificação do estado de coisas ou, ainda, nas características sociopolíticas do “paraíso” almejado.

A interpelação do Partido Verde procurou formar sujeitos pelo reconhecimento e pela articulação de identidades “não produtivas” (e não apenas ambientais), que não foram criadas por ele, mas que surgiram, espontaneamente, antes dele³.

Um dos grandes problemas “antinômicos” do discurso político do PV esteve presente justamente nesse corte “classista”. Os discursos eram ambíguos, porque nem todos do partido (nem do movimento) compartilhavam essa abordagem. Alguns negavam a luta de classes e até a participação ambientalista na política, atribuindo à política a destruição da natureza; nesse caso, prevalecia uma confusão de idéias que tornava alvo a teoria marxista, e não sua prática/ação. Para exemplificar, criticava-se o socialismo real, punha-se em questão o modo de produzir desses países, ressaltando-se a pouca preocupação com a destruição dos recursos naturais, a falta de liberdades, a alienação do trabalho, etc. Algumas críticas não negavam, porém, a possibilidade de construção de uma sociedade socialista, na qual justiça social e proteção da natureza possam estar lado a lado,

reconhecendo a luta de classes e propondo uma concepção mais ampla para a discussão e a prática ambiental. Um bom exemplo dessa posição foi a saída de Carlos Minc do PV para integrar o PT; para ele, esta seria a forma de abrir o leque da luta ecológica, incorporando as questões sociais até então deixadas de lado.

O Partido Verde constituiu, com base no ambientalismo, uma interpelação popular-democrática. Foi nesse campo -popular-democrático- que ele tentou agir, pretendendo formar sujeitos políticos pelo chamamento ecológico: “Ei! Você, cidadão de todas as classes, você também é responsável pela destruição da natureza!” Essa interpelação popular-democrática “não tem conteúdo de classe preciso, mas constitui o campo por excelência da luta de classes” (Laclau, 1978: 114).

A constituição discursiva de sujeitos a partir da interpelação ambiental passou não só pela crítica ao modelo de desenvolvimento, por ser predador da natureza e do homem, mas também pela crítica à forma de fazer política. Para os Verdes em geral, e não apenas os brasileiros, os sistemas políticos estão viciados: não há democracia participativa, o parlamentar eleito decide; o vínculo entre representante e representado é estabelecido pelos meios de comunicação, inexistindo a prática da política face a face. Com base nessa idéia, eles tendem a se definir como um partido do cidadão, o partido movimento, no qual todos podem participar das decisões (os políticos terão contato direto com as pessoas). O tema democracia participativa será um dos grandes elementos do discurso Verde, como crítica às decisões centralizadas e chamamento a ações localizadas, afirmando o poder participativo local como a possibilidade de as pessoas decidirem seu destino e terem, assim, um tipo de atuação política. Pensando global (como cidadãos do planeta) e agindo local (como cidadãos do bairro).

Existem ambigüidades e contradições que entrecortam o discurso dos Verdes, as quais devem ser destacadas, para entendermos as dificuldades da constituição desse movimento na política e mesmo sua inconsistência, apesar da justeza de suas reivindicações, que não podemos colocar em dúvida. Essas ambigüidades e contradições fazem parte de um bloco de articulações que acabam por definir o discurso dos Verdes em todo o mundo, dando-lhe uma identidade própria, responsável por sua unificação, independentemente das diferenças regionais, nacionais e/ou internacionais, que são substantivas. Constitui-se, assim, um movimento internacional, posto que a maioria dos Verdes comunga com todos os princípios básicos articuladores desse discurso, apesar das diferenças nacionais.

Os princípios que consideramos mais importantes, na perspectiva da discussão da politização da ecologia são: a) “nem direita nem esquerda, mais adiante”; b) neutralidade de classe do movimento ecologista; c) partido de valores e não de poder; d) autonomia da sociedade; e) o “homem” como responsável pela destruição ambiental.

Enquanto o eixo articulador do discurso socialista é a categoria de exploração, com base em que se reconstrói a representação do espaço social como um antagonismo entre classes, no discurso Verde o eixo articulador, uma modificação das relações da sociedade com a natureza, aponta para uma outra dimensão: o poder de gestão e de tomada de decisões estratégicas que definem essas relações.

Por essa razão, nas condições históricas das décadas de 70 e 80 do século passado, o surgimento de um discurso “verde” incorpora uma dimensão crítica não apenas da gestão capitalista do meio ambiente, mas também uma crítica ao “socialismo real”. Neste ponto, nada mais natural que estejam presentes nesse discurso ressonâncias de toda a tradição socialista não-marxista (críticas também das versões leninistas, trotskistas e social-democráticas). Quase que naturalmente (e, com frequência, inconscientemente), o discurso de muitos dos Verdes retoma temáticas e preocupações das vertentes autogestionárias do socialismo e do anarquismo, recuperando partes significativas dos seus discursos.

Por não ter, a interpelação ecológica, um corte classista, dela irá derivar a idéia de que os Verdes não são “nem de direita nem de esquerda”, mas sim de que estão adiante. Esse “slogan” passará a estar presente no discurso dos Verdes de todo o mundo, tanto dos se situam claramente à esquerda, principalmente quando dão prioridade a determinadas alianças, como de alguns grupos que tendem para a direita, quando dão prioridade a temas e alianças que os aproximam claramente de posições mais conservadoras.

Essa posição fará com que passem a ser rechaçados pela esquerda -que desconfia de seu projeto e os acusa de não terem princípios claros, por algumas vezes fazerem mais alianças com a direita-, bem como pela direita -que os acusa de românticos, quando se posicionam, por exemplo, contra os grandes projetos industriais, contra os projetos nucleares, a poluição, o gigantismo das cidades, a extinção dos animais, etc. Esse posicionamento acabará por inserir os Verdes no campo da disputa, segundo os interesses dos grupos, sendo cooptados pela esquerda ou pela direita, dependendo da situação.

Para eles, essa é a “identidade” de seu movimento e sua “verdade” -“nem direita nem esquerda, mais adiante”. O caráter difuso, como sugere o “slogan”, não desqualifica o movimento e pode até se constituir em fonte de riqueza. Em sua trajetória, entretanto, às vezes os ecologistas se defrontam com outros movimentos, e suas reivindicações se chocam, colocando-os no campo das alianças com a direita, como, por exemplo, operários de uma fábrica que polui ou de um complexo industrial militar, que, por não quererem perder seus empregos com o fechamento da fábrica, se opõem violentamente ao movimento ecologista e suas reivindicações. Para ilustrar essas dificuldades, Carlos Walter Porto Gonçalves (1990) cita o caso da contaminação de rios pelo mercúrio usado por garimpeiros e pequenos produtores, denunciado pelo movimento ecologista. Nesse episódio, os ecologistas foram apoiados pelas grandes empresas, porque

estas se mostravam mais competentes para evitar a contaminação, usando técnicas mais sofisticadas. Os garimpeiros foram pressionados, em nome da causa ecológica, e proibidos de continuar sua atividade, migrando para outros lugares.

A explicação dada pelos Verdes a respeito de não serem nem de esquerda nem de direita em nada esclarece, chegando mesmo, algumas vezes, a confundir. Parece que essa posição tem relação com a crítica política, tanto de esquerda quanto de direita, feita pelos Verdes. No entanto, eles não conseguem se definir nesse sentido, visto que, geralmente, tendem para a esquerda, apesar das críticas de que são alvo, mas também fazem alianças com a direita, justificando-se com a alegação de que o mais importante é a defesa do meio ambiente. No Brasil, a confusão em torno do tema está presente no discurso dos Verdes quando dizem que sua proposta “... deve estar comprometida até a raiz dos cabelos com a erradicação da miséria e com a libertação da classe produtiva do jugo dos interesses econômicos”; ao mesmo tempo, porém, não reconhecem a existência de explorados e exploradores: “a grande diferença da proposta Verde é que não procura dividir o mundo em explorados e exploradores, porque estamos todos no mesmo barco. Nem à direita nem à esquerda, o Partido Verde deve estar à frente de capitalistas e comunistas” (Partido Verde, 1986).

Segundo James O'Connor (1991), esse famoso “slogan” dos Verdes -“nem de direita nem de esquerda, mais adiante”-, associado à crítica que fazem ao socialismo real, faz pensar que o capitalismo tem um aliado na luta contra o socialismo. No entanto, a maioria dos Verdes também não é amiga do capitalismo. É necessário esclarecer, portanto, a quem eles estão aliados. A resposta direta a essa questão é a seguinte: os Verdes estão aliados aos pequenos agricultores, aos artesãos, às cooperativas e aos pequenos negócios independentes, o que costumávamos denominar “campeinato e pequena burguesia”. No Sul, o ecologismo está descentralizado e alia-se à política comunal dos povos; no Norte, às políticas municipais e locais de todo tipo, se opondo sempre às forças centralizadoras do capitalismo, aliando-se a lutas locais.

A neutralidade de classe do movimento ecologista também se torna confusa no discurso dos Verdes. Suposta, ela está presente na idéia de que “todos estamos no mesmo barco”. Se a questão ambiental não deve ser vista como uma “especificidade”, mas como uma dimensão que deve estar presente na reflexão global sobre a sociedade, se ela não é uma simples extensão na arena política das demandas ambientalistas em sentido estrito (como, por exemplo, ressaltam o manifesto do PV alemão e do PV brasileiro) e, conforme visto neste artigo, se o “barco” ou a “aeronave terra” tem primeira e segunda classes e postos de comando diferenciados, um projeto crítico de sociedade não pode negar a existência dessas diferenças nos assentos da “aeronave terra”.

De modo geral, os partidos verdes são apresentados - e o brasileiro não é exceção - como “partidos de valores que não pretendem transformar-se em majoritários enquanto partidos, e governar ou tomar revolucionariamente o poder, senão agir como transformadores da cultura política introduzindo valores pós-materialistas” (Viola, 1987: 29). Porém, ao mesmo tempo, esses partidos, em especial o PV brasileiro, participam das eleições sempre com estratégias políticas centradas também na eleição de seus candidatos (as maiores desavenças internas do PV carioca estiveram relacionadas a essas estratégias eleitorais). Portanto, os PVs não são apenas partidos de valores, mas estão no jogo político, com estratégias para disputar eleições e ganhá-las, postura que é defendida por seus militantes e dirigentes.

Parece que, na verdade, os Verdes não comungam com a idéia da tomada revolucionária do poder, mas sim com a de uma participação nos quadros institucionais para promover reformas nas instâncias de poder, visando a transformações profundas, até que se chegue à autonomia da sociedade. Herbert Daniel, quando concorreu às eleições de 1986, em entrevista à Folha de São Paulo, defendeu a participação em tais instâncias como forma de garantir os direitos adquiridos. Disse: “sou parte de um movimento que não quer tomar o poder, mas quer esvaziar o poder. Que acha que o poder constitui grupos de pressão e que quer opor a isso grupos que chamo de grupos de expressão, grupos capazes de significar, significando-se suas diferenças, e nessa expressão sejam capazes de equilibrar as forças do poder para que os direitos consagrados sejam garantidos e, mais do que isso, seja garantida a continuidade de invenção permanente de novos direitos” (Folha de São Paulo, 29/4/86).

Daniel Cohn-Bendit, o Danny le Rouge das “barricadas do desejo”, expressiva liderança do movimento estudantil de Maio de 68, na França (quando os estudantes questionaram as formas de poder institucional francês), é hoje deputado do PV alemão no Parlamento Europeu. Em 1985, já destacava a importância das reformas feitas pelo PV alemão; isso não significava dizer que “Die Grünen” não tinham mais potencialidades revolucionárias naquele país, mas que a definição de revolução mudara.

Para Cohn-Bendit, “revolução” é uma forma excepcional de reformismo; pode-se discutir a intensidade da reforma, mas é de uma reforma que se trata. “O grande problema, para mim, não é a tomada do poder por um partido. O problema que o reformismo coloca é que, para transformar uma sociedade, é preciso uma vontade majoritária. (...) Os partidos políticos e o quadro institucional funcionam como uma espécie de guarda-chuvas para a reforma e a autonomia da sociedade civil. (...) Hoje, a tomada do poder, talvez revolucionária pela profundidade das transformações que trará, passa pela tomada do poder pela maioria, por uma nova maioria. É esta, precisamente, a função do PV. (...) Se acredito na necessidade de uma profunda transformação na sociedade, logo devo acreditar numa tomada do poder que se dê também pelos caminhos parlamentares” (Gabeira, 1985: 48-49).

A idéia de revolução sempre no futuro -visão teleológica- foi substituída, na visão dos Verdes, pela convicção de que os conflitos devem ser resolvidos hoje. O assalto ao poder foi identificado como “mito”: o que importa agora são os esforços cotidianos, a luta local, a satisfação no presente. Os Verdes deixaram de esperar pela Revolução para exigir e obter mudanças. Os problemas ambientais crescentes necessitam de soluções imediatas, e isso independe das perspectivas e das exigências no que se refere à sociedade futura.

Para Castoriadis, “a luta ecológica não esgota por si só todo o problema político tal como o entendemos (...) o projeto de criação de uma sociedade igualitária, na qual a coletividade detenha de maneira efetiva o poder” (1981: 9). Essas idéias nem sempre são claras no discurso e na ação dos Verdes que, ao mesmo tempo em que questionam o poder, participam de instâncias decisórias para promover reformas nesta sociedade que aí está (colocando-se como reformistas para alguns grupos de esquerda) e apontam para uma sociedade futura, para uma “utopia verde”, na qual a atividade humana deverá considerar os limites da natureza.

A maior parte dos ecologistas se reconhece como autogestionária. A proposta política dessa corrente centra-se no fortalecimento da sociedade civil, reconstituindo ou consolidando todas as relações fundadas no voluntariado e na reciprocidade: relações de cooperação e de ajuda mútua, associações voluntárias e cooperativas, vida comunitária sobre o modelo da cidade tradicional e redução drástica do poder do Estado. Podemos dizer que, nesse ponto, os ecologistas “estão do lado do Marx teórico da extinção do Estado. O Marx que percebe uma alienação fundamental na separação do político como esfera autônoma, que concebe a absorção do político na sociedade civil” (Dupuy, 1980: 36). Nós, entretanto, sabemos que o marxismo resultou, nesse ponto, exatamente em seu contrário, houve um reforço do poder centralizador do Estado, e não sua extinção, com a consolidação do poder da sociedade civil.

A autonomia pregada pelos ecologistas -uma sociedade autogestionária, feminista, auto-suficiente, não agressiva- se tornará a maior ambigüidade dos Verdes, pois estes, além de aparecerem como uma poderosa força no cenário político, priorizando a preservação da integridade do planeta e situando o homem como o principal responsável pela destruição ambiental no mundo, serão defensores ferrenhos da liberdade humana. Logo, instala-se uma dificuldade fundamental: como conciliar autonomia com autolimitação? A “utopia verde” se defrontará com esse dilema com o qual já se depararam outras correntes da “utopia socialista”.

Castoriadis apresenta o problema nos seguintes termos: “Falar duma sociedade autônoma, da autonomia da sociedade não só em relação a tal camada dominante particular, mas em relação à sua própria instituição, a necessidades, técnicas, etc., pressupõe ao mesmo tempo a capacidade e a vontade dos humanos

para se autogovernarem, no sentido mais profundo do termo” (1981: 29). A possibilidade de uma transformação radical, revolucionária, da sociedade está relacionada à capacidade e, sobretudo, à vontade de se autogovernar; “digo vontade, pois a meu ver a ‘capacidade’ não constitui verdadeiramente um problema” (Castoriadis, 1981: 29).

O autor destaca, ainda, que outra sociedade, uma sociedade autônoma, não implica somente autogestão e autogoverno, mas também outra cultura, outro modo de vida, outras necessidades. Essa autonomia pressupõe diretamente autolimitação da sociedade (mas essa autolimitação não pode implicar a supressão das diferenças individuais, da liberdade, inclusive na esfera política) e põe em pauta o seguinte assunto: a quem competirá decidir a respeito do modo de vida apropriado para os demais? Sabemos que toda sociedade precisa de um poder sobre si mesma, para fixar limites à ação de todos, mas temos conhecimento também de que a existência desse poder não tem sido a garantia de que tais limites serão fixados igualmente para todos e por todos cumpridos. O poder também não fixa limites sobre si mesmo, e a sociedade em que vivemos ilustra isso. O poder tem sido autoritário e usurpador dos direitos dos cidadãos.

Para alguns, a crise ecológica não deixa escolha e aponta para o ecofascismo. Ameaça de extermínio mediante guerras; ameaça de destruição do meio ambiente natural indispensável à vida humana; ameaça de fome massiva no Terceiro Mundo. Só uma sociedade com um Estado forte e centralizador, capaz de impor limites em nome das “leis ecológicas” poderá conter essas catástrofes.

Não acreditamos no fato de que a crítica ecológica e a crescente crise ambiental apontem só uma saída. Não há prova alguma de que a humanidade trabalhadora tenha perdido a capacidade de impedir a marcha para o abismo, de submeter a tecnologia que ela mesma criou ao seu próprio controle, de deter definitivamente a fabricação de armas, de restabelecer os equilíbrios ecológicos ameaçados, de alimentar e curar as massas pobres do Terceiro Mundo (Mandel, 1991). Essa capacidade existe, e uma grande parte da crítica ecológica indica a possibilidade de resolução desses problemas e de construção de uma sociedade na qual a autolimitação seja consciente e responsável. Para superar as ameaças que pesam sobre o meio ambiente, a fome e a miséria do Terceiro Mundo, é necessário subordinar todos os desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e sociais ao controle consciente da humanidade.

Uma das categorias privilegiadas no discurso dos Verdes é o “homem”, presente das mais variadas formas, diferentemente de outros movimentos sociais, que privilegiam uma classe ou um grupo social. Geralmente, o “homem”, ser humano (ou a humanidade), é pouco qualificado no discurso da maior parte dos Verdes, configurando uma grande mistificação. Frequentemente, o “homem” abstrato é citado como responsável pela destruição do planeta, indiscriminadamente.

Se a sociedade em que vivemos é dividida em classes, os homens diferem em alguns aspectos; logo, não podemos responsabilizar todos igualmente.

Quando falamos da destruição da natureza pelo “homem”, devemos considerar responsáveis as diferentes classes na mesma proporção? Podemos ver como equivalentes a responsabilidade do proprietário de uma madeireira que destrói a floresta e a do trabalhador operador da moto-serra? São igualmente responsáveis pela poluição industrial (tão cara aos Verdes) operários e industriais?

Mesmo reconhecendo sermos todos, de alguma forma, herdeiros do cartesianismo no modo de pensar e agir, é necessário ir além dessa generalização do “homem” e explicitar melhor a quem compete as responsabilidades quando se trata de destruição da natureza.

A discussão sobre a crise ambiental não pode ser reduzida aos marcos de uma relação mística, não explícita. É preciso desmascarar, na esfera política, o controle do aparato do Estado pelos interesses privados, que impõem, direta ou indiretamente, formas de organização espacial, organização das atividades produtivas, em suma, opções que terminam por influenciar a vida de todos.

Bibliografía

- Boockhin, Michael 1991 *Ecologia Libertaria* (Móstoles: Ediciones Madre Tierra) Cuadernos Libertarios.
- Castoriadis, Cornelius 1981 *Da Ecologia à Autonomia* (Coimbra: Centelha).
- Cohn-Bendit, Daniel 1987 *La Revolución y nosotros, que la quisimos tanto* (Barcelona: Anagrama).
- Dias, Célia Regina da Silva 1993 *Ecologia e Política: o Partido Verde no Rio de Janeiro e os descaminhos de uma proposta partidária* (Rio de Janeiro: CPDA/UFRJ).
- Dupuy, Jean 1980 *Introdução à Crítica da Ecologia Política* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Gabeira, Fernando 1985 *Nós que amávamos tanto a revolução* (Rio de Janeiro: Rocco).
- Gonçalves, Carlos Walter Porto 1990 *Os (des)caminhos do meio ambiente* (São Paulo: Contexto).
- Goetz, André 1994 “Ecología Política, expertocracia y autolimitación”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 134, Noviembre/Diciembre.
- Kischelt, Henri 1990 “La gauche libertaire et les ecologistes françaises”, en *Revue Française de Science Politique* (Paris), Vol. 3, N° 40, Juin.
- Laclau, Ernesto 1978 *Política e Ideologia na teoria marxista* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe 1987 *Hegemonia y Estrategia Socialista-Para una radicalización de la democracia* (México: Siglo XXI).
- Lipietz, Alain 1999 *Qu'est-ce que l'écologie politique?* (Paris: La Découverte).
- Lipietz, Alain 2000 “Political Ecology and the Future of Marxism”, en *Capitalism Nature Socialism* (New York) N° 40, March.
- Mandel, Ernest 1991 “Situación y futuro del socialismo”, en *El Cielo por Asalto* (Buenos Aires) Año 1, N° 2, Otoño.
- O'Connor, James 1991 “Socialismo y Ecologismo, Mundialismo y Localismo”, en *Ecologia Política* (Barcelona) N° 2.
- Partido Verde 1986 *Manifesto, Estatutos e Programa* (s/d: Rio de Janeiro).
- Partido Verde 1991 *Proposta de Ecologia Política* (Rio de Janeiro: Anima Verde).

Bresser, Mario e Lia Vaz Pereira 1993 *A Iniciativa para as Américas, o NAFTA e o Mercosul* (São Paulo: Cajá).

Viola, Eduardo 1987 “O Movimento Ecológico no Brasil (1974-1986)- Do ambientalismo à ecopolítica”, *en* Pádua, José Augusto (org.) *Espaço e Tempo* (Rio de Janeiro: IUPERJ).

Notas

1 Uma analogia entre a função do economicismo na tradição política marxista e o cientificismo na Ecologia Política foi apresentada por Lipietz (2000).

2 Empregamos esse esquema de interpretação em nossa dissertação de mestrado (Dias, 1993).

3 O sucesso da aliança Verde-Vermelha no Rio de Janeiro, em 1986, pode ser atribuído à articulação dessas identidades “não produtivas” em um amplo leque de reivindicações feitas pela aliança PT-PV.

Fernando Gabeira, candidato a governador, ficou em terceiro lugar nas eleições, com um total de 600.000 votos (8% dos votos do Estado, 10% da região metropolitana).

Por uma Sociologia dos conflitos ambientais no Brasil *

Angela Alonso** e Valeriano Costa***

Introdução

Nas duas últimas décadas do século XX, a questão ambiental alcançou o *status* de problema global e tem mobilizado não apenas a sociedade civil organizada, os meios de comunicação, mas os governos de todas as regiões do planeta. Frank, Hironaga e Schofer (2000: 96-116) sustentam que o processo de disseminação global de práticas e a adoção de instituições visando à proteção ambiental estão correlacionados com a difusão de concepções e conhecimentos desenvolvidos por ONGs e organizações científicas vinculadas à perspectiva ambientalista. Frederick Buttel (2000: 117-121), outro importante sociólogo ambiental, contesta, no entanto, o otimismo da conclusão anterior, argumentando que a ampla difusão da preocupação de governos e setores da sociedade civil com os problemas ambientais ou mesmo a extensa agenda de discussões em fóruns internacionais não resultou em um consenso em torno de soluções. Ao contrário, à medida que se ampliou e se aprofundou o debate, os conflitos se tornaram mais agudos e as soluções mais problemáticas do que se poderia imaginar 30 anos atrás.

* Paper preparado especialmente para o Encontro do Grupo Meio Ambiente e Desenvolvimento da Clacso – Rio de Janeiro, 22 e 23 de novembro de 2000. Agradecemos os comentários de todos os membros do grupo e, particularmente, ao seu coordenador, Hector Alimonda, o incentivo à publicação.

** Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo; professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Pesquisadora do Cebrap, desde 1995 onde atualmente coordena a área de Conflitos Ambientais. É autora de artigos referentes à cultura política e a conflitos ambientais no Brasil. É co-autora (com Sérgio Costa e Sérgio Tomioka) de *Modernização Negociada: expansão viária e riscos ambientais no Brasil*.

*** Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo; professor do Departamento de Ciência Política do IFCH / Unicamp, onde atualmente coordena o Programa de Mestrado em Ciência Política e a Área de Doutorado em Estado, Políticas Públicas e Processos Políticos Contemporâneos. É autor de vários artigos relativos à consolidação da democracia e à descentralização político-administrativa no Brasil.

Por outro lado, o relativo sucesso do movimento ambientalista resultou em uma paradoxal perda da aura “utópico-revolucionária” da questão ambiental, principal fator de mobilização de seus militantes nas décadas de 60 e 70. Isto se deu, justamente, em razão da inserção da temática ambiental no âmbito das políticas públicas governamentais. É verdade que, em contrapartida, a incorporação dos problemas ambientais contribuiu para abrir e ampliar o espaço de participação da sociedade civil nos processos de decisão política em geral. O impacto mais importante, porém, se deu sobre as propostas e o discurso ambientalistas. Assistimos, principalmente ao longo da última década, a um processo de institucionalização da questão ambiental. Ocorre mesmo a tradução de dimensões suas em problemas de política pública. Isto significa que os temas ambientais passam a estar sujeitos, portanto, às restrições impostas pela racionalidade administrativa, onde imperam as soluções pragmáticas (politicamente aceitáveis e economicamente viáveis para uma sociedade capitalista) e onde toda demanda, por mais justificável que seja do ponto de vista ambiental (ou econômico ou social), precisa levar em consideração os outros interesses organizados e representados na esfera pública.

Os efeitos dessa mudança estrutural sobre o movimento ambientalista foram consideráveis, assim como sobre a abordagem da questão ambiental na área acadêmica. De sua parte, o movimento social fragmentou-se, profissionalizou-se, especializou-se, inserindo-se nas mais diversas esferas de decisão governamental concernentes à questão ambiental. De outro lado, constituíram-se “ciências ambientais”, que adquiriram *status* intelectual, forte atenção da mídia e promoveram um processo de progressiva diferenciação entre as esferas científica e política, gerando novas metodologias de pesquisa e instrumentos de mensuração e aferição de “riscos ambientais”. Mesmo no âmbito das ciências sociais, em que o impacto desse processo de institucionalização não foi tão forte, assistimos ao desenvolvimento de diversas abordagens sociológicas que procuram dar conta da complexidade da problemática ambiental, explicitando e criticando os limites do discurso “utópico-revolucionário” do movimento ambiental em sua fase épica.

No Brasil, entretanto, constatamos uma importante defasagem entre a ação e o discurso das organizações sociais ambientalistas e a produção científica de instituições de pesquisa que atuam na área de “ciência ambiental” e a reflexão produzida pelas ciências sociais acerca do tema. De fato, a superação do discurso ambientalista nas ciências sociais parece avançar bem mais vagarosamente do que se poderia esperar. Essa resistência à mudança parece dever-se à estreita ligação, e mesmo superposição, entre ativismo ambientalista e a pesquisa acadêmica orientada para a constituição do que se convencionou denominar “sociologia ambiental” superposição.

No *paper* que deu origem a este artigo, argumentamos que o principal obstáculo ao desenvolvimento de uma sociologia do ambientalismo no Brasil é a fragilidade de seus fundamentos teóricos e, como consequência, a ausência de uma agenda de pesquisa de problemas ambientais autônoma em relação às preocupações do movimento ambientalista.

Grande parte do que se convencionou chamar de abordagem socioambiental está profundamente marcada por um viés engajado, que confunde a trajetória do movimento ambientalista com a trajetória política e social da questão ambiental, transformando suas concepções ideológicas em pressupostos analíticos para compreender a dinâmica ambiental. Para construir, em bases sólidas, uma ciência social dos problemas ambientais no Brasil, precisamos superar essa contaminação entre juízos políticos e adotar uma postura de suspensão de valores, ao menos durante a análise.

Este artigo visa a contribuir para esse processo, a partir de uma avaliação crítica da literatura brasileira e da proposição de um programa de pesquisa. A argumentação se desenvolve em três etapas: na primeira, procedemos a uma breve revisão crítica da sociologia do ambientalismo no Brasil; na segunda, esboçamos uma tentativa de abordagem da dinâmica do conflito social ambiental brasileiro, com base nos trabalhos de Charles Tilly, referentes à lógica da ação coletiva. Nosso objetivo é a integração dessa perspectiva sociológica com *insights* das abordagens culturalistas, já aplicadas pela sociologia ambiental brasileira, sobretudo com o construcionismo, que enfoca a dimensão cognitiva dos problemas ambientais. Por último, a partir desta proposta teórica, delineamos uma agenda de pesquisa empírica sobre a dinâmica do conflito ambiental no Brasil.

Interpretações sobre a questão ambiental brasileira¹

Em artigo recente, analisamos a já extensa bibliografia brasileira relativa ao tema ambiental. Propusemos uma classificação sociológica da literatura ambientalista brasileira (Alonso & Costa, 2001). Nossa interpretação aponta uma série de limitações teóricas e metodológicas comuns a quase toda a produção acadêmica referente ao tema, exploradas de forma sintética a seguir.

Somente a partir da metade dos anos 80 podemos falar realmente em um interesse sistemático das ciências sociais pela questão ambiental no Brasil. Ainda assim, essa literatura ganha forma, lentamente, mais pela adesão individual de especialistas das mais diversas áreas das ciências naturais e humanas -filósofos, geógrafos, demógrafos, biólogos, dentre outros- do que por uma expansão planejada de programas e cursos específicos. Isso explica, em parte, por que a progressiva institucionalização de uma área de estudos sociais a respeito da temática ambiental não implicou o abandono do tom militante, característica da

primeira fase da literatura ambientalista. Na verdade, a adesão à causa ambientalista, geralmente acompanhada da participação em ONGs, foi, e talvez ainda seja, um dos fatores explicativos da expansão do interesse pelas questões ambientais entre os cientistas sociais brasileiros.

Deste ponto de vista, é compreensível que a realização, no Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas a respeito do Meio Ambiente, em 1992, tenha causado forte impacto não apenas no movimento ambientalista, mas, também, na produção intelectual nessa área. De fato, após a Rio-92, houve uma explosão do mercado editorial, e muitos especialistas de diversos campos das ciências naturais e sociais começaram a mudar o foco de seus estudos em direção à problemática ambiental, atraídos tanto pela maior facilidade de financiamento para pesquisas como pela ampla visibilidade do tema na opinião pública e nos meios de comunicação.

A partir dos anos 90, ocorre uma progressiva especialização na área, em dois sentidos: há uma clara segmentação em subáreas de conhecimento e um aprofundamento teórico e metodológico em cada uma delas. Assim, a competição por prestígio e recursos torna-se mais restrita, elitizada, sem deixar de ser essencialmente um conflito político em torno de recursos simbólicos e materiais.

Tais processos indicam a crescente complexidade desse campo de conhecimento. A diversidade de áreas e linhas de estudo e pesquisa permite caracterizar o campo de estudos ambientais no Brasil como basicamente híbrido, tanto do ponto de vista temático como teórico. Uma clivagem o divide em duas grandes perspectivas. De um lado, temos uma literatura politicamente engajada, que critica fortemente o modelo de desenvolvimento capitalista e o estilo de vida a ele associado, propondo amplas reformas econômicas e mesmo de hábitos e práticas sociais profundamente arraigadas. De outro, assistimos à emergência de uma “proto-área” de estudos ambientais dentro das ciências sociais. Essa divisão é perceptível também quando enfocamos os temas abordados pelas duas grandes linhas de estudo: a primeira trabalha principalmente com a perspectiva do desenvolvimento sustentável, da gestão ambiental assim como das políticas públicas; a segunda parece mais interessada em explicar a formação e as estratégias de ação do movimento ambientalista, além de se preocupar com o surgimento de diferentes percepções do meio ambiente e, mais recentemente, com a emergência dos conflitos ambientais.

Essa breve descrição do campo de estudos ambientais sugere que uma análise baseada em linhas temáticas associadas a determinadas abordagens teóricas esclarece melhor sua natureza híbrida do que uma abordagem estritamente disciplinar, como aquela pioneiramente tentada por Vieira (1992). Desde que o autor propôs a classificação do campo ambiental em cinco categorias disciplinares, os estudos sociais relativos ao meio ambiente se expandiram muito. Ao longo dos anos 90, novas modalidades interpretativas apareceram no Brasil.

Exemplo disso são os estudos genealógicos, que analisam a questão ambiental na ótica da história das idéias: tentativas de entender o ambientalismo na longa duração, reconstruindo uma história do “pensamento ecológico” brasileiro (Portanova, 1994; Pádua, 1997). Também aparecem com destaque as abordagens do ambientalismo como doutrina -uma filosofia da natureza: “mentalidade” ou “idéia-força” recivilizadora dos valores modernos, que se disseminaria pela sociedade e pelo Estado, gerando no sentido de um congaçamento espiritualista (por exemplo, Leis & Amato, 1995).

A grande maioria dos levantamentos empíricos, porém, tem se restringido a estudos de caso. Há, sobretudo, estudos acerca de “impactos socioambientais”. Isto é, estudos relativos ao ambiente socialmente criado ou às ações humanas sobre a natureza, sem distinção clara entre grupos humanos e ecossistemas. Vários estudos se detêm na identificação dos efeitos deletérios de macroprocessos associados à modernização, particularmente à industrialização. O foco “socioambiental” não distingue, antes sobrepõe, itens mais facilmente identificáveis como “ambientais” -poluição do ar e das águas preservação de regiões ecológicas “virgens”- de questões às quais a Sociologia nomeava, até anos 70, “problemas sociais”: especialmente saneamento e pauperização, nas cidades, e impactos sobre o estilo de vida de comunidades indígenas e/ou tradicionais, no interior do país.

As relações entre meio ambiente e democracia também têm merecido a atenção crescente dos cientistas sociais. Estudos neste veio compartilham um certo “ar de família”, produto de uma matriz teórica hegemônica. A perspectiva analítica adotada (embora nem sempre de modo explícito) pela maioria dos intérpretes na explicação da constituição do ambientalismo brasileiro é a sociologia da ação de Touraine. Essa tendência aparece plenamente desenvolvida especialmente nos trabalhos de Eduardo Viola e de seus colaboradores (Viola, 1987; Viola e Leis 1995[a], 1995[b], 1997). Propõe-se a tese da disseminação gradual do ambientalismo por setores da sociedade e do Estado -o “ambientalismo multissetorial”. Essa interpretação se ampara em uma perspectiva cognitiva: apresenta o ambientalismo como espécie de “idéia-força”, cuja difusão dependeria do empenho de um grupo especial de atores em favor da conscientização dos demais. O ambientalismo ganha *status* de movimento social especial (Viola, 1987), surgindo da sociedade civil organizada para esclarecer e corrigir tanto a política estatal como a economia. A interpretação divide a sociedade em elites que, tão logo esclarecidas, passariam a adotar uma postura ambientalmente correta. Teríamos, assim, uma progressiva “ambientalização” da sociedade e do Estado, em três estágios cruciais. O marco zero, nos anos 70, seria o momento “bissetorial”, de infiltração da idéia ambientalista no Brasil. Fruto da pressão internacional, teria se restringido às agências estatais e a umas poucas associações ambientalistas. A relação de “conflito e cooperação” entre esses dois setores teria gradativamente dinamizado a incorporação da idéia, iniciando uma

“complexificação” do cenário a partir de 1986. De uma parte, a institucionalização do ambientalismo -em ONGs, na sociedade civil, e em empresas estatais conservacionistas, como o Ibama-; de outra, o incremento do número de setores ou atores “ambientalizados” -instituições de pesquisa ambiental, empresários “sustentabilistas” e a constituição do “socioambientalismo”, isto é, movimentos sociais e sindicatos que teriam incorporado as bandeiras ambientalistas à sua pauta social. Essa expansão gradual do ambientalismo para o conjunto da sociedade e do Estado configuraria a fase “multissetorial”². O terceiro momento seria de consolidação do “multissetorialismo”, significando a convergência dos atores em torno de ideais de sustentabilidade (Viola e Leis, 1995[a]).

Nessa interpretação, a questão ambiental é reduzida à progressiva adesão dos atores a valores ambientalistas; analisada exclusivamente em termos discursivos. Uma consciência ambiental se espalharia contínua e homoganeamente no espaço público brasileiro. Dos valores comuns nasceria o consenso em prol de ideais de “desenvolvimento sustentável”. A tese é a de que as idéias são motores das práticas: o acordo discursivo se traduziria em ações ambientalmente corretas (Viola e Leis, 1995[a]: 78). A perspectiva cognitiva do “multissetorialismo” enfatiza a dimensão cultural do ambientalismo - disseminação de valores e formas de pensar -, o que é, sem dúvida, uma dimensão importante da realidade social. É patente a generalização do “discurso verde”, expresso em uma linguagem pública compartilhada por todos os agentes. Entretanto, a adesão a valores ambientalistas não se exprime automaticamente em práticas. A própria difusão do discurso “sustentabilista” se deve menos ao proselitismo de atores “ambientalizados” que à existência de constrangimentos políticos e morais que impedem o reconhecimento de posições ambientalmente incorretas e sua validação (Costa, Alonso e Tomioka, 2000).

A ênfase na dimensão valorativa do ambientalismo põe de lado a lógica dos interesses, ignorando a dimensão prática do fenômeno. Isto, por sua vez, tem consequências na formulação do conceito de política utilizado para análise do campo ambientalista: resulta em uma redução da questão democrática a um enquadramento estreito, substancialista, como “democracia verde”. A relação entre democracia e meio ambiente é formulada como incorporação de temas ambientais pelo debate público e estratégias de grupos organizados, sobretudo movimentos sociais. A qualidade das instituições políticas democráticas variaria conforme o nível de disseminação da “consciência ecológica” entre os atores sociais e políticos e o papel mais ou menos central dos atores “ambientais” no processamento dos conflitos ambientais em detrimento de análise mais “objetiva” dos processos políticos. De seu ponto de vista, não existiriam conflitos ambientais senão em um sentido: como conflitos de valor, transitórios por definição, já que, uma vez esclarecidos, os atores tenderiam a aderir a práticas sustentabilistas.

Outra linha de análise das relações entre meio ambiente e democracia se detém na avaliação dos mecanismos e das instituições criadas para garantir a democratização das decisões relacionadas a possíveis impactos ambientais. Embora haja um consenso quanto ao princípio participacionista, membros da própria comunidade ambientalista têm constatado importantes limitações e distorções no funcionamento efetivo dos mecanismos de avaliação e discussão de impactos ambientais e, particularmente, das audiências públicas de licenciamento ambiental. Podemos mencionar dois tipos de crítica: quanto às suas limitações técnico-científicas (La Rovere, 1992) e quanto aos seus fundamentos morais e ao seu desenho institucional (Leis, 1997).

O que há de comum nessas críticas é a percepção, provavelmente generalizada entre os ambientalistas, de que os atuais mecanismos de negociação ambiental são ainda incapazes de garantir as duas condições mínimas consideradas necessárias ao tratamento “adequado” da questão ambiental: 1) uma abordagem “sistêmica” dos problemas ambientais, que supere a natureza pontual e corretiva das políticas públicas tradicionais; 2) um estilo de resolução consensual dos conflitos ambientais, o único, crêem, capaz de produzir resultados consistentes com o caráter complexo e integrado dos problemas ambientais.

Segundo nosso ponto de vista, entretanto, a criação de câmaras de negociação e de modalidades participativas de tomada de decisão nas questões ambientais, argumento válido para qualquer outro procedimento de resolução de conflitos, não pode pressupor o consenso quanto ao *objeto* sob deliberação. Essas instâncias não podem produzir um resultado substantivo (o consenso), mas apenas procurar garantir condições formais (institucionais) de processamento de conflitos e (quando possível) resolução de impasses. A negociação dos conflitos, nessas instâncias, se realiza quando os cidadãos afetados atribuem ou negam legitimidade a iniciativas públicas ou privadas, conforme sua percepção subjetiva das conseqüências imediatas dos problemas ambientais para sua vida cotidiana. No entanto, o resultado da deliberação é incerto. Nada garante que da expansão da participação popular venham a emergir decisões consensuais relativas a dilemas ambientais.

Assim, essa perspectiva se mostra pouco apta para responder às questões cruciais que sua própria ênfase em “governança” e “participação” impõe. Uma delas diz respeito à eficácia dos mecanismos de tomada de decisão em questões ambientais. A contaminação entre intérpretes da questão ambiental e militantes ambientalistas gerou um consenso em torno da “evidente vantagem” dos sistemas participativos *vis-à-vis* os representativos de deliberação. Entretanto, conforme ressaltam Lafferty & Meadowcroft (1996), a associação da defesa do meio ambiente à expansão da democracia participativa (em alternativa à representativa) precisa ser tomada com cautela. A tese de “congruência natural”, de um mútuo reforço entre os dois processos, argumentam, é produto da tendência dos analistas a se solidarizarem com os projetos e interpretações dos

próprios agentes. Além do mais, não há evidências empíricas suficientes que permitam tal generalização. Há mesmo indícios em sentido contrário. Um estudo comparativo norte-sul (Holmes e Scoones, 2000), avaliando o funcionamento efetivo dos novos formatos institucionais de tomada de decisão em questões ambientais, demonstra que, na maioria dos casos, esses mecanismos não têm a legitimidade que prometem.

A adequação entre democracia e meio ambiente precisa ser averiguada com atenção para o contexto. Nossa avaliação é que a bibliografia de modo geral se ancora em um *parti pris* normativo, supondo uma correlação (automática) entre preservação ambiental e participação. Desconsidera a possibilidade de ocorrer o contrário: institutos de intenções democratizantes, como as audiências públicas de licenciamento ambiental, podem gerar efeitos indesejados, como a elitização do processo decisório. É preciso investigar empiricamente se, de fato, as instituições político-administrativas tradicionais (os três poderes) são incapazes de solucionar conflitos ambientais e se os mecanismos de governança ambiental apresentam efetivamente os benefícios que prometem, isto é, se influem na definição das políticas públicas na área ambiental. Funcionam para todos os assuntos ou apenas para aqueles em torno dos quais já há consenso prévio entre os agentes? Nossa hipótese é que os mecanismos de governança ambiental falham tanto em eficácia quanto em legitimidade quando têm de lidar com diferenças de valores e interesses. Ao invés de consensos, geram conflitos.

Estas reflexões não visam a esgotar a bibliografia brasileira referente à questão ambiental, mas problematizá-la de um ponto de vista sociológico. Preservar um mínimo distanciamento crítico em relação às teses ambientalistas, mantendo uma postura de neutralidade axiológica, nos parece uma medida salutar para gerar uma melhor compreensão da questão ambiental. Essa postura “científica” não se reduz, no entanto, a uma petição de princípios, pois tem desdobramentos concretos. O ponto diz respeito ao tratamento analítico que deve ser destinado à questão ambiental. Como vimos, a literatura brasileira dedicada ao assunto é majoritariamente composta de simpatizantes do movimento ambientalista. Essa sobreposição entre analistas e agentes, inevitavelmente, tem distorcido as interpretações. A sociologia ambientalista explica a própria entrada do tema na agenda pública como resultado da volição e da intenção dos atores (Viola, 1987; Viola e Leis 1995[a], 1995[b], 1997; Pádua, 1997). Como a problemática não se reduz a atores “ambientalizados”, não pode ser analisada apenas do ponto de vista de seus valores e trajetórias. Cremos que, em vez de associar substantivamente difusão de valores ambientalistas à democratização, devemos refletir sobre os desafios que a questão ambiental impõe à democracia.

Ultimamente, vários autores têm problematizado essa associação imediata do ambientalismo à democracia, procurando entender as questões ambientais com base em abordagens sociológicas que iluminam outras dimensões do problema.

Uma abordagem tem argumentado que as questões ambientais são, elas próprias, resultado de um processo de construção social da percepção. Outra, ainda incipiente, caracteriza a problemática ambiental como um processo político e, como tal, essencialmente conflituoso. No primeiro caso, são cada vez mais comuns levantamentos de opinião pública para averiguar a concepção de meio ambiente e de problemas ambientais predominante no Brasil (Crespo et al., 1998). Há, também, uma boa radiografia do perfil e opiniões das lideranças ambientalistas (Crespo e Leitão, 1993). Predominam estudos dedicados à percepção de riscos ambientais, que correm na esteira do construcionismo sobretudo antropológico (Douglas e Wildavsky, 1983: 9), procurando descrever o modo pelo qual a construção científica dos riscos é incorporada pelo cidadão comum (Guivant, 1998[a]).

Existe, ainda, uma linha incipiente de estudos (Pacheco et al., 1992) reconhecendo que, ao invés de consenso, a questão ambiental tem sido o pomo de discórdia política. Vários estudos empíricos têm levantado indícios de que os conflitos contemporâneos nem se restringem a valores nem parecem em via de se extinguir. Antes, o contrário. O surgimento de pesquisas voltadas para o estudo dos conflitos ambientais -definindo o perfil social de seus participantes (Jacobi, 1995), seu processo de judicialização (Fuks, 1996; 1997), buscando novas metodologias para sua identificação e caracterização (Ibase, 1995; 1997) ou, ainda, realizando comparações entre estudos de caso (Hogan et al., 2000)³-denota, por si mesmo, a permanência do fenômeno, ainda que depois da difusão do discurso ambientalista por todos os setores da sociedade.

Em estudo anterior acerca de três grandes obras modernizadoras que envolvem consideráveis impactos físicos, econômicos e sobre os estilos de vida das regiões em que se situam, constatamos a eclosão de conflitos ambientais de dimensões nacionais (Costa, Alonso, Tomioka, 1999[a]; 1999[b]; 2000). Observamos que os conflitos ambientais não podem ser explicados apenas por recurso à dimensão valorativa e discursiva. Comparando os casos, verificamos a configuração de conflitos em contextos nos quais todos os atores envolvidos declaravam igual adesão a valores ambientalistas. Embora em larga medida o discurso de todos os atores envolvidos fosse coincidente, o episódio não se resolveu pelo diálogo aberto entre os agentes. Isto porque as posições práticas eram radicalmente distintas: enquanto o movimento ambientalista se mobilizava em oposição a uma obra, inclusive com a formação de uma coalizão ambientalista latino-americana, o governo se empenhou em sua realização. Nem sempre as estratégias e linhas de ação podem ser descritas a partir apenas da enunciação dos agentes. As disputas não giravam em torno de definições meramente. Os conflitos não eram simbólicos, se estruturavam basicamente como divergências de interesse. De outra parte, os três desfechos revelaram ser a introdução de limites políticos e morais imposta pelas instituições e leis democráticas, e não o resultado da negociação entre os agentes.

Apontar as limitações teóricas da produção das ciências sociais brasileiras e suas conseqüências políticas sobre problemas ambientais no Brasil não significa que se possa fazer “tabula rasa” da bibliografia. Entretanto, até agora, os estudos têm se concentrado na investigação dos atores, valores e percepções ambientalistas. Resta ainda uma lacuna séria a suprir: o contexto sociopolítico no qual todos estes elementos surgem, interagem, se redefinem. Acreditamos que a “questão ambiental” pode ser mais bem compreendida quando consideramos a estrutura de oportunidades políticas que condiciona o próprio surgimento dos atores, em especial do movimento ambientalista, e atentamos para a dinâmica conflituosa que se estabelece entre eles. Isto é, defendemos que a maior inteligibilidade da questão ambiental está associada à sua análise na ótica de uma sociologia dos conflitos.

Da percepção social do risco ambiental a uma sociologia dos conflitos ambientais

Conforme acabamos de ver, vários autores têm se dedicado, nos últimos anos, a estudar os conflitos ambientais. Nesse campo, há principalmente aplicações das teorias construtivistas, especialmente dos trabalhos de Hannigan e Callon, para o caso brasileiro. Fuks (1997) tem recorrido ao arsenal de conceitos dessa linha teórica - “idiomas retóricos”, “repertórios discursivos” e “pacotes interpretativos” - para argumentar que os atores constroem certas dimensões sociais como “problemas ambientais” no interior do espaço público definido como “arena argumentativa”. Os conflitos se configuram, então, em torno dessas definições, diz ele, apresentando um estudo de caso como demonstração (Fuks, 1998).

Essa perspectiva tem vantagens explicativas certamente, sobretudo na descrição das dimensões culturais de construção de certos problemas e disputas como “questões ambientais”.

Seguindo Hannigan (1995), autores como Fuks (1996;1997) e Guivant (1998[a]; 1998[b]) descrevem a constituição de problemas ambientais através de um processo de construção pública que envolve disputas técnicas e políticas. Há um processo conflituoso em meio ao qual certas questões, antes entendidas com base em categorias “econômicas”, “sociais” ou “políticas”, ganham novo significado nas arenas públicas. Assim se constrói uma percepção social de algumas dimensões da experiência coletiva como “ambientais”. Nós próprios chamamos a atenção para a construção pública de categorias como “impacto ambiental” e “risco ambiental” (Costa, Alonso e Tomioka, 2000).

Este é um aspecto importante da questão, mas se confina, digamos, à sua dimensão fenomenológica. Essa estratégia teórico-metodológica restringe o objeto de estudo a discursos. Embora tecnicamente impecável, não permite

analisar as dimensões práticas dos conflitos. Tal dimensão não é empiricamente irrelevante, como já argumentamos. Acreditamos que cabe, sim, analisar a disputa valorativa em meio à qual os agentes constroem problemas como ambientais, conforme aconselha a perspectiva construcionista; entretanto, esta é apenas uma faceta dos conflitos ambientais. Outras dimensões do fenômeno são cruciais para a sua compreensão.

O programa de pesquisa proposto por Pacheco e seus colegas (1992) nos parece um bom ponto de partida para discutir a relação entre os problemas ambientais e a dinâmica dos conflitos sociais nos espaços urbanos. O cerne do argumento é que os problemas ambientais urbanos mobilizam uma grande variedade de atores, e que as clivagens – sociais, econômicas e políticas – podem variar em função da natureza dos problemas, envolvendo, assim, diferentes atores coletivos em diversas configurações conflituosas. Por isso, afirmam, não se pode tomar a questão ambiental como uma nova versão das relações capital/trabalho. Sua proposta analítica consiste em tomar em conjunto aspectos estruturais, grupais e individuais que condicionam a ação. Assim é possível, argumentam, dar conta tanto dos conflitos de interesse quanto de dimensões culturais, tais como o estilo de vida (Pacheco et al., 1992: 48). O foco analítico se volta, portanto, para a esfera pública, simultaneamente arena de conflito e negociação entre atores. Os conflitos ambientais são definidos, então, a partir de três componentes cruciais: “Ação (dos agentes envolvidos), determinação (dos processos estruturais) e mediações (políticas e culturais)” (Pacheco et al., 1992: 49).

As propostas de Fuks e Pacheco nos parecem elucidativas, cada qual, de uma dimensão do fenômeno. Concordamos com os construtivistas, quando afirmam ser preciso considerar a dimensão cognitiva da questão, e com Pacheco e colaboradores, quando registram ser a dimensão prática crucial. Entretanto, a perspectiva estruturalista e a culturalista fornecem explicações parciais dos conflitos. Uma análise política é incompleta se for unidimensional, seja esta dimensão a economia ou a cultura. Igualmente o é se privilegiar apenas um dentre vários atores em interação, seja a “sociedade civil”, seja o Estado.

Uma abordagem simultânea da dimensão cultural e política e dos condicionamentos estruturais dos conflitos ambientais implica uma sociologia do conflito ambiental. Para formular nossa abordagem, recorremos ao modelo de análise da política contenciosa (Tarrow, 1994; Tilly, 1978) ou da chamada Escola do Processo Político.

A própria definição do objeto como “conflito” supõe considerar a interação entre diversos grupos de agentes. Essa interação pode ser cooperativa, com a formação de alianças entre agentes; geralmente, no entanto, ela é conflituosa. As disputas ocorrem em torno do controle de bens e recursos ou do poder de gerar e impor certas definições da realidade. Isto é, os conflitos se estruturam simultaneamente em torno de interesses e de valores. O próprio processo

conflituoso constitui os agentes, possibilitando a formação de novas identidades, inexistentes quando do início do processo. Chegamos ao fulcro desse modelo de análise: o fator crucial é o tempo. Os conflitos têm história; não é possível compreendê-los considerando apenas a configuração presente da ação coletiva. A produção de alianças, adesão a valores, criação/redefinição de identidades, não é estática; é processual.

Tal perspectiva compreende, assim, uma sociologia da ação, sem abrir mão do enfoque sociohistórico mais amplo que o estruturalismo oferece. O foco dessa linha teórica recai então sobre o *processo político* -donde o nome da escola-, e não sobre eventos; incide sobre trajetórias, e não sobre atores.

Nessa corrente teórica, o processo político é compreendido a partir de quatro conceitos básicos. O conceito de “*estrutura de oportunidades políticas*” visa a descrever mudanças no ambiente político que dilatam ou restringem as opções de ação disponíveis para os agentes⁴. Incluem-se, neste caso, tanto constrangimentos estruturais, processos sociohistóricos de longa duração que alteram as relações entre Estado e sociedade, quanto conjunturais, mudanças do padrão político-institucional, no contexto político interno e externo. Assim, o contexto sociohistórico dá a chave de compreensão para a formação de um conflito.

O segundo conceito relevante é o da *lógica da ação coletiva*, isto é, o modo pelo qual o entrecruzamento não-intencional de diversas linhas de ação configura padrões de organização e comportamento. Agentes, instituições e processos não são “dados” ou condições iniciais. Não há atores ou categorias fixas, como “classes”. Os agentes coletivos se formam durante o próprio processo contencioso e em oposição uns aos outros. A “identidade” é também um resultado do conflito, e não um motivador dela.

Estudar um conflito, nessa ótica, impõe, então, considerar não apenas os interesses envolvidos, mas, sobretudo, o processo de mobilização, ou seja, como cada grupo adquire controle coletivo sobre os recursos necessários à sua ação. Para agir politicamente, cada grupo precisa se organizar, gerar uma estrutura de grupo e redes de interdependência, ou *estruturas de mobilização*. Assim, por exemplo, “movimento social” é uma forma de mobilização dentre várias possíveis (como partidos); sua existência é contingente, depende de um processo de seleção empreendido propositadamente pelos agentes.

O quarto conceito abrange variáveis culturais. Para agir, os atores orientam suas ações baseando-se em um estoque de formas de interpretação da realidade que encontram disponível em seu tempo. O conceito de *repertório contencioso* descreve o conjunto de formas de agir e de pensar disponíveis em uma certa sociedade, em um dado momento histórico. Entretanto, nem todos os agentes mobilizam todos os recursos culturais ou o fazem da mesma maneira. O conceito fenomenológico de *frame* engloba o modo pelo qual os agentes atribuem sentido

à própria ação, recorrendo a valores e recursos simbólicos, como *slogans* e nomes. Assim, tanto o repertório cultural existente limita o leque de identidades possíveis como o modo pelo qual os agentes se identificam altera progressivamente o próprio repertório.

Este arsenal teórico descreve dimensões da ação coletiva, privilegiando sua dinâmica. Mudanças no repertório e nas estruturas de mobilização normalmente ocorrem em resposta a mudanças macrossociais que alteram a estrutura de oportunidades políticas.

A aplicação deste *approach* para a análise da questão ambiental tem sido já empreendida por alguns autores. Escrevendo nessa linha, Kriesie e colaboradores (1995) argumentam que o surgimento dos chamados “novos movimentos sociais”, como o movimento ambientalista, está relacionado a mudanças lentas, mas profundas, na estrutura do conflito de uma dada sociedade. A mudança social, produzida pelos processos macrohistóricos de modernização, impacta as formas de conflito indiretamente, porque reestrutura as relações de poder. Assim, o processo político é o mediador entre o nível macrossociológico e a dinâmica dos conflitos (Kriesie et al., 1995: XIII). O entendimento dos conflitos ambientais e da constituição de atores ambientais exige a consideração do processo político. Os autores propõem o conceito de “*contexto de interação*” como forma de especificar os mecanismos que vinculam o nível macro com o nível da ação coletiva do movimento de atores.

Cremos que tal perspectiva nos habilita a explicar a configuração de uma questão ambiental no Brasil de maneira a englobar dimensões que as interpretações disponíveis têm menosprezado e esboçar um novo programa de pesquisa.

Agenda de pesquisa: questão democrática e conflitos ambientais

Tomar a questão ambiental brasileira do ângulo da Escola do Processo Político significa, antes de tudo, redefinir o próprio fenômeno. O problema a investigar não são interfaces entre “ambientalismo”, de um lado, e democracia, de outro, mas os “conflitos ambientais”. Trata-se, assim, de investigar, à luz do esquema teórico brevemente apresentado, uma modalidade específica de conflito social: o ambiental.

Uma interpretação da questão ambiental brasileira desse ponto de vista exige uma pesquisa empírica de fôlego. Por ora, oferecemos apenas uma indicação de quais elementos do contexto brasileiro deveriam ser privilegiados em uma investigação do conflito ambiental à luz dessa perspectiva sociológica.

A *estrutura de oportunidades políticas* que permite a constituição da pauta ambientalista no Brasil se organiza a partir do próprio processo político de

redemocratização. Esse processo gerou importantes mudanças no cenário político brasileiro que criaram um espaço público permeável a demandas ambientalistas. A nova ordem constitucional produziu o *arcabouço jurídico-institucional* que regulamenta a questão ambiental no país: agências de controle ambiental, legislação ambiental de punição de delitos ambientais e institutos legais de mediação e regulação dos conflitos, particularmente o Ministério Público; fóruns participativos de tomadas de decisão. A legislação ambiental brasileira regula obras com impacto ambiental potencial e prevê uma rede institucional de controle e fiscalização de seu cumprimento. Uma dimensão fundamental a ser considerada é a inclusão do direito a um meio ambiente saudável como parte dos direitos “difusos”, coletivos, cujos mecanismos de garantia e proteção são a Ação Popular e a Ação Civil Pública e uma instituição, o Ministério Público⁶. Esses elementos limitam e habilitam diferentes atores a participar de uma arena de disputas ambiental.

Outra dimensão importante para a configuração de uma agenda ambiental brasileira é constituída pelas mudanças no cenário internacional, com a crescente generalização de um discurso em favor da preservação ambiental. A série de conferências da ONU acerca de questões sociais e, particularmente, a Rio-92 ilustram como o contexto político internacional condiciona a problemática brasileira.

Essa estrutura de oportunidades políticas circunscreve quais são os agentes do conflito ambiental. Ao definir os recursos e arenas de decisão, impede alguns e habilita outros agentes a participar dos debates sobre a questão ambiental.

Três agentes se constituem com a questão ambiental. Um movimento social ambientalista é o primeiro protagonista do conflito ambiental. Surge como parte de uma série de movimentos sociais populares, reivindicando uma cesta de demandas - reformas sociais e expansão da participação política, sobretudo. De outro lado, o acesso ao conhecimento técnico, indispensável ao debate sobre temas ambientais, dá relevância a dois outros agentes. A estrutura burocrático-legal dos anos 90 produz uma judicialização da questão, que transforma os membros do ministério público em participantes automáticos. Por sua parte, a cientificidade envolvida na definição dos “riscos ambientais” abre espaço para peritos, cientistas tanto naturais, como os biólogos, quanto sociais, como os antropólogos.

Cada agente, por sua vez, recorre a diferentes *estruturas de mobilização*. O momento histórico em que a questão ambiental emerge no Brasil favorece a forma de mobilização “*movimento social*”. A ditadura promoveu essa forma de mobilização ao limitar os recursos institucionais tradicionais, inclusive os partidos. Com a redemocratização, ocorrem mudanças. A ênfase da “Agenda 21”, documento resultante da Rio-92, em arenas locais e transnacionais e em espaços públicos não-estatais, como fóruns para discussão da questão ambiental, leva à escolha de “*organizações não governamentais*” como estruturas de mobilização

ideais, já que capazes de transitar nos dois níveis. Esses fatores ajudam a explicar a fraqueza do partido verde no Brasil, *vis-à-vis* as ONGs ambientalistas.

A estrutura de oportunidades políticas e as estruturas de mobilização evidenciam que não são apenas elementos discursivos internos às arenas públicas que definem os conflitos ambientais. O acesso a recursos materiais e políticos é crucial. Todavia, a dimensão cultural está longe de ser irrelevante na definição da problemática ambiental. A respeito desse ponto, a aplicação da perspectiva construtivista tem se mostrado bastante produtiva: sem a construção de uma definição da “natureza” como “meio ambiente” e de certos problemas sociais como ambientais, nenhum conflito ambiental se estabelece.

A partir do construtivismo, é possível entender melhor as estratégias de mobilização do ministério público e dos “cientistas ambientais”: ambos fazem uso político de suas especialidades. A nova configuração jurídico-legal franqueia ao MPa posição de principal intérprete da lei ambiental. Seus membros recorrem a uma série de ações, recursos, processos, embargos, como recursos de mobilização política. Os “peritos” das “ciências ambientais”, igualmente, recorrem a conceitos e formas de mensuração de valor “científico” que lhes asseguram locução privilegiada. Nos dois casos, a imprensa é o recurso principal, por meio da qual aparecem nas arenas políticas como “autoridades”.

O construtivismo ajuda, assim, a entender a *agency* e as operações cognitivas, simbólicas, que lhe são inerentes, como a própria autonegação de certos grupos como “ambientalistas” e de certos conflitos como “ambientais”. Também permite reconstruir os processos pelos quais os agentes brasileiros *reinterpretam* a tradição romântica de valorização da natureza (Pádua, 1997) e *aprendem* com seus congêneres estrangeiros, incorporando seletivamente certas categorias e interpretações.

O construtivismo parece, porém, pouco habilitado para explicar a partir do quê os agentes constroem e reconstróem suas percepções, seus valores e interpretações. Para tanto, a noção de *repertório* nos parece mais adequada: permite detectar a existência de um estoque social de símbolos e valores que podem ser mobilizados pelos agentes na construção de suas percepções. O repertório ambientalista brasileiro é composto em parte por influência externa, como argumenta Viola (1987; 1995[a]; 1995[b]; 1997), uma vez que a constituição de uma questão ambiental aqui é tardia em comparação com a Europa e os Estados Unidos⁶. De outra parte, o repertório também se compõe de categorias e preocupações relacionadas à natureza, desde há muito presentes no pensamento político brasileiro, como demonstra Carvalho (1998).

Acreditamos que a estrutura de oportunidades políticas, as estruturas de mobilização e o repertório contencioso são os elementos fundamentais para compreender o processo de constituição dos conflitos ambientais e explicar sua

dinâmica efetiva. É crucial compreender que os principais agentes do debate e dos conflitos ambientais não estão dados. Tanto agentes quanto alianças se constituem e se refazem ao longo do processo político. A estrutura de oportunidades esclarece a hierarquia das posições e descreve distintas linhas de ação para agentes desiguais. Define, afinal de contas, quais grupos conseguem acesso à própria posição de enunciação pública e, por decorrência, quais se vêem privados deste privilégio.

A combinação de perspectivas nos parece a maneira mais profícua de analisar o problema ambiental. O construtivismo nos permite entender como se nomeia uma questão “ambiental” ou um conflito “ambiental”. A Escola do Processo Político nos dá as ferramentas para investigar por que e em que condições disputas práticas e embates valorativos entre os agentes ocorrem. Corrige, assim, o nivelamento de poder e recursos entre os agentes que uma análise apenas discursiva induz a comprar.

Essas grandes dimensões permitem conciliar em uma mesma análise os componentes histórico-estruturais, políticos e culturais de uma questão ambiental. Assim se entrelaçam política, cultura e história. Compõe-se um quadro mais complexo, multifacetado, dinâmico, da problemática ambiental.

Como adiantamos, temos aqui apenas o esboço de uma agenda, um programa de pesquisa ainda por aprimorar e desenvolver. Usando o *approach* que delineamos acima, visamos a investigar a dinâmica dos conflitos ambientais brasileiros: qual o contexto sociopolítico no qual se formam; quais seus temas e agentes típicos; quais são os interesses e valores intervenientes; a que formas de organização e estruturas de mobilização os agentes recorrem? Quais são as formas de mediação e arbitragem desses conflitos? Se pudermos responder a tais perguntas, poderemos classificar os conflitos ambientais em gêneros e avançar rumo à pesquisa comparada. Este passo permitiria tipificar e comparar os movimentos ambientalistas, os processos decisórios; as políticas ambientais e a dinâmica dos conflitos entre diferentes países e regiões.

Uma agenda dessa magnitude não pode ser esgotada com estudos monográficos, nem deve ficar restrita às singularidades brasileiras. O desdobramento lógico de uma teoria da ação coletiva aplicada aos conflitos ambientais é o avanço em direção aos estudos comparados.

Bibliografia

- Alexandre, Agripa Faria 1999 “Atores e conflitos sócio-ambientais na esfera jurídico-estatal de Florianópolis – SC”, in *Revista de Ciências Humanas* (Florianópolis: Universidade de Santa Catarina) Nº 26.
- Alonso, A. & V. Costa 2001 “The Environmental Field in Brazil: an analysis of the social sciences literature”, in *DRC Working Paper* (Brighton: Development Research Center on citizenship, participation and accountability, University of Sussex).
- Alonso, Angela e Sérgio Costa e Sérgio Tomioka, 1999 “Negociando riscos: expansão viária e conflitos ambientais no Brasil”, in *Novos Estudos Cebrap* (Brasil) Novembro.
- Alonso, Angela e Sérgio Costa e Sérgio Tomioka 1999 “AResignificação das Tradições: o Acre entre o rodoviarismo e o socioambientalismo”, in *Cadernos IPPUR* (Rio de Janeiro) Ano XIII, Nº 2, Ago/Dez.
- Alonso, Angela e Sérgio Costa e Sérgio Tomioka 2001 *Modernização negociada: expansão viária e riscos ambientais no Brasil* (Brasília: Cebrap/Ibama).
- Braga, Tânia Moreira 2000 “Risco e conflito ambiental sob o signo da (mono) indústria: um estudo sobre políticas ambientais na bacia do Rio Piracicaba, Minas Gerais”, in Aroldo Torres e Heloisa Costa *População e meio ambiente* (São Paulo: Senac).
- Buttel, F. 2000 “World Society, the Nation-State, and Environmental Protection: Comment on Frank, Hironaka, and Schofer”, in *American Sociological Review* (Washington) Vol. 65, Nº 1, February.
- Carvalho, J. M. 1998 “O motivo edênico no imaginário social brasileiro”, in *Revista Brasileira de Ciências Sociais* (São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais) Nº 38, Outubro.
- Costa Ferreira, Lúcia da 1996 *A Floresta Intransitiva: Conflitos e Negociações na Mata Atlântica, SP*, Tese de Doutorado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade Estadual de Campinas, Crespo, S. et al. 1998 *O Que o brasileiro pensa do meio ambiente, do desenvolvimento e da sustentabilidade* (Rio de Janeiro: MAST/ISER/MMA/MCT).
- Crespo, S. & P. Leitão 1993 *O Que o brasileiro pensa da ecologia - O Brasil na era Verde; Idéias Verdes?* (Rio de Janeiro: MAST/CNPQ/CETEM/AGENCIA ESTADO/ISER).
- Douglas, M. 1994 *Risk and Blame. Essays in Cultural Theory* (Londres, Nova Iorque: Routledge).

Douglas, M. & A. Wildavsky 1983 *Risk and Culture* (Berkeley: Univ. of California Press).

Frank, J. D., Hironaka, A. and Schofer 2000 “The Nation-State and the Natural Environment over the Twentieth Century”, in *American Sociological Review* (Washington) Vol. 65, N° 1, February.

Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais para o meio ambiente e o desenvolvimento 1997 *Brasil Século XXI - Os Caminhos da Sustentabilidade-Cinco Anos Depois da Rio-92* (Rio de Janeiro: FASE).

Fuks, M. 1996 “Do discurso ao recurso: uma análise da proteção judicial ao meio ambiente do Rio de Janeiro”, in Ferreira, Leila da Costa e Eduardo Viola (orgs.) *Incertezas de sustentabilidade na globalização* (Campinas: UNICAMP).

Fuks, M. 1997 *Arenas de ação e debate públicos: os conflitos ambientais e a emergência do meio ambiente enquanto problema social no Rio de Janeiro (1985-1992)* (Rio de Janeiro: Iuperj) Tese.

Guimarães, R. 1997 “Desenvolvimento sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas”, in Becker, B. & Mariana Miranda *A geografia política do desenvolvimento sustentável* (Rio de Janeiro: Editora da UFRJ).

Guivant, J. 1998[a] “A trajetória da análise de risco. Da periferia ao centro da teoria social”, in *BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais* (Rio de Janeiro) N° 46.

Guivant, J. 1998[b] “Conflitos e Negociações nas Políticas de controle ambiental: o caso da suinocultura em Santa Catarina”, in *Ambiente e Sociedade* (Florianópolis) Ano I, N° 2.

Habermas, J. 1990 “New Social Movements”, in *Telos* (Nova York) N° 49.

Hannigan, J. 1995 *Environmental Sociology. A social constructionist perspective* (Londres: Routledge).

Holmes, Tim e Ian Scoones 2000 “Participatory Environmental Policy Processes: experiences from north and south”, in IDS (Institute of Development Studies) *Working Papers Serie* (Brighton) N° 113.

Hogan, Daniel 2000 “A relação entre população e ambiente: desafios da demografia”. In: Torres, Aroldo e Costa, Heloisa *População e meio ambiente* (São Paulo: Senac).

IBASE 1995 *Conflitos Sociais e meio ambiente - desafios políticos e conceituais* (Rio de Janeiro: Ibase).

IBASE 1997 *Conflitos ambientais no Brasil. Natureza para todos ou somente para alguns?* (Rio de Janeiro: Ibase).

Inglehart, R. 1981 "Post-materialism in an environment of insecurity", in *American Political Science Review* (Michigan) Vol. 75, N° 4, December.

Jacobi, P. 1995 "Conflito ambiental urbano", in IBASE *Conflitos Sociais e meio ambiente - desafios políticos e conceituais* (Rio de Janeiro: Ibase).

Kriese, H.; R. Koopmans; J.W. Duyvendak & M. G. Giugni 1995 *New Social Movements in Western Europe. A comparative analysis* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

La Rovere, Emílio L. 1992 "A Sociedade tecnológica, a democracia e o planejamento", in Goldenberg, Mirian (coordinador) *Ecologia Ciência e Política* (Rio de Janeiro: Revan).

Lafferty, W. M. & J. Meadowcroft 1996 "Democracy and the environment: congruence and conflict - preliminary reflections", in Lafferty, W. M. & J. Meadowcroft (editores) *Democracy and the environment. Problems and Prospects* (Northampton: Cheltenham/Lyme, Edward Elgar).

Leis, H. 1997 "Um modelo político-comunicativo para superar o impasse do atual modelo político-teórico de negociação ambiental no Brasil", in *Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas* (São Paulo: Cortez/Fundação Joaquim Nabuco).

Leis, H. & J. Amato, 1995 "O ambientalismo como movimento vital: análise de suas dimensões histórica, ética e vivencial", in Cavalcanti, C. (organizador) *Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável* (São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco).

Mater Natura 1996 *ECOLISTA - Cadastro Nacional de Instituições ambientalistas* (Curitiba: Mater Natura/WWF).

Melucci, A. 1996 *Challenging Codes. Collective Action in the Information Era* (Cambridge: Cambridge Univ. Press).

Neder, Ricardo Toledo 1990 *A crise do industrialismo no Brasil: atores sociais, empreendimentos tecnológicos e conflitos ambientais em municípios do interior. Anotações a partir de um estudo de caso em São Paulo*. Texto colocado em circulação por ocasião do XIV encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Caxambu: Outubro.

Ottmann, G. 1995 "Movimentos sociais urbanos e democracia no Brasil", in *Novos Estudos Cebrap* (São Paulo) N° 41, Março.

Pacheco, Regina Silvia; Maria Rita Loureiro; Henrique Fingerhann; Helena Kerr do Amaral e Silvia MacDowell 1992 “Atores e conflitos em questões ambientais urbanas”, in *Espaço e Debates* (São Paulo) Nº 35.

Pádua, J. A. 1991 “O nascimento da política verde no Brasil: fatores endógenos”, in Leis, H. (organizador) *Ecologia e política mundial* (Rio de Janeiro: Fase/ PUC-Rio).

Pádua, J. A. 1997 *A degradação do berço esplêndido. Um estudo sobre a tradição original da ecologia política brasileira. 1786/1888* (Rio de Janeiro: Iuperj) Tese.

Portanova, R. S. 1994 *Ecologie et politique au Brésil* (Paris: Universidade de Paris VIII) Tese.

Sader, Emir 1988 *Quando novos personagens entram em cena* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).

Schattschneider, E. E. 1975 *The Semisovereign People. A Realist's View of Democracy in America* (Illinois: The Dryden Press).

Senado Federal - Primeira Secretaria - Subsecretaria de Edições Técnicas 1996 *Meio Ambiente (legislação)* (Brasília) Vol. I e II (Documentação e Informação Coordenação de Publicação).

Tarrow, Sidney 1994 *Power in movement. Social Movements, Collective Action and Politics* (Cambridge: Cambridge University Press).

Tilly, C. 1978 *From Mobilization to Revolution* (Michigan: Reading M.A., Addison-Wesley).

Vieira, P. F. 1992 “A problemática ambiental e ciências sociais no Brasil: 1980-1990”, in *BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais* (R. J.) Nº 33.

Viola, E. 1987 “O movimento ecológico no Brasil (1974-1986); do ambientalismo à ecopolítica”, in *Revista Brasileira de Ciências Sociais* (São Paulo) Vol. 1, Nº 3.

Viola, E. & H. Leis 1995[a] “Evolução das políticas ambientais no Brasil, 1971-1991: do bissetorialismo preservacionista para o multissetorialismo orientado para o desenvolvimento sustentável”, in Hogan, J. & P. F. Vieira (orgs.) *Dilemas do socioambientalismo e desenvolvimento sustentável* (Campinas: Unicamp)

Viola, E. & H. Leis 1995[b] “O ambientalismo multissetorial no Brasil para além da Rio-92: o desafio de uma estratégia globalista viável”, in Viola, E. et alli. *Meio Ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios para as ciências sociais* (São Paulo: Cortez).

Viola, E. & H. Leis 1997 “Agenda 21 diante dos desafios da governabilidade das políticas públicas organizações não governamentais”, in Cordani, Marcovith e Salati (orgs). *Rio 92 cinco anos depois* (São Paulo: Alphagraphics).

Notas

1 Este item se baseia largamente em um “review paper” (Alonso & Costa, 2001) sobre a literatura ambiental brasileira, elaborado no âmbito do Development Research Centre on Citizenship, Participation and Accountability, sediado no Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex.

2 Em outro texto, Viola e Leis (1995[a]) falam em oito setores. Há, inclusive, um termo derivado na bibliografia, o “transetorialismo” (Crespo *et al.*, 1998).

3 Nos últimos anos, têm surgido vários estudos acerca de conflitos. Veja-se, por exemplo, Costa (1996), Neder (1990.), Alexandre (1999).

4 “(...) dimensões consistentes -mas não formais ou permanentes- do ambiente político que fornece incentivos para pessoas se engajarem em ações coletivas por afetarem suas expectativas de sucesso ou fracasso” (Tarrow, 1994: 85).

5 A Ação Popular (Lei 4.717/65) permite a qualquer cidadão requisitar a anulação de ato lesivo ao meio ambiente e a Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) estabelece responsabilidade por danos causados à fruição de qualquer direito difuso, instituindo assim a categoria de “crimes ambientais” (Senado Federal, 1996). Já a Lei 7.347/85, art. 5, II, converteu a esfera de ação do Ministério Público de modalidade de defesa de interesses individuais para interesses difusos.

6 A dimensão social da questão ambiental é muito maior na pauta brasileira que na estrangeira, marcada na origem por “valores pós-materiais” (Inglehart, 1981).

*La Ecología Política de la Integración: reconstrucción de la ciudadanía y regionalismo autónomo **

Eduardo Gudynas**

En América Latina han tenido lugar importantes cambios en la integración regional y la vinculación económica. Bajo la forma de acuerdos de libre comercio o mercados comunes, se ha avanzado en nuevas formas de vinculación entre los países. Uno de los casos destacados es el Mercado Común del Sur (Mercosur), que se inició en 1991 con la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más recientemente se han sumado Bolivia y Chile como miembros asociados a nivel del libre comercio.

Los acuerdos regionales, y entre ellos el Mercosur, representan un proceso de integración basado esencialmente en el plano económico, sin constituir una opción diferente a los estilos de desarrollo actuales, los cuales poseen variados impactos sociales y ambientales. A pesar de la proliferación de estudios sobre el Mercosur y otros acuerdos de integración, existen muy pocas evaluaciones desde el punto de vista de la ecología política. En las líneas que siguen se analiza la política ambiental de la integración en el Mercosur, y las limitaciones que ésta impone para la generación de una estrategia de desarrollo. Seguidamente se discute una propuesta alternativa considerando el concepto de ciudadanía, la democratización de la integración y la construcción de una estrategia de desarrollo sostenible para el Cono Sur.

* El presente artículo es parte del programa en Ecología, Desarrollo y Democracia en la Integración Regional realizado con apoyo de la Fundación C. S. Mott.

** Magister en Ecología Social. Investigador del CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social): claes@adinet.com.uy

*La Ecología Política de la Integración: reconstrucción de la ciudadanía y regionalismo autónomo **

Eduardo Gudynas**

En América Latina han tenido lugar importantes cambios en la integración regional y la vinculación económica. Bajo la forma de acuerdos de libre comercio o mercados comunes, se ha avanzado en nuevas formas de vinculación entre los países. Uno de los casos destacados es el Mercado Común del Sur (Mercosur), que se inició en 1991 con la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más recientemente se han sumado Bolivia y Chile como miembros asociados a nivel del libre comercio.

Los acuerdos regionales, y entre ellos el Mercosur, representan un proceso de integración basado esencialmente en el plano económico, sin constituir una opción diferente a los estilos de desarrollo actuales, los cuales poseen variados impactos sociales y ambientales. A pesar de la proliferación de estudios sobre el Mercosur y otros acuerdos de integración, existen muy pocas evaluaciones desde el punto de vista de la ecología política. En las líneas que siguen se analiza la política ambiental de la integración en el Mercosur, y las limitaciones que ésta impone para la generación de una estrategia de desarrollo. Seguidamente se discute una propuesta alternativa considerando el concepto de ciudadanía, la democratización de la integración y la construcción de una estrategia de desarrollo sostenible para el Cono Sur.

* El presente artículo es parte del programa en Ecología, Desarrollo y Democracia en la Integración Regional realizado con apoyo de la Fundación C. S. Mott.

** Magister en Ecología Social. Investigador del CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social): claes@adinet.com.uy

Reformas económicas y despolitización

La ola de reformas de inspiración neoliberal que han vivido con diferente intensidad, y a diferentes ritmos, los países del Mercosur, desencadenó una ampliación del mercado como escenario privilegiado en las estrategias de desarrollo. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, y más allá de los matices que existen entre los países del Cono Sur, el reduccionismo mercantil no asegura los mejores medios para lograr una buena gestión ambiental, no ha logrado detener el deterioro ambiental, y tampoco ha revertido la situación de pobreza. En el caso de la gestión ambiental, el apego a instrumentos y mecanismos económicos se ha ensayado de variadas maneras en diferentes países (por ejemplo, sistemas de privatización del agua para riego, cuotas de riego, privatización de sistemas de saneamiento, cuotas de pesca, etc.), con malos resultados. En otros casos, el propio componente ambiental del desarrollo es ignorado: “la larga marcha” del Banco Mundial, por ejemplo, si bien ofrece varios matices con una postura neoliberal pura, en tanto requiere de la presencia estatal en ciertas esferas (especialmente, en asegurar el derecho de propiedad, el cumplimiento de contratos, provisión de servicios básicos en seguridad, salud y educación), apunta a “ingresar en el mercado” a quienes están por fuera, a extender los derechos de propiedad, y olvida completamente como factor clave los aspectos ambientales (un análisis más detallado se ofrece en Gudynas, 1997).

Bajo este marco, los esfuerzos de gestión ambiental han quedado reducidos a aportes técnicos, usualmente instrumentales y que apuntan a la reducción o mitigación de los impactos ambientales. La contabilización de los recursos naturales, si bien posee aspectos positivos (como poner en evidencia los costos económicos de ciertos impactos ambientales), conlleva otros negativos ya que es permisiva con la destrucción del patrimonio natural toda vez que resulte económicamente beneficioso. Pero el reduccionismo mercantil tiene otro efecto negativo: el énfasis en una gestión técnica que impide una discusión política amplia de los temas ambientales. En efecto, bajo esa perspectiva existiría un gerenciamiento ambiental, el cual debe estar en manos de técnicos, y por lo tanto no habría una dimensión política (no existiría una política ambiental). De hecho, la irrupción del debate público es vista como un hecho negativo que “politiza” un problema que sería esencialmente científico-técnico.

Esta erosión de la dimensión política de la política ambiental es potenciada por la retracción del estado en varios frentes y, entre ellos, el ambiental. En el caso de la gestión ambiental ha tenido lugar un efecto paradójico, ya que en una primera etapa de las reformas de inspiración neoliberal en varios países se crearon secretarías o ministerios del ambiente, y se sancionaron importantes paquetes legislativos (el caso extremo es el de Bolivia bajo la administración de Sánchez de Lozada con su innovador Ministerio de Desarrollo Sostenible). Actualmente se vive un “efecto rebote”, donde se da una segunda ola de retracción estatal en la

temática ambiental (en este caso, el ejemplo es el desmembramiento de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano por la administración de Fernando de la Rúa en Argentina, o tolerar la débil aplicación de normas ambientales, como sucedió con la administración de H. Banzer en Bolivia).

Se observa entonces que esta retracción del estado no sólo es una marcha atrás de la presencia de reparticiones gubernamentales en la gestión ambiental, sino que también afecta al propio entramado institucional y normativo. Es importante advertir que esto implica reducir el papel del “Estado como ley”, entendido en el sentido de O’Donnell (1993) como el marco normativo que abarca a todos y que debe ser atendido, así como la legitimación que éste ofrece. Dado que ese papel se desvanece, se cae en una situación de opuestos, donde unos pocos detentan poderes de hecho (sea en manos de personas, empresas y corporaciones, o incluso reparticiones estatales), mientras las mayorías carecen de salvaguardas legales e institucionales para defenderse. Este problema es enfrentado regularmente por las organizaciones ambientalistas, en especial en varias zonas rurales o silvestres del Cono Sur, donde se encuentran actividades de muy alto impacto ambiental (típicamente en los sectores petrolero, minero, forestal y agropecuario), amparados por grupos empresariales y políticos, contra los que es muy difícil actuar, e incluso agravados por el accionar de reparticiones estatales que ignoran o traban las medidas ambientales. Si bien los marcos legales existen, éstos pocas veces se aplican, y cuando se elevan las denuncias los procesos no terminan ni en sanciones ni en restituciones.

Esta situación ofrece varias paradojas. Si bien se mantienen ciertas prácticas y derechos políticos, como la votación, se olvidan y violan otros derechos, no existen mecanismos de acceso a la información ni canales de participación, y aquellos que protestan o demandan no son contemplados en unos casos, o bien corren riesgos de represalias.

Bajo esta situación no es raro que el tema ambiental estalle bajo la forma de conflictos sociales. En los casos en que se manifiestan protestas ciudadanas, éstas son combatidas por el propio estado. A pesar de sus debilidades, el estado sigue siendo capaz de contener y encauzar las expresiones ciudadanas (cumpliendo el papel de “Estado tapón”). Esta relación tensa, a veces conflictiva, se caracteriza por mecanismos de encauzamiento y control de los nuevos movimientos ciudadanos (véase Gudynas y Santandreu, 1997).

Este reduccionismo del estado, la erosión de la política y, por lo tanto, las enormes trabas que se evidencian para generar una estrategia en desarrollo sostenible, se dan en países que guardan las formalidades democráticas. En el Cono Sur se vota regularmente, y son comunes las declaraciones de principios liberales, aunque los demás derechos liberales están ausentes. Las nuevas circunstancias que se viven muestran que el papel del ciudadano queda reducido al de consumidor, los derechos de las personas aparecen como derechos de los consumi-

dores, y se supone que la asignación eficiente de los recursos se hará esencialmente a nivel del mercado. Este deterioro del papel del ciudadano y del debate democrático cala sobre una situación que ya presentaba variados aspectos negativos: unos por herencia de los regímenes autoritarios en los países del Mercosur, otros por la crisis de ideologías político-partidarias y la incapacidad de renovación con propuestas aglutinantes, y finalmente otros por una propia matriz cultural autoritaria que no puede olvidarse.

De esta manera, los gobiernos no buscan construir estrategias alternativas de desarrollo, y menos aún en temas ambientales. Como ello no sucede a nivel nacional, la misma situación se repite a nivel regional, donde el Mercosur ofrece una serie de limitaciones importantes en la temática ambiental, pero más aún en la posibilidad de generar otros estilos de desarrollo.

Insustentabilidad del Mercosur

Actualmente el Mercosur reproduce en grandes líneas los estilos de desarrollo de toda América Latina, de apropiación de la naturaleza desde una perspectiva antropocéntrica e instrumental. Su perfil exportador está basado en recursos primarios. En efecto, con la excepción de Brasil, todos los países del Mercosur poseen altos niveles de exportaciones primarias (minerales, petróleo, gas natural, agropecuaria, etc.), las cuales son en realidad recursos naturales sin procesar o con poco procesamiento. Estudios más detallados muestran que en países como Chile o Bolivia, hasta un 80% de sus exportaciones están basadas en recursos naturales. Este hecho, a su vez, está asociado a un alto nivel de tierras apropiadas para usos humanos (sean extractivos, agropecuarios o urbanos; ver Cuadro 1). Tanto en el Mercosur como en otras regiones, las reformas estructurales basadas en el mercado, en términos generales, han empeorado la situación ambiental (Schapper, 1999). Estos factores desencadenan enormes impactos ambientales, que van desde la pérdida de áreas silvestres a crecientes niveles de erosión y contaminación, y a pesar de las tasas de crecimiento económico observadas los problemas de pobreza y marginalización no se redujeron. En palabras más simples, ni siquiera se ha cumplido la repetida excusa de la destrucción ambiental provisoria para poder liberarse de la pobreza.

Cuadro 1
**Principales indicadores de comercio exterior relacionados con el
 sector agropecuario**

País	Exportaciones totales millones U\$S	Bienes primarios (%)	Total tierras apropiadas (%)
Argentina	26.263	31,3	62
Bolivia	1.626	47,8	27
Brasil	52.479	19,7	29
Chile	16.296	30,9	23
Paraguay	1.141	57,5	60
Uruguay	4.226	17,4	85
Sudamérica	180.406,2	33,0	35

Fuente: datos para 1997, basado en CEPAL, y de CLAES basado en el World Resources Institute.

El Mercosur podría haberse convertido en un espacio para lograr un intercambio regional de mayor contenido en valor agregado, menor uso de *commodities*, y una cobertura institucional novedosa en materia ambiental. Pero la estructura actual del Mercosur, así como los organismos que posee, no permiten atender adecuadamente los temas ambientales. Asimismo, los estilos de desarrollo que siguen sus miembros, y el resultante que emerge a nivel del mercado, son incompatibles con el desarrollo sostenible, sea en las acepciones más moderadas (del tipo de sustentabilidad débil) como en las más exigentes (ejemplificadas por la sustentabilidad fuerte) (Gudynas, 2000[b]).

Incluso se vive una situación donde gobiernos o grupos corporativos con menores aspiraciones en la cobertura y calidad ambientales pueden ejercer una influencia negativa en la generación de normas ambientales a nivel comunitario. El caso más claro ha sido la repetida postura argentina de bloquear la aprobación del Protocolo de Medio Ambiente, donde tras cada rechazo se pasa a confeccionar un texto de menor calidad, buscando así el consenso entre los socios. Estas tensiones terminaron reduciendo un largo y ambicioso protocolo a un “acuerdo marco”, aprobado en junio de 2001, con menos de diez principios y unas quince metas de acción, en once artículos. En el mismo sentido, se ha transitado hacia principios de muy alta generalidad, para que ninguno de los países se sienta incómodo en su aprobación (el ejemplo en este caso es la declaración sobre derechos de los consumidores). Por otro lado, se están desarrollando nuevos programas de desarrollo en sectores tales como energía e infraestructura, que aparecen en buena medida desvinculados de los propios gobiernos, ofreciendo ejemplos de iniciativas que son regionales y prácticamente independientes y autónomas. Se llega incluso a la

paradoja donde los gobiernos apelan a una “causa Mercosur”, como condición externa que no pueden controlar, y que usan como justificación de sus inacciones dentro de fronteras.

Buena parte de estos debates no son conocidos por el público y, en aquellos casos donde las organizaciones sindicales y de la sociedad civil presionan por reformas, los espacios de discusión abierta son pequeños. Para los nuevos proyectos regionales, ni siquiera existen espacios adecuados de acceso a la información, monitoreo y análisis. El Mercosur posee débiles componentes democráticos propios, asumiéndose que la condición democrática de cada uno de los socios de por sí ya asegura ese atributo para todo el acuerdo. Sin embargo esto no es así, y las reformas con énfasis en el mercado no sólo han deteriorado la política y la democracia a nivel de cada estado, sino que están generando un proceso de integración que padece los mismos defectos.

Democracia delegativa e integración delegativa

El deterioro del escenario político dentro de cada país ha derivado en una nueva situación, en la cual se mantienen los derechos formales de la democracia, especialmente el voto, pero sin otros componentes, delegándose el gobierno en un todo al presidente y su equipo. Este aspecto ha sido denominado “democracia delegativa” por G. O’Donnell (1997). El presidente se cree revestido de un poder que va más allá de los partidos políticos, encarnando a toda la nación, concibiendo a los poderes legislativo y judicial como estorbos. O’Donnell recuerda que esta figura es más democrática pero menos liberal que la liberal, utilizando el *ballotage* para reforzar su poder. En esta circunstancia, el presidente es el único que “sabe realmente lo que se debe hacer”, “es realmente el alfa y omega de la política”, y muchos problemas “sólo pueden resolverse usando criterios altamente técnicos”. Estos técnicos deben ser “políticamente protegidos por el presidente contra las múltiples resistencias” del Congreso, la sociedad, partidos políticos, grupos de interés y otros, que deben ser ignoradas. Los argumentos que se esgrimen son tecnocráticos, desencadenando el hecho de que “el presidente se aísla de la mayoría de las instituciones políticas y de los intereses organizados y carga solo con la responsabilidad por los éxitos y fracasos de ‘sus’ medidas”. Esta descripción encuentra muchas similitudes con la “gerencia ambiental” descrita más arriba.

La delegación al presidente y a un pequeño número de personas, aceptándose sus decisiones, deja poco espacio para discutir y construir políticas ambientales. Allí donde los técnicos decidieron en un sentido, las protestas por los impactos ambientales de esas decisiones son consideradas estorbos (usualmente bajo el rótulo de cuestionamientos que impiden el desarrollo y promueven el atraso y la pobreza). De la misma manera, se cuestionan las apelaciones a los mecanismos judiciales. Esta delegación potencia la erosión del escenario político que se comentó en la sección anterior.

El Mercosur está presentando varios síntomas mostrando que la “democracia delegativa” en sus socios está desembocando en una “integración delegativa” (recordemos que O’Donnell consideraba democracias delegativas a Argentina, Brasil y Perú; actualmente es posible que se deban agregar al menos Venezuela y Uruguay). Se apela al *ballottage* para lograr una mayoría adicional en Argentina, Brasil y Uruguay, y se ha reforzado la figura presidencial a costa de un menor papel parlamentario. Si consideramos que la situación de la democracia paraguaya es aún más precaria, los cuatro miembros plenos del Mercosur se encuentran en esta categoría, más allá de las obvias diferencias en el entramado institucional y social entre estos países. Existen amplias evidencias de este sesgo en el Mercosur: el protagonismo de los presidentes es constante, y regularmente los problemas que no se resuelven a nivel del Grupo Mercado Común fácilmente llegan a su atención; los sistemas de consulta con los parlamentos son todavía limitados (apenas pueden elevar “recomendaciones”), etc. Si bien esto puede en parte deberse a que el Mercosur es un acuerdo intergubernamental, ello no implica de por sí este énfasis presidencialista. A ello se suman otros factores, como una participación ciudadana reducida, donde los canales de información que abren los gobiernos apuntan esencialmente a empresarios y sindicatos, se rechaza la inclusión de temas sociales y ambientales que son vistos como trabas al libre comercio y la competitividad, y se refuerza la confianza en los técnicos.

Tanto a nivel de los países como a nivel del Mercosur, se carece de sistemas de *accountability* horizontal y vertical. Un ejemplo ilustrativo en el campo ambiental lo constituye la evaluación y verificación de los sistemas de control de calidad y monitoreo dentro de cada país. Han existido varios enfrentamientos, como las trabas al comercio regional basadas en controles fitosanitarios impuestas por Brasil sobre Argentina y Uruguay, que han sido rechazadas por inadecuadas o ilegítimas. Pero el desencadenante final ha sido la crisis de fiebre aftosa en Argentina, por sus enormes repercusiones en las exportaciones vacunas. La existencia de aftosa en Argentina fue sistemáticamente rechazada por las autoridades de ese país (SENASA), aunque durante el año 2000 se sucedían las denuncias de productores por la existencia de focos en varias localidades. Ante esta situación, tanto Brasil como Uruguay plantearon la necesidad de realizar sus propias evaluaciones o de verificar la calidad y eficiencia de los sistemas de contralor argentinos, pedido que fue siempre rechazado desde Buenos Aires. Esto dejó en claro un punto que las organizaciones ambientalistas han criticado desde hace tiempo: la falta de garantías en los sistemas de monitoreo, y la necesidad de que el Mercosur cuente con instrumentos de fiscalización. Los hechos finamente demostraron en 2001 que existían focos aftósicos en Argentina, y quedará para otros investigadores analizar en qué medida las autoridades oficiales ocultaron los hechos. Este caso posee relevantes implicancias para una estrategia de sustentabilidad regional, ya que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, control de calidad ambiental y requisitos asociados (especialmente en las áreas fi-

tosanitarias y sanitarias) deben ser confiables y legítimos dentro de cada país, pero además para los otros socios del acuerdo. La preocupación sobre el control de calidad y salubridad en productos agropecuarios y alimentarios no sólo es atendida por los gobiernos, sino también directamente por las empresas y por muchas organizaciones sociales. Por lo tanto, este tipo de situación rápidamente escapa a las negociaciones cerradas entre paneles técnicos y se convierte en una materia de discusión pública a nivel regional. Tampoco debemos olvidar que en muchos casos los técnicos a nivel nacional y en el Mercosur terminan derivando hacia una representación encubierta de sectores empresariales, dada por el trasiego de agentes estatales que antes eran ejecutivos o personas de confianza de grandes empresas, consorcios empresariales, o asociaciones empresariales.

El modelo de integración del Mercosur no está orientado a ampliar su base ciudadana, si bien no es un modelo de reduccionismo comercial en extremo (una situación que se vive en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte-Nafta), ya que tiene componentes de integración política, cultural y social. Sin embargo, esos componentes están al servicio de una prioridad en el área comercial. Consecuentemente, no existe una política ambiental del Mercosur las pocas medidas tomadas están condicionadas a las relaciones económicas, y los criterios de ganancia, eficiencia económica y competitividad exportadora priman sobre las metas ecológicas. A pesar de sus posibilidades políticas, el Mercosur todavía no posee varios de los mecanismos ambientales que han tenido lugar en el Nafta. Por lo tanto, los espacios de participación que más han proliferado en el Cono Sur se orientan hacia la comunidad empresarial: se toleran los sindicatos, pero no existen mecanismos sustantivos para otros sectores. En el Mercosur existen canales de acceso a la información, se puede participar de las reuniones de negociación en varios casos, y se ha instalado una Comisión Económica Social, que apenas puede elevar recomendaciones. El trámite de los acuerdos sociales, como un Protocolo Laboral, no fructificó, y apenas se logró una declaración. Asimismo, el Protocolo Ambiental todavía se encuentra estancado, y trabajosamente se ha logrado una declaración presidencial sobre derechos de los consumidores. Por lo tanto, si bien existen embriones que pueden ser usados como puntos de partida para una reforma de democratización de este mercado, el propio sesgo delegativo y comercial hace que no fructifiquen.

La despolitización nuevamente

La delegación y otras trabas en el Mercosur afectan la construcción de políticas en desarrollo sostenible, dando por sobreentendido que una estrategia de sustentabilidad genuina requiere un entramado político democrático. Además de las propias limitaciones institucionales del Mercosur, no pueden olvidarse las condiciones de despolitización que se viven dentro de cada país. En efecto, encuestas

recientes muestran que en cuatro de los seis países del Mercosur el índice de confianza en la democracia es menor al 50%, en todos los casos más de la mitad de la población considera perjudiciales las privatizaciones (un ejemplo clásico de los estilos de desarrollo con inspiración neoliberal que han defendido los gobiernos), y más grave aún, en todos los países excepto Uruguay menos del 20% de las personas tiene confianza en sus prójimos (ver Cuadro 2). Esta situación deja planteada una enorme pregunta: ¿cómo construir políticas ambientales si el propio escenario político se encuentra erosionado? ¿Cómo generar estrategias en desarrollo sostenible si la mayor parte de la población desconfía de quienes le rodean?

Cuadro 2

Resultados de encuestas: índice de democracia que combina satisfacción con ésta y apoyo a un régimen democrático; confianza interpersonal por porcentaje de respuestas que indican que se puede confiar en la mayoría de las personas; porcentaje de respuestas que consideran negativas las privatizaciones

País	Índice Democracia	Confianza Interpersonal	Privatizaciones perjudiciales
Argentina	58	12	68
Bolivia	46	18	58
Brasil	35	4	61
Chile	45	14	57
Paraguay	31	17	59
Uruguay	73	23	57

Fuente: Latinbarómetro para año 2000.

Reconstrucción de la ciudadanía y transformación hacia la sustentabilidad

Una estrategia de desarrollo sustentable en los países del Mercosur requiere considerar el aspecto político, no solamente dentro de cada nación, sino en el propio seno de este acuerdo. Las estrategias de desarrollo sustentable que aquí se defienden reconocen que las personas presentan una pluralidad de valores y percepciones sobre el ambiente y, consecuentemente, sobre las formas de apropiarse de éste, de donde es indispensable contar con escenarios de discusión abiertos y plurales. Es obvio que estos escenarios cumplen con una condición política y, por lo tanto, una propuesta hacia la sustentabilidad necesariamente requerirá de ese espacio político de posibilidad. Este deberá ser ejercido por ciudadanos. En efecto, esa me-

ta no se logrará bajo la actual erosión del campo político, de retracción al papel de consumidor y sesgo delegativo. Es necesario reconstruir el papel del ciudadano.

Por un lado, esta tarea requiere reformas y transformaciones a nivel de cada país, orientada hacia una profundización de la democracia, apertura hacia una mayor pluralidad en los actores intervinientes en la toma de decisiones, mejor acceso a la información, mecanismos de participación efectivos y cobertura legal. Estos y otros aspectos hacen a las condiciones políticas para elaborar una estrategia en desarrollo sostenible dentro de cada país. Pero por otro lado, serán indispensables pasos en el mismo sentido a nivel regional en el Mercosur, donde se deberá contar con una estrategia de sustentabilidad para todo el Cono Sur.

No debe olvidarse que existen una serie de problemas asociados a los recursos compartidos, ecosistemas de fronteras, manejo de cuencas, etc., para los que es imprescindible una perspectiva regional con características propias. Por lo tanto, las políticas ambientales a nivel regional pasan por un balance entre la articulación de políticas nacionales y la construcción de nuevas políticas regionales. En el año 2000, así como en el inicio del 2001, se ha tornado evidente la necesidad de generar políticas regionales en varios sectores, en especial agropecuario y energético, los que poseen fuertes componentes ambientales. Los primeros intentos de abordar estrategias regionales estaban asociados a iniciativas de grandes empresas transnacionales o regionales. Pero las disputas más recientes sobre el comercio regional de arroz han desembocado en que las propias asociaciones empresariales y de productores rurales de Argentina y Uruguay consideren la necesidad de establecer con Brasil una política regional para el cultivo y comercio de este grano. Este tipo de debate es muy reciente, pero ejemplifica un cambio crítico en la manera de abordar una política de desarrollo, la cual ya no queda confinada a un territorio nacional ni pasa necesariamente por el diálogo privilegiado con un gobierno nacional. Este hecho tiene enormes implicancias para una estrategia regional de sustentabilidad, ya que es obvio que políticas comunes en los sectores primarios podrían reducir la presión sobre diversos ecosistemas. La marcha actual de estos debates dista de ser democrática, y en realidad la iniciativa está puesta en el sector empresarial.

Este tipo de ejemplos también muestra que enfrentamos nuevas circunstancias para la elaboración de estrategias de sustentabilidad, donde participan actores muy diversos, y las percepciones y valoraciones son heterogéneas. Por lo tanto no hay decisiones técnicas absolutas ni objetivas y, por el contrario, existen amplios niveles de incertidumbre, por lo que los potenciales afectados por las decisiones deberían participar. Esto hace indispensable profundizar el papel del ciudadano a nivel regional, colocándolo nuevamente en el primer plano. Por otro lado, este énfasis ciudadano también es indispensable para establecer una regulación social del mercado y del estado. Desde el punto de vista de una estrategia sustantiva hacia la sustentabilidad, el mercado debe encontrarse bajo una regulación social. En un senti-

do análogo, se plantea otro tanto para el estado, aunque en ese caso se debe complementar con su reconstrucción y sustento desde la ciudadanía.

La reconstrucción del papel ciudadano debe partir de admitir que los movimientos ciudadanos en el Mercosur son heterogéneos, poseen prioridades diversas y estrategias de acción igualmente variadas. Infelizmente, en muchos casos se cae en disputas intestinas y en pobres coordinaciones entre movimientos, un hecho que se amplifica todavía más en las relaciones entre países a nivel del Mercosur. Ejemplos de los aspectos positivos y negativos de esas expresiones ciudadanas son los actuales movimientos bolivianos de protesta campesina andina, de protección y acceso al agua en Cochabamba y de cultivadores de coca, con metas a veces concordantes pero sin coordinación. En esta tarea las coordinaciones y equivalencias horizontales siguen siendo un aspecto clave, no sólo a nivel nacional, sino entre los países (véase las discusiones en Laclau y Mouffe, 1987, y Mouffe, 1999).

El protagonismo ciudadano hacia la sustentabilidad debe complementarse con una propuesta sobre una vía alternativa de la integración regional. Aquí se postula una posición sustantivamente diferente a buena parte de las discusiones actuales sobre integración y sustentabilidad: la integración es una *condición* necesaria para la sustentabilidad. En efecto, las transformaciones hacia la sustentabilidad son de tal envergadura que difícilmente puedan ser alcanzables por países aislados dadas las actuales circunstancias. Pero además, las condiciones de posibilidad ecológica requieren la consideración de amplias áreas geográficas, que van más allá de los límites políticos. La integración necesaria para la sustentabilidad es distinta a los procesos actuales, de donde se propone una nueva estrategia de *regionalismo autónomo*¹. Este es un cuerpo de ideas basadas en la reorientación de la integración desde una complementariedad ecológica y productiva entre los países (Gudynas, 1999). La complementariedad en la producción se correlaciona con la complementariedad ecológica propia de las regiones ecológicas que existen en el Cono Sur.

En esa dimensión ecológica se olvidan las fronteras políticas y se individualizan diferentes regiones ecológicas (bioregiones), tales como Chaco, Pampa o Cerrado. Cada una de ellas posee atributos ecológicos propios y diferentes aptitudes productivas, y en muchos casos se extienden en más de un país. Por lo tanto, es posible identificar qué tipos de extracción y usos de recursos naturales se pueden hacer en cada bioregión con el mínimo impacto posible. Seguidamente se establece una complementariedad productiva. Por ejemplo, el cultivo de frutas tropicales en las pampas de Argentina y Uruguay posee impactos y demandas ambientales enormes, mientras que éstos son mucho menores para la cría de ganado bajo pastoreo a cielo abierto. De la misma manera, un sitio tropical podría asegurar esas frutas tropicales con menor impacto ambiental comparado con una deforestación extendida para lograr praderas para criar ganado en el trópico. Se detec-

tan así procesos productivos que se complementan entre sí, manteniéndose una amplia oferta de recursos.

El regionalismo autónomo no excluye un comercio intra-regional, sino que lo promueve pero a partir de la complementariedad productiva y ecológica. En el mismo sentido, tampoco excluye el comercio internacional, sino que lo permite pero sólo para aquellos excedentes que persisten luego de que se atendieron las demandas de la población del Cono Sur. En efecto, la finalidad primaria del desarrollo sostenible regional apunta a cubrir las necesidades de toda la población del Cono Sur. Por lo tanto, explotaciones actuales como el cultivo de soja para exportar para alimentar ganados en otros continentes caería drásticamente, y se enfatizarían los cultivos y ganados para alimentar humanos y, en primer lugar, los del propio Cono Sur. Los estudios disponibles muestran que aún bajo condiciones muy exigentes de congelación de la frontera agropecuaria en el Cono Sur, se lograrían bienes agropecuarios suficientes para anular los componentes nutricionales de la pobreza en todos los países e, igualmente, persistiría un excedente exportable (Gudynas, 2000[b]).

El regionalismo autónomo mantiene las metas de preservación del patrimonio ecológico que imponen condicionantes sobre el proceso de integración. En tanto los ecosistemas están distribuidos de forma heterogénea y éstos presentan distintas aptitudes productivas, se atienden los usos diferenciales del suelo y los servicios ecológicos, que deben ser valorados y recompensados a nivel regional. Las consecuencias prácticas de estas ideas van desde la necesidad de establecer estrategias de ordenamiento territorial-regionales a la instalación de fondos de compensación independientes de las fronteras de los países.

Las articulaciones sociales en un programa de este tipo apuntan en sentido distinto a quienes buscan alternativas a la globalización apelando a declaraciones genéricas sobre profundizar la democracia en un gobierno mundial desde una sociedad civil global (por ejemplo Amin, 1999). Tanto dentro de los países como en el Cono Sur son obvias la diversidad y heterogeneidad de los actores sociales. Si bien se podrán consensuar estrategias comunes, la sociedad civil es heterogénea, sus historias son diversas, y ese tipo de atributos se deben preservar y son positivos. Este modelo reconoce que se mantendrán conflictos de intereses, y no se los intenta ocultar ni anular por imposición de unos intereses sobre otros, sino que se les quiere dar un escenario donde expresarlos y dirimirlos.

Todavía más: la diversidad ecológica permite generar mayor complementariedad productiva para atender las necesidades humanas, pero ello a su vez involucrará a un número mayor de comunidades y grupos y, por lo tanto, aumentará la diversidad de posturas políticas. Esta tensión hace que sea esencial contar con un espacio político democrático para lograr la viabilidad de una propuesta de este tipo.

La importancia de este componente político, a nivel regional, no siempre ha recibido la atención que merece. Por ejemplo, la propuesta de la CEPAL de un “regionalismo abierto” presenta varios puntos de divergencia con el regionalismo autónomo. En su formulación original, la propuesta cepalina era vista como un medio de acelerar la inserción de la región en la economía global, enfatizaba los aspectos comerciales, minimizaba los componentes políticos, y no existían referencias a condiciones sociales y ambientales (CEPAL, 1994). De hecho, la propuesta de la CEPAL de avanzar simultáneamente en lo regional y lo global está en contra de uno de los objetivos políticos actuales del Mercosur, que es aumentar su poder de negociación en el contexto hemisférico e internacional. El concepto cepalino no otorga un papel sustantivo a la política y, por ello, no se exploran instituciones democráticas propias del proceso de integración, ni los límites que se derivan a la soberanía del estado-nación, ni los medios para volver a poner en un primer plano al ciudadano.

Las reformas a nivel nacional se deben articular con instituciones democráticas propias para el Mercosur. Especialmente en el caso del desarrollo sostenible ello es indispensable, en tanto se deberán abordar temas regionales novedosos, para los cuales se tiene poca experiencia (como recursos compartidos, áreas de frontera, etc.). En este caso son indispensables reformas para superar el sentimiento de descreimiento con la política y la acción política. Por ello, es necesario un fortalecimiento de la actual Comisión Parlamentaria Conjunta, pero que apunte hacia un Parlamento del Mercosur. Es cierto que un mecanismo tal no resolverá todo; por lo tanto, es necesario pensar en instituciones en paralelo. En ese sentido, se debe analizar la instalación de pequeños cuerpos legislativos para bio-regiones, independientes de las fronteras políticas, y circunscriptos a una zona ecológica. Esto implicará fuertes intervenciones sobre el concepto de soberanía nacional que maneja cada uno de los países. De la misma manera, los actuales espacios de acceso a la información y asesoría, como el Consejo Consultivo Económico Social, también deben ser fortalecidos.

Es cierto que los mecanismos democráticos y sus instituciones son usualmente lentos y complejos (correspondiendo a las quejas de la lenta marcha en los congresos), pero allí se ofrece la posibilidad de tomar visiones diversas. No debe olvidarse que la actual delegación democrática a su vez descansa en poderes de incidencia restringidos a algunos sectores, usualmente empresariales, sin los contrapesos necesarios desde otros actores sociales organizados. Los propios gobiernos quedan atrapados en estrategias que reducen sus márgenes de maniobra al no potenciar otros actores con visiones discordantes que, en ciertos momentos, podrían serles de ayuda para superar las presiones empresariales. En tanto una estrategia hacia la sustentabilidad afectará fuertemente a esos grupos económicos, es dable esperar que éstos reaccionen por lo que consideran pérdidas. Bajo ese tipo de disputa un escenario político plural donde lograr los respaldos para medidas de reforma económica es indispensable para viabilizar los cambios y regular

socialmente la marcha del mercado. El examen cruzado entre actores, con responsabilidades compartidas, reduce la delegación a un mínimo. Esto requiere mantener viables las posibilidades de análisis público, donde las críticas y visiones opuestas se debaten en la esfera pública, muchas veces recurriendo a la prensa. Asimismo, es importante subrayar el papel del sistema judicial, y que su reforma y fortalecimiento debe estar en la agenda de los temas de ecología política.

El regionalismo autónomo a su vez implica repensar la globalización. Una estrategia de desarrollo sostenible no puede ser dependiente de la globalización, especialmente aquella de tono económico y, en particular, por el patrón de primarización en la región. Se considera a la globalización un proceso que se expresa en diferentes dimensiones (económica, política, cultural, ambiental, etc.). La sustentabilidad requiere alcanzar autonomía para escoger y practicar una nueva estrategia de desarrollo. Esta autonomía, a su vez, implica el poder desvincularse de los procesos de globalización allí donde se considere necesario. Esto no significa aislarse comercialmente, lo que tendría enormes repercusiones económicas (caída de ingresos por exportaciones) y sociales (desempleo), sino reordenar las relaciones comerciales, poniendo las metas primarias en la región y en los fines sociales y ambientales. El comercio regional debe a su vez asegurar la autosuficiencia alimentaria y la mejora de la nutrición de los sectores más pobres. Esta posición tampoco excluye al comercio extra-regional, sino que éste se mantendría para los excedentes de productos en explotación en la región, o bien otros productos en aquellas áreas donde sea ecológicamente permitido producirlos. Por lo tanto, el comercio internacional no es rechazado, sino que se busca su regulación dentro de las metas del desarrollo sustentable.

La construcción del regionalismo autónomo basado en el desarrollo sustentable implica un conjunto muy amplio de actores y, por lo tanto, una y otra vez recuerda la necesidad de contar con escenarios políticos. El desarrollo sostenible va mucho más allá de las propuestas técnicas y, en realidad, es una permanente construcción política.

Bibliografía

- Altvater, Elmar 1999 “Os desafios da globalização e da crise ecológica para o discurso da democracia e dos direitos humanos”, en dos Santos, T. (ed) *A crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o século XXI* (Rio de Janeiro: Contraponto) 109-153.
- Amin, Samir 1999 *El capitalismo en la era de la globalización* (Buenos Aires: Paidós).
- CEPAL 1994 *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe* (Santiago: CEPAL).
- Gómez, J. M. 1997 “Globalização, Estado-Nação e Cidadania”, en *Instituto Relações Internacionais* (Rio de Janeiro) N° 21.
- Gudynas, Eduardo 1997 “Mercantilización del desarrollo”, en *Tercer Mundo Económico* (Montevideo) N° 101, 15-19.
- Gudynas, Eduardo 1999 *Desarrollo sostenible, globalización y regionalismo* (La Paz: Fobomade, Prodena y CIDES/UMSA).
- Gudynas, E. 2000[a] “Integración económica y desintegración ecológica en el Mercosur”, en “Recht auf Umwelt, oder Umwelt ohne Recht?”, Raza, W. G. (ed.) *Atención, Jahrbuch des Österreichischen Lateinamerika-Instituts* (Viena: Band 4) 46-59.
- Gudynas, E. 2000[b] “Patrimonio ecológico y articulación con el regionalismo autónomo”, en *Umbrales, Postgrado Ciencias Desarrollo* (La Paz) N° 8, 105-129.
- Gudynas, E. y A. Santandreu 1997 “Irrupción ciudadana y ‘Estado-tapón’”, en *Ambiente y Desarrollo* (Santiago de Chile) Vol. 13, N° 1, 62-67.
- Klein, W. F. 2000 *El Mercosur. Empresarios y sindicatos frente a los desafíos del proceso de integración* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe 1987 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).
- Lipietz, Alain 1997 *Elegir la audacia* (Madrid: Trotta).
- Mouffe, Chantal 1999 *El retorno de lo político* (Barcelona: Paidós).
- O’Donnell, G. 1993 “Estado, democratización y ciudadanía”, en *Nueva Sociedad* (Caracas), N° 108, 62-87.
- O’Donnell, G. 1997 *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización* (Buenos Aires: Paidós).

Schapper, M. 1999 *Impactos ambientales de los cambios en la estructura exportadora en nueve países de América Latina y el Caribe: 1980-1995* (Santiago de Chile: CEPAL) Serie Medio Ambiente y Desarrollo.

Notas

1 Las ideas sobre regionalismo autónomo se desarrollan en la iniciativa Sur Sustentable 2025, cuyas metas son proponer estrategias en desarrollo sostenible para los países del Cono Sur, asumiendo una integración plena para el año 2025.

Questão agrária e sustentabilidade

Roberto José Moreira*

Introdução

A contemporaneidade da questão agrária no Brasil não pode ser dissociada da questão da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável. Refletir sobre a confluência destas questões é o objetivo destas reflexões analíticas. Estas reflexões resultam da confluência de três movimentos interpretativos que referem-se (1) ao esforço empreendido de compreender as sociedades capitalistas contemporâneas da "pós-modernidade", o que implica em reconhecer a realidade da fusão entre o econômico e o cultural, (2) à incorporação da questão ambiental à análise do social, que impõe superações do pensamento científico herdado, bem como de suas bases epistemológicas, e (3) à compreensão do espaço econômico e social das formas sociais da agricultura familiar no capitalismo.

Estas relações entre questão agrária e sustentabilidade -ou ainda, a convergência das questões agrária e ambiental- referem-se em primeira instância ao entendimento da contemporaneidade dos processos de reforma agrária -ou ainda dos assentamentos rurais- vivenciados pelas sociedades brasileira e latino-americanas.

A especificidade desta minha abordagem resultou de análises anteriores sobre agricultura familiar, assentamentos rurais, renda da terra e uma série de ressignificações conceituais que não serão aqui detalhadas¹. Estas ressignificações almejavam entender o capitalismo contemporâneo que incorpora em sua dinâmica econômica a instância não-material da existência humana. Neste contexto, a apropriação privada do conhecimento (técnico-científico ou cultural em seu sentido amplo) é vista como um processo conectado à propriedade dos recursos produtivos (incluindo aqui a "terra" ou o "meio ambiente natural"). A questão agrária, naquilo em que ela é pensada como associação das formas de uso e distribuição da propriedade fundiária (posse e uso dos solos, da natureza, dos recursos naturais ou da biodiversidade), estará assim associada à compreensão da apropriação privada da esferas material e não-material da vida humana. Na formulação destas reflexões estarei elaborando sobre a confluência das questões agrária e ambiental, ressaltando a questão da distribuição da propriedade fundiária e o funcionamento dos mercados, com vistas a compreender o embate contemporâneo entre uma reforma agrária com ações de desapropriação e redistribuição da propriedade fundiária e outra com ações através do

funcionamento do mercado de terras².

Questões agrária e ambiental

Em análise anterior (Moreira, 1999[a]), procurei destacar que a amplitude da divulgação e a importância da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, que produziu o relatório *Nosso Futuro Comum*, em 1987, (Cmmad, 1988) imprimiram ao conceito de sustentabilidade daí oriundo a impressão generalizada de um conceito acabado. Recuperando, com outros autores, a origem da incorporação da questão ambientalista na análise da economia e da economia política aponte, com Brüseke (1996), que a origem da noção de sustentabilidade é ainda anterior à publicação dos *Limites do crescimento*, do Clube de Roma, de 1972, e da Conferência de Estocolmo, sobre *Human Environment*, também de 1972. Brüseke destacou, dentre outras, a importância da publicação de Georgescu-Roegen, de 1971³, e de Ignacy Sachs, de 1976⁴.

A contribuição de Ignacy Sachs visualiza seis requisitos do ecodesenvolvimento⁵ -dos quais apenas um refere-se explicitamente aos recursos naturais e do meio ambiente-, e inclui a dimensão de equidade social no debate da sustentabilidade. Seu conceito de ecodesenvolvimento referia-se inicialmente às regiões rurais da África, Ásia e América Latina, ganhando dimensões de crítica às relações globais entre subdesenvolvidos e superdesenvolvidos, bem como de crítica à modernização industrial como método de desenvolvimento das regiões periféricas, propondo, para estas regiões, um desenvolvimento autônomo, independente daquele dos países desenvolvidos.

Outras duas contribuições -a declaração de Cocoyok, em 1974, aprofundada no relatório Dag-Hammar skjöld, de 1975-, eram também mais radicais do que a abordagem que posteriormente, em 1987, se sedimenta no conceito de desenvolvimento sustentável do *Nosso Futuro Comum*, da Cmmad. Estas contribuições expressavam confiança em um desenvolvimento a partir da mobilização das próprias forças e exigiam mudanças nas estruturas de propriedades no campo, pelo controle dos produtores sobre os meios de produção. Nestas teses, o mundo rural sustentável -e adequado à crítica das sociedades e das tecnologias industriais- associava-se a uma redistribuição do acesso aos recursos produtivos, com mudanças na distribuição da propriedade no campo, sugerindo que políticas significativas de reforma agrária seriam necessárias para a obtenção do desenvolvimento sustentável autônomo dos países periféricos.

Os requisitos do ecodesenvolvimento -garantia à alimentação e a satisfação das necessidades básicas e de educação- impõem o requisito de justiça

social ao desenvolvimento sustentável. A preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia e o desenvolvimento de tecnologias ecologicamente adaptadas, fazem-nos reconhecer os limites postos pela dinâmica da biosfera à vida humana. Estes traços gerais herdados propõem uma visão tridimensional de desenvolvimento, onde a eficiência econômica combina-se com requisitos de justiça social e de prudência ecológica (Brüseke, 1996: 115-119). Desde então, o debate sobre desenvolvimento sustentável impõe encaminhamentos políticos que envolvem três dimensões: a dimensão do cálculo econômico, a dimensão sócio-política e a dimensão biofísica. Dada a natureza planetária da questão ambiental, as três dimensões acima ressaltadas imprimem ainda ao desenvolvimento sustentável a clivagem entre interesses nacionais e globais. O "tom diplomático" do Relatório Brundtland, quando comparado com aquelas elaborações originárias e radicais, acima destacadas, minimiza a crítica à sociedade industrial e aos países industrializados. Não nega o crescimento nem aos países industrializados e nem aos não-industrializados. Faz, não entanto, a superação do subdesenvolvimento no hemisfério sul dependente do crescimento contínuo dos países industrializados, opondo-se à tese de desenvolvimento autônomo dos países periféricos. Brüseke (1996: 107) ressaltou que, neste Relatório, torna-se duvidosa as adequações destas posições com a crítica do ponto de vista ecológico. Enfatizei, então, que, do ponto de vista da justiça e equidade social, havia também uma forte inadequação. O Relatório não questionava a distribuição e propriedade dos ativos que conformam nossas sociedades capitalistas. Estes ativos produtivos são a base da concentração de rendas e da diferenciação de estilos de vida, tanto no interior das nações, como dentre elas.

O Relatório Brundtland enfatiza as relações entre nações, que as questões ambiental e ecológica impõem, e sugere medidas para os governos nacionais e instituições internacionais. Evita, no entanto, o tratamento das questões sócio-políticas vivenciadas no interior de cada território nacional. Esta postura não problematiza o jogo de forças e de dominação hegemônica e a divergência de interesses a eles associadas. Neste sentido a equidade social dificilmente será alcançada e, a justiça será relativa aos interesses hegemônicos.

A associação da questão agrária à questão ambiental tende a reforçar, e mesmo exigir, a visualização da questão da equidade social.

Problematizando

No que concerne ao conjunto das sociedades contemporâneas, estas sociedades são fundamentalmente baseadas nas desigualdades da distribuição dos recursos produtivos que geram as desigualdades de

distribuição do produto social, das rendas, de estilos de vida e do meio ambiente.

A base fundadora da distribuição do produto social, nestas sociedades, radica-se nos direitos que legitimam a propriedade privada dos recursos produtivos, sejam aqueles produzidos pela ação humana -capital constante (instalações, ferramentas e insumos)- ou aqueles apropriados da esfera biofísica -os recursos naturais (terra, fonte naturais de energia, insumos naturais como a água, o ar e a biodiversidade)- e a utilização da força de trabalho humano manual e intelectual -os direitos sociais e trabalhistas⁶.

A migração da noção de sustentabilidade da disciplina ecologia para os campos da economia política e do desenvolvimento impõem considerações sobre os direitos de propriedade e de uso estabelecidos, que referem-se à construção da legislação ambientalista. Do ponto de vista da economia política, torna-se necessário examinar as possíveis tensões que a utilização dos recursos -produzidos pela ação humana e naturais, bem como os direitos de propriedade à eles associados-, impõe aos direitos sociais e trabalhistas herdados e à justiça social.

As considerações de justiça e equidade social impõem, por sua vez, a análise dos elementos conformadores das relações entre ricos e pobres nestas sociedades, ou seja os fundamentos da questão distributiva, própria da tradição da questão agrária e pano de fundo das políticas de reforma agrária.

Com base em Alier (1997), podemos formular a questão ambiental como sendo a questão da "distribuição ecológica"⁷. Em termos mais gerais, podemos dizer que a toda utilização dos recursos produtivos -artificiais e naturais- corresponde uma distribuição da propriedade dos recursos naturais⁸. Neste sentido e visualizando com a economia política as relações de classes, a distribuição ecológica estará associada à distribuição da propriedade dos recursos produtivos e, portanto, às relações fundamentais entre proprietários (capitalistas, proprietários de terras e de recursos produtivos naturais) e não-proprietários (os trabalhadores). Cabe apontar que no contexto das políticas neoliberais, a questão agrária na América Latina tem sido tratada mais como um processo de flexibilização e de desinformalização do mercado de terras do que como um processo de redistribuição das terras (Dam, 1999). Neste sentido, a reforma agrária e o encaminhamento da questão agrária estariam sendo conformados pela sujeição à lógica liberal dos mercados. Esta sujeição implica, de um lado, na deslegitimação da reforma agrária redistributivista e na destruição de direitos comunitários e coletivos sobre as terras, bem como dos direitos sociais incorporados ao uso da terra. De outro lado, garante e dá segurança à

propriedade privada burguesa, ao acesso à terra através da compra -também suportados por financiamentos, como é o caso dos Bancos da Terra- e a uma possível conformação de novas restrições de cunho ambientalistas, sobre o uso dos recursos naturais.

A ideologia de fundo que suporta esta perspectiva neoliberal⁹ e as políticas hegemônicas contemporâneas é a de que o mercado conforma a distribuição socialmente mais justa, o que é extremamente questionável. A compreensão das sociedades contemporâneas¹⁰ impõe a necessidade de consideração da produção imaterial, esteja este imaterial associado à produção do conhecimento científico e tecnológico ou à produção da imagem cultural, própria da indústria das comunicações e da indústria cultural¹¹.

Nestas sociedades os processos de mercantilização englobam também as esferas da cultura, da imagem e dos signos e a dinâmica de valorização do capital envolve ao mesmo tempo processos de valorização e desvalorização econômica e cultural das técnicas (Moreira, 1999[b]: 191-198).

A consideração de que a produção não-material -como são os casos da produção de conhecimento e de imagens e representações- seja visualizada como resultado do trabalho produtivo nos parece fundamental para o entendimento das relações sociais e de classes destas sociedades.

Neste sentido, a propriedade -dentre elas a propriedade fundiária- cumpre um papel de regulação social. Regula as formas de organização social da produção tanto entre proprietários e não-proprietários quanto entre os próprios proprietários e torna-se elemento fundamental na regulação da distribuição dos valores. Dito de outra forma a propriedade capacita ao proprietário entrar tanto na disputa pela organização da produção quanto na distribuição de valores, este é o campo da competição intercapitalista.

Em relação à competição intercapitalista e ao papel que nela desempenha o progresso técnico, gostaria de ressaltar que, regra geral, por detrás das elaborações analíticas que tratam do assunto estão dois pressupostos, não explicitados. O primeiro é o de que o modelo de operação capitalista é o modelo de operação do capital industrial e que a mercadoria produzida pelo capital é necessariamente um bem material. O segundo é o de que o controle da tecnologia está objetivado no controle dos meios de trabalho socialmente produzidos (dos bens de capital, os instrumentos industrializados da produção). Procurei demonstrar, em elaborações anteriores (Moreira 1995, 1996 e 1998), que estes pressupostos minimizam a questão do controle sobre a terra e sobre a natureza na explicação do processo competitivo. Na hegemonia destes pressupostos a teoria da renda da terra torna-se um apêndice da teoria geral e é vista apenas como um elemento da distribuição

do excedente econômico¹².

Uma análise consistente da sustentabilidade ambiental requer, portanto, que críticas destes pressupostos sejam elaboradas. Na medida em que a terra e os recursos naturais são elementos da produção social, os direitos de propriedade sobre estes recursos significa que seus proprietários podem disputar a apropriação do conhecimento que se tem sobre os seus usos, no presente e no futuro, mesmo que não tenham feito nenhum investimento de capital ou de trabalho próprio na produção deste conhecimento¹³.

Minha reinterpretação da renda diferencial I (Moreira, 1995 e 1998) - naquilo que se refere à fertilidade dos solos- redefine esta questão. Entendo que a propriedade da terra (da natureza ou da biodiversidade) apenas capacita os proprietários a disputar o uso e a apropriação do conhecimento (técnico-científico ou "cotidiano-rotineiro") que se tem sobre o uso destes solos, ou de sua biodiversidade. Esta apropriação de valor sobre a forma de renda da terra não está dada a priori pela propriedade destes recursos. Dependerá do poder de mercado que estes proprietários agrários venham a ter na competição intercapitalista nos mercados em que atuam e do poder político que possam exercer para garantir favorecimentos políticos aos direitos da propriedade fundiária. Estes favorecimentos políticos podem envolver a obtenção de subsídios de créditos aos proprietários agrários, de redução de impostos sobre a propriedade fundiária, a realização de investimentos públicos em estradas e melhorias fundiárias, como barragens e açudes em áreas secas, bem como o investimento público em tecnologias específicas como o foi o caso das tecnologias para o Cerrado brasileiro. Os mesmos processos de apropriação privada do conhecimento podem incorporar à lógica competitiva capitalistas conhecimentos culturais produzidos socialmente por culturas não-hegemônicas e por culturas locais, o que também implica em reconhecer os direitos sobre a produção cultural e as formas legitimadas de apropriação, o que não significa que apropriações usurpadoras não possam ocorrer.

O tratamento da questão ambiental nos permitiu visualizar uma fronteira não-material da propriedade (Moreira, 1999[a]). Destaquei, então, que nas sociedades desenvolvidas da Europa e da América do Norte a questão do desenvolvimento sustentável assuma um significado de sustentabilidade ambiental no sentido de sustentabilidade do ambiente natural e da biodiversidade. Os níveis de pobreza e os suportes sociais às populações de baixa renda nestes países não colocam as questões sociais de equidade e justiça sociais, mesmo que relativas, nos níveis que são colocadas nas sociedades capitalistas subdesenvolvidas. Na América Latina e no Caribe, além dos países africanos e alguns asiáticos, a questão do desenvolvimento sustentável certamente não poderá ser legitimamente encaminhada se não

apresentar um significado de sustentabilidade sócio-ambiental. As faces políticas destes movimentos podem envolver questões de consolidação da democracia, da cidadania e até o direito a postos de trabalho, a terra de trabalho, saúde e habitação.

No primeiro sentido, de sustentabilidade ambiental, a defesa do meio ambiente e os movimentos ecologistas podem, e de fato o são, interpretados como movimentos radicados nas sociedades e setores sociais abastados, como "coisa de rico". Alier (1997) procura demonstrar a existência de movimentos ambientais dos pobres, tanto em suas manifestações locais como globais. Associados ao significado de sustentabilidade sócio-ambiental, estes movimentos tendem a rejeitar a alcunha de ecologistas. Para o autor eles são ambientalistas na medida em que, ao defender as condições de subsistência social, defendem a dinâmica da biodiversidade que é básica a esta subsistência. Por exemplo, a luta de povoações e populações contra a poluição de suas águas provocada pela mineração, no Peru, a luta dos seringueiros e de Chico Mendes, na Amazônia, e das "quebradeiras de coco", no Nordeste brasileiro¹⁴.

Nos países pobres, a vertente materialista dos ambientalistas luta pela defesa da subsistência e acesso comunitário aos recursos naturais ameaçados pelo Estado e pelo Mercado, bem como contra a degradação causada pelo intercâmbio desigual, a pobreza e o crescimento material. Eu registro, ainda, as lutas contra a decadência das condições de trabalho, de saúde e de vida (Moreira, 1991) como são, por exemplo, as reivindicações de melhores condições de trabalho e os movimentos dos sem terra e sem-teto. Nestes países, os ambientalistas não-materialistas podem ser visualizados nas religiões biocêntricas, distintas das religiões antropocêntricas do "Ocidente", que certamente não poderão ser denominadas de pós-industriais e de pós-modernas.

Estes movimentos ambientalistas impõem, no interior das nações, tensões que requerem novos controles sociais sobre o uso dos recursos naturais. A legitimação destas demandas significa, a legitimação de mudanças dos limites e das fronteiras -territoriais ou institucionais- dos direitos de propriedade. Refletem portanto nas relações entre proprietários e não proprietários, mesmo que estas não sejam as metas prioritárias ou visíveis dos movimentos ambientalistas.

Neste -e em outros sentidos- a questão ecológica mostra-se maior do que as dimensões físicas e institucionais da propriedade privada herdada. Afeta tanto as relações de propriedade e uso dos recursos -materiais socialmente produzidos e naturais-, como aquelas relações associadas às condições dos direitos sociais e trabalhistas da classe trabalhadora. A luta ambiental tem

reflexos evidentes sobre as condições de vida e trabalho dos não-proprietários, bem como, seus estilos de vida.

A incorporação dos constrangimentos ecológicos à lógica capitalista requer, portando, processos de redimensionamentos dos direitos de propriedade e de usos dos recursos. Requer processos de mudanças e legitimações de leis e regulamentações. Estes processos não são incompatíveis com a ordem capitalista, e já estão em curso¹⁵. Este processo de institucionalização -leis e regulamentações- emergem no contexto de práticas e ações sociais que consigam impor reformas no status quo existente, o que, por sua vez, requer que estas reformas sejam legitimadas.

Neste sentido, de um modo ou de outro, os processos legitimados representam processos de redistribuição ecológica que, apesar de não questionarem a natureza fundamental da propriedade privada destas sociedades, impõem movimentos das fronteiras de propriedade herdadas, redimensionando os direitos herdados e, reconformando em algum grau os parâmetros da competição intercapitalista.

Cumprir concluir que, nestes processos, uma mesma propriedade territorial, com limites físicos definidos, pode ter seu espaço de ação social e econômica aumentado ou diminuído. Isto vai depender da forma e da eficácia que estiverem associadas às leis e regulamentações de cunho ambientalista. Em outros termos, isto significa que novas formas de regulação -agora sócio-ambientalista- do uso social da propriedade privada estarão sendo criadas. A função social da terra na legislação brasileira, por exemplo legitima, hoje, a luta dos sem terra e pela reforma agrária, que no passado era considerada ilegal e subversiva à ordem social. As disputas ambientalistas trazem, portanto, a possibilidade de mudanças nas fronteiras não-materiais da regulação social da propriedade privada que, neste sentido vai afetar os parâmetros legitimadores da competição intercapitalista, das tecnologias utilizáveis e dos direitos sócio-ambientais de trabalhadores e consumidores, ou seja, novas regulações dos mercados.

Propriedade, mercado e questão agrária

A meu ver, naquilo que se refere às relações entre proprietários e não-proprietários, as sociedades contemporâneas vivenciam um aumento da exploração da força de trabalho. Vários processos que estão em curso, dentre os quais: o aumento do desemprego e a conseqüente redução de salários; o aumento da produtividade de trabalho associado à da utilização de força de trabalho nas novas esferas produtivas da telemática, da indústria das comunicações e de propaganda; bem como da indústria cultural e da indústria da vida; a automação e informatização das antigas esferas

industriais; e o aumento do campo de exploração da força de trabalho manual e intelectual. Estes processos são acompanhados por uma ampliação da informalização das relações de trabalho e a colocação do requisito de propriedade de alguns equipamentos para poder exercer o trabalho, nos setores de trabalhadores autônomos. Todas estas formas podem ser entendidas como formas de trabalho por conta própria, e envolvem, regra geral, a propriedade de ferramentas e/ou instalações de própria responsabilidade e/ou propriedade, que não lhe capacitam a disputar excedentes econômicos sobre a forma de lucro ou renda da terra.

As relações de trabalho que apresentam estas características de trabalho autônomo, trabalho informalizado, trabalhador por conta própria, bem como a pequena produção familiar -nos setores rurais e urbanos- e os assentamentos rurais de reforma agrária não podem ser visualizados pela teorias da mais valia absoluta e relativa -ambas incluídas na noção de subordinação direta do trabalho ao capital. Estas teorias, respectivamente consideradas como subsunção formal e real do trabalho ao capital, referem-se, em Marx, às formas assalariadas e proletarizadas do capital. Para entender a exploração das formas não-assalariadas acima identificadas, há a necessidade de se reconhecer, como fiz em Moreira (1999[b]: 101-118; 157-179; 181-198), uma subordinação indireta do trabalho ao capital, que inclui uma subordinação aos mercados e uma subsunção idealizada.

Estas formas de exploração da força de trabalho requerem o pleno funcionamento dos mercados, que, não devemos esquecer, funcionam como mercados imperfeitos, mesmo que a ideologia neoliberal enfatize que somos todos iguais em relação aos mercados.

Esta destruição de relações de trabalho herdadas são também acompanhadas na América Latina, e em outras regiões do hemisfério Sul, por processos de deslegitimação de políticas de distribuição de terras por processos de reforma agrária. A onda neoliberal e anti-reformista tende a substituir estas políticas por políticas de estímulo ao pleno funcionamento do mercado de terras, com um discurso de reforma agrária através do mercado de terras.

Estivemos fundamentando a visualização da esfera não-material, procurando ressaltar a relevância da análise dos processos sociais de geração, transmissão e distribuição do conhecimento nas sociedades contemporâneas. Esta relevância, para alguns autores, é de tal ordem que estas sociedades têm sido denominadas de sociedades do conhecimento. Neste contexto, analisar os interesses econômicos sociais relevantes, significa também analisar os processos de apropriação privada do conhecimento, seja do conhecimento técnico-científico seja dos conhecimentos culturais rotineiros de culturas não-hegemônicas (como são

os casos de culturas indígenas, não ocidentais, camponesas, de curandeiros, de minorias, etc.) que possam ser apropriados pela esfera da acumulação.

Do ponto de vista dos processos econômicos, a institucionalização da ciência e da técnica significa investimentos sociais, públicos e privados, em educação e pesquisa, que são conformados e conformam a expressão dos interesses hegemônicos nas políticas educacional, científica e tecnológica. A própria produção social do conhecimento torna-se campo de disputa capitalista e a tecnologia não pode mais ser considerada como variável independente, como tem sido o procedimento da tradição analítica da economia e da economia política. Parte significativa da pesquisa aplicada passa a ser incorporada como atividades das empresas. Em texto anterior (Moreira, 1996), ressaltai que os fundamentos do progresso técnico no capitalismo têm sido tradicionalmente associados ao processo de lutas de classes e ao processo de competição intercapitalista, seja nas vertentes marxista e clássica da economia política, seja na vertente neoclássica.

No primeiro nível de análise -o da luta de classes-, o que conta é a diferenciação fundamental entre proprietários e não-proprietários dos meios de produção que estão em uso ou que podem ter potencialidades de uso futuro¹⁶. Este nível de análise permite visualizar a questão agrária, seja como o monopólio de classe sobre a terra -captada, em Marx, pelo conceito de renda absoluta da terra- seja ela repensada como o direito ao uso da terra (da natureza ou da biodiversidade) que o monopólio da propriedade associa a uma determinada classe social de proprietários, aqui visualizados como capitalistas agrários.

Nas relações entre as classes proprietárias e não-proprietárias, o processo de reforma agrária tende a fortalecer os não proprietários, na medida em que sua massividade e amplitude consigam afetar os níveis de emprego e de salário. O mercado de trabalho tende a experimentar uma situação relativa de redução de oferta de força de trabalho (as populações beneficiadas pela reforma agrária retiram-se do mercado de trabalho, devido a elevação do nível de emprego geral associado ao setor reformado). Isto favorece a elevação da taxa de salário da economia. Estes movimentos reafirmam o caráter democrático e de redutor da desigualdade econômica e social que historicamente está associado aos processos de reforma agrária. Este é o caráter progressista das reformas agrárias burguesas.

Os tempos atuais, no entanto, apontam em outra direção. A hegemonia das políticas neoliberais, a vivência da terceira onda de revolução tecnológica, a aceleração da produção capitalista do mundo não-material e a onda de centralização de capitais, em processos de fusões e de reestruturações produtivas aceleram os processos estruturais de exclusão de massas

significativas da força de trabalho do emprego e do acesso a rendas. Levam a quedas do nível de emprego, dos salários reais e dos rendimentos destes setores sociais, bem como enfraquece a ações das instituições da classe trabalhadora no jogo político, como é o caso do enfraquecimento dos sindicatos e das políticas sociais (Rifkin, 1995; Forrester, 1997; Anderson et al., 1995).

No Brasil, além das históricas desigualdades originárias associadas ao projeto colonizador português, às capitânicas hereditárias, às sesmarias e ao caráter oligárquico-patrimonialista do período republicano, este momento histórico de hegemonia neoliberal imprime tensões revitalizadas sobre a questão agrária, fortalecendo a legitimidade dos movimentos camponeses contemporâneos e os movimentos dos sem-terra em favor da reforma agrária¹⁷.

No segundo nível de análise -o da competição intercapitalista-, o que conta é a diferenciação entre os capitais privados e suas formas sociais de organizações empresariais ou privadas não-empresariais, como são os casos dos trabalhadores por conta própria no mundo urbano e no mundo rural¹⁸. Este é o campo analítico que deixa visível a competição intercapitalista e a operação das forças dos mercados. Na perspectiva marxista este é o campo de operação das leis de mercado, o campo da dinâmica do capital e da operação analítica da teoria dos preços¹⁹. Considerando a hegemonia da ideologia neoliberal -e a reificação do mercado a ela associada- nunca é demais lembrar que estes mercados são mercados imperfeitos e que a dinâmica econômica é comandada pela hegemonia dos grandes capitais.

Neste campo analítico, o processo de reforma agrária fortalece, dentre as classes proprietárias, aquelas associadas ao capital industrial (proprietários dos meios de produção, de bens de capital) e ao capital financeiro. A fragmentação da propriedade da terra enfraquece relativamente a antiga classe latifundiária e estabelece uma nova classe de pequenos proprietários - o setor rural reformado- que tende a se constituir em organizações produtivas sem condições de realização da renda da terra nos preços das mercadorias agrícolas. Neste processo o mercado de terras tende a ser o mais afetado, experimentando um processo de desvalorização do patrimônio fundiário tanto mais forte quanto mais amplo e massivo for o processo de desapropriação fundiária ou de ruptura da garantia da propriedade fundiária. As políticas neoliberais e anti-reformistas atacam esta questão de fundo quando contrarrestam a reforma agrária com políticas de sustentação, flexibilização e de fortalecimento do mercado de terras.

Como procurei demonstrar, a associação da questão agrária à questão ambiental tende a imprimir ao desenvolvimento sustentável a faceta

distributiva, ou de equidade social, configurando ao desenvolvimento uma característica sócio-ambientalista, que para sua implantação requer redistribuição da propriedade da terra.

Bibliografia

- Alier, Joan Martínez 1997 "Justiça ambiental (local e global)", in Cavalcanti, Clóvis (org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas (São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco).
- Anderson, Perry et al. 1995 "A trama do neoliberalismo: mercado, crise e exclusão", in Sader, Emir e Pablo Gentili (orgs.) Pós-neoliberalismo (Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra).
- Brüseke, Franz Josef 1996 "Desestruturação e desenvolvimento", in Ferreira, L. da C. e E. Viola (orgs.) Incertezas de sustentabilidade na globalização (Campinas, São Paulo: Unicamp).
- Cmmad (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento) 1988 Nosso Futuro Comum (Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas).
- Connor, Steven 1993 Cultura pós-moderna. Introdução às Teorias do Contemporâneo (São Paulo: Edições Loyola).
- Dam, Chris van 1999 La tenencia de la tierra en América Latina. El estado del arte de la discusión en la Región (UICN/SUR) Unión Mundial para la Naturaleza, Oficina Regional para Sud América, Agosto.
- Dupuy, Jean-Pierre 1980 Introdução à crítica da ecologia política (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Forrester, Viviane 1997 O horror econômico (São Paulo: Unesp).
- Galvão, Marcos B. A. 1998[a] "Globalização: arautos, cétricos e críticos", in Política Externa (São Paulo: Paz e Terra) Vol. 6, Nº 4, 36-88, mar.- mai.
- Galvão, Marcos B. A. 1998[b] "Globalização: arautos, cétricos e críticos (Segunda parte)", in Política Externa Externa (São Paulo: Paz e Terra) Vol. 7, Nº 1, 117-160, mar.-mai..
- Jameson, Fredric 1996 Pós-modernismo: A lógica cultural do capitalismo tardio (São Paulo: Editora Ática).
- Kumar, Krishan 1997 Da sociedade Pós-industrial à Pós-moderna. Novas teorias sobre o mundo contemporâneo (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.).
- Moreira, R. J. 1991 "Ecologia e Economia Política: Meio Ambiente e Condições de Vida", in Anais (Campinas, SP) XXIX Congresso da SOBER.
- Moreira, R. J. 1993 "Pensamento Científico, Cultura e Eco-92: alguns significados da questão ambiental", in Reforma Agrária (Campinas, SP.) , Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária, v. 23, 1, 14-30, jan.-abr.
- Moreira, R. J. 1995 "Renda da Natureza e Territorialização do Capital: Reinterpretando a renda da terra na competição intercapitalista", in Estudos Sociedade e Agricultura (Rio de Janeiro: Cpda, UFRuralRJ) Nº 4, jul., 89-111.

Moreira, R. J. 1996 "Disputas paradigmáticas nos programas de pós-graduação em economia e desenvolvimento rural", in Estudos Sociedade e Agricultura (Rio de Janeiro: Cpda, UFRuralRJ) N° 6, 65-80, jul.

Moreira, R. J. 1998 "Terra e Natureza: Um olhar sobre a apropriação privada da biodiversidade", in Santos, Raimundo e Luíz Flávio de Carvalho Costa (orgs.) Mundo Rural e Política (Rio de Janeiro: Ed. Campus).

Moreira, R. J. 1999[a] "Economia política da sustentabilidade: uma perspectiva neomarxista", in Costa, L. F. C.; R. J. Moreira e R. Bruno (orgs.) Mundo Rural e Tempo Presente (Rio de Janeiro: Mauad).

Moreira, R. J. 1999[b] Agricultura Familiar: Processos sociais e competitividade (Rio de Janeiro: Mauad, UFRRJ/CPDA).

Rifkin, Jeremy 1995 O fim dos empregos (São Paulo: Makron Books).

Silverstein, Michael 1993 A revolução ambiental (São Paulo: Ed. Nórdica).

Notas

* Agrônomo com doutorado em Economia, University of Cornell. Professor do CPDA/UFRRJ.

1 Para detalhes e referências ver Moreira (1999[a]), onde propus uma interpretação teórico-analítica, que estará subjacente a vários encaminhamentos analíticos aqui empreendidos.

2 Dam (1999: 9-10) ressalta que para o Banco Mundial, "para quien el único rol del Estado debe ser el de levantar todas las restricciones que impiden que el mercado de tierras funcione en forma 'transparente' y eficiente. (...), el objetivo debe ser el de crear seguridad en cuanto a los derechos de propiedad e implementar mecanismos eficientes de arrendamiento/ventas de tierras,...". Diversos autores assinalam que o desenvolvimento do mercado de terras tem sido concebido como o equivalente ou como alternativa à reforma agrária. Dam destaca que para os críticos a questão se trata de desenvolver um "mercado de tierras campesino".

3 The entropy law and the economic process, que tornou-se o marco da economia ecológica e das considerações sobre a importância da termodinâmica para o estudo do desenvolvimento e da sustentabilidade.

4 Environment and styles of development, que formulou o conceito de ecodesenvolvimento, hoje tido como sinônimo de desenvolvimento sustentável.

5 A saber: a) a satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito com outras culturas, f) programas de educação (Brüseke, 1996: 105).

6 O trinômio capital, terra e trabalho da economia clássica e marxista.

7 Podemos entender distribuição ecológica como "as assimetrias ou desigualdades sociais, espaciais e temporais na utilização pelos humanos

dos recursos e serviços ambientais, objeto ou não de trocas comerciais, isto é, [na utilização relacionada (RJM)] ao esgotamento dos recursos naturais (incluindo a perda da diversidade), bem como às cargas de poluição". (Alier, 1997: 216).

8 Esta compreensão levou-me a tratar a renda da terra como renda da natureza em Moreira (1995).

9 Para uma análise desta ideologia ver "O pós-modernismo e o mercado" em Jameson (1996: 268-284).

10 Vistas por diferentes autores como pós-industriais, sociedade de informação, pós-fordistas, pós-modernas e globalizadas. Cf. Kumar (1997), Connor, (1993), Jameson (1996), Galvão (1998[a] e 1998[b]).

11 A meu ver, estes movimentos interpretativos requerem, de uma perspectiva neo-marxista, uma reinterpretação do trabalho produtivo não apenas como trabalho produtor de bens materiais -próprio da concepção do capitalismo industrial- mas também como trabalho produtor de bens imateriais -como, por exemplo, as imagens na propaganda, os valores culturais na indústria cultural.

12 Cumpre notar que, em muitos programas de pós-graduação em economia e desenvolvimento rural, a teoria da renda da terra não aparece como elemento dos conteúdos disciplinares.

13 A ênfase que aqui damos à produção e à apropriação do conhecimento não significa que desconsideramos a importância do poder de mercado dos grandes capitais monopolistas, oligopolistas e transnacionais que, no capitalismo contemporâneo, operam em mercados imperfeitos. Nestas situações os grandes capitais manipulam um poder de mercado que lhes capacitam a apropriação privada de um "sobre-lucro" significativo (Moreira, 1991, 1995, 1998[b]).

14 A sistematização elaborada por Alier (1997: 223) procura apresentar as variedades materialistas e não-materialistas de ambientalismo tanto em "países afluentes" quanto em "países pobres".

15 Cf. Dupuy (1980), Silverstein (1993) e Moreira (1993), dentre outros.

16 Na perspectiva marxista este é o campo de operação das leis de movimento do capital e da operação analítica da teoria do valor. Este nível analítico vai tornar visível que o progresso técnico, a longo prazo, pode ser visto como a forma de o capital - as relações sociais do capital - contrapor-se à tendência decrescente da taxa de lucro e como meio de aprofundar a submissão do trabalho ao capital.

17 Diversos analistas e atores sociais argumentam que a timidez e a lentidão da reforma agrária brasileira são insuficientes tanto para contrabalançar estes processos excludentes quanto para que os processos de assentamentos rurais possam ser efetivamente entendidos como um processo de reforma agrária.

18 Para a análise da agricultura familiar, assentamentos rurais de reforma agrária e competitividade, veja Moreira (1999[b]: 157-180).

El desarrollo autónomo: un camino a la sostenibilidad

David Barkin*

Introducción

No podemos esperar a que los expertos se pongan de acuerdo para definir el desarrollo sostenible o a que las naciones latinoamericanas se comprometan a implementar estrategias idóneas. Enfrentar las contradicciones ecológicas de los sistemas productivos es una necesidad impostergable. Los avances en nuestra visión del desarrollo sostenible como un compromiso esencial para enfrentar los retos de la supervivencia de la humanidad han puesto de manifiesto la trascendencia de la amplia participación ciudadana en el perfeccionamiento de la democracia. La incorporación masiva de grupos sociales de base como paso ineludible para establecer estrategias económicas que incluyan la conservación del ambiente es uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo. Por lo mismo, ahora es imprescindible diseñar políticas que faciliten esta incorporación, como parte de una labor para revertir la creciente polarización y promover la sustentabilidad.

* Profesor de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Recibió su doctorado en Economía de la Universidad de Yale en Estados Unidos y el Premio Nacional de Economía Política en México.

Enfrentar los retos del desarrollo sostenible no consiste sólo en cuestionar nuestros patrones y prioridades de vida: también es poner en tela de juicio los valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos en todo el mundo. Para esta tarea es preciso entender los problemas y plantear soluciones. Educar para avanzar hacia la sostenibilidad es cuestionar todo y sembrar desde la escuela una semilla de optimismo en la sociedad. El desarrollo sostenible no es una meta: es un proceso que tendrá que abarcar a todos, un camino que tendremos que recorrer juntos para que la humanidad tenga la opción de perdurar.

El diagnóstico revela que las crisis derivan directamente de los avances del proyecto civilizatorio de moda: avances en la tecnología; aumentos en la producción y en la integración nacional e internacional y en sus secuelas, como pueden ser la polarización social con un aumento inaceptable en el número de pobres y la profundización de su tragedia; la escasez de satisfactores básicos; la destrucción y la degradación del ambiente, bosques y selvas, océanos y ríos, y los demás ecosistemas que albergan la incontable variedad de flora y fauna que nos provee de vida y de los medios para mantenernos en el planeta. La mujer, inmersa en todas estas crisis, se ve obligada a asumir algunas responsabilidades masculinas de antaño y buscar nuevos caminos para su propio desempeño.

Es evidente la necesidad de modificar este proyecto. Muchos tendremos propuestas para hacerlo y para identificar nuestra responsabilidad en el proceso. Las secciones siguientes buscan contribuir a una reflexión sobre la forma de realizar esta labor.

Nuestro mundo actual: pobres, ricos y alianzas sociales

Por doquier, la gente pobre es acusada de destruir su entorno. Estas acusaciones justifican las políticas que después amenazan la propia existencia de los grupos sociales tradicionales y de sus sistemas productivos. Su incapacidad para adaptarse a la modernidad refuerza la idea de que son la causa del atraso social y económico. Aun en las sociedades más modernas, “culpar a la víctima” de su propia situación y de su falta de progreso colectivo es un fenómeno bastante común.

Esta percepción de la pobreza como agente de los problemas ambientales es equivocada. El debate convencional lamenta el destino de los pobres y la incapacidad de asignar recursos suficientes para atacar los síntomas de las carencias que persisten en medio de la abundancia de estas mismas sociedades. Hay que transformar el debate, y examinar de manera crítica la acumulación sin precedentes de riqueza que ha polarizado a la sociedad y que ha propagado la pobreza. La reorganización del control y de la utilización del espacio y los recursos, engendrada por la intensificación de la producción, está violando los principios básicos de la naturaleza y amenazando la viabilidad de nuestras comunidades. Los pobres no

saquean la tierra debido a su insensible desperdicio de recursos, sino por la falta de una distribución equitativa de la riqueza social disponible y por la manera despiadada con que los ricos y poderosos defienden su control. La disparidad en los sistemas sociales y productivos prevalecientes en Latinoamérica está conduciendo al desastre. Con el creciente desempleo y la discriminación contra los pequeños productores rurales y sus camaradas en los sectores urbanos marginados, la degradación ambiental avanza aceleradamente.

Visto desde tal perspectiva, el sistema mundial está incrementando la polarización entre pobreza y riqueza; entre naciones, regiones, comunidades e individuos. Ahora, un grupo pequeño de corporaciones domina la estructura global de poder, guía la producción y determina cómo se distribuyen los elementos de bienestar. Ahora las comunidades compiten internacionalmente entre sí para seducir a los poderes corporativos y financieros y lograr que inviertan dentro de sus fronteras, sacrificando el bienestar de su población, la calidad de su infraestructura y su capacidad financiera para ofrecer los servicios sociales fundamentales necesarios para una vida digna. Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo sostenible. Las regiones incapaces de atraer la inversión sufren el innoble destino de los perdedores en la permanente olimpiada económica, condenándose al olvido en el escenario mundial; y muchas ganadoras experimentan un deterioro característico del “progreso económico moderno”. En su lucha por sobrevivir dentro del mercado global, muchos grupos sociales están condenados a la marginalidad y a la pobreza permanentes. Pero algunas de las transformaciones en este nuevo orden global están generando nuevas oportunidades, realzando la posición excepcional de la mujer y de los grupos que han defendido su carácter étnico.

La teoría convencional del desarrollo busca soluciones a la pobreza en los cambios estructurales producidos por el mercado. Pero esta estrategia plantea dos preguntas medulares. La primera: ¿es viable un nuevo período de crecimiento posible o deseable, dadas las limitaciones ambientales? La segunda: de acuerdo con la trayectoria histórica, ¿existe evidencia demostrada de que los nuevos niveles de crecimiento proporcionarán mayor equidad económica, política y social entre los diversos grupos de naciones, regiones, comunidades e individuos?

La respuesta a ambas preguntas es *no*. Una estrategia de libre mercado no puede tender un puente sobre el abismo que existe entre los ricos y los pobres, característico de los dualismos de nuestros días. Más bien, debemos reconocer que los recursos naturales son limitados, que es necesario centrar las tareas educativas en superar la pobreza con programas de gestión local y participación directa, y lograr la sostenibilidad ofreciendo un programa de desarrollo para aquellos actualmente excluidos, lo que también mejorará las condiciones para el resto de la sociedad. Tanto el creciente número de pobres como los problemas ambientales en aumento exigen soluciones menos dependientes de los azares del mercado, que tomen en cuenta lo redundante que resulta para grandes porciones de la po-

blación su inserción en la estructura actual de la producción y del crecimiento económico. Por el contrario, es conveniente crear un sistema en el cual las comunidades puedan sobrevivir sin una integración completa al mercado global.

Cuando nos acercamos a los excluidos descubrimos que, si se les da oportunidad y acceso a los recursos, emprenden acciones directas para proteger y mejorar el ambiente¹. Desde esta perspectiva, un modelo de desarrollo alternativo requiere de nuevas formas de participación de las comunidades campesinas e indígenas dentro de un programa de creación de empleos que incremente los ingresos y mejore los niveles de vida. Al recomendar políticas que fomenten y salvaguarden a los productores, para que lleguen a ser nuevamente actores productivos, vibrantes y viables, este ensayo desea contribuir al conocimiento de los pasos requeridos para promover la sostenibilidad.

Entre las muchas preguntas que surgen de esta discusión, las de mayor importancia pueden agruparse dentro de cuatro áreas:

¿Cuál es la relación entre pobreza y degradación ambiental?

¿Pueden superarse los obstáculos para alcanzar la sostenibilidad mediante la elevación de los niveles de ingreso per capita?

¿Pueden las políticas dirigidas a erradicar la pobreza contribuir también a reducir las presiones sobre el ambiente?

¿Están los ricos del mundo confrontando los problemas de la sostenibilidad responsablemente? ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en las acciones dirigidas a la protección ambiental y a la conservación de las áreas habitadas por los pobres?².

La sostenibilidad no es posible en Latinoamérica mientras aumente la pobreza y se niegue a los pobres el acceso a los recursos necesarios para la mera supervivencia. El capitalismo internacional no necesita ya de crecientes ejércitos de desempleados para asegurar salarios bajos ni necesita controlar vastas áreas para asegurar un flujo regular de materias primas y productos primarios requeridos por su maquinaria productiva. Sin embargo, se siguen extrayendo grandes excedentes que desarraigan y empobrecen a la población. Se requieren, por tanto, cambios profundos para facilitar una estrategia de desarrollo sostenible. En la sección final exploramos tal enfoque, sugiriendo que es posible y necesario promover una alternativa: una estructura que permita mayor autonomía para que la gente reconstruya sus sociedades y produzca bienes y servicios en un diseño sostenible, mientras se expanden los servicios de protección ambiental.

Riqueza, pobreza y degradación ambiental

El contexto de la crisis actual

La pobreza surge de las desigualdades profundas que caracterizan a nuestras sociedades. El poder económico y político se apropia de los bienes de otras personas e incluso de sus derechos para disfrutar de un ingreso mínimo decente. Los problemas ambientales de Latinoamérica hoy en día reflejan la herencia de un patrón de desarrollo político polarizado. En esta sección identificamos las principales fuerzas que están determinando el proceso simultáneo de desarrollo y de empobrecimiento, y discutimos algunas de sus manifestaciones.

Aunque el proceso difiere grandemente de país a país, y aun en el interior de cada país, los resultados han sido notablemente similares. La colonización del pasado, y la neo-colonización más reciente del continente americano, dieron origen a una serie sin fin de desplazamientos, apropiaciones y expropiaciones. El neoliberalismo de hoy profundiza esta dinámica. Conforme las olas sucesivas de colonizadores demandaron las tierras de mayor productividad, el uso de la tierra evolucionó de su vocación histórica (productora de los recursos básicos para la supervivencia humana y social) al énfasis actual en la producción de cultivos que aseguran una ganancia a los propietarios. Por más de quinientos años, los primeros pueblos de las Américas y sus sucesores han sido forzados una y otra vez a buscar refugio en condiciones cada vez más marginales. Hoy, no sólo los indígenas sufren esta ignominia: mestizos de las ciudades y del campo y migrantes de todas partes están condenados a sufrir la carencia de lo que serían sus derechos humanos inalienables.

Hacia mediados del siglo XX, los empresarios rurales comenzaron a modelar una nueva tradición científica, utilizando los recursos estatales y corporativos para inventar lo que pronto se conocería como la “revolución verde”. Desplazando a los agrónomos que habían trabajado dentro de la tradición campesina, los técnicos introdujeron agroquímicos y maquinaria que utilizan fuentes de energía no renovables para aumentar la productividad. Más tarde harían lo mismo con biotecnologías³. Respondiendo al espectro neomalthusiano, los diseñadores de la política presionaron a las instituciones multilaterales financieras y de desarrollo (FAO, BIRF, FMI) para expandir el alcance de la “revolución verde”. Insistiendo en la necesidad de privilegiar a las granjas comerciales, los modernizadores enfocaron sus esfuerzos a promover el desarrollo agrícola entre los grupos sociales empresariales a expensas de los campesinos. Estos empresarios se apropian de ganancias extraordinarias con un uso dispendioso del agua, la energía y los agroquímicos. En nombre del progreso, y para contrarrestar la amenaza malthusiana, siguen remodelando el hemisferio completo: haciendo florecer los desiertos, abriendo los bosques húmedos tropicales, desnudando las montañas, drenando los pantanos y humedales, y cortando las raíces que sustentan los manglares.

El sacrificio humano también es extraordinario. Por toda Latinoamérica las comunidades agrarias han sido desplazadas de tierras valiosas y arrinconadas en regiones inapropiadas, de acceso difícil, con las tierras más pobres e inadecuadas y con la más precaria disponibilidad de agua. Engañados o entrapados en regiones y empleos insostenibles, encuentran difícil o prohibitivo continuar las tareas importantes de conservación del suelo y del agua y los manejos prudentes que fueron parte integral de su cultura ancestral. No tienen más alternativa que utilizar y devastar sus propios ambientes en su lucha desesperada por sobrevivir⁴.

El mercado acentúa esta tragedia. Con el deterioro que les provocan los términos del intercambio⁵, muchos pequeños agricultores no tienen otra alternativa que buscar empleo donde sea, y frecuentemente se ven obligados a vender, transferir o simplemente abandonar sus tierras. La yuxtaposición perniciosa de los grupos sociales impuesta por el funcionamiento normal de la economía de mercado no sólo limita severamente las oportunidades de las masas de trabajadores y campesinos, sino que convierte a muchos de estos grupos en olas migratorias que buscan nuevos lugares para sobrevivir, frecuentemente en áreas inadecuadas debido a la fragilidad de sus ecosistemas.

La expansión acelerada del segmento moderno de la sociedad rural está, en consecuencia, ocasionando mayores problemas ambientales en décadas recientes. Los trabajadores son envenenados en los campos por los plaguicidas, mientras que sus familias sufren por los efectos de la contaminación química y orgánica en sus comunidades. Los campesinos soportan condiciones de trabajo intolerables como seres humanos, pero a menudo salen del molde para enfrentar a estados militarizados en su lucha por un poco de dignidad. Los estragos ambientales acumulados por décadas han acelerado su ritmo e intensidad a tal grado que ahora son una gran amenaza para la viabilidad de incontables especies de flora y fauna, y para la misma sociedad humana. El clamor de los grupos ciudadanos y los ambientalistas organizados es testimonio de este fenómeno.

Una respuesta política inadecuada

Como respuesta a la devastación, nos encontramos ahora obligados a “racionalizar” el uso de los recursos naturales. Después de haber transformado la naturaleza, ahora debemos reconsiderar cómo proteger a nuestra sociedad. Frente a los controles impuestos sobre los productos importados por las naciones ricas, algunos utilizan químicos de manera más moderada o cambian a fórmulas menos dañinas; las gasolinas ya no contienen plomo y el agua está tratada. En los países latinoamericanos, los esfuerzos por promulgar un conjunto adecuado de regulaciones protectoras también han obligado a algunos productores a modificar sus prácticas, pero en muchos lugares las distorsiones burocráticas dificultan hacerlas efectivas. Otros responden a las nuevas políticas que eliminan los subsidios a

todos los productos de este tipo utilizando recursos con mayor cuidado, o cambiando las técnicas para reducir los costos o incrementar la productividad. Para los que así proceden, una combinación de sus propios intereses con las respuestas a las señales administrativas y del mercado, reforzada por una vigilancia social apropiada, puede conducir a una reducción progresiva del daño ambiental en regiones ya ocupadas con anterioridad por el sector comercial.

Sin embargo, aunque tales acciones en pos de la protección ambiental en la producción y las estrategias políticas son movimientos en una dirección correcta y deben fomentarse, pocos pasos se han tomado para proteger a las poblaciones en riesgo. Mientras tanto, el eslabón político crucial que determina la correlación entre la expropiación de los recursos naturales y ambientales y la explotación de la gente se relega al campo de las organizaciones de base: los organismos no gubernamentales (ONGs), los grupos de mujeres, algunos grupos ambientalistas, organizaciones de los derechos de los trabajadores y los mismos productores directos. Soslayando una experiencia que demuestra cómo el desarrollo sostenible se coloca en un panorama más amplio de justicia social, derechos humanos y diversidad cultural, el ambiente político continúa reforzando el proceso social que penaliza a los pobres. El análisis oficial “culpa a las víctimas” por los dilemas que enfrentan y, sumado a las críticas devastadoras de la ineficiencia y corrupción burocrática, propaga la visión de que el mercado “libre” produce un uso mucho más eficiente de los recursos, mayores niveles de bienestar y una tasa mayor de crecimiento económico.

Los sistemas modernos de producción continúan su expansión disputando los derechos de los campesinos e indígenas en sus tierras más productivas y sus recursos más valiosos, y desechando brigadas enteras de obreros para volver eficientes sus industrias. Las instituciones oficiales, nacionales e internacionales, desarrollaron nuevas estrategias para promover empresas globales y premiar a los agricultores comerciales por sus aportaciones al desarrollo nacional. Les aseguran acceso privilegiado a los recursos más valiosos de la sociedad en proceso de modernización: tecnología, crédito y canales de mercado. Les regalan la tierra y los recursos naturales. La pobreza se acentúa por esta expansión, la cual frecuentemente condena a la devastación a ciertas regiones y a quienes viven en ellas. En la nueva arena política, la lucha de los pobres es cada vez más difícil. En el mejor de los casos, los grupos marginados pueden intentar reclamar una pequeña proporción de los presupuestos oficiales para sus tareas; ahora reclaman a la comunidad mundial para que los entiendan y apoyen, o instalan varias formas de resistencia para resolver sus peticiones. Aun cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra hacia los grupos campesinos e indígenas, como en México, Bolivia y Nicaragua, los recursos financieros y técnicos complementarios requeridos para ayudar a los nuevos propietarios fueron invariablemente dirigidos a otros usuarios.

La dinámica de la pobreza

Por encima de todos estos factores se encuentra el hecho de que la pobreza es la consecuencia histórica de los sistemas existentes de organización económica, los cuales continúan discriminando a los productores directos. Si bien es cierto que hoy nuestras sociedades son mayormente urbanas y las escuelas se concentran en estas áreas, no podemos menospreciar el papel tan importante que tienen las regiones rurales para abastecernos de los elementos fundamentales para la supervivencia y para el manejo ambiental que contribuye a contrarrestar el deterioro ocasionado por “el progreso”. Descubrimos que los productores rurales de pequeña escala no están dotados de cantidades comparables de equipo que les permitan elevar la productividad de la tierra y el trabajo. Sin embargo, es cada vez más preocupante el hecho de que la organización agropecuaria del tercer mundo los coloca en una desventaja no sólo respecto de otros sectores, sino también en su lucha por competir con los productores de otras partes del planeta. En el tercer mundo carecen de acceso al apoyo técnico, financiero e institucional protector con que contaban antes los agricultores de otros países para enfrentar la competencia.

Estos problemas fundamentales pueden examinarse más fácilmente señalando algunas de las causas principales de la pobreza, las cuales permiten elaborar los lineamientos para una estrategia alternativa del desarrollo sostenible. No es éste el lugar para entrar en los detalles de estas facetas de la dinámica social, pero es fundamental mantener algunos procesos en mente cuando consideramos cómo construir alternativas (véase Barkin, 1998[a]). Los siguientes son los obstáculos más sobresalientes a los esfuerzos sociales para proseguir con una estrategia para el manejo sustentable de recursos regionales:

Políticas macroeconómicas y sectoriales discriminatorias.

Sistemas inadecuados y polarizados de tenencia de la tierra.

Sesgo anti-campesino en las instituciones de desarrollo.

Distribución desigual del ingreso y del poder político.

Políticas inadecuadas de empleo, castigando a las actividades tradicionales.

Presiones contra las instituciones culturales locales.

La migración y la feminización de la pobreza.

El sesgo hacia la modernización urbana y la pobreza rural.

En este complejo telón que relaciona lo rural con lo urbano, las dicotomías de épocas pasadas no son útiles ya para el campesinado y el proletariado. El ingreso proveniente de fuentes externas a la comunidad es ahora una parte integral de los recursos locales, mientras que las múltiples habilidades adquiridas en estos

empleos podrían contribuir a diversificar la base económica del campo. De manera inversa, las poblaciones rurales y su experiencia también tienen un gran potencial para contribuir al mejoramiento de la vida nacional. En todo el tercer mundo, las importantes diferencias en la productividad y los ingresos entre la industria y la agricultura han creado una barrera para lograr un desarrollo urbano más equilibrado, que incluiría un patrón diversificado de uso del suelo. Por ejemplo, la posibilidad de producir alimentos en áreas urbanas como parte de una respuesta al creciente desempleo podría bajar los costos de transporte y las tasas de crecimiento urbano. Asimismo, mejorar los niveles de vida y proteger el ambiente urbano requiere confrontar la imperiosa necesidad de crear empleos productivos en las áreas rurales.

Las consecuencias sociales y ambientales de la internacionalización

La economía internacional se insinúa en cada aspecto de la vida. No se toma en cuenta para el análisis del cambio en las comunidades rurales aparentemente independientes y aisladas; para las discusiones de la sostenibilidad era virtualmente inexistente hasta la época de más reciente. Sin embargo, la expansión internacional ha transformado a la economía dual en un fenómeno global, creando sistemáticamente estructuras que polarizarán a la sociedad y acelerarán procesos que amenazan el bienestar social y el ambiente (Barkin, 1987; Wolf, 1982).

El comercio y el ambiente: los errores del estado y el mercado

El avance hacia el libre comercio se combinó con un proceso de integración regional. Los mecanismos del mercado reemplazaron a las imposiciones burocráticas, permitiendo mayor libertad para el capital y las decisiones de inversión de los grupos empresariales. La competencia entre los grupos financieros surgió conforme tomaron ventaja de las oportunidades ofrecidas por la economía internacional para crear nuevas industrias y modernizar las viejas, traer nuevas tecnologías en un intento por superar los viejos problemas, y reubicar a la sociedad y a sus integrantes a fin de confrontar los cambios de la competencia internacional. Las agencias multilaterales de desarrollo comenzaron a financiar los cambios institucionales y productivos necesarios para impulsar a muchos países de todo el mundo al mercado mundial. El nuevo clima de libertad económica generó las condiciones para altas ganancias, atendiendo las demandas del mercado internacional y de un nuevo grupo próspero de consumidores locales, principales beneficiarios de la nueva estrategia. Las bolsas de valores asumieron una nueva importancia como foco para los movimientos especulativos de capital que están influyendo de manera importante en las decisiones políticas y productivas. En Latinoamérica se sintieron rápidamente los efectos desestabilizadores de los movi-

mientos de capital: los financistas internacionales impusieron fuertes límites a la posibilidad de los gobiernos nacionales para promover una estrategia popular de desarrollo sostenible, ocasionando costos particularmente onerosos a los trabajadores y los campesinos.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial del Comercio fueron de gran importancia y visibilidad. Grupos opositores forjaron alianzas para tratar de derrotar estas iniciativas que, dijeron, ocasionarían graves daños ambientales y sociales. La internacionalización de la economía global acelera la especialización productiva, intensificando los problemas de degradación y destrucción de los ecosistemas. La mayor concentración de la riqueza y la agudización de la pobreza están haciendo cada vez más difícil la tarea de controlar y revertir el daño ambiental. Algunos grupos ambientalistas hacen hincapié en los altos costos que este comercio ocasiona en términos de contaminación por transporte y desperdicios del proceso de producción y una utilización más rápida de los recursos naturales, especialmente de la energía. Otros críticos fueron más allá, objetando la rápida difusión de un modelo de desarrollo insostenible e inalcanzable, que imponía el consumo creciente como base para mejorar el bienestar humano.

Justo cuando los gobiernos nacionales son forzados a reducir sus funciones tradicionales y a sacrificar parte de su base de ingresos públicos para atraer nuevas inversiones, se intensifica el ritmo de crecimiento económico. Sin desprenderse de su control político, están devolviendo muchas responsabilidades a las regiones (estatales o provinciales) y a las administraciones locales, las cuales no están preparadas para enfrentar esta carga. La carencia de personal técnico y sistemas administrativos modernos agudiza los problemas. Esto hace resaltar el interés por los daños ambientales y la destacada polarización conforme los comerciantes internacionales arrebatan los beneficios de la nueva apertura del sistema internacional⁶.

Pero la internacionalización crea nuevas contradicciones. No ha resultado fácil convencer u obligar a las empresas a que incluyan en el diseño y operación de sus proyectos de inversión los efectos ambientales y sociales causados a la comunidad. Hasta ahora, no se ha logrado que las compañías incorporen estas “externalidades” (es decir, los costos totales para el ambiente y la sociedad) en sus cálculos, o, salvo contadas excepciones, a que sus planes de producción y expansión no contribuyan al deterioro del entorno en que operan. Preocupante es la práctica actual de estas corporaciones que se sirven de sus considerables influencias políticas y económicas para que se establezcan políticas que conducen a lo opuesto de lo que los economistas y ambientalistas considerarían las decisiones óptimas. Negocian subsidios o exenciones de varios tipos por servicios públicos (incluyendo impuestos locales, cargos por servicios de infraestructura municipal y tarifas de energía), que conducen a la elección de tecnologías que no están acor-

des con los mejores intereses del país o del planeta en términos de su impacto en el medio ambiente. Los programas públicos para atraer inversiones privadas a menudo fomentan un incremento en el empleo de maquinaria, desplazando a la mano de obra, y aumentan el uso de energía; a la vez, eximen a las nuevas empresas de su aporte para financiar las inversiones en servicios públicos requeridos para asegurar la producción. Como resultado, las nuevas instalaciones para la producción privada se dan con frecuencia a expensas del deterioro en la calidad de los servicios disponibles para la población local, incluyendo a muchos obreros que han emigrado en busca de trabajo. Así, se observa un aumento importante de producción con una merma sensible en la calidad de vida para todos los que habitan en la zona.

Las distorsiones en los sistemas de precios no son las únicas fallas del mercado. Durante mucho tiempo, los economistas han evaluado las diversas externalidades asociadas con la producción y la organización colectiva. De la expansión internacional surgen grandes preocupaciones conforme los nuevos inversionistas -alentados por la necesidad de generar divisas- aumentan la intensidad con que extraen los recursos naturales, con efectos deplorables para el ambiente. Muchos convenios de producción para el mercado internacional son de corto plazo, generando fuertes incentivos para elevar la intensidad de la extracción de valor -un problema que se está agudizando en las áreas de plantación forestal y de monocultivo agrícola del tercer mundo. A menudo, la creciente intensidad de extracción en una región conduce al empobrecimiento de otras, ya que los métodos tradicionales de producción en las áreas forestales o costeras resultan demasiado costosos para permitir a la mayoría de los campesinos competir en los mercados nacionales e internacionales. Estos sistemas de producción especializada, localizados en la agricultura, la minería o la silvicultura, en áreas marinas o urbanas, con frecuencia son considerados por muchos expertos como los peores depredadores del medio.

La separación del consumo y la producción

La opulencia, la acumulación de riqueza y la desigualdad son una grave amenaza para la sostenibilidad del sistema global. Los patrones de consumo de los países más ricos están conformados por un aparato productivo que sólo prospera generando nuevas demandas de bienes para continuar creciendo. Esta lógica productiva le impide a las empresas o al mismo estado definir un paquete socialmente deseable de productos para el uso individual y colectivo que satisfagan las necesidades básicas. Actualmente, las energías creativas se dirigen hacia el acrecentamiento del volumen de bienes con una elevación concomitante del uso de energía y otros recursos naturales, sacrificando frecuentemente la capacidad de la sociedad para enfrentar mayores metas sociales.

Con la creciente comprensión de la amenaza de la crisis ambiental, aumentan las presiones por tecnologías de producción y patrones de consumo más responsables. Aunque hay casos selectos donde los recursos son utilizados con mayor eficiencia y se presta mayor atención a la reducción y reciclaje de múltiples desechos, el problema fundamental es el imperativo hacia el crecimiento basado en el consumo de un volumen cada vez mayor de bienes y servicios, demandando más recursos y energía. Esto crea un modelo insostenible que las sociedades opulentas no están preparadas para contener, mucho menos para revertir.

Existe una contradicción fundamental en el interior de un sistema que promueve una creciente separación entre consumo y producción. La urbanización ciertamente contribuye a esta separación. Aún cuando haya una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el ambiente, la creciente complejidad de los procesos productivos y las características del consumo urbano conducen a perder contacto con la relación intrínseca entre el bienestar ambiental y el humano. Se están olvidando las tradiciones y prácticas culturales que se perfeccionaron y transmitieron a través de generaciones para proteger el ambiente y las especies. Las presiones de la reorganización social y productiva han avanzado más allá de la capacidad de muchas de estas sociedades para adaptarse, con el resultado de que un número importante está sufriendo procesos acelerados de deterioro ambiental. Más que nunca, necesitamos considerar las contribuciones que las adaptaciones de las antiguas y las nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar el paisaje y los sistemas productivos deteriorados. Conforme avance nuestra comprensión de los sistemas tradicionales de conocimiento, será posible aprovechar algunos de los enfoques de manejo ambiental utilizados en unas sociedades para proteger los ecosistemas y mejorar la calidad de vida en otras áreas.

El análisis económico del “problema”

Frente a los retos de la “sostenibilidad,” los teóricos del desarrollo, y sus colegas que formulan las políticas en las instituciones multilaterales, reaccionan justificando sus recetas con la estructura analítica y las herramientas de la economía neo-liberal, es decir, de los grupos ricos que dominan el mercado mundial. Como resultado, una parte importante del esfuerzo y un gasto considerable han sido dedicados a cuantificar los problemas de la degradación ambiental y a formalizar la búsqueda de soluciones en modelos económicos que ofrecen métodos para fijar precios a los recursos y asignar costos a los contaminantes y a los procesos de degradación⁷.

Para muchas de estas agencias multilaterales, el “desarrollo sostenible” es otra oportunidad para emplear la caja de herramientas del economista. Los economistas sostienen que, bajo circunstancias de pobreza y escasez de capital, la gente con poder económico y político asigne los recursos para promover la inversión,

incrementando la tasa de crecimiento en el corto plazo de modo que después se tengan más recursos disponibles para enfrentar las demandas populares para resolver los problemas colectivos e individuales del bienestar social. De acuerdo con sus ideas, la calidad del ambiente es una “mercancía” de lujo, que sólo puede ser valorada cuando la gente ha resuelto sus necesidades básicas.

Una “Curva de Kuznets”, aplicada al ambiente, es un aparato heurístico que se utiliza para justificar tal enfoque teórico. Se ha identificado una tendencia de las naciones más ricas a asignar una proporción creciente de su ingreso nacional al mejoramiento ambiental. Así, encontramos que algunos economistas interesados en el tema argumentan, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica contribuirá a mejorar el ambiente en la medida en que eleve la tasa de crecimiento económico y estimule la demanda por un ambiente más limpio⁸.

De la misma manera, los economistas neoclásicos ofrecen una serie de conclusiones analíticas y recetas de política fundadas en su comprensión de la manera en que funcionan los mercados. Larry Summers, el economista principal del Banco Mundial en su momento, y luego encargado de la política económica internacional de Estados Unidos entre 1995 y 1996, ofreció un ejemplo espléndido de este razonamiento cuando se le preguntó si “el Banco Mundial [no] debería fomentar mayor migración de las industrias sucias a los países en vías de desarrollo”. Explicó que “una cantidad dada de contaminación perjudicial para la salud debería hacerse en el país con el costo más bajo, que sería en el país con los salarios menores”. Más aún, destacó que “la demanda por un ambiente limpio por razones estéticas y de salud parece tener una elevada elasticidad de ingreso”, ya que la gente de estos países tiene tasas elevadas de mortalidad infantil y no necesita preocuparse por las enfermedades provocadas por la contaminación, que sólo se manifiestan en la gente mayor (Foster, 1993: 10-11).

Los pobres contribuyen a la degradación del ambiente, se dice, por la urgencia en enfrentar sus necesidades de supervivencia. En términos técnicos, los pobres valoran más a los productos disponibles en el corto plazo, a expensas de las actividades que sólo darán frutos en el futuro. Por eso deberían aceptar la degradación ambiental a largo plazo, con estrategias que sacrificarían la calidad ambiental. Desgraciadamente, desde el punto de vista de los más necesitados, la inversión en actividades como proyectos de conservación del agua y reforestación produciría beneficios después de un largo tiempo. Los economistas de la comunidad financiera internacional sostienen que los pobres no estarían en condiciones de atender a las necesidades de mantenimiento de ecosistemas por la urgencia de atender sus necesidades inmediatas de comida y albergue; en contraste, aseguran que estas prioridades cambiarán a mediada que las sociedades crezcan, porque los mismos productores tendrán más recursos y porque una mayor disponibilidad de capital contribuiría a reducir la tasa de descuento social; y también porque los gobiernos estarán mejor equipados para enfrentar los problemas⁹. En

consecuencia, “sólo después de que los productores pobres incrementen sus ingresos pueden volver su atención a la reducción de la erosión del suelo y a otros problemas ambientales de largo plazo”¹⁰ (Leonard, 1989: 4).

El crecimiento de la población es otra de las causas de la degradación ambiental, de acuerdo con aquellos que utilizan modelos de comportamiento de elección racional, línea fundamental de los que proponen las políticas neoliberales. Las altas tasas históricas de fertilidad les sugieren una receta política: la urgencia por imponer controles más estrictos sobre la natalidad. Más que admitir que el crecimiento de la población frecuentemente es un síntoma del fracaso de sus propias políticas económicas, y de la creciente marginación de los pobres, los políticos califican como irracionales a los grupos sociales que eligen procrear más hijos; entonces, tienen que ser más responsables e intervenir con programas de planificación familiar, alfabetización femenina, estrategias de control social o medidas más autoritarias, si el primer enfoque falla (Ehrlich y Ehrlich, 1991).

En general, los economistas insisten en que el mercado es el mejor mecanismo que la sociedad tiene para la asignación de recursos. Incluso Herman Daly, un crítico muy conocido del pensamiento convencional sobre sostenibilidad que ha introducido consideraciones institucionales y biológicas en su análisis, comenzó uno de sus libros con la defensa de los mercados:

“Estamos convencidos de la capacidad de los mercados y de su excelencia para ciertos propósitos que están en el corazón de las teorías clásica y neoclásica. Creemos que muchos propósitos públicos podrían ser mejor servidos por la aplicación de los principios del mercado que por el remiendo de los gobiernos ahora prevalecientes. (...) El análisis del mercado puede continuar jugando un papel extremadamente importante dentro de un contexto que ve el propósito de la economía al servicio de la comunidad (Daly y Cobb Jr., 1993: 19).

Ahora, la prioridad para los economistas es determinar el costo social de los recursos y flujos de desperdicios. De asignar precios correctos, argumentan, promoverían un uso más cuidadoso de los escasos recursos y una actitud más responsable hacia la generación y dispersión de desperdicios. Sin embargo, las decisiones acerca de cómo expresar estos asuntos en términos financieros no son simples cuestiones técnicas. Más bien implican cuestiones complejas sobre la distribución de los recursos y beneficios entre diferentes clases sociales y entre generaciones, sobre el control actual y futuro de los recursos y el papel de la tecnología en la sociedad. En pocas palabras, los debates técnicos entre los economistas enmascaran asuntos fundamentales sobre el funcionamiento presente y la evolución futura de la sociedad.

Las discusiones técnicas de los economistas soslayan cuestiones importantes. Una vez que se decide cómo cobrar a la gente por usar recursos y por los daños

al ambiente, habría que decidir cómo usar estos recursos para mejorar la calidad de la vida. La captación de parte de este valor puede ser una fuente de ingresos para ayudar al financiamiento de los enormes gastos necesarios para corregir el daño debido a una larga historia de maltrato a la naturaleza. El dinero puede ser utilizado también para compensar a las comunidades por la explotación de sus recursos, un mecanismo para pagar las inversiones requeridas para sustituir esos recursos con nuevas actividades productivas que garantizarán un empleo lucrativo en el futuro. Las reformas institucionales requeridas por este enfoque implican un reordenamiento importante de las prioridades sociales y políticas, tema al que debemos retornar con frecuencia.

Una respuesta popular

Frente a la tesis oficial de la necesidad de acelerar la internacionalización del capital, las organizaciones no gubernamentales, en representación de los diversos intereses de la “sociedad civil” en el mundo, han comenzado a jugar un papel crucial, ofreciendo modelos alternativos de desarrollo sostenible. Las ONGs internacionales han librado una lucha contra los programas de ajuste estructural, movilizando a los grupos nacionales y locales en su contra por la carga desproporcionada que imponen a los grupos más vulnerables en el tercer mundo. Estos esfuerzos de organización continúan siendo especialmente efectivos debido a que no se limitan a los intereses sectoriales de grupos ambientalistas u otros interesados en los derechos humanos, los problemas de las mujeres, el trabajo o los campesinos. Comparten un análisis común que identifica a la desigualdad como uno de los problemas principales y, en consecuencia, a la participación democrática de base como la estrategia fundamental y el principio de acción política (Barkin, 1994; Gregory, 1992; Johnson y Cooperrider, 1991; Livernash, 1992; Cruz y Repetto, 1992; Mumme, 1993).

Aunque el Banco Mundial reconocía la existencia de estos grupos sociales desde 1975, la participación sustantiva de las ONGs sólo comenzó después de un acuerdo suscrito en 1987 respecto a la necesidad de aprovechar la experiencia de las ONGs sureñas y las organizaciones de base. A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo realizada en Río en 1992, ha aumentado la colaboración oficial con las ONGs preocupadas por el desarrollo y el ambiente. La organización de los grupos de base de todo el mundo, junto con el reconocimiento creciente del fracaso de las soluciones mercantiles para proporcionar respuestas a las necesidades de los marginados, está creando una nueva estructura en la que los defensores de la participación popular no sólo ocupan un lugar importante en los debates sobre la promoción del desarrollo sostenible, sino que también pueden participar en el diseño e instrumentación de programas de desarrollo nacional. Por supuesto, esto no resuelve los problemas más difíciles del conflicto de intereses entre los grupos sociales en cada país y región, el cual constituye la barrera más importante para el desarrollo sostenible.

Nuevas estrategias para el desarrollo rural sostenible: participación popular, autosuficiencia alimentaria y regeneración ambiental

La economía dual de hoy es un anacronismo. Mientras la internacionalización promete más que nunca mayores ganancias para el capital, las contradicciones creadas por el empobrecimiento están provocando una intensa y amplia rebelión en muchas partes. En este ensayo hemos trazado la expansión internacional del capital, y la manera en que integra a los recursos y a la gente en un sistema polarizado de gran riqueza, acompañado por pobreza y despojo. La expansión ha creado vastas áreas deforestadas, sin posibilidades de ser cultivadas, junto con importantes grupos humanos viviendo en condiciones precarias en las áreas rurales o en las marginales urbanas. Este desperdicio de recursos naturales y humanos impone una pesada carga a la sociedad, no sólo en términos de oportunidades desaprovechadas, sino también por los altos costos que ocasiona el control autoritario de la población.

Sostenibilidad

El desarrollo sostenible se ha convertido en un poderoso y controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y los funcionarios de los organismos internacionales de desarrollo. Apesar de que exista un creciente convencimiento de que el desarrollo sostenible es una idea cuyo tiempo ha llegado, todavía no es aceptada, porque choca con el interés hegemónico de una poderosa minoría aún cuando existiera un reconocimiento amplio de que no se pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per capita en los países ricos para quienes viven en el resto del mundo. Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden mantenerse, aun para los grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de bienestar material¹¹. En este nuevo discurso, los recursos que nos rodean no sólo son el capital natural heredado (incluyendo las materias primas, como los productos del suelo, del subsuelo, la buena calidad del agua y el aire, los bosques, océanos y humedales) sino también la capacidad de la tierra para absorber los desperdicios producidos por los sistemas productivos. El análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre la calidad de los ambientes contruidos, en los cuales vivimos y trabajamos.

El interés por la sostenibilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado frente al deterioro de la calidad de vida. Los sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan con la continuidad de nuestras organizaciones sociales. Los modelos actuales de desarrollo son injustos y antidemocráticos. Como reacción, surge el espectro de la desintegración de los sistemas presentes -social, político, productivo y aun de riqueza personal. Debe reemplazarlos una estructura diferente, más acorde con las posibilidades de la tierra para mantener y reproducir la vida.

Referirnos a las cuestiones de sostenibilidad, entonces, requiere confrontar los dilemas fundamentales que enfrentan las instituciones del desarrollo. Aunque los enfoques de la difusión del progreso económico por goteo enriquecen a algunos y estimulan el crecimiento en economías y sectores modernos dentro de las sociedades tradicionales, éstos no responden a las necesidades de la mayor parte de la población. Más aun, contribuyen a agotar las reservas mundiales de riqueza natural y al deterioro de la calidad del ambiente.

En el análisis final descubrimos que, en las condiciones presentes, *la misma acumulación de riqueza crea pobreza*. Mientras que los pobres sobreviven en condiciones infrahumanas y son forzados a contribuir a la degradación ambiental, lo hacen por falta de alternativas. Aún en el más pobre de los países, los abismos sociales no sólo evitan que los recursos sean utilizados para mejorar la situación, sino que realmente agravan el daño, sacando a la gente de sus comunidades y negándole la oportunidad de proyectar sus propias soluciones. Por esta razón, la búsqueda de la sostenibilidad implica una estrategia dual moderna: por una parte, debe facilitar a la gente el fortalecimiento de sus propias organizaciones o la creación de nuevas, utilizando sus recursos relativamente magros en la búsqueda de una alternativa y de una resolución autónoma de sus problemas. Por otra parte, una estrategia de desarrollo sostenible debe contribuir al surgimiento de un nuevo pacto social, cimentado en el reconocimiento de que son esenciales la erradicación de la pobreza y la incorporación democrática de los desamparados dentro de una estructura productiva más diversificada.

La sostenibilidad no es, simplemente, un asunto del ambiente, de justicia social y de desarrollo. También se trata de la gente y de su supervivencia como individuos y culturas. De manera más significativa, la pregunta es si los diversos grupos de población continuarán sobreviviendo y de qué manera. De hecho, la nueva bibliografía sobre el movimiento hacia la sostenibilidad celebra a los diversos grupos que han adaptado exitosamente sus herencias culturales, sus formas especiales de organización social y productiva y las tradiciones específicas de relacionarse con sus ambientes naturales.

La sostenibilidad es entonces *una lucha por la diversidad en todas sus dimensiones*. Las campañas internacionales para conservar el germoplasma, proteger a las especies en peligro de extinción y crear reservas de la biosfera están multiplicándose como reacción a la expansión de un modelo ofensivo, pero las comunidades y sus miembros se sienten fuertemente presionados, y luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su individualidad, sus derechos y sus habilidades para sobrevivir, mientras tratan de satisfacer sus necesidades. El interés por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo la flora y la fauna amenazadas, sino también la supervivencia de estas comunidades humanas, como administradoras del ambiente natural y como productoras.

La sostenibilidad es un proceso más que un conjunto de metas muy específicas. Implica la modificación de un proceso en la naturaleza, la economía y la sociedad. Se ha puesto más de moda conforme la gente descubre que el crecimiento de la producción o incluso de la riqueza nacional no garantiza mejores niveles de vida y una mayor calidad de vida. Pero los retos de la protección ambiental son quizá la fuerza más inmediata que hace tan importante la discusión. Hay cuestiones éticas fundamentales sobre la sostenibilidad de una estructura global que perpetúa altos grados de desigualdad internacional mientras trabaja en las comunidades rurales con pocas oportunidades de satisfacer sus necesidades más básicas. Estas cuestiones van más allá del alcance del presente documento, el cual se centra en estrategias para promover un mayor grado de sostenibilidad en el desarrollo rural. Pero enfrentar al reto de la sostenibilidad también modificaría los programas de desarrollo nacional, obligando a una participación popular mayor en su diseño e instrumentación.

Una estrategia para promover la sostenibilidad debe enfocarse en la importancia de la autonomía y autarquía locales o regionales como central en cualquier discusión sobre la integración nacional o internacional. El problema de la autonomía versus la cooperación y la coordinación está mucho más relacionado con otros que tienen que ver con la autosuficiencia versus la especialización internacional. El análisis anterior de la sostenibilidad está en el extremo opuesto a las recetas de las reformas neoliberales. Aun así, los defensores de la sostenibilidad reconocen que las elecciones no son tan simples: los productos y las tecnologías industriales no serán rechazados simplemente porque implican control jerárquico y trabajo enajenado. La respuesta debe reflejar y confrontar las realidades de una sociedad global urbanizada en crisis, en la cual algunas naciones son incapaces de ofrecer a sus ciudadanos los medios para resolver las necesidades más elementales. Al mismo tiempo otros se enriquecen, saqueando los tesoros de la naturaleza. A continuación revisamos brevemente algunas de las estrategias propuestas para promover el desarrollo sostenible en diferentes contextos.

La internacionalización ha obstaculizado este movimiento hacia la diversidad. Los poderosos grupos que controlan la economía del mundo (corporaciones transnacionales, instituciones financieras y poderes locales influyentes, entre otros) hacen lo posible para romper estos intentos individuales o regionales, forjando grupos sociales más homogéneos y tratables. Ellos querrán colocarnos, como piezas de ajedrez, como soportes de la actual estructura de desigualdad, comprometiéndonos con empleos productivos y, a aquellos con suerte, con ingresos suficientes para que lleguemos a ser consumidores.

Autosuficiencia alimentaria y relación entre producción y consumo

Cuando se define una nueva estrategia, el primer asunto que debe tratarse claramente es la importancia de la autosuficiencia en oposición a la especialización impuesta por la integración económica mundial. El sistema actual de comercio global promueve la especialización basada en los sistemas de monocultivo y plantas industriales que sólo producen partes en plataformas de exportación (maquiladoras) para mercados extranjeros. Insistir en una mayor producción para mercados locales no es equivalente a la autarquía o al aislamiento, pero sí conduce a un grado de especialización mucho menor dentro de todas las áreas de la producción y de la organización social. La autosuficiencia alimentaria surgió como una necesidad de muchas sociedades ante la precariedad de sus sistemas internacionales de comercio. Las tradiciones culinarias específicas surgieron de un conocimiento local altamente sofisticado de frutas y vegetales, hierbas y especies. Aunque la introducción de las tecnologías de la revolución verde elevó tremendamente el potencial productivo de los cultivadores de alimentos, pronto se vio cuán duro fue alcanzar este potencial y los altos costos sociales y ambientales que tal programa puede acarrear¹².

En algunas partes del mundo la estrategia de la autosuficiencia constituiría un lujo dispendioso. Implicaría desviar recursos de otros usos que serían más productivos por su contribución económica, creando exportaciones para adquirir mayores volúmenes de alimentos. Pero aun en circunstancias en que la importación al por mayor de los bienes básicos es recomendable, los interesados en el desarrollo sostenible cuestionan la modificación de las dietas locales que sean adecuadas a las posibilidades productivas de sus regiones. En la escena actual, la tendencia a sustituir los productos importados por los alimentos tradicionales es particularmente problemática y presenta terribles consecuencias para el bienestar humano en muchas sociedades¹³.

Sin embargo, la autosuficiencia alimentaria es sólo una faceta de una estrategia más amplia de diversificación productiva cuyos principios son, en gran medida, parte del movimiento hacia la sostenibilidad. Los principios de un mayor autoabastecimiento (en algunos trabajos en América Latina se usó la palabra “autoconfianza”) son fundamentales para todos los productos y servicios que una sociedad quisiera asegurarse a sí misma. Históricamente, los habitantes rurales nunca han sido “sólo” agricultores, o productores de un solo producto. Más bien, las comunidades rurales fueron caracterizadas por la diversidad de sus actividades productivas en las que ellas se comprometen para asegurar su subsistencia. Son comunidades de administradores de sistemas complejos de recursos. Fue la aberración de transferir modelos de agricultura comercial a la teoría del desarrollo en el tercer mundo lo que contribuyó a menospreciar el carácter multifacético de los sistemas locales de producción tradicional. Las estrategias de desarrollo sostenible enfrentan directamente este problema, intentando reintroducir dicha diversi-

dad, conforme se aferran a los problemas de escalas apropiadas de operación y multiplicidad de productos.

La diversificación productiva tiene que relacionarse con el patrón de necesidades y recursos locales. En la medida en que la gente no esté involucrada en el diseño e instrumentación de programas que le aseguren sus propias necesidades de consumo, tendrá menos conciencia del impacto de sus demandas en el resto de la sociedad y en el ambiente. En consecuencia, el enfoque de la sostenibilidad confiere gran importancia a establecer una relación directa entre la gente que planifica la producción y aquella que determina qué niveles de consumo son posibles.

Participación popular, justicia social y autonomía

La sustentabilidad involucra la participación directa y se profundiza con ella. De hecho, la exigencia de la sustentabilidad ha surgido de las bases sociales. Éstas participan y mantienen a las ONGs como intermediarios que canalizan las demandas de los grupos comunitarios y organizaciones cívicas que están empezando a exigir un papel creciente en el debate político nacional. Las demandas de los grupos locales, y las respuestas de las agencias oficiales multilaterales y nacionales, demuestran la mayor eficacia de las políticas diseñadas o instrumentadas desde la comunidad¹⁴. El éxito requiere de la participación directa de los beneficiarios y de otros que puedan ser impactados. Pero hay un acuerdo general respecto de que su participación debe implicar más que un simple papel de consulta. Para que tal enfoque funcione, se necesita que quienes detentan el poder se den cuenta de la necesidad de integrar a la gente dentro de estructuras participativas con el fin de confrontar los problemas principales de nuestro tiempo. Esto implica una redistribución del poder político y económico. Este prerrequisito es fundamental para cualquier programa de sostenibilidad, ya que la mayoría de los análisis técnicos destacan que los patrones que perpetúan estas desigualdades conducen a una mayor degradación ambiental (por ejemplo, Boyce, 1994; Goodland y Daly, 1993).

En esta formulación, la sostenibilidad no versa simplemente sobre la preservación ambiental. También involucra la participación activa de la población utilizando su comprensión de la dinámica de los sistemas naturales para aumentar su productividad, mientras conservan la capacidad del planeta para hospedar a las generaciones futuras. Es un enfoque basado en la movilización política. Quizá los aspectos más reveladores de la bibliografía sobre sostenibilidad son el cúmulo de ejemplos sobre la manera en que la gente puede realizar “actos de solidaridad con el otro cuando el Estado no los está viendo”, con el fin de resolver problemas comunes e iniciar experimentos creativos para la innovación social (Friedmann, 1992: 168-171; Ostrom, 1990). Por supuesto, el trabajo de Albert Hirschman (1973) ofrece ejemplos incontables de las formas en que las ONGs y otros grupos de base han tenido éxito en forzar la presión para modificar proyectos de de-

sarrollo como parte de su propia percepción de prioridades. En circunstancias especiales, el mismo estado podría (verse forzado a) jugar un papel decisivo en el fomento o “liberación” creativa de energías participativas para impulsar programas de desarrollo local y justicia social que también contribuyan a mover a la sociedad hacia la sostenibilidad (Tendler, 1993).

Sin embargo, la política pública puede aislar aún más a los marginados. Los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en América Latina profundizaron la crisis social y ensancharon el número de personas en situación de pobreza extrema. El programa mexicano *Solidaridad* fue altamente difundido por las instituciones multilaterales como una estrategia efectiva contra la pobreza (y para ganar el voto), pero creó pocas oportunidades productivas para los participantes, anclándolos en su marginación, ampliando la brecha entre estos grupos y los beneficiarios de la globalización. La copia colombiana de *Solidaridad* no ofreció más oportunidades a los pobres. En su examen de los problemas de erosión del suelo, Blaikie va más allá para explicar cómo las señales del mercado generalmente empujan a los gobiernos hacia programas que benefician a los ricos: examinando los esfuerzos para elevar la productividad agrícola, explicando su fracaso por enfocarse en “mercancías agrícolas, aisladas de su contexto social, económico y ambiental” que influyen en los procesos tanto de degradación como de empobrecimiento (1985: 22).

Para ser efectivos, *los programas para la sostenibilidad tendrán que ver con la pobreza*. Existe un amplio reconocimiento de que la pobreza y la destrucción ambiental van de la mano, aunque se ha puesto menos atención a los enormes problemas ambientales ocasionados por los niveles actuales de consumo de quienes tienen más dinero. En el futuro, el progreso económico mismo dependerá de que los grupos de base -de los pobres- se involucren para obligar a quien tiene más dinero a encontrar formas de limitar su propio consumo (suntuoso), y comprometerse para la organización de programas sustentables de producción que fortalezcan las organizaciones de los que quieran orientarse a estrategias que combinen las exigencias de los mercados con las del planeta.

Una estrategia de participación democrática para la diversificación rural y el mejoramiento productivo

El desarrollo sostenible es un enfoque de reorganización productiva que aprovecha las experiencias combinadas de los grupos locales de todo el mundo. Las técnicas de instrumentación varían enormemente entre regiones y ecosistemas. Un común denominador permea este trabajo: la necesidad de una participación democrática efectiva en el diseño e instrumentación de los proyectos. Su importancia es evidente en los títulos de algunos de los excelentes escritos sobre el tema (Calderón et al. 1992; Machado et al. 1993; Núñez, 1993).

Otra lección proveniente de la experiencia reciente es la eficacia de las redes que mantienen y defienden este trabajo. Sin el mutuo reforzamiento que la agrupación internacional de ONGs proporciona, las unidades individuales y las redes regionales no serían tan efectivas en la obtención de fondos para sus proyectos, en la obtención de asistencia técnica para su instrumentación y en el soporte político contra los políticos e instituciones intransigentes o incrédulas, tanto locales como nacionales (Friedmann y Rangan, 1993). Sin embargo, los éxitos se deben no sólo a la tenacidad y al sacrificio de los trabajadores comprometidos y a los participantes locales: también al surgimiento de una estructura nacional e internacional de soporte de trabajadores, campesinos, eruditos y activistas, deseosos de movilizarse para mantener los esfuerzos espontáneos; o bien grupos organizados de todo el mundo, que promueven proyectos de participación democrática para el desarrollo sostenible. Las organizaciones están formándose, las alianzas rehaciéndose, las experiencias reevaluándose¹⁵. En Latinoamérica, una de las más promisorias es la RIAD (Red Interamericana de Agriculturas y Democracia, 1993), que reúne a los organismos productivos en Chile. Otros se enfocan en la comercialización y su certificación, como los relacionados con el café orgánico (por ejemplo, Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras en México) y la explotación sustentable de los bosques (por ejemplo, *Forest Stewardship Council*).

Pero el desarrollo sustentable no es un enfoque que será aceptado simplemente porque “su momento ha llegado”. La apertura de la comunidad multilateral a los grupos de base -incluyendo el compromiso a largo plazo de la Fundación Interamericana en los Estados Unidos, el IICA en Costa Rica, y numerosas fundaciones de Europa- no es un gesto de los más poderosos para los más pobres: más bien, refleja el reconocimiento de que estos grupos han movilizado a la población y recursos para lograr mejoras palpables en los niveles de vida, mientras contribuyen notablemente a proteger el ambiente. Tales victorias señalan el principio, no el fin del proceso. Como tales, tampoco implican la aceptación de los objetivos de estos grupos por parte de las agencias oficiales, que claramente muestran mayor simpatía por los intereses del modelo de globalización con el patrón de especialización productiva y polarización social.

El desarrollo sostenible implica una lucha política por el control del aparato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo producimos, sino también de a quién le será permitido producir y para qué fines. Para las organizaciones involucradas en proyectos de desarrollo sostenible en áreas rurales, el conflicto se centra alrededor del control de los mecanismos del poder político y económico local y sobre el uso de los recursos. La lucha por lograr una voz más efectiva para los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres y otras minorías menos privilegiadas no asegurará que sus decisiones conduzcan al desarrollo sostenible. Sin embargo, esa participación democrática creará los cimientos para una distribución más equitativa de la riqueza, uno de los principales prerrequisitos para el surgimiento de una estrategia de desarrollo sostenible.

Desarrollo autónomo: una estrategia para la sostenibilidad

La integración global está creando oportunidades para algunos, y pesadillas para muchos. En la yuxtaposición de ganadores y perdedores, deben considerarse nuevas estrategias para el desarrollo rural que revaloricen la producción tradicional. Las nuevas estrategias tendrán que aislar, de alguna manera, a estas comunidades de la economía global, produciendo productos con cualidades especiales (orgánicas, genéricas, campesinas...) u ofreciendo servicios que puedan compensar, alentar e impulsar el fortalecimiento de sus actividades dentro de un manejo ambiental sustentable. El enfoque sugerido por la búsqueda de la sustentabilidad y participación popular tiene el fin de crear mecanismos dondequiera que las comunidades campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar cultivando en sus propias regiones. Aun bajo el criterio estricto de la economía neoclásica, este enfoque no debe ser descartado como un proteccionismo ineficiente, ya que la mayoría de los recursos implicados en este proceso tendrían poco o ningún costo de oportunidad para toda la sociedad¹⁶.

Las regiones que tienen muchas y mayores oportunidades de explorar usos creativos para su patrimonio natural son las que se están quedando atrás. Algunos de los más importantes proyectos de este tipo son administrados por los grupos comunitarios locales para diversificar su base productiva, usando fuentes de energía renovable y recursos locales para agregar valor con tecnología y prácticas tradicionales. Las posibilidades de encontrar nuevas formas de aprovechar este patrimonio natural son enormes, y las iniciativas para implementar estos proyectos como alternativas para estos grupos son cada vez mayores. (Barkin, 1998[a]).

Volver a desarrollar la “economía campesina” en estas regiones es tanto deseable como urgente. No es simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino de tomar ventaja de una importante herencia cultural y productiva que pueda proporcionar soluciones a los problemas de hoy y de mañana. No es cuestión de “reinventar” la economía campesina, sino de reunirla con sus propias organizaciones para esculpir espacios políticos que les permitan ejercer su autonomía, definiendo las formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos y para comerciar con el resto de la sociedad. Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo, están ahora a la orden del día entre las corporaciones transnacionales que buscan nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos) no van a revertir la estructura de la discriminación, a menos que se acompañen de una participación política efectiva (Toledo, 2000).

Proponemos la formalización de una economía autónoma. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada, el país estará en mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y tomen ventaja de estas diferencias a fin de mejorar el bienestar de los grupos de ambos sectores. Una estrategia

que refuerce a las comunidades rurales, promoviendo la diversificación, hará que el manejo del crecimiento sea fácil en aquellas áreas que establecen y desarrollan vínculos con la economía internacional. Pero más importante es que tal estrategia ofrezca una oportunidad para que la sociedad confronte activamente los cambios en el manejo del ambiente y la conservación de una manera significativa, con un grupo de gente calificado de manera única para tales actividades.

La economía política de la autonomía económica no es nueva. A diferencia del modelo actual que permea todas nuestras sociedades, confrontando a ricos y pobres, la propuesta pide la creación de estructuras de modo que un segmento de la sociedad que elige vivir en áreas rurales encuentre apoyo en el resto de la nación para instrumentar un programa alternativo de desarrollo regional. Este modelo de autonomía comienza con la base heredada de la producción rural, mejorando la productividad mediante el uso de la agroecología. También implica la incorporación de nuevas actividades que se construyan sobre la base cultural y de recursos de la comunidad y de la región para su desarrollo posterior. Requiere respuestas muy específicas al problema general y, en consecuencia, depende fuertemente de la participación local para su diseño e instrumentación. Mientras los planes generales son ampliamente discutidos, los detalles requieren programas bien definidos de inversión de los productores directos y de sus socios¹⁷.

Lo novedoso de este modelo es la introducción de una estrategia explícita de fortalecimiento de la base social y económica para una estructura que permita a estos grupos mayor autonomía. Mediante el reconocimiento y fomento para la creación de una alternativa, proveniente de los grupos marginales, que les ofrezca mejores perspectivas para su propio desarrollo, la propuesta de la economía autónoma podría malinterpretarse como una nueva encarnación de la “guerra (norteamericana) contra la pobreza”, o como el enfoque mexicano de “solidaridad” para aliviar los efectos más nocivos de la marginalidad. Esto sería un gran error: no se trata de una simple transferencia de recursos para compensar a los grupos atrasados por su pobreza, sino de un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezca a las comunidades rurales la oportunidad de generar bienes y servicios que contribuyan a elevar sus estándares de vida y los de sus conciudadanos, mientras mejoran el ambiente en el que viven.

Nuestras tareas actuales

En esta época de globalización, muchas comunidades rurales están construyendo conscientemente sus propias estrategias alternativas, la “nueva ruralidad”. La labor fundamental de los participantes académicos e institucionales comprometidos con fomentar estas nuevas ruralidades es abrir espacios institucionales y de mercado para que los campesinos e indígenas puedan seguir elaborando sus estrategias. Apoyar los proyectos de construcción de una nueva ruralidad, abar-

cando pueblos campesinos, indígenas y peri-urbanos, implica fortalecer la capacidad productiva en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por no mencionar otras actividades como la pesca, la caza y la cosecha. Pero para que sean sistemas productivos tienen que ser complementados con otras actividades que agreguen valor mediante su procesamiento y la conservación y protección de los recursos, a fin de evitar que la explotación no se vuelva otro mecanismo de destrucción de la naturaleza, de las fuentes de la riqueza y de la calidad ambiental y de la vida. Son estos los valores en los que descansa nuestro esfuerzo para promover la nueva ruralidad.

Las comunidades no sólo demandan de los apoyos materiales y tecnológicos para asegurar una adecuada productividad y un uso apropiado de los recursos naturales. Requieren, además, de mecanismos para asegurar una remuneración justa para los nuevos productos que podrían ofrecerse en los mercados locales e internacionales y de un reconocimiento de los servicios ambientales que tanto hacen falta a los que estamos encerrados en ambientes globalizados.

Estas comunidades constituyen parte sustancial de la población que nos ofrece mecanismos para construir una nueva sociedad que contemple la coexistencia de redes sociales viviendo al margen de la sociedad globalizada. Los predicadores de los procesos integradores ofrecen un discurso de falta de alternativas; insisten en la bondad de la homogeneización de las sociedades y de sus procesos productivos. Junto con la especialización productiva que imprime el libre comercio, arrasan con la riqueza cultural y étnica que es tan necesaria para la protección de la biodiversidad que tanto requerimos para la supervivencia del planeta y de la humanidad.

Las comunidades han superado con mucho los mezquinos programas oficiales para confrontar la pobreza. Si bien cuentan con limitados recursos, en muchos casos sus propias estrategias para enviar migrantes a otras partes y para atraer dinero y productos que aseguren su permanencia en las zonas rurales exceden con creces el flujo de recursos canalizados hacia las zonas rurales desde los organismos gubernamentales e internacionales encargados del “desarrollo” o del “bienestar” rural.

Nuestra labor no es suplir estos recursos externos, ni enseñar a las comunidades cómo producir mejor. Poco favor les estaríamos haciendo al presumir que el superar la pobreza que padecen es sólo un problema técnico. Más bien, podemos participar, ayudando a vencer algunos de los numerosos obstáculos institucionales erigidos por grupos caciquiles, por burocracias fosilizadas, por sistemas de poder tradicional, que temen el ejercicio autónomo de la gestión de los recursos naturales y la separación de estas comunidades de mecanismos clientelares de control político. En este contexto, al entender este potencial y las promesas que nos ofrece una renovada sociedad rural, sus partidarios tenemos la responsabilidad de limitar la actuación de estos mecanismos que coartan a las comunidades y a sus instituciones¹⁸.

Para terminar, examinemos tres ejemplos de proyectos en los cuales estamos trabajando, como una ventana a la labor del investigador en el campo de la sostenibilidad aplicada a la realidad mexicana. El primero, un análisis de la problemática del ecoturismo en la región de invernada de la mariposa Monarca en el oriente de Michoacán. Segundo, el engorde de cerdos con aguacates para producir carne de alta calidad en condiciones campesinas. Y tercero, un proyecto para promover la producción de agua en zonas donde la presencia campesina es importante, que promete ofrecer un mecanismo para fortalecer estructuras sociales tradicionales y liberar a la mujer rural de labores pesadas mientras se mejora el ambiente y aumenta la productividad rural.

La Reserva Especial de la mariposa Monarca fue creada en 1986 para proteger a esta preciosa especie. La mariposa llega a Michoacán para albergarse durante cuatro meses como parte de una migración espectacular que contempla un viaje anual desde México a Canadá desde hace miles de años. Desgraciadamente, por no considerar que los campesinos son parte integral de la región, la acción oficial ha acelerado un proceso de degradación ambiental en la región, ya que no ofreció a las comunidades participación alguna en un proceso para crear nuevas oportunidades de empleo y para manejar los servicios ambientales que atraen a casi 200.000 visitantes cada invierno. Nuestra investigación está encaminada a trabajar con las comunidades para elaborar una serie de actividades productivas que aprovechen los recursos de la región para generar empleo mientras se enriquece su sistema natural. Se trata de entender que el ecoturismo no puede ser una actividad suficiente para proteger una región; se requiere de otras actividades complementarias que generen servicios de protección y de producción para atender a las necesidades básicas de la población (Barkin, 1999).

Como en el ser humano, al comer el aguacate el cerdo reduce el colesterol en su sangre y acumula menos grasa en sus arterias y su carne. Este hallazgo nos sugirió la posibilidad de proponer una investigación para determinar la viabilidad de realizar una producción a escala comercial en condiciones campesinas. Después de identificar un empacador dispuesto a participar en el proyecto y comercializar el producto con un premio económico importante para los productores, hemos emprendido la organización de un equipo para determinar las normas para su puesta en marcha. Como las condiciones naturales limitan el número de cerdos por hectárea de huerta de aguacate, es un sistema idóneo para la sociedad campesina; más aún, como son la mujer y sus niños quienes se dedican al cuidado de los animales de traspatio, este proyecto ofrece una manera de fortalecer su papel económico y social en la comunidad. En 2001 se empezó a “liberar” la tecnología en un proyecto de producción comercial.

La disponibilidad de agua en muchas regiones del país ha ido en descenso a raíz de la sobreexplotación de los mantos freáticos y de la creciente degradación de las partes superiores de las cuencas. Esto ha acarreado crecientes costos para el

mantenimiento de los distritos de riego, incluyendo mayores costos de bombeo y de limpieza de los canales y de los cauces de los ríos. Como son los campesinos quienes han sido relegados a las partes superiores de las cuencas y han sufrido más las políticas de apertura del comercio agropecuario y de contención de los precios básicos, tienen menos posibilidades de seguir con sus tradicionales labores de manejo del agua y del suelo. De revertir esta dinámica, remunerando a los campesinos con parte de los ahorros en las partes bajas de las cuencas derivados de un mejor manejo de la parte superior, es posible mejorar las prácticas de cultivo y de extracción de árboles, elevando la capacidad de captación y almacenamiento de agua en las cuencas. Combinando este programa con otro para garantizar agua potable de calidad a las comunidades participantes, a través de técnicas de recolección de agua de lluvia, sería factible mejorar las condiciones ambientales y económicas en grandes secciones del México rural. Como en el caso anterior, ello sería de especial beneficio para la parte más pobre de las comunidades, ya que son las mujeres las responsables de todos los aspectos del acopio, manejo y disposición del agua. De liberarlas de esta tarea, se estima que tendrían casi la tercera parte de su día laboral disponible para otros quehaceres (Barkin, 2001).

Bibliografía

- Altieri, Miguel A. 1987 *Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture* (Boulder, CO.: Westview).
- Andrae, Gunilla y Bjorn Beckman 1985 *The Wheat Trap* (London: Zed Books).
- Arden-Clarke, Charles 1992 “South-North Terms of Trade, environmental protection and sustainable development”, en *International Environmental Affairs* Vol. 4, N° 2, Primavera, 122-137.
- Barkin, David 1987 “Proletarianización global”, en *Economía: Teoría y Práctica* (México: Universidad Autónoma Metropolitana) N° 10, 113-131.
- Barkin, David 1994 “Las organizaciones no gubernamentales ambientalistas en el foro internacional”, en Glender, A. y V. Lichtinger (comps.) *La Diplomacia Ambiental: México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Barkin, David 1998[a] *Riqueza, Pobreza y Desarrollo Sustentable* (México: Editorial Jus y Centro de Ecología y Desarrollo).
- Barkin, David 1998[b] “La producción de agua en México”, en *Cuadernos de Desarrollo Rural* (Colombia: Universidad Javeriana) N° 40, 17-27.
- Barkin, David 1999 “The Economic Impacts of Ecotourism: Conflicts and solutions in highland Mexico”, en Godde, P. et al. (ed.) *Tourism and Development in Mountain Areas* (London: CAB International).
- Barkin, David (comp.) 2001 *Las innovaciones mexicanas en el manejo del agua* (México: Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco).
- Barkin, David y Blanca Suárez 1983 *El principio del fin: Las semillas y la seguridad alimentaria* (México: Editorial Océano).
- Barkin, David; Rosemary Batt y Billie De Walt 1991 *Alimentos vs. forrajes: La sustitución global de los granos en la producción* (México: Siglo XXI Editores).
- Barkin, David y Carlos Paillés 2000 “Water and Forests as Instruments for Sustainable Regional Development”, en *International Journal of Water* (Ginebra, Suiza) Vol. 1, N° 1.
- Barracough, Solon 1991 *An End to Hunger? The social origins of food strategies* (London and Atlantic Highlands, NJ.: Zed Press y UNRISD).
- Blaikie, Piers 1985 *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries* (London: Longman).

- Boyce, James 1994 "Inequality as a cause of environmental degradation", en *Ecological Economics* (Amsterdam) Vol. XI, 169-178.
- Boyce, James (compilador) 1999 *Ajuste hacia la paz: Las lecciones de El Salvador* (México: Plaza y Valdés).
- Calderón, Fernando; Manuel Chiriboga y Diego Piñeiro 1992 *Modernización Democrática e Incluyente de la Agricultura en América Latina y el Caribe* (San José, CR.: IICA) Serie Documentos de Programas, N° 28.
- Cerneja, Michael M. 1995 *Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 1995 *Comercio internacional y medio ambiente: la discusión actual* (Santiago de Chile: CEPAL) Estudios e Informes de la CEPAL, N° 93.
- Cruz, Wilfrido y Robert Repetto 1992 *the Environmental Effects of Stabilization and Structural Programs: the Philippines case* (Washington, DC: World Resources Institute).
- Daly, Herman E. 1993 "The Perils of Free Trade", en *Scientific American* (Washington, D.C.) Vol. 269, N° 5, Noviembre.
- Daly, Herman E. y John B. Cobb Jr. 1993 *Para el bien común: Reorientando la economía hacia la comunidad, el ambiente y un futuro sostenible* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Ehrlich, Paul y Anne Ehrlich 1991 *Healing the Planet* (Reading, MA: Addison-Wesley).
- Foster, John Bellamy 1993 "'Let Them Eat Pollution': Capitalism and The World Environment", *Monthly Review* (Nueva York) Vol. 44, N° 8, Enero, 10-20.
- Friedmann, John 1992 *Empowerment: the politics of alternative development* (New York: Basil Blackwell).
- Friedmann, John y Haripriya Rangan 1993 *In Defense of Livelihood: comparative studies on environmental action* (West Hartford, CT: Kumarian Press).
- Glade, William y Charles Reilley (compiladores) 1993 *Inquiry at the Grassroots: An Inter-American Foundation reader* (Arlington, VA: Inter-American Foundation).
- Goodland, Robert y Herman Daly 1993 "Why Northern income growth is not the solution to Southern poverty", en *Ecological Economics* (Amsterdam) Vol. 8, 85-101.

Gregory, Michael 1992 "Environmental, sustainable development, public participation, and the NAFTA: a retrospective", en *Journal of Environmental Law and Litigation* (Albuquerque, N.M.) Vol. 7, 99-174.

Grossman, Gene M. y Alan B. Krueger 1993 "Environmental impacts of a North American free trade agreement", en Garber, Peter M. (comp.) *The Mexico-US Free Trade Agreement* (Cambridge, MA: MIT Press) 13-56.

Hardin, Garrett 1968 "La tragedia de los comunes", en *Science* (Nueva York) Vol. 162, Diciembre, 1243-1248. En español: en *Gaceta Ecológica* 1995 (México: Instituto Nacional de Ecología) N° 45.

Hecht, Susanna B. 1985 "Environment, development and politics: capital accumulation and the livestock sector in eastern Amazonia", en *World Development* (Amsterdam) Vol. 13, N° 6, Junio, 663-684.

Hewitt de Alcántara, Cynthia 1976 *La modernización de la agricultura mexicana* (México: Siglo XXI Editores).

Hirschman, Albert O. 1973 *Development Projects Observed* (Washington: Brookings Institution).

Jennings, Bruce 1988 *Foundations of International Agricultural Research* (Boulder, CO.: Westview).

Johnson, Pamela y David Cooperrider 1991 "The Global Integrity Ethic: defining global social change organizations and the organizing principles which make transnational organizing possible", en *Associations Transnacionales* (Bélgica) N° 2, 90-109.

Leonard, H. Jeffrey (compilador) 1989 *Environment and the Poor: development strategies for a common agenda* (New Brunswick, NJ.: Transaction Books for the Overseas Development Council).

Livernash, Robert 1992 "The growing influence of NGOs in the developing world", en *Environment* (Nueva York) Vol. 34, N° 5, Junio, 11-20, 41-43 [adaptado de World Resources Institute 1993 *World Resources 1992-93* (New York: Oxford University Press) chap. 14, 217-234].

Low, Patrick (compilador) 1992 *International Trade and the Environment* (Washington: World Bank) Discussion Paper N° 159.

Machado, A.; L. C. Castillo e I. Suárez 1993 *Democracia con campesinos o campesinos sin democracia* (Bogotá, CO.: Ministerio de Agricultura; Fondo DRI, IICA y Universidad del Valle).

Mumme, Stephen 1993 "Environmentalists, NAFTA, and North American Environmental Management", en *Journal of Environment and Development* (San Diego, Ca.) Vol. 2, N° 1, Diciembre, 205-219.

- Núñez, Orlando 1993 “Desarrollo sostenible y economía campesina” (Managua: Centro Para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social-CIPRES).
- Ostrom, Elinor 1990 *Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action* (Cambridge UK: Cambridge University Press).
- Pearce, David y Jeremy Warford (comps.) 1993 *World Without End: economics, environment and sustainable development* (New York.: Oxford University Press para el Banco Mundial)
- Prebisch, Raul 1959 *El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas* (Santiago de Chile: CEPAL).
- Red Interamericana de Agriculturas y Democracia (RIAD) 1993 *¿Qué es la agricultura sustentable?* (México: Grupo de Estudios Ambientales y RIAD).
- Schroyer, Trent 1997 *A World that Works: building blocks for a just and sustainable society* (New York: The Bootstrap Press).
- Sen, Amartya 1992 *Inequality Reexamined* (Cambridge, MA.: Harvard University Press).
- Stiefel, Matthias y Marshall Wolfe 1994 *A Voice for the Excluded: popular participation in development. Utopia or Necessity?* (London and Atlantic Highlands, NJ.: Zed Books y UNRISD).
- Tendler, Judith 1993 “Tales of dissemination in small-farm agriculture: Lessons for institution builders”, en *World Development* (Amsterdam) Vol. 21, N° 10, October, 1567-1582.
- Toledo, Víctor M. 2000 *La paz en Chiapas: Ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa* (México: UNAM y Editorial Quinto Sol).
- Varas, Juan Ignacio 1999 *economía del medio ambiente en América Latina* (Bogotá: Alfaomega).
- Wolf, Eric 1982 *Europa y la gente sin historia* (México: Fondo de Cultura Económica).

Notas

1 La organización no gubernamental Promoción del Desarrollo Popular ha trabajado durante varios decenios recogiendo estas experiencias, fortaleciéndolas con sus trabajos de concertación, de encuentros y de asistencia técnica. Asimismo, promueve una visión del desarrollo autónomo y local documentado en numerosos estudios de caso (Schroyer, 1997). Cernea (1995) ofrece una valiosa evaluación crítica de estas experiencias.

2 A esta lista podría sumarse una pregunta acerca de la relación entre el crecimiento de la población, la pobreza y la sostenibilidad, casi obligatorio dentro de la tradición anglosajona. No la abordamos debido a que en Latinoamérica la mayor parte de las investigaciones muestran que el comportamiento de las variables demográficas depende de otros factores fundamentales de la naturaleza y del ritmo del desarrollo, tales como los discutidos en este ensayo.

3 Existe una amplia bibliografía tanto sobre los conflictos entre los agrónomos que trabajan con campesinos y los asociados con los productores modernos, así como sobre la “segunda generación” de efectos de la revolución verde en comunidades y estructuras sociales (por ejemplo, Hewitt de Alcántara, 1976; Barkin y Suárez, 1983; Jennings, 1988; Barraclough, 1991). A principios del siglo XXI, el conflicto se está repitiendo en el caso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura latinoamericana.

4 Aunque esto parece similar a la tesis de la “tragedia de los comunes” propuesta por Hardin (1968), el análisis es muy distinto, ya que se basa en un acceso desigual a los recursos, resultado de la profunda polarización social. De hecho, nuestro análisis de la tragedia nos lleva a la conclusión de que la apropiación privada de los “comunes” es el origen de esta degradación, ya que los grupos tradicionales se encuentran relegados a menudo a nuevos ambientes que no saben manejar.

5 Los términos de intercambio definen el sistema de precios relativos que reciben los pequeños productores en sus mercados. Los productores rurales son víctimas de un proceso histórico donde los precios de sus cosechas no se elevan tan rápido como el precio de las mercancías que tienen que adquirir. Prebisch (1959) ofreció la primera formulación crítica de esta hipótesis, que ahora lleva su nombre.

6. Para ejemplos excelentes de estas discusiones ver, entre otros, Low (1992), Arden-Clarke (1992) y Daly (1993). Un resumen de esta bibliografía fue preparado recientemente por la CEPAL (1995).

7 Un ejemplo de los diversos libros de texto disponibles en las editoriales comerciales y en las organizaciones internacionales que preparan técnicos y profesionales para construir estos modelos y ejecutar las evaluaciones del impacto ambiental es Varas (1999). El Banco Mundial ha publicado varios libros orientados hacia la formulación de políticas que cubren mucho del mismo campo, como los de Pearce y Warford (1993).

8 Desde un punto de vista estrictamente técnico, este análisis (Grossman y Krueger, 1993) adolece de validez: construyen una descripción cuantitativa de estática comparativa y después sacan conclusiones respecto de un proceso dinámico. El análisis de los cambios en la distribución del ingreso y en la calidad del ambiente no resulta de una simple descripción de lo que pasa en un

gran número de países en un punto en el tiempo. El análisis tampoco resuelve el asunto complejo de la distribución de quién paga los costos de las mejoras ambientales y de qué grupos disfrutan de los beneficios.

9 La “tasa de descuento social” es una elaboración de los economistas ortodoxos para examinar la manera en que las sociedades evalúan el valor de los incrementos futuros en la producción y el bienestar en comparación con los sacrificios actuales requeridos para el crecimiento. Estos cálculos no introducen las diferencias de tales beneficios y costos entre los diversos grupos sociales; sus partidarios ahora tratan hábilmente de incluir consideraciones ambientales en el proceso.

10 Estas afirmaciones contradicen la evidencia histórica que muestra que las sociedades campesinas e indígenas invirtieron un gran esfuerzo y habilidades de organización social en el desarrollo de los sistemas principales para terrazas, riego y otros métodos que garantizaron la productividad de la tierra sin comprometer su fertilidad a largo plazo. Estos sistemas han sido comprometidos o desmembrados conforme las exigencias de la economía de mercado han forzado a la gente a abandonar los métodos tradicionales de movilizar el trabajo para ejecutar tareas colectivas.

11 En este sentido, rechazamos la noción de que se está sosteniendo el crecimiento en sí mismo; más bien es un *proceso* que se propone para elevar el nivel de bienestar en un ambiente que se está conservando.

12 A pesar de estos logros, los granos básicos siguen importándose y las familias pobres siguen empobreciéndose en todas partes del mundo (Barkin, Batt y DeWalt, 1991).

13 La complejidad de la tarea de terminar con el hambre es ampliamente reconocida. Pero la bibliografía reciente ha acentuado los orígenes sociales y no los técnicos (o basados en la oferta) de la carestía y el hambre. Sen (1992) es un exponente particularmente efectivo de este punto, mientras otros han entrado en gran detalle sobre los “orígenes sociales” de las estrategias alimentarias y las crisis (Barracough, 1991). La “modernización” de las dietas urbanas en Nigeria, en las que se sustituye al trigo y al arroz por sorgo y mijo, es un caso espeluznante de creación de dependencia, que reduce las oportunidades de los productores campesinos y eleva el costo social de alimentar a una nación (ver Andrae y Beckman, 1985).

14 Éste es el tema del libro de Stiefel y Wolfe que sintetiza un gran rango de experiencias sobre la participación popular en América Latina. Ellos hablan de la “decreciente capacidad del Estado para proporcionar servicios y reducir las desigualdades en el ingreso”, acompañada por una reducción igual en la “confianza pública en la legitimidad de sus esfuerzos”. Cuando se reúnen con los procesos de democratización política, no sorprende que la comunidad in-

ternacional esté “viendo la ‘participación’ como un medio de hacer que sus proyectos de desarrollo funcionen mejor, ayudando a la gente a funcionar [y] como una dimensión indispensable de las políticas ambientales (...) que no pueden ya ser evadidas o pospuestas” (1994: 19).

15 Mientras se ha hecho muy poco sobre estrategias específicas de sostenibilidad en las comunidades rurales pobres, es claro que mucha de la experiencia referida por quienes la practican con los grupos de base (e.g. Glade y Reilly, 1993) es consistente con los principios enunciados por los teóricos y analistas como Altieri (1987).

16 Esto es fundamental. Muchos analistas descartan a los productores campesinos por trabajar en una escala demasiado reducida y con pocos recursos para ser eficientes. Aunque sea posible e incluso necesario promover aumentos en productividad, consistentes con una estrategia de desarrollo sustentable, como la definen los agroecólogos, la propuesta para alentarles a mantenerse como miembros productivos de sus comunidades debería ser instrumentada bajo las condiciones existentes. En gran parte de Latinoamérica, si los campesinos cesaran de producir los cultivos básicos, las tierras e insumos no serían simplemente transferidos a otros para la producción comercial. Los bajos costos de oportunidad de la producción primaria en las regiones campesinas e indígenas derivan de la falta de empleos productivos alternativos para la gente y las tierras de este sector. Aunque la gente generalmente tiene que buscar ingresos en el “sector informal”, su contribución al producto nacional sería magra. La diferencia entre el criterio social para evaluar el costo de este estilo de producción y la valoración del mercado está basada en la determinación de los sacrificios que la sociedad haría para tomar una u otra opción.

17 Boyce (1999) ofrece un programa específico para la reconversión de El Salvador, basado en los principios discutidos en este artículo. Las propuestas de los grupos como la IAF y la RIAD ofrecen ejemplos específicos de los esfuerzos que las bases están llevando a cabo para instrumentar alternativas como aquellas discutidas en el texto. El Centro de Ecología y Desarrollo en México (Barkin, 1999) propuso un programa de desarrollo regional consistente con la estrategia propuesta en el área de invernada de la mariposa monarca.

18 Son numerosos los proyectos que se están esforzando para apoyar las iniciativas rurales. No se garantiza su éxito simplemente con respaldar a las comunidades, como lo ha demostrado vívidamente el caso de la Reserva de la Biosfera para proteger a la mariposa Monarca (Barkin, 1999). Los múltiples elementos de coordinación, de concertación y de capacidad financiera que se requieren para hacer efectivo el potencial de una colaboración multidimensional son evidentes en la constancia de los compromisos personales e institucionales de los casos exitosos (Barkin, 1998[b]; Barkin y Paillés, 2000).

Sustentabilidade em assentamentos rurais: o MST rumo à “reforma agrária agroecológica” no Brasil?

Canrobert Costa Neto* e Flaviane Canavesi**

Agroecologia e questão ambiental

O termo agroecologia é utilizado pela primeira vez na década de 1930, para significar a aproximação da ecologia da agricultura, passando a se tornar uma espécie de sinônimo de “ecologia aplicada”. Até então, o campo de conhecimento científico disciplinar ecológico tratava do estudo de sistemas naturais, ao mesmo tempo em que a ciência agrônômica voltava-se para a introdução de métodos de investigação científica em torno da agricultura. De acordo com estudos sobre o tema, somente nos anos 50, com o amadurecimento do conceito de ecossistema, foi criada uma estrutura básica geral para o exame da agricultura com base em uma perspectiva ecológica (Gliessman, 2000: 51-52).

O interesse na aplicação da ecologia à agricultura expandiu-se nas décadas de 60 e 70, devido à intensificação da pesquisa de ecologia de populações e comunidades, à influência crescente de abordagens em nível de sistemas e à ampliação da chamada “consciência ambiental”. A análise de agroecossistemas permitiu a estruturação, no início dos anos 80, da ciência agroecológica, dotada de metodologia e de estrutura básica conceitual apropriadas para o acompanhamento de agroecossistemas.

*Canrobert Costa Neto, Doutor em História Social da Agricultura pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ; professor pesquisador do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

**Flaviane Canavesi, mestranda em Desenvolvimento da Agricultura e Sociedade do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento da Agricultura e Sociedade da UFRRJ.

Nesse período, a ciência agroecológica passou a ser influenciada por sistemas tradicionais de cultivo de países em desenvolvimento, que passaram a constituir “exemplos importantes de manejo de agroecossistemas, ecologicamente fundamentados” (Gliessman, 2000: 52).

Percebe-se, por este breve resumo, que a agroecologia se constituiu de um campo técnico científico erigido sobre dois pilares, o que a diferenciou das ciências naturais disciplinares a ela contemporâneas, inclusive daquelas de onde emergiu, como a ecologia e a agronomia. Esses pilares foram a noção de sistemas e o reconhecimento da significação dos saberes tradicionais da agricultura não cientificamente especializada, praticada com base em influências socioculturais.

Retornaremos em seguida a essa questão de fundo. Antes, porém, abordaremos alguns aspectos da evolução da questão ambiental, ocorrida paralelamente ao desenvolvimento da agroecologia e que também exerce influência sobre esta.

Na década de 60, o ritmo de crescimento da produção e do consumo tornava-se cada vez mais frenético e já se projetavam, nesse período, catástrofes naturais e sociais que levariam a uma série de desastres capazes de inviabilizar qualquer tentativa de reversão desse processo. A partir do relatório Meadows, de 1972, elaborado pelo Clube de Roma, a questão ambiental passou a ser tratada em escala mundial, gerando o surgimento de diversos movimentos ecoambientalistas.

O centro da questão ambiental passou a ser, já nos anos 80, “a necessidade de combinar o desenvolvimento econômico com uma política de preservação ambiental que garanta a disponibilidade dos recursos naturais durante longo tempo” (Giuliani, 1997: 64).

Vejamos como a agroecologia situava-se no âmbito da questão ambiental e ecológica entre as décadas de 60 e 80, considerando o referencial técnico-científico e sociocultural da relação com os sistemas tradicionais de cultivo¹.

A partir dos anos 60 e 70, o movimento ambientalista passou a interagir com a agroecologia. “Porque os assuntos do ambientalismo coincidiam com a agroecologia, eles infundiram ao discurso agroecológico uma atitude crítica em relação à agronomia orientada para a produção e sensibilizaram para um grande número de assuntos relacionados aos recursos” (Hecht, 1934: 11). Ao mesmo tempo, as críticas do movimento ambientalista foram gradativamente influenciando posições políticas em áreas estratégicas, como no caso da reavaliação das metas de desenvolvimento agrícola nos Estados Unidos.

O impacto da crise ambiental sobre a agricultura mundial resultou em dois tipos de consequências. Nas regiões tecnológica e industrialmente mais avançadas, o impacto da crise na estrutura agrícola pouco afetou a intensidade da

utilização de produtos agroquímicos na agricultura e a confiança em seu emprego, bem como não resultou em redução significativa do uso de recursos energéticos. Por outro lado, entretanto, “nas situações em que tanto os camponeses como a nação estavam pressionando pelos recursos, onde prevaleciam estruturas distributivas regressivas e onde o enfoque das regiões temperadas não era apropriado às condições ambientais locais, a perspectiva agroecológica parecia de especial relevância” (Hecht, 1993: 13).

É importante registrar que a intervenção dos movimentos sociais ambientalistas levou certos princípios agroecológicos para o campo do conhecimento agrônomo. O mesmo, porém, não ocorreu em relação à “associação acadêmica”. Hecht considera que, em termos científico-acadêmicos, o desenvolvimento da teoria ecológica seria essencial ao desenvolvimento agroecológico.

Para além de aspectos que podem ser considerados técnico-científicos, como as questões relacionadas aos ciclos de nutrientes, às interações pragas/plantas e à sucessão ecológica, nos deteremos, resumidamente, na grande influência sociocultural sobre o pensamento agroecológico, dos sistemas nativos de produção.

Para Hecht, o estudo de sistemas agrícolas nativos tem proporcionado grande parte da matéria-prima para o desenvolvimento de hipóteses e de sistemas de produção alternativos para a agroecologia. A autora ressalta que é cada vez mais amplo o estudo da agricultura nativa realizado por equipes multidisciplinares destinado a documentar práticas, desenvolver categorias de classificação para analisar os processos biológicos dentro dos sistemas agrícolas e para avaliar aspectos das forças sociais que influem na agricultura. “Enfim, o estudo de tais sistemas tem sido crucial para o desenvolvimento do pensamento agroecológico” (Hecht, 1993: 15).

Vemos, portanto, como a agroecologia exige que se relacionem, em seu âmbito, as noções de sistemas científico-tecnológicos, agricultura tradicional, social e culturalmente condicionada, ambiente e ecologia.

Sustentabilidade e agroecologia

A noção de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, não se encontra “naturalmente” associada à questão agroecológica. Apenas quando se vincula o debate sobre a crise ambiental ao espaço rural é que a ela passa a ser pensada em termos agrícolas e/ou agrários. Frequentemente, a idéia de sustentabilidade é utilizada para tratar de problemas ambientais ou socioambientais.

Mesmo quando o “discurso do desenvolvimento sustentável” é compreendido a partir de um plano mais geral, ele é visto como parte de um “emaranhado de

proposições”. Nesse sentido, “toda a profusão de discursos em favor do desenvolvimento sustentável encobre e deixa volátil a noção de sustentabilidade”. Segundo Canuto, “se concebemos desenvolvimento sustentável tão-somente como o uso prudente dos recursos hoje para os ricos de amanhã, de qualquer forma salvaguardaremos por algum tempo mais a sustentabilidade ecológica. Mas a exclusão da dimensão social esvazia a própria idéia do desenvolvimento” (Canuto, 1998: 75).

Conforme destaca Altieri (1996:129), aproximando a questão ambiental dos princípios agroecológicos, constata-se que a proposta de desenvolvimento agrícola sustentável deve levar em consideração os níveis de pobreza rural e a degradação do meio ambiente. O autor assinala que o enfoque agroecológico para o desenvolvimento (rural sustentável) deve englobar, dentre outras, as seguintes formulações: as técnicas agroecológicas são compatíveis com a cultura camponesa, visto que não questionam sua lógica, mas se baseiam no saber camponês tradicional, combinado com elementos da ciência e da agricultura moderna; as técnicas são ecológicas, uma vez que não tentam modificar ou transformar radicalmente os ecossistemas camponeses, mas tratam de identificar elementos de manejo que, uma vez incorporados, conduzem a uma otimização da unidade de produção.

Altieri (1996: 131) enfatiza que a verdadeira sustentabilidade será obtida quando os camponeses incrementarem seu acesso à terra, aos recursos e a uma tecnologia apropriada para manejá-los adequadamente e se organizarem para assegurar o controle dos recursos, um justo acesso aos mercados de insumos e produtos e rendimentos dignos derivados de suas colheitas.

Voltando à questão do “emaranhado” conceitual que há em torno da sustentabilidade, é possível distinguir duas noções: uma definida como “ecotecnocrática”; outra calcada em princípios agroecológicos. A primeira se apóia na idéia de ciência que se reivindica da objetividade do conhecimento, da neutralidade cultural e da natureza universal como elementos centrais para seu campo de pesquisa, uma ciência, enfim, que atua em um contexto independente da cultura e da ética. A segunda, além de se opor à “ciência convencional” - por considerar que esta tem um papel limitado na resolução dos problemas, uma vez que não pode se confundir com a “sabedoria”, inerente ao conhecimento tradicional -, revela que a agroecologia se apóia em um projeto de sustentabilidade partindo de uma análise das vias pelas quais as culturas tradicionais capturam o potencial agrícola dos sistemas sociais e biológicos em seu processo de evolução (Sevilla Gusmán, 1999).

A denominada sustentabilidade ecológica² contém, em seu conjunto de valores, a noção de que a ciência deve ser entendida como uma via de geração de conhecimento dentre outras, enquanto a sabedoria, além de ser uma forma de acesso ao conhecimento, incorpora um componente étnico essencial, produzido pela identidade sociocultural da qual emerge.

Sustentabilidade social ecológica em assentamentos rurais

Considerando que a agroecologia se constitui um conjunto de princípios, anteriormente mencionados e comentados, e que a sustentabilidade social ecológica é a forma, por excelência, de sua manifestação em condições agrícolas na quais predomina a agricultura familiar camponesa, analisaremos neste tópico algumas das correlações possíveis entre sustentabilidade social ecológica e assentamentos rurais. Com esse enfoque, abordaremos a organização social estabelecida no interior de assentamentos rurais na região da Andaluzia, na Espanha, aonde vem sendo estruturado, há alguns anos, o referido modelo social ecológico de sustentabilidade.

Sevilla Gusmán destaca que, de acordo com a experiência acumulada no acompanhamento de assentamentos rurais na Andaluzia, a agroecologia neles praticada pode ser definida como o manejo ecológico dos recursos naturais através de formas de ação social coletiva, que representam alternativas ao atual modelo de administração industrial desses recursos, mediante propostas de desenvolvimento participativo, procurando estabelecer formas de produção e consumo que contribuam para enfrentar a crise ecológica e social e, com isso, defrontar também o neoliberalismo e a globalização econômica.

A estratégia desse projeto de sustentabilidade social ecológica em assentamentos rurais é de natureza sistêmica, pois considera os sistemas de conhecimento camponês portadores do potencial endógeno que permite potencializar a biodiversidade ecológica e sociocultural (Sevilla Gusmán, 1999).

Respalhando-se no que Gliessman denomina “contexto da sustentabilidade”, expressão utilizada pelo autor quando se refere a diferentes dimensões agroecológicas da sustentabilidade, Sevilla Gusmán afirma que a agroecologia praticada na região andaluza da Espanha compreende uma proposta que pode ser extraída da prática dos assentamentos em questão, a qual implica uma definição alternativa de sustentabilidade em relação ao discurso oficial, pois se baseia na ecologia (através do referido manejo ecológico dos recursos naturais) e, por outro lado, se apóia na “consciência social” do grupo.

O autor acrescenta ainda que a sustentabilidade dos assentamentos aparece nitidamente refletida no documento que trata de cooperativismo, apresentado no V Congresso do Sindicato de Trabalhadores do Campo (SOC), em 1993, que é, segundo o autor, um claro exemplo da agroecologia praticada pelos assentamentos rurais envolvidos no projeto de sustentabilidade na Andaluzia.

O SOC obteve a propriedade de uma área rural, que passou a ser denominada “Tierra y Libertad”, onde se estabeleceu uma cooperativa de trabalhadores que iniciou práticas de agricultura ecológica. No povoado de Villamartin, em Cadiz, surgiu a primeira experiência de trabalho em áreas rurais com base no desenvolvimento participativo de tecnologias agrárias alternativas. Sevilla

Gusmán destaca ainda que as ações político-produtivas praticadas em assentamentos rurais coincidem, no essencial, com a proposta agroecológica que surge na América Latina, paralelamente à sua construção andaluza.

O MST rumo à “reforma agrária agroecológica” no Brasil?

A referência anteriormente feita a uma possível relação entre a proposta agroecológica para áreas de assentamento na Europa e sua aplicação na América Latina passa a ganhar corpo mais recentemente no Brasil. Veremos, neste tópico, como o discurso político-produtivo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em termos de seu ideário de reforma agrária, vem se afunilando rapidamente no sentido de incorporar preocupações com a sustentabilidade nos assentamentos sob sua responsabilidade.

Partindo de uma retrospectiva da inserção do MST em questões relacionadas à sustentabilidade, pode-se verificar que, desde o seu primeiro congresso nacional, realizado em 1985, ele tem esboçado, ainda que, inicialmente, de forma um tanto tímida, uma inclinação favorável aos temas de preservação ambiental³.

No ano de 1985 ocorreram dois eventos nacionais coordenados pelo Movimento: o Primeiro Congresso Nacional do MST, realizado em janeiro, e o Primeiro Encontro Nacional de Agricultores Assentados, em junho.

No Primeiro Congresso Nacional do MST foi deliberado, dentre diversas outras resoluções, que o governo federal deveria garantir que a produção, a ser realizada nos assentamentos, respeitasse a preservação do meio ambiente e que o MST acataria a indicação pelo governo de técnicos agrícolas para atuar nas áreas de assentamento, “desde que eles se comprometessem com uma agricultura de pequena propriedade e não com a do modelo capitalista” (Costa Neto, 1999: 317).

No Primeiro Encontro Nacional de Agricultores Assentados, estes exigiam que o governo estimulasse, com recursos, as comunidades dos assentamentos, para que estas pudessem beneficiar seus produtos. No que se refere às condições para fazer lavouras e aos problemas de assistência técnica, os assentados solicitavam ao governo o seguinte: que fornecesse sementes para adubação verde; que os técnicos fossem escolhidos pelos reassentados e que residissem nos assentamentos; que a assistência técnica estimulasse formas alternativas de produção menos dependentes do capital (Costa Neto, 1999: 318).

Dez anos mais tarde, no terceiro congresso nacional que realizou, o MST divulgou a “visão de um novo tipo de reforma agrária”, na qual se percebe uma forte preocupação com as questões do desenvolvimento, mais notadamente o rural agrícola, a ser implementado de forma “auto-sustentável”, levando em conta o “desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade brasileira, preservando e recuperando os recursos naturais”, com base na produção familiar cooperativada.

De 1995 em diante, o discurso político programático do MST passou a intensificar o conteúdo em favor da sustentabilidade, com a realização de encontros com representantes de organizações não-governamentais (ONGs), ligadas à questão da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável.

Foi, porém, no mais recente Congresso Nacional do MST, em 2000, que lideranças nacionais do Movimento denunciaram “as linhas políticas do governo adotadas para a agricultura” (Stédile, 2000: 17): estímulo à implantação de grandes fazendas de grãos, sobretudo na região Centro-Oeste, destinadas à exportação; estímulo à oligopolização do controle do mercado interno agrícola, por parte de grandes empresas agroindustriais, em sua maioria multinacionais; implantação de um processo de seletividade dos pequenos agricultores integrados à agroindústria, reduzindo drasticamente seu número, aumentando a tecnologia e selecionando regiões mais propícias para cada produto; desaparecimento da agricultura de subsistência, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; desmantelamento do chamado setor público agrícola, representado pela atuação do Estado, no controle dos estoques, na assistência técnica, na pesquisa agropecuária e no destino de recursos públicos para o crédito rural; transferência do controle da biotecnologia para os grandes grupos multinacionais e sucateamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); redução do emprego agrícola em aproximadamente 5% ao ano.

De fato, as características mencionadas não se adequam a qualquer modelo de desenvolvimento sustentável que tenha a agricultura familiar camponesa como sujeito de seu processo. Por isso mesmo, a crítica do dirigente do MST à política governamental para a agricultura no Brasil vai ao encontro de propostas direcionadas à sustentabilidade, concebida a partir de um quadro multidimensional, representando, nesse caso, sua dimensão mais estritamente econômica.

Três outras dimensões são também referidas no documento que serviu de base para o IV Congresso Nacional do MST: a ambiental, a cultural e a política. A preocupação ambiental expressa-se na questão dos “valores”. “Precisamos buscar na própria realidade em que vivemos quais os valores mais urgentes a serem desenvolvidos e iniciar as mudanças a partir do meio onde vivemos. Se há muita devastação, devemos plantar árvores e preservar os rios. Se há muito lixo jogado, devemos iniciar por recolher o lixo. Se há falta de beleza, devemos iniciar pelo embelezamento, plantando flores e árvores frutíferas” (Bogo, 2000: 40).

A dimensão cultural da sustentabilidade é abordada quando se trata de fazer referência à “revolução cultural” no MST. “... em nosso socialismo haverá respeito ao ser humano, à democracia, respeito aos bichos e à existência de florestas, a convivência fraterna, o cuidado com o corpo e com a vida, empenho ao trabalho e ao estudo, respeito a tudo o que é coletivo e muito trabalho cooperado” (Bogo, 2000: 41).

A questão do trabalho cooperado será abordada mais adiante, no texto em pauta. É exatamente no tema “cooperação” que vemos despontar a dimensão política da sustentabilidade. “Como as pessoas estão mais próximas e organizadas nos núcleos de base, isto facilitará a compreensão de atividades cooperadas, sejam elas na produção, sejam elas para solução de outros problemas existentes na comunidade (...) não podemos perder de vista que a cooperação é o passo seguinte nesta estrutura social que estamos criando e ela é essencial para a constituição de novos valores” (CONCRAB, 2000: 46).

Mesmo sem utilizar o termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, nota-se que o documento base do Congresso faz referências indiretas, embora não intencionais, ao conjunto de dimensões que, a nosso ver, caracterizam a sustentabilidade social ecológica.

O vínculo técnico-científico e sociocultural que conduz, conforme vimos neste trabalho, o princípio agroecológico para uma prática sustentável em assentamentos rurais parece estar começando a ser introduzido no Brasil. É o caso do Projeto de Formação e Educação Ambiental, dirigido pela Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Anca) do MST.

De acordo com a apresentação do projeto, seu objetivo é implementar uma reforma agrária sustentável nos assentamentos rurais do Estado do Rio de Janeiro, organizados pelo MST/RJ. “Em outras palavras será uma reforma agrária com reforma agroecológica em 12 áreas de seis assentamentos, onde vivem cerca de 950 famílias” (Projeto de Formação e Educação Ambiental, 2000: 1).

O documento de divulgação do projeto informa ainda que “serão desenvolvidas campanhas educativas, com elaboração de cartilhas a respeito do fogo, lixo, água, agrotóxicos e agroecologia” e que, “para isso, o projeto - que visa à introdução de técnicas de produção não agressivas ao meio-ambiente - prevê a formação de agentes de desenvolvimento, com capacitação e treinamento de agricultores, técnicos e educadores; (Projeto de Formação e Educação Ambiental, 2000) e a implantação de unidades demonstrativas adequadas aos problemas de cada região. Para executar as diversas tarefas do projeto, a equipe técnica deverá ser composta por engenheiros florestais, engenheiros agrônômicos, técnicos agrícolas, educadores e agentes locais de desenvolvimento”.

O projeto está definido, em termos espaciais, em torno de grandes áreas do Estado do Rio de Janeiro: Baixada Fluminense, Baixada Litorânea e Região Norte. Segundo o texto em questão, “em resumo, o objetivo do MST é criar um novo modelo de agricultura, que seja produtivo, socialmente não excludente e que assegure a reprodução da capacidade produtiva e a preservação ambiental. As técnicas agroecológicas têm a vantagem de aumentar a autonomia dos assentados em relação às técnicas convencionais, baixando custos com insumos e

melhorando as condições de comercialização dos produtos” (Projeto de Formação e Educação Ambiental, 2000: 2).

Desafios e perspectivas

Passando a interpretar o Projeto de Formação e Educação Ambiental à luz dos princípios agroecológicos debatidos neste trabalho, podemos começar dizendo que, se o seu objetivo é “criar um novo modelo agrícola” agroecologicamente sustentável, é necessário perceber que o atual modelo agrícola não é insustentável apenas do ponto de vista ambiental e socioeconômico, mas também do ponto de vista cultural e político.

Neste sentido, consideramos que a noção de sustentabilidade agroecológica adotada na justificativa do projeto carece de maior amplitude dimensional, isto é, requer que sejam efetivamente incorporadas as dimensões socioculturais e sociopolíticas da sustentabilidade, que limitem a possibilidade de um perfil tecnicista do empreendimento⁴.

A utilização das tecnologias agroecológicas pelos assentados pressupõe a ampla divulgação de procedimentos agrícolas e expectativas de resultados. Nesse caso, seria recomendável a adoção de métodos e técnicas consagrados do tipo da metodologia apoiada no desenvolvimento participativo de tecnologias (DPT), adaptadas às condições de assentamentos (Reijntjes *et alii.*, 1999: 46-70).

O projeto poderia, ainda, recorrer a profissionais com formação socioantropológica e histórica, que se agregariam aos setores provenientes de áreas “técnicas” e atuariam no sentido de promover, conjuntamente, a prática de metodologias de observação participante seguida da investigação-ação participativa, de modo a levar a uma identificação dos interesses dos assentados. Em termos culturais, a intervenção social humanística visaria ao resgate da “memória coletiva” proveniente da “cultura do trabalho” dos grupos de assentados (Sevilla Gusmán, 1999: 80).

A própria educação ambiental não deveria ser encarada, pura e simplesmente, como um “receituário” para aplicação de novas tecnologias na agricultura familiar assentada. Deveria priorizar, antes de tudo, a formação de uma conscientização agroecológica entre os assentados, realçando seus princípios e valores. Dessa forma, o “novo modelo agrícola”, sustentável social e ecologicamente, compreendido como um todo multidimensional, abrangeria “um novo modelo tecnológico” “onde os agricultores, as cooperativas e associações poderiam criar os seus próprios insumos, estimular a produção orgânica, aumentar a produtividade, garantir alimentos de qualidade para agricultores e consumidores” (Canavesi, 2000: 2).

É necessário frisar que deve caber ao projeto de formação (agroecológica) e educação ambiental a responsabilidade de discutir com os assentados as bases desse novo modelo tecnológico. Dessa forma, eles poderão vir a se conscientizar de que cabe ao Estado o dever de investir em pesquisas públicas com o objetivo de conduzir “à transformação da matriz tecnológica nos assentamentos”, visando a uma autonomia cada vez maior dos trabalhadores rurais em relação aos insumos produzidos pelas grandes empresas agroindustriais (Canavesi, 2000: 3).

Nesse ponto, destaca-se a importância da dimensão política da sustentabilidade social ecológica em assentamentos rurais no Brasil, pois é no desenvolvimento da conscientização social e política (dos assentados) que alguns princípios agroecológicos são realçados. “A gestão proposta pelo MST aos assentamentos, como os núcleos de base e os núcleos de moradia, requerem um apelo à participação, já que os problemas são discutidos em núcleos pequenos de famílias, democratizando e resgatando assim experiências dos próprios trabalhadores” (Canavesi, 2000: 2).

Utilizar, de modo participativo, as instâncias associativas e cooperadas dos assentamentos rurais parece ser o caminho mais indicado para levar adiante um projeto agroecológico sustentável.

Retomando a questão acerca da possibilidade de implantação e disseminação da reforma agrária agroecológica no Brasil, inicialmente formulada neste trabalho, consideramos que, ao longo do tempo, a resposta poderá vir a ser afirmativa, desde que se leve em consideração o caráter multidimensional da sustentabilidade na agricultura familiar, em geral, e particularmente nos assentamentos de reforma agrária.

Pelo que foi apresentado e debatido neste texto, podemos concluir afirmando que os assentamentos rurais se mostram bastante propícios a iniciativas sociais ecologicamente sustentáveis que visem a atender, de forma integradamente participativa, às necessidades de sua efetiva construção como modelo tecnológico agrícola e organização agrária alternativos aos padrões dominantes.

Neste sentido, os assentamentos rurais no Brasil, notadamente aqueles organizados em torno do MST, representam hoje o espaço, por excelência, para a adoção de princípios e práticas agroecológicos, pois reúnem em torno de si uma estrutura social agrária com base na unidade familiar, um trabalho agrícola associativo e cooperado e a preocupação ecológico-ambiental.

Bibliografia

- Altieri, Miguel 1996 “Una perspectiva agroecológica para orientar los programas de educación de postgrado en Economía Agrícola y Desarrollo Rural en la América Latina del siglo XXI”, en Romano, Jorge y Wessel Eykman (orgs.) *La postgraduación en economía y políticas agrícolas y desarrollo rural: curricula y perfil profesional* (Rio de Janeiro: REDCAPA/EDUR).
- Bogo, Ademar 2000 “Desafios permanentes do MST”, em *Reforma Agrária: por um Brasil sem latifúndio* (Brasília) 4º Congresso Nacional MST.
- Canavesi, Flaviani 2000 *Reforma Agrária, movimentos sociais e sustentabilidade* (Rio de Janeiro) Mimeo.
- Canuto, João Carlos 1998 “Agricultura ecológica e sustentabilidade socioambiental”, em *Extensão Rural* (Santa Maria) Ano V, N° 5.
- CONCRAB 2000 “Assentamentos: construir uma nova estrutura social no meio rural”, em *Reforma Agrária: por um Brasil sem latifúndio* (Brasília) 4º Congresso Nacional MST.
- Costa Neto, Canrobert 1999 “Agricultura sustentável, Tecnologias e Sociedade”, em de Carvalho Costa, Luis Flávio et al. (orgs.) *Mundo Rural e Tempo Presente* (Rio de Janeiro: Mauad)
- Costa Neto, Canrobert 2000 “Ciência e Saberes: Tecnologias convencionais”, em *Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável* (Porto Alegre) Vol. 1, N° 2.
- Costa Neto, Canrobert e Maylta B. Anjos 2000 “Dimensões sociais da sustentabilidade em assentamentos rurais no Brasil: um enfoque teórico-metodológico”, em *Anais do X Congresso Mundial de Sociologia Rural/XXXVIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural* (Rio de Janeiro) Vol. 1.
- Giuliani, Gian Mario 1997 “O movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra e a questão ecológica”, em *Revista da Universidade Rural Série Ciências Humanas* (Seropédica) Vol. 19/21, N° 1/2, 69-84.
- Gliessman, Stephen R. 2000 *Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável* (Porto Alegre: UFRGS).
- Hecht, Susanna 1993 “A evolução do pensamento agroecológico”, em *Revista Agroecologia e Desenvolvimento CLADES* (Rio de Janeiro) Ano I, N° 1, Ago.
- Molina Navarro, Manuel 1994 “Agroecologia: bases teóricas para uma história agrária”, em *Agroecologia e Desenvolvimento* (Rio de Janeiro) Ano II, N° 2.

Projeto de Formação e Educação Ambiental 2000 (Rio de Janeiro: MST).

Reijntjes, Coen *et alii*. 1999 (1992) *Agricultura para o futuro: uma introdução à agricultura sustentável e de baixo insumos externos* (Rio de Janeiro: AS-PTA; Leusden: ILEIA).

Sevilla Guzmán, Eduardo 1999 “La Agricultura y La Alimentación”, en *Asentamientos rurales y agroecología en Andalucía* Encuentro Internacional (Barcelona:Universitat Pompeu Fabra).

Stédile, João Pedro 2000 “O modelo agrícola do governo inviabiliza a verdadeira reforma agrária”, em *Reforma Agrária: por um Brasil sem latifúndio* (Brasília) 4º Congresso Nacional MST.

Notas

1. “Agroecologia parte de um pressuposto epistemológico que constitui uma ruptura com os paradigmas convencionais da ciência oficial. (...) Frente ao discurso científico tradicional aplicado à agricultura, que propicia o isolamento dos demais fatores circundantes, a agroecologia reivindica a necessária unidade das diferentes ciências naturais entre si e destas com as ciências sociais para que se possa compreender a interconexão dos processos ecológicos, econômicos e sociais” (Molina Navarro, 1994: 7).

2. Costa Neto e Anjos recorrem à noção de sustentabilidade social que, a nosso ver, relaciona-se, de forma complementar, à noção de sustentabilidade ecológica. “Considerando que a noção de agricultura sustentável supera o significado ambiental ecológico, o que implica na possibilidade de se pensar os papéis do natural e do social na composição do que pode ser entendido como sustentabilidade na agricultura, essencialmente na pequena produção, voltando a ênfase para o segundo; considerando que compreendemos a multidimensionalidade complexa, dialética, articuladora do todo com as partes constitutivas como sendo aquela que pretende evidenciar todas as dimensões (Costa Neto e Anjos, 1999: 7) da transformação estrutural da sociedade, caracterizando assim o desenvolvimento (rural, sustentável) ‘remetido às estruturas sociais e mentais, onde a dimensão econômica interage de modo recíproco com os aspectos socioculturais’; considerando que a noção dialética complexa das dimensões enquanto recurso teórico-metodológico para interpretar os assentamentos rurais visa a constituir um todo estruturado, em torno da noção de sustentabilidade que propicie o estabelecimento de complexas articulações entre as dimensões relacionadas; considerando que os três aspectos acima elencados perfazem uma totalidade, a partir de suas interações recíprocas, adotaremos (...) a seguinte formulação: sustentabilidade na agricultura é uma sustentabilidade social, que se constitui

num todo multidimensional complexo, integrado por dimensões sociais” (Costa Neto e Anjos, 2000: 7-8).

3 Giuliani assinala: “sabemos que o MST não é um movimento que pretende levantar as bandeiras ecologista ou ambientalista (...) ao contrário, veremos (...) como nunca expressou identificação nem simpatia com tais movimentos. No entanto, por uma série de razões, políticas e culturais, com um progressivo amadurecimento e através de uma ótica bastante singular, o mesmo incorpora em sua agenda de luta e em suas reivindicações alguns dos temas muito caros aos ecoambientalistas” (Giuliani, 1997: 71).

4 “Uma abordagem não estritamente técnica implica levar em consideração a que tipo de público o pesquisador cientista se dirige. Se for um público-alvo mais localizado no setor de renda maior ou um público colocado, por exemplo em áreas sociais periféricas (...) para que se possa reconhecer além da condição socioeconômica de uma determinada comunidade pesquisada seria necessário também montar um quadro teórico, um referencial da formação histórico social, sociocultural do segmento em questão. A partir destes referenciais teóricos seria possível interagir com o público visando construir as bases de conhecimento pretendidas” (Costa Neto, 2000: 22).

Legalidade, legitimidade e lavouras transgênicas clandestinas

Renata Menasche*

Um olho lá e outro cá

O ponto de partida da análise aqui proposta é a intrigante comparação de dois episódios. Um ocorrido no Rio Grande do Sul, outro na França. Ambos referentes a lavouras transgênicas ilegais, clandestinas.

Nos dois casos, os governos se propõem a fazer cumprir a lei; entretanto, os dois casos diferem no que concerne às reações frente às ações governamentais que buscam o cumprimento da lei.

Enquanto no Rio Grande do Sul a ação fiscalizadora do governo estadual provoca manifestações públicas e ações contrárias de produtores de soja pró-transgênicos, quando o governo francês ordena a destruição das lavouras de colza contaminadas “acidentalmente”¹, parece não encontrar qualquer resistência na sociedade.

A reflexão que ora me proponho a desenvolver é pela busca da compreensão dessa diferença.

Para isso resgato, inicialmente, um terceiro episódio, ainda mais recente. O foco no julgamento dos agricultores da *Confédération Paysanne* francesa, tornando presente o quadro em que se desenrola o debate naquele país, deverá possibilitar uma melhor compreensão dos episódios das lavouras clandestinas.

* Mestre em “Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade” pelo Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; doutoranda em “Antropologia Social” pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Na França

José Bové: a Justiça na encruzilhada

Asterix contra o Império²

“É sobre uma carroça de feno, seguida pelos milhares de manifestantes aguardados, que os dez acusados da *Confédération Paysanne*, dentre eles José Bové, chegarão ao Palácio da Justiça de Millau, onde devem ser julgados por sua ação contra o McDo da cidade. A audiência começará às 14 horas, com 16 testemunhas citadas pela defesa, vindas de cinco continentes para fazer deste processo o ‘processo contra a globalização’. José Bové declarou ontem que este dia será uma nova grande concentração da luta cidadã contra a ordem mercantil mundial. Apenas nos trens e ônibus é prevista a chegada ao local de pelo menos 20.000 pessoas. Durante a tarde, cinco fóruns terão lugar nas ruas da cidade, para debater os ‘malefícios da globalização’. Feira de produtos agrícolas e teatro de rua também estão no menu e, a partir das 19 horas, um concerto de apoio, nas margens do Tarn. Um evento de encerramento está previsto para as 15 horas do sábado, com a participação de José Bové. Uniforme do dia: camiseta ‘o mundo não é uma mercadoria’.”³

José Bové, 47 anos, tornou-se camponês em 1974, quando participava de um movimento contra a expansão de uma área militar, na região francesa do Larzac. Como resultado do movimento, os camponeses obteriam do governo a posse dos 6.300 hectares em disputa.

Em 1998, Bové havia sido preso por participar de ação contra uma empresa produtora de sementes de milho transgênico- a Novartis⁴. Sua notoriedade nacional e internacional -bem como da *Confédération Paysanne*⁵, organização sindical camponesa da qual é um dos fundadores e dirigentes- tem como marco, no entanto, o 12 de agosto de 1999.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizara os EUA- após recusa da União Européia em importar carne de gado norte-americana, produzida com a utilização de hormônios- a sobretaxar vários produtos da gastronomia francesa, dentre eles o queijo Roquefort.

Os produtores desse queijo, criadores de ovelhas organizados na *Confédération Paysanne*, se dirigiram às autoridades governamentais francesas, das quais obteriam a resposta de que a decisão da OMC deveria ser considerada irrevogável.

A forma de protesto seria, então, decidida: a organização sindical camponesa promoveria, no 12 de agosto, em Millau -uma pequena cidade de 20 mil habitantes do sul da França, no Aveyron, região produtora do Roquefort-, o “desmante simbólico” da loja -então em construção- da rede de *fast food*

McDonald's, escolhida como símbolo, a um só tempo, da ordem econômica globalizada e da comida standartizada, a *mal-bouffe*⁶.

Os camponeses responsáveis pela “destruição” da lanchonete McDonald's seriam presos. A fiança fixada pela Justiça para a liberação de José Bové seria consideravelmente mais elevada do que a exigida de seus companheiros, logo soltos⁸. Bové recusar-se-ia a pagar a fiança, permanecendo preso durante três semanas, período em que o caso repercutiria, a partir de ações de protesto e manifestações de solidariedade, na França e no exterior.

Com seu vasto bigode e portando cachimbo -apontados pela imprensa como símbolos da ruralidade francesa-, Bové seria, alguns meses mais tarde, em Seattle, consagrado ícone da luta camponesa, ambientalista e antiglobalização⁹.

E é nessa condição que chega, de carroça, cercado por dezenas de milhares de manifestantes, em 30 de junho de 2000, ao banco dos réus do tribunal de Millau¹⁰.

A formação da opinião e a encruzilhada da justiça

“Há muito tempo, sabíamos que as manifestações eram feitas, de alguma forma, ‘pela’ imprensa; o que é novo é vermos a multiplicação de manifestações que são explicitamente concebidas ‘para’ a mídia, isto é, ações que, em última análise, não existiriam sem a mídia. (...) O desenvolvimento da mídia... modificou o que podemos designar por ‘economia geral das manifestações’ e, de forma genérica, a do jogo político... o campo jornalístico age, igualmente, enquanto tal, sobre o campo político considerado globalmente” (Champagne, 1998: 191, 233).

Uma semana antes do julgamento, dois jornais brasileiros publicavam reportagens em que era conferido destaque à previsão de que o evento de Millau seria coberto por cerca de seis mil jornalistas de todo o mundo¹¹.

A ação de “desmontagem simbólica” do McDonald's, assim como a manifestação realizada durante o julgamento, foi, claramente, planejada para estar sob os holofotes da mídia, construtora do ícone José Bové.

Ao realizar as manifestações da forma como as produz, a *Confédération Paysanne* dialoga, através da mídia, com a imagem que a sociedade francesa -urbana- constrói dos agricultores. Sua identidade seria, assim, estruturada por essa imagem, mas também estruturante dessa imagem, na medida em que age de forma a conformá-la¹².

Antes de seguir nessa reflexão, vejamos como Champagne (1998: 193) narra uma manifestação pública de agricultores franceses realizada em Paris, em 1982.

“No dia 23 de março, em resposta ao apelo lançado pela *Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles* (FNSEA) e pelo *Centre National de Jeunes Agriculteurs* (CNJA), algumas dezenas de milhares de agricultores -58.000 segundo a polícia e mais de 100.000 segundo o sindicato- vieram de numerosas regiões da França, em ônibus e trens, para desfilar na capital. Logo de manhã, tinham sido distribuídas aos parisienses, na saída das estações ferroviárias e de metrô, 200.000 brochuras de oito páginas redigidas pela FNSEA e pelo CNJA, intituladas ‘Paris, os camponeses vêm ao teu encontro’, que visavam ‘restabelecer a verdade’ sobre um certo número de acusações que os cidadãos fariam aos agricultores (estariam recebendo subvenções em demasia, pagando poucos impostos, poluindo a natureza, tratando os animais com crueldade, etc)”.

Se, há quase 20 anos, os agricultores franceses assumiam, na manifestação descrita por Champagne, uma postura defensiva frente uma imagem de conotação negativa deles construída pela população parisiense, nas ações recentes é na população urbana que a *Confédération Paysanne* encontra o apoio que resulta na participação de dezenas de milhares de pessoas na manifestação de Millau¹³. Nesses quase 20 anos, transformaram-se as condições de vida nas cidades, os camponeses, assim como a imagem deles construída pela população urbana¹⁴.

Por meio de suas ações -dentre outras, a realizada na empresa Novartis, mas principalmente o “episódio McDonald’s”-, a *Confédération Paysanne* tem sinalizado seu programa para a agricultura, traduzido na linguagem compreendida pelo conjunto da sociedade francesa: o combate à *mal-bouffe*, por sua vez erguido como eixo da luta antiglobalização¹⁵.

E é isso o que hoje representa José Bové, o simpático Asterix contemporâneo. Dessa forma, essa é a imagem daquele que se sentaria no banco dos réus do tribunal de Millau.

Em 13 de setembro de 2000, a Justiça francesa, ao pronunciar sua sentença referente ao julgamento ocorrido em Millau, decidiria entre a ilegalidade da “destruição” da lanchonete McDonald’s, por um lado, ou a legitimidade da “desmontagem” do ícone da *mal-bouffe* e da globalização, por outro.¹⁶

Lavouras transgênicas clandestinas: ilegais e ilegítimas¹⁷

Em 18 de maio de 2000, a empresa de sementes Advanta Seeds admitia ter comercializado acidentalmente, em quatro países europeus -Alemanha, Grã-Bretanha, França e Suécia-, sementes de colza contaminadas¹⁸. As sementes clandestinas haviam sido produzidas no Canadá, em 1998, tendo sido contaminadas pelo pólen de lavouras de colza transgênica, autorizadas naquele país.

Como a União Européia ainda não dispõe de legislação única relativa ao tema, tampouco de instrumentos que permitam responsabilizar civilmente a empresa importadora das sementes contaminadas, qualquer providência deveria ser adotada pelos governos nacionais, individualmente¹⁹.

Enquanto Alemanha e Inglaterra, apesar dos protestos de entidades ambientalistas e de produtores orgânicos, optavam por não ordenar a destruição das lavouras ilegais -apontando para o aproveitamento do produto em finalidades outras que não o consumo alimentar ou para sua utilização fora do continente europeu-, Suécia imediatamente ordenava a destruição das lavouras contaminadas, sendo seguida pelo governo francês -que se pronunciaria oficialmente nesse sentido em 25 de maio.

Na França, é vedado o cultivo de colza geneticamente modificada. O único cultivo transgênico ainda autorizado em escala comercial no país é o milho, cuja área cultivada vem se reduzindo a cada ano. Se em 1998 foram 2.000 hectares, em 1999 seriam apenas 200 hectares de milho geneticamente modificado cultivados no país, área que se reduziria a zero na presente safra²⁰. Assim, mesmo o cultivo de milho transgênico, que encontra respaldo na legislação vigente, vem sendo eliminado do território francês.

Se não há leis impedindo o cultivo de milho transgênico, tampouco se poderia afirmar que sua produção apresente produtividade inferior ou custos mais elevados frente ao cultivo convencional, como poderíamos compreender a redução da área plantada senão a partir de uma rejeição aos cultivos transgênicos existente entre os produtores franceses, provavelmente enraizada na resistência dos consumidores aos alimentos geneticamente modificados e na pressão de organizações ambientalistas, de consumidores e de agricultores -aí especificamente a *Confédération Paysanne*-, contrárias a esses cultivos?

Voltando às sementes clandestinas de colza. A partir da cobertura da imprensa francesa dada ao caso, pode-se perceber que, durante a semana que decorre entre a admissão, pela Advanta, da ocorrência da contaminação e a decisão do governo francês de ordenar a destruição das lavouras de colza contaminadas, uma disputa estava em curso.

O que chama a atenção, porém, não é a existência da polêmica no cenário político francês, personificada nas figuras da Ministra do Meio Ambiente e do Ministro da Agricultura -respectivamente pró e contra a destruição-, mas o isolamento do último na defesa de sua posição, que seria derrotada.

Os argumentos do Ministro da Agricultura francês, atestando a inocuidade das lavouras clandestinas e afirmando a não necessidade de sua destruição, coincidiriam com os expostos no comunicado de imprensa da Advanta-France²¹, mas, aparentemente, com os de mais ninguém.

Excetuando-se o Ministro da Agricultura, a destruição das lavouras ilegais parecia ser consensual na sociedade francesa, não encontrando resistência sequer entre os agricultores atingidos. A própria Advanta, preocupada com sua imagem, afirmava que as lavouras contaminadas não ofereciam riscos, mas ainda assim não ousava se opor à sua destruição, prontificando-se a participar da indenização dos agricultores cujas lavouras fossem destruídas.

Assim, a questão efetivamente em debate não era se as lavouras ilegais, cultivadas involuntariamente a partir de sementes de colza contaminadas com transgênicos, seriam ou não destruídas, mas sim como se daria a indenização dos agricultores prejudicados²².

Um outro episódio de lavouras contaminadas- ocorrido pouco depois do anteriormente comentado- é bastante ilustrativo, servindo à compreensão das sensibilidades presentes no debate da sociedade francesa com relação às lavouras transgênicas clandestinas.

Em 21 de junho, fora divulgada a existência, na França, de 4.000 hectares de lavouras clandestinas de milho transgênico. As sementes utilizadas nessas áreas haviam sido comercializadas como não-transgênicas, tendo sido assim que os agricultores as semearam.

Até início de julho, o governo francês ainda não se manifestara a respeito do assunto. A imprensa comentaria que o fato da decisão governamental a respeito da destruição ou não dessas lavouras ter seu anúncio previsto para a primeira semana de julho, e não antes disso, podia ser atribuído à tática governamental de, deliberadamente, evitar se pronunciar sobre o assunto antes da realização do julgamento de Millau.

“Se não ordena a destruição das lavouras, o governo se arrisca a uma reação violenta da *Confédération Paysanne*... Se ordena, deverá indenizar os agricultores pela perda da colheita. Provavelmente sozinho, já que a responsabilidade civil das empresas produtoras de sementes não é reconhecida. Em 25 de maio, o governo ordenou a destruição de 600 hectares de colza contaminada. A empresa Advanta, que forneceu as sementes, havia aceitado ‘participar’ da indenização dos agricultores, mas não mais que isso. E nada leva a crer que o importador do milho, a empresa Golden Harvest, chegue sequer a isso”²³.

A maneira como é retratada pela imprensa a tensão vivida pelo governo francês diante da pressão exercida por organizações da sociedade -notadamente a *Confédération Paysanne*, que há poucos dias demonstrara, em Millau, sua capacidade de mobilização e um amplo leque de alianças na sociedade- é indicadora da ilegitimidade da manutenção das lavouras transgênicas clandestinas, ilegais, naquele país.

No Rio Grande do Sul²⁴

O contexto nacional

No Brasil, não há qualquer cultivo geneticamente modificado cuja produção em escala comercial tenha sido legalmente autorizada. Isso não significa, entretanto, que não existam lavouras transgênicas no país.

Em 1º de setembro de 1999, o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Sementes (Abrasem) -afirmando que contrabandistas de sementes de soja transgênica vinham realizando dias de campo, com distribuição de folhetos e ofertas de sementes- anunciava que o plantio de soja transgênica no Rio Grande do Sul deveria, a partir de sementes contrabandeadas da Argentina, atingir 1 milhão de hectares na safra 1999/2000, o que corresponderia a cerca de um terço da área cultivada com a oleaginosa no estado²⁵.

A soja Roundup Ready, da empresa Monsanto, foi objeto -em junho de 1998- do primeiro pedido para cultivo transgênico em escala comercial no país, tendo recebido parecer favorável da CTNBio em setembro do mesmo ano²⁶.

Entretanto, a autorização do plantio em escala comercial da soja RR tem, desde então, sido impedida por sucessivas batalhas judiciais, em que o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), juntamente com a organização ambientalista Greenpeace, vem obtendo sucesso -derrotando na Justiça os pleitos da Monsanto e da União- na manutenção da exigência da apresentação de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (Eia-Rima) como condição prévia para a autorização dos cultivos transgênicos em escala comercial.

Embora considerando que os fatos não podem ser explicados por acontecimentos posteriores, a menção a dois episódios recentes -posteriores à ocorrência das lavouras clandestinas no Rio Grande do Sul, a ser analisada adiante- pode ser significativa para a compreensão dos alinhamentos relativos ao tema, bem como da atual amplificação da repercussão do debate público em torno dos transgênicos no cenário nacional.

O primeiro, a denúncia, por Greenpeace e Idec, da presença, nas prateleiras dos supermercados brasileiros, de alimentos contendo organismos geneticamente modificados²⁷.

O segundo, as batalhas judiciais em torno da autorização da entrada no país de cargas de milho transgênico importado destinado à alimentação animal, especialmente à avicultura²⁸.

Enquanto o primeiro episódio parece trazer como conseqüências imediatas a maior cobertura do tema pela mídia e uma possível sensibilização de parcelas mais amplas da população -que subitamente se dá conta de que esses “tais transgênicos” já fazem parte de seu cotidiano-, o segundo episódio, colocando o

Executivo em posição de confronto com a Justiça, o levaria a posicionar-se, sem qualquer ambigüidade, favoravelmente aos organismos geneticamente modificados²⁹.

O debate gaúcho

No Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, ainda antes de ser empossado Governador do Estado, anunciava, no final de novembro de 1998 -imediatamente após a derrubada na Justiça de uma liminar que impedia o cultivo comercial de transgênicos no país-, ser posição do futuro governo a manutenção do estado como zona livre de produtos transgênicos, ou seja: que em território gaúcho não haja, no que concerne à agropecuária e à alimentação, a produção, a comercialização ou o consumo de organismos geneticamente modificados.

Esse posicionamento conformava a diretriz a partir da qual o governo gaúcho interviria no tema, mas também, no sentido inverso, o tom que seria assumido pelos setores oposicionistas.

Seria assim que, em fevereiro de 1999, um deputado da base governista apresentaria à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul projeto de lei propondo a proibição no estado do cultivo e comercialização de organismos geneticamente modificados. E que, em março, o governador assinaria um decreto regulamentando a lei estadual -de 10 de dezembro de 1991- que dispõe sobre pesquisas, testes, experiências ou atividades desenvolvidas nas áreas de biotecnologia e engenharia genética, envolvendo organismos geneticamente modificados, bem como produtos advindos dessa tecnologia³⁰.

Seria também nesse contexto que, durante o ano de 1999, cinco deputados da oposição ao governo apresentariam projetos de lei favoráveis aos cultivos transgênicos no estado e que a Assembléia Legislativa -majoritariamente oposicionista- aprovaria, em dezembro, um substitutivo à lei estadual e ao decreto do governador -mencionados anteriormente-, pretendendo conferir ao governo federal exclusividade na fiscalização de produtos geneticamente modificados³¹.

A polêmica não se daria, porém, apenas -e nem centralmente- entre o governo e o parlamento estaduais.

A partir de abril de 1999, promovidos por um amplo leque de entidades e movimentos gaúchos -que incluía, inicialmente, do MST à Farsul, passando por ONGs e entidades ambientalistas-, realizar-se-iam, em todo o estado, seminários regionais, propondo-se à sociedade civil o debate do tema transgênicos³².

Em julho, o Greenpeace lançaria campanha pública pela transformação do Rio Grande do Sul em estado livre de transgênicos³³. Em outubro, o Movimento das Donas de Casa e Consumidores se manifestaria, em ato público realizado

durante seu Encontro, em Gramado, contra o cultivo de plantas transgênicas³⁴. Também em outubro, um conjunto de entidades ligadas aos pequenos agricultores -dentre as quais o MST, que declarava considerar deverem as áreas com lavouras de soja transgênica ser destinadas à reforma agrária- solicitaria ao Ministério Público que iniciasse uma “investigação rigorosa” sobre o estímulo e a indução ao plantio de soja transgênica no estado³⁵.

Em vários municípios gaúchos, seriam aprovadas legislações proibindo ou autorizando o cultivo de organismos geneticamente modificados³⁶. Também seriam indicadores da polarização que o debate alcançava no interior do Rio Grande do Sul os pronunciamentos, em novembro, de duas associações regionais de municípios -da Zona da Produção e do Planalto Médio-, críticos à ação fiscalizadora realizada pela Secretaria de Agricultura estadual, bem como, na sequência, o anúncio da Famurs -uma das entidades que congrega as prefeituras municipais gaúchas- de que encaminharia ao Ministério da Agricultura documento solicitando a liberação do plantio de transgênicos no país e que a fiscalização fosse competência exclusiva do governo federal.

Enquanto que, em âmbito nacional, os posicionamentos do meio científico tendiam a reforçar a necessidade de precaução diante dos organismos geneticamente modificados³⁷, os pesquisadores gaúchos se posicionavam de maneira menos cautelosa com relação à utilização das biotecnologias na agricultura³⁸, tom que seria acentuado em um documento entregue à Assembléia Legislativa, em dezembro de 1999, por um grupo de 27 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em resposta às, consideradas levianas, declarações do Diretor de Reforma Agrária da Secretaria de Agricultura estadual³⁹.

Com o que foi apresentado até aqui, é possível perceber a intensidade da polêmica a respeito dos cultivos transgênicos no Rio Grande do Sul, bem como o espectro dos agentes sociais participantes desse debate público⁴⁰.

Entretanto, esses agentes se tornariam, durante um período, coadjuvantes, na medida em que o centro da polêmica era deslocado dos espaços em que se realizava o debate público para os espaços em que se desenrolava o confronto direto entre, por um lado, as ações do governo do estado e, por outro, as ações de produtores de soja pró-transgênicos.

Antes de chegar, porém, a esse ponto, é necessário destacar alguns dos acontecimentos que, enquanto o debate se desenrolava, anunciavam o clima em que se daria esse confronto.

O confronto anunciado

Com base no decreto assinado pelo governador gaúcho no início de março, a Secretaria de Agricultura interditaria dezenas de áreas experimentais de cultivos transgênicos. Os experimentos, apesar de autorizados pela CTNBio, não haviam apresentado Eia-Rima, tornado pré-requisito pelo decreto estadual⁴¹.

Cabe, pelo símbolo que seu desfecho criaria, comentar um desses casos de interdição, o primeiro deles. Em 15 de março, a Secretaria de Agricultura notificava o Instituto Rio-Grandense do Arroz pelo cultivo de 300 pés de arroz transgênico da área experimental da empresa AgrEvo -situada na Estação Experimental do Irga, em Cachoeirinha. Em 22 de abril, constatada a inadequação do isolamento da área em que se realizava o experimento, as plantas seriam, por determinação da CTNBio, queimadas.

As imagens da queima dessa área experimental, presenciada pelo Secretário de Agricultura, ganhariam destaque na mídia gaúcha e nacional. O fato de ter sido a ação executada por determinação da CTNBio seria encoberto pela versão que associava o ato de destruição ao governo estadual -daí o destaque conferido à presença do Secretário na cena. Dentre os comentaristas, haveria aqueles que apontariam o paralelo entre a suposta ação da Secretaria de Agricultura com as fogueiras de livros do nazismo: de um lado, o autoritarismo e o obscurantismo, de outro, a ciência. Essa era a mensagem.

A imagem criada era, ainda, associada a uma ação anteriormente realizada pelo MST, que -em 1º de março, no assentamento Rondinha, município de Jóia- havia destruído uma lavoura de um hectare de soja, anteriormente denunciada pelo próprio movimento.

Em 13 de maio, a partir de denúncia feita junto ao Ministério Público pela Secretaria de Agricultura, a Polícia Federal interditava, em Cruz Alta, 2.353 sacas de sementes de soja depositadas em uma cooperativa, 540 mil quilos de soja armazenados em um silo e uma lavoura de cinco hectares, pertencentes a um único produtor. Amostras seriam coletadas para teste de transgenia.

No dia seguinte, a imprensa gaúcha divulgava que na safra que então se colhia teriam sido plantadas no Rio Grande do Sul sementes de soja transgênica, contrabandeadas da Argentina. Nos dias subseqüentes, declarações da Monsanto e da Abrasem reafirmariam que enquanto se podia estimar que na safra gaúcha, então sendo colhida, a presença da soja transgênica corresponderia a um terço da área plantada, no ano seguinte o país deveria colher um milhão de toneladas de soja geneticamente modificada. A mídia, assim, transformava em “fato consumado” a presença e expansão de lavouras transgênicas de soja no estado.

Ao governo estadual, restava, frente ao fato consumado produzido, mostrar que agiria firmemente no sentido de coibir as lavouras transgênicas clandestinas.

É assim que anuncia a aquisição, no exterior, de *kits* para teste rápido de transgenia, a serem utilizados como instrumento de fiscalização de sementes e lavouras transgênicas⁴².

Ainda, durante a realização do maior evento do setor agropecuário realizado no Rio Grande do Sul, a Expointer, o Secretário de Agricultura declarava que toda lavoura de transgênicos seria destruída, sem direito a indenização, alertando que os produtores não poderiam alegar não terem sido avisados.

Também, era nesse quadro que o governo gaúcho afirmava que seriam fiscalizados todos os lotes de soja que fossem entregues para armazenamento nas unidades da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, sendo impedida a estocagem de transgênicos nos armazéns do órgão público⁴³.

Um novo episódio viria a se somar ao clima de ameaça que pairava sobre os agricultores que semeavam soja transgênica. Cumprindo decisão judicial inédita no país, a Polícia Federal incinera 22,5 sacas de soja transgênica, que haviam sido apreendidas, em outubro de 1998, em Júlio de Castilhos⁴⁴.

Em outubro, os fiscais da Secretaria de Agricultura coletariam -nas regiões Noroeste, Planalto e Alto Uruguai- 800 amostras de sementes de soja, que seriam submetidas a teste de transgenia: os proprietários de sementes identificadas como transgênicas teriam o produto interditado.

Embora seja impossível dimensionar, pode-se afirmar que algum efeito tiveram os apelos, ameaças e ações do governo estadual.

Indicadora disso, a declaração do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, atestando que, depois de iniciada a campanha em que o governo alertava contra a ilegalidade do plantio de transgênicos, havia crescido a venda de sementes de soja convencional pelas cooperativas⁴⁵. E, ainda, as referências à posição do governo estadual, que escutei, em vários momentos, durante pesquisa de campo: “é culpa do Bigodudo... o Bigode é que não quer”; “o Bigode disse que ia arrancar tudo”; “a maioria tava com medo de cadeia”⁴⁶.

Agricultores deixavam de plantar as sementes transgênicas clandestinas, mas outros não.

As lavouras clandestinas

Em Tupanciretã, o Clube Amigos da Terra declarava estimar que seriam plantados, na região, 100 mil hectares de lavouras cultivadas com soja geneticamente modificada.

Ao mesmo tempo em que afirmavam o cultivo da soja transgênica, produtores dessa região -área central do estado- tentavam impedir a vistoria, por equipes de fiscais da Secretaria de Agricultura, dos armazéns onde estavam estocadas as sementes⁴⁷.

Enquanto a Secretaria de Agricultura afirmava que os fiscais tinham direito de acesso às propriedades e poder de polícia, os produtores caracterizavam o trabalho de fiscalização, que agora se realizava em galpões, armazéns e lavouras -até outubro a fiscalização se concentrara em produtores de sementes e no comércio-, como invasão domiciliar.

Em nota publicada na imprensa, em 9 de novembro, a Farsul protestava contra o que considerava “excessos” na fiscalização das lavouras gaúchas para identificar o plantio clandestino de soja transgênica. A entidade alegava que “somente órgãos da administração federal têm o poder de ingressar em propriedades rurais para fiscalizar a produção de grãos geneticamente modificados”, caracterizando a ação da Secretaria de Agricultura como “abuso de poder e violação do direito de propriedade”.

No mesmo dia, em Júlio de Castilhos, a polícia abria inquérito para apurar a denúncia de dois fiscais da Secretaria de Agricultura, que teriam sido mantidos, por produtores de soja pró-transgênicos, como reféns em cárcere privado.

Em 11 de novembro, realizava-se um encontro, convocado pelo vice-governador, Miguel Rossetto -em promoção conjunta com Fecoagro e Ocergs-, reunindo os diversos setores envolvidos no tema -entidades do setor agrícola, indústrias e órgãos públicos, como Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério da Agricultura. Nesse encontro, seria debatida uma proposta de ação conjunta, ficando pactuado que a Secretaria de Agricultura suspenderia a fiscalização de sementes até o final do mês de novembro, sendo mantidas apenas as vistorias em lavouras; durante esse período, cooperativas e indústrias fariam um mutirão para a identificação de produtores com posse de sementes transgênicas -a intenção era recolher o produto e providenciar sua substituição por variedades convencionais-; a decisão não anulava as autuações já executadas. A nota conjunta contaria com a adesão de 11 entidades do setor rural, cooperativas e indústrias. A Farsul, alegando discordar da fiscalização das lavouras pela Secretaria de Agricultura, se recusaria a subscrever o pacto.

A ação organizada dos produtores pró-transgênicos se faria presente, dali em diante, e cada vez de forma mais intensa, a cada tentativa de fiscalização, impedindo a atuação dos fiscais da Secretaria de Agricultura, bem como as incursões da Polícia Federal.

Quando o delegado da Polícia Federal de Passo Fundo, que anunciara que prenderia em flagrante os agricultores identificados como cultivando ou armazenando sementes de soja transgênica, indicia o primeiro produtor no estado

-plantador de soja transgênica, ele havia expulsado de sua propriedade os fiscais da Secretaria de Agricultura-, o indiciado se apresenta para depor acompanhado de produtores portando faixas de protesto.

Em 1º de dezembro, quando os fiscais tentavam reiniciar, na região de Cruz Alta, a vistoria em galpões, seriam impedidos -sendo inclusive registrada agressão física a um deles. Também em Tupanciretã, oito equipes de fiscais seriam impedidas de trabalhar: durante todo o dia, caminhonetes bloqueariam a entrada do Centro de Treinamento da Emater, onde estavam alojados. Centenas de produtores de Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Cruz Alta, Jóia, Fortaleza dos Valos, Quevedos e Santo Antônio das Missões permaneceriam no local, impedindo a realização da fiscalização.

O desfecho

No dia seguinte à manifestação de centenas de produtores em Tupanciretã, a Secretaria de Agricultura suspenderia a fiscalização, convidando representantes dos produtores e cooperativas para uma reunião com o vice-governador⁴⁸.

O governo do estado anunciaria uma linha de crédito, para que os agricultores gaúchos substituíssem as lavouras de soja transgênica por convencionais.

A Farsul manifestaria reservas em relação à nova linha de crédito, apontando que o ideal -acreditando que até então a decisão judicial em âmbito federal seria favorável aos transgênicos e que, assim, esses produtores passariam a estar dentro da lei- seria a suspensão das vistorias até o início da colheita, quando “a aplicação de um agroquímico revelaria as lavouras ilegais”.

Ao mesmo tempo, produtores e dirigentes rurais de Cruz Alta, Jóia e Tupanciretã declaravam não pretender utilizar a linha de crédito oferecida pelo governo estadual, afirmando sua convicção pelo produto geneticamente modificado, sua falta de disposição para assumir novos empréstimos e seu receio da identificação no momento da tomada do financiamento.

Em reunião regional realizada em Cruz Alta, os sindicatos rurais orientariam aos produtores que permanecessem mobilizados e que, ao menor sinal de vistoria, comunicassem aos sindicatos: seriam organizados deslocamentos de produtores aos locais fiscalizados. A intenção declarada era evitar que a incineração de lavouras com soja transgênica atingisse qualquer produtor da região.

Entretanto, mesmo não estando ainda em vigor a lei aprovada pela Assembléia Legislativa em 8 de dezembro, que se propunha a retirar do Estado a atribuição de fiscalizar o plantio de produtos transgênicos -lei considerada inócua pelo governo estadual-, as vistorias não seriam retomadas. O governo recuava.

Já em abril de 2000, durante a Feira Nacional da Soja, em Santa Rosa, em “Nota de esclarecimento dirigida aos compradores de soja da safra 99/2000” -assinada conjuntamente pelo governo do estado, Sindicato da Indústria de Óleos Vegetais, Farsul, Fecoagro, Cooperativa Central dos Assentamentos, Associação Brasileira de Agribusiness, Central Única dos Trabalhadores e pelas cooperativas Copalma, Coopermarau, Cotripal, Cotrimaio, Cotrijuí, Agropan e Cotrisul-, as entidades comprometer-se-iam a continuar empenhadas na orientação aos produtores rurais quanto à proibição do plantio de soja transgênica, objetivando sua completa erradicação na safra 2000/2001.

Pistas para pensar

Consumidores: lá e cá

Tomando por contraponto o caso francês, em que observamos -em um contexto em que expressivos setores da sociedade têm manifestado publicamente sua rejeição aos alimentos geneticamente modificados- a ausência de resistência à destruição das lavouras de colza contaminadas por transgênicos, busquemos compreender alguns dos elementos que estariam atuando no sentido da conformação, em uma parcela do meio rural gaúcho, de algo como um senso de legitimidade atribuído à defesa das lavouras transgênicas clandestinas, ilegais.

Antes disso, porém, voltemos nossa atenção para uma outra importante diferença entre as duas sociedades: a mobilização dos consumidores. E para interrogar o que se passa entre consumidores franceses e gaúchos, vejamos previamente uma análise que contrasta, em relação ao tema, europeus e brasileiros.

Enfocando o tema dos transgênicos a partir da perspectiva de uma sociedade global de risco, Guivant (2000[b]) -mostrando como insuficiente para a interpretação do debate a simples oposição entre leigos e peritos- registra que enquanto nos países europeus se observa uma mobilização mais generalizada entre os consumidores, o mesmo não estaria ocorrendo no Brasil, onde certos setores peritos juntamente com grupos organizados de defesa dos direitos dos consumidores e outras ONGs concentrariam as ações.

A autora, relacionando a essa maior generalização da mobilização dos consumidores europeus uma “expectativa de risco zero” no que se refere aos produtos alimentares, demarca a diferença em relação ao público consumidor brasileiro, que, frente à precariedade do controle e fiscalização dos alimentos, estaria distante de uma expectativa de controle total dos riscos. É assim que Guivant sugere a existência, entre os consumidores brasileiros, de uma atitude de resignação ou indiferença frente aos riscos possíveis.

Tendo presente, como ensina Fischler (1979), que “o homem é um onívoro que se alimenta de carne, de vegetais e de imaginário”, poderíamos pensar em

matizar, através das representações particulares que cada sociedade constrói em relação à comida, a abordagem geral -que diferencia consumidores europeus e brasileiros quanto às percepções aos riscos alimentares- proposta por Guivant (2000[b]).

Afinal, é com base na particular importância atribuída à comida pelos franceses que podemos compreender ser a França o país europeu em que se manifesta a maior resistência aos alimentos geneticamente modificados⁴⁹.

Dessa forma, poderíamos levantar como hipótese que uma suposta maior resistência dos consumidores gaúchos -em comparação ao conjunto da população brasileira- aos alimentos transgênicos estaria alicerçada, por um lado, em uma maior politização da sociedade gaúcha, que a aproximaria de uma expectativa de maior controle dos riscos referentes aos produtos alimentares, e, por outro lado, em uma relação diferenciada com o campo -mais especificamente com a agricultura colonial-, que daria base para a atribuição de uma particular importância simbólica à comida entre os gaúchos.

Entretanto, essa é apenas uma hipótese, que não tem se confirmado como diferenciação entre as ações de consumidores gaúchos e de consumidores do conjunto do país.

Em São Paulo como em Porto Alegre, assim como em algumas outras capitais brasileiras, poucos e pequenos atos em supermercados, realizados -confirmando a concentração da ação apontada por Guivant (2000[b])- por ONGs ambientalistas, entidades de consumidores e políticos, marcaram, de fato, a ausência de mobilização dos consumidores -gaúchos e brasileiros- na ocasião em que Greenpeace e Idec denunciaram a presença de alimentos transgênicos nas prateleiras dos supermercados brasileiros.

E é nesse contexto, de incipiente mobilização por parte dos consumidores com relação aos alimentos geneticamente modificados, que devemos buscar compreender o conflito protagonizado, no campo gaúcho, pelos produtores pró-transgênicos.

A legitimidade da ilegalidade

Como visto anteriormente, o clima que antecederia às mobilizações dos produtores pró-transgênicos prenunciava o acirramento do conflito.

A queima, determinada pela CTNBio, de uma área experimental de arroz transgênico, bem como a incineração, pela Polícia Federal, de sacos de soja transgênica anteriormente apreendidos, pareciam -mesmo sendo independentes da ação do governo estadual- conferir concretude às ameaças do Secretário de Agricultura de que as lavouras clandestinas seriam destruídas.

É o que se pode perceber pela declaração, já em dezembro, dos sindicatos rurais (patronais) da região de Cruz Alta, que convocavam os produtores a permanecer mobilizados com a finalidade de evitar que a incineração de lavouras com soja transgênica atingisse qualquer produtor da região. Ou pela frase, também já mencionada, proferida por um agricultor: “o Bigode disse que ia arrancar tudo”.

Seria, então, o temor real da destruição das lavouras transgênicas clandestinas o elemento central que conformava a reação dos produtores pró-transgênicos diante da ação fiscalizadora do governo estadual?

Com os dados disponíveis, não é possível inferir o que se passava nas cabeças das centenas de produtores que então se mobilizaram. É possível, no entanto, interrogar o que movia suas lideranças, considerando sempre relevante seu alinhamento político em oposição ao governo estadual. Vejamos.

Pelas declarações registradas pela imprensa, podemos perceber que algumas lideranças pareciam pressupor que a ilegalidade das lavouras clandestinas era momentânea. Atestavam confiança em que, até o período de colheita, o cultivo da soja transgênica estaria autorizado no país.

Assim, a convicção -construída em consonância com a visão propagada pela mídia e com a omissão do governo federal na repressão ao cultivo ilegal da soja transgênica- de que a ilegalidade do cultivo da soja geneticamente modificada era provisória estaria possivelmente atuando na conformação de um senso de legitimidade da defesa das lavouras clandestinas. Afinal, como poderiam ser destruídas as lavouras clandestinas, se antes de sua maturação deixariam de ser ilegais?

Esse pode ser um elemento explicativo a ser considerado na análise, mas certamente ainda não suficiente. E se esteve presente no momento em que as plantas cresciam, parece ter se esvaído logo em seguida: lembremos da declaração, em março de 2000, do representante do Sindicato Rural de Cruz Alta, que protestava ante a recusa da Companhia Estadual de Silos e Armazéns em armazenar os grãos transgênicos, então sendo colhidos, ainda ilegais.

Outro elemento que parecia informar a ação dos produtores pró-transgênicos era a alegada ilegitimidade do governo estadual para proceder à fiscalização das lavouras. Suas lideranças, encontrando eco na Assembléia Legislativa gaúcha, afirmavam ser a ação fiscalizadora, que se propunha a identificar as lavouras transgênicas clandestinas, competência exclusiva da União. Dessa forma, a partir do entendimento de que a fiscalização não seria da competência dos órgãos públicos estaduais, consideravam que o governo do estado estava “invadindo as propriedades”.

Nesse sentido, um dirigente de um Clube Amigos da Terra argumenta⁵⁰ que a competência do governo estadual estaria restrita à fiscalização de sementes, mas

que “a soja que nós temos em casa, a semente própria do produtor”, produzida na propriedade e reservada para o plantio na safra seguinte, não poderia, por não ser documentada, ser considerada semente. Por isso considerar que o governo estadual “invadiu as propriedades”⁵¹.

Antes de introduzir uma outra perspectiva que poderá contribuir na compreensão do movimento em foco, e para melhor fazê-lo, voltemo-nos, por um momento, para os conceitos construídos por Tambiah (1997: 20-21) em sua análise da trajetória dos tumultos envolvendo muçulmanos e cingaleses no Sri Lanka:

“Entendo por *focalização* o processo de retirar progressivamente dos incidentes e das brigas locais suas circunstâncias particulares. Por *transvaloração* refiro-me ao processo paralelo de assimilação das circunstâncias particulares a uma causa ou interesse mais amplo, coletivo, duradouro e, portanto, menos dependente de condições contextuais. Os processos de focalização e transvaloração contribuem, portanto, para uma progressiva polarização e dicotomização dos problemas e das posições políticas (...) Inicialmente, há uma distorção e uma supervalorização dos microeventos. Aos poucos, ocorre um despojamento da especificidade dos eventos em suas situações de origem e sua tradução e incorporação em princípios mais gerais, desvinculados do contexto das identidades, interesses e direitos étnicos ou comunais. Os resultados são vistos como ratificações de antigos danos causados pelo inimigo...”

A discussão da perspectiva de análise proposta por Tambiah a partir da noção de *focalização* -afim à abordagem apontada por Bailey (1968)- somente seria possível com dados -não disponíveis- obtidos por meio de pesquisa etnográfica localizada.

A noção de *transvaloração* pode, entretanto, nos ser útil para aprofundar a reflexão no plano da análise que aqui se desenvolve, com os dados já à mão. Essa abordagem é inspiradora de uma hipótese, a ser explicitada mais à frente. Antes, porém, trago alguns depoimentos de lideranças pró-transgênicos, que possibilitarão a reflexão a ser proposta.

“No fundo, a questão dos transgênicos está sendo usada de fachada para que as áreas, as lavouras produtivas do Rio Grande do Sul, sejam passíveis de desapropriação para fins de Reforma Agrária, para o MST, uma vez que o Secretário de Agricultura do nosso estado é um representante do MST. (...) O Secretário também montou um esquema de disque-denúncia. Então um empregado que não gostava do patrão, esse funcionário denunciava o patrão, que o patrão tinha soja transgênica (...) O governo do estado... colocou pessoas na fiscalização, pessoas sem a menor competência pra isso, provocadores, eles vinham e diziam pros nossos produtores que eles

iam invadir, tomar as terras dos nossos produtores, que iam botar os nossos produtores na cadeia” (dirigente de um Clube Amigos da Terra)

“O governo do estado anda procurando pra denunciar, pra punir, pra prender... anda de caça às bruxas, procurando achar onde tem transgênico, pra criar dificuldade para aquele produtor, pra empresa ou entidade que eventualmente tenha produto transgênico. (...) O governo do estado estava se arvorando a fazer a fiscalização das lavouras, e não estava se atendo à questão dos transgênicos, mas a outras questões, como trabalhista, pra dificultar ainda mais a vida do nosso produtor. E isso estava sendo uma arma para o governo do estado usar contra a agricultura empregadora, a agricultura empresarial, que nós representamos. O governo do estado, na ideologia dele, não aceita a agricultura que não seja a familiar” (dirigente sindical)

O governo do estado estaria, então, segundo essas lideranças -que afirmam considerar os transgênicos necessários para garantir a competitividade econômica dos produtores brasileiros no mercado internacional, seguros para o consumo humano e animal, menos poluidores que as lavouras convencionais, que receberiam maiores cargas de agroquímicos, e incontestamente avalizados pelo meio científico-, utilizando o combate à ilegalidade das lavouras de soja transgênica como pretexto para uma suposta luta política contra os grandes proprietários.

À ação fiscalizadora das lavouras clandestinas realizada pelo governo estadual estariam sendo associados o receio da aplicação da legislação trabalhista e, antes de mais nada, a ameaça de desapropriação de terras para Reforma Agrária.

Estaria, assim, ocorrendo a “assimilação das circunstâncias particulares a uma causa ou interesse mais amplo, coletivo, duradouro e, portanto, menos dependente de condições contextuais” (Tambiah, 1997). E se de fato essa perspectiva se apresentar frutífera para a compreensão do processo, será preciso levar ainda em conta, como conformadoras desse imaginário, as ameaças de destruição de lavouras clandestinas por parte de representantes do governo estadual ou as ações e declarações do MST, que em vários momentos afirmou que promoveria a ocupação das áreas cultivadas com transgênicos.

Poderíamos, assim, sugerir que, dentre outros aspectos, a legitimidade da defesa das lavouras transgênicas ilegais estaria alicerçada no confronto a uma outra legitimidade, há mais tempo forjada, também por ações de enfrentamento: a legitimidade das ocupações ilegais de terra, promovidas pelo MST.

Se e como os aspectos aqui analisados -que, entre as lideranças dos produtores pró-transgênicos gaúchos, parecem conferir legitimidade à defesa das lavouras clandestinas- estariam presentes nas representações sociais das centenas de

produtores que se mobilizaram em reação à ação fiscalizadora do governo estadual ou daqueles que, em muito maior número -e com diferentes tamanhos de propriedade e simpatias políticas-, anonimamente, sem se manifestar, desafiando a lei, cultivaram (e cultivarão) sementes de soja transgênica... bem, essa é uma outra história.

Bibliografia

- Bailey, F. G. 1968 "Gifts and poison", in *Gifts and poison: the politics of reputation* (Chicago: Aldine).
- Champagne, Patrick 1987 "La fête au village", in *Actes de la recherche en sciences sociales* (Paris) N° 17/18, 73-84.
- Champagne, Patrick 1998 *Formar a opinião - o novo jogo político* (Petrópolis: Vozes).
- Durant, John; Martin W. Bauer & George Gaskell (eds.) 1998 *Biotechnology in the public sphere-a european sourcebook* (Londres: Science Museum).
- Fischler, Claude 1979 "Présentation", in *Communications* (Paris: Seuil) N° 31.
- Giuliani, Gian Mario 2000 "O dilema dos transgênicos", in *X Congresso Mundial de Sociologia Rural* (Rio de Janeiro: IRSA) Paper 0201.
- Guivant, Julia S. 2000[a] "Reflexividade na sociedade de risco: conflitos entre leigos e peritos sobre os agrotóxicos", in Herculano, Selene (org.) *Qualidade de vida e riscos ambientais* (Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense).
- Guivant, Julia S. 2000[b] "Cross alliances: lay and expert knowledge facing food risks", in *X Congresso Mundial de Sociologia Rural* (Rio de Janeiro: IRSA) Paper 1479.
- Marques, Paulo Moruzzi & Susana Bleil Marques 2000 "O mundo não é uma mercadoria", in *Em Tempo* (São Paulo) Vol 11, N° 316.
- Menasche, Renata 1999 "O que está em jogo com os transgênicos?", in *Progresso científico sem controle democrático ameaça o planeta* (Porto Alegre: Prefeitura Municipal) 35-40.
- Menasche, Renata 2000[a] "Transgênicos: uma cronologia", in <http://www.ufrpe.br/~agrisust/trans/crono.htm>.
- Menasche, Renata 2000[b] "Frankenfoods e representações sociais", in *X Congresso Mundial de Sociologia Rural* (Rio de Janeiro: IRSA) Paper 419.
- Steil, Carlos Alberto 1998 "Política, etnia e ritual: o Rio das Rãs como remanescente de quilombos", in *Revista de Ciências Humanas* (Florianópolis) Vol. 16, N° 24, 93-110.
- Tambiah, Stanley J. 1997 "Conflito etnonacionalista e violência coletiva no sul da Ásia", in *Revista Brasileira de Ciências Sociais* (São Paulo) Vol. 12, N° 34.

Notas

1 Em 12 de julho de 2000, a Ministra francesa do Meio Ambiente, Dominique Voynet, levantaria a suspeita de que os episódios de contaminação de lavouras na Europa poderiam estar sendo intencionalmente provocados pelas empresas de sementes como forma de testar a reação da União Européia (“France’s Voynet questions motives of GMO seed firms”, *Reuters*, 13/7/00).

2 As informações referentes à história aqui comentada foram -exceto quando explicitada outra fonte- extraídas de reportagens de jornais e revistas. *Libération*: “Il était une foi nommée Bové -l’icône paysanne possède un long passé militant”, 30/6/00; “Le Larzac, terreau du combat idéologique- les intellectuels-paysans y ont semé leurs idées”, 30/6/00; “José Bové, pont entre le rural et l’urbain -Jean Viard, directeur de recherches au CNRS, décrypte la ‘bovémania’”, 30/6/00; “Des prud’hommes au tribunal d’instance- les syndicats dénoncent une ‘criminalisation des mouvements sociaux’”, 30/6/00; “Héros potaches au tribunal -Bové et les siens ont revendiqué leur ‘légitimité’ face à la légalité”, 1-2/7/00; “José Bové, au beau Millau du monde- 25 000 personnes dans les rues de la ville ont transformé son procès en joyeux festival antimondialisation”, 1-2/7/00; “On est nombreux à être minoritaires”, 3/7/00; “Justice pressée”, 5/7/00. *The Guardian*: “Arrest hardens French action against burger chain”, 24/8/99; “McDonald’s campaign spawns French hero -political activist turned French peasant has fast food on the run”, 11/9/99; “GM martyr ignites global protest- a French farmer is acting as a lightning rod for growing anger”, 12/9/99; “Carnival greets French farmer who took on McDonald’s”, 1/7/00. Outros periódicos: “Protesto contra OMC gera rede de solidariedade”, *Zero Hora*, 7/9/99; “Les paysans radicaux montent au front -ils refusent la culture McDo”, *L’événement*, 9-15/9/99; “José Bové contra McDonald’s”, *La Jornada*, 18/1/00; “French town to become ‘Seattle-sur-Tarn’ as protester’s trial begins”, *The Independent*, 26/6/00; “Fast food under fire”, *Financial Times*, 30/6/00; “Europe: defendant to put fast food on trial”, *Financial Times*, 30/6/00.

3 “O mundo não é uma mercadoria” é o título do livro de José Bové, *best seller* na França. A citação aqui reproduzida corresponde ao trecho inicial da reportagem “L’antimondialisation au tribunal de Millau -le procès des ‘démonteurs’ du McDonald’s commence aujourd’hui au milieu des manifestations”, *Libération*, 30/6/00.

4 Dentre diversas ações realizadas pela *Confédération Paysanne* contra os organismos geneticamente modificados, a ação de inviabilizar -através de mistura de sementes- o estoque de sementes de milho da Novartis, em 1998, foi a que obteve maior destaque na mídia. Em comunicação oral -em painel realizado durante o “Foro Internacional: globalização, agriculturas familiares e democracia rumo ao século XXI”, Porto Alegre, 5/7/00-, Frédéric Prat,

representante da ONG francesa InfoOgm, informou que, pela ação contra a Novartis, a *Confédération* foi condenada pela Justiça a pagar uma elevada indenização à empresa. Entretanto, a indenização jamais foi paga, e tampouco a Novartis -temendo danos à sua imagem- insistiu em recebê-la.

5 Criada em 1987, a partir de dissidência da grande organização sindical da agricultura francesa, a *Fédération Nationale des Syndicats des Exploitants Agricoles* -não crítica à intensificação da agricultura, à concentração fundiária e às subvenções às exportações-, a *Confédération Paysanne*, de esquerda e minoritária, diverge da visão produtivista e corporativista da FNSEA ao compreender que a agricultura camponesa tem condições de suprir três dimensões essenciais para a sociedade: uma dimensão social -relacionada à preservação de um grande número de agricultores e à solidariedade entre os diversos movimentos de camponeses de todo o mundo; uma dimensão econômica -em que produzir significa também garantir uma remuneração adequada aos agricultores, a partir da produção de alimentos de qualidade, com alto valor agregado-; e uma dimensão ecológica -em que seja assegurada a preservação da paisagem, do meio-ambiente e da saúde dos cidadãos, assim como o equilíbrio entre grandes e pequenas cidades (Marques & Marques, 2000).

6 Durante o ato, em uma das paredes da lanchonete, foi pichada a frase: “Não queremos comida Frankenstein”. *Mal-bouffe* significa má comida, ou comida de má qualidade, sendo associada à homogeneização e à produção em larga escala, características dos processos de industrialização dos alimentos e de intensificação da produção agrícola. A noção é construída em oposição aos alimentos de qualidade, associados à produção em escala artesanal, de procedência conhecida, sendo valorizadas as características regionais. O Roquefort tem sua importância nessa contraposição: como explicam Marques & Marques (2000), “é o primeiro queijo de denominação controlada, que possui regras precisas de produção a fim de manter uma qualidade inquestionável”. Em julho de 1999, a organização dos agricultores e industriais produtores do Roquefort -a *Confédération de Roquefort*- decidiu, por unanimidade, posicionar-se contrária à presença de organismos geneticamente modificados no queijo que produzem, ou seja, no alimento fornecido a ovelhas (“Le roquefort génétiquement correct -les producteurs du fromage ne veulent plus d’aliments transgéniques pour nourrir leurs brebis”, *Libération*, 2/7/99; “Le Larzac, terrain du combat idéologique- les intellectuels-paysans y ont semé leurs idées”. *Libération*, 30/6/00).

7 A polêmica entre “desmontagem” (*démontage*) e “destruição” (*saccage*) refere-se -como mais um elemento da luta simbólica pela interpretação do episódio- mais concretamente aos fios elétricos do canteiro de obras da lanchonete em construção: teriam sido “retirados” ou “arrancados”? Fernand

Cuché, um dos agricultores da *Confédération Paysanne*, participante da ação, afirma -em entrevista concedida em 5 de julho, em Porto Alegre, durante a realização do “Foro Internacional: globalização, agriculturas familiares e democracia rumo ao século XXI”- que os fios elétricos foram retirados, mas que, não tendo sido realizada perícia oficial (apenas privada), no julgamento os fios foram apresentados cortados. Dessa forma, segundo o informante, teriam sido forjadas provas para incriminar os agricultores no julgamento.

8 A imprensa atribui essa diferença ao fato de Bové haver sido preso anteriormente. Entretanto, Fernand Cuché explica -na entrevista anteriormente mencionada- que, uma vez que também outros acusados já haviam estado presos por participar em ações públicas anteriores, a diferença da fiança fixada para Bové não pode ser entendida a partir dessa justificativa. Cuché afirma que há a tentativa de responsabilizar Bové pela ação, minimizando a responsabilidade dos demais membros da organização sindical, “como se fossemos imbecis... mas todos somos responsáveis”. A interpretação de Cuché pode ser confirmada pelo acompanhamento da imprensa, que traz os termos judiciais empregados para distinguir Bové dos demais acusados: o primeiro seria o “instigador”, os demais, “simples agentes de execução” (“La justice passe après le sacre de Bové”, *Libération*, 3/7/00).

9 As grandes manifestações ocorridas em Seattle durante a Conferência Interministerial da Organização Mundial do Comércio -a chamada Rodada do Milênio- impediriam o avanço das negociações a que a Conferência se propunha: acordos relativos à agricultura, aos serviços e à propriedade intelectual. Dentre os temas centrais dos manifestantes estavam as questões ambientais, destacando-se a palavra de ordem “não aos transgênicos” (Menasche, 2000[a]).

10 Cem mil é a cifra divulgada pelos organizadores da manifestação -dentre os quais a Associação pela Taxação das Transações Financeiras para Apoio aos Cidadãos (Attac), que destaca ser esse número de participantes três vezes maior do que os que estiveram presentes em Seattle (*Courriel d’information Attac*, nº148, 04/07/00). A imprensa menciona, em diferentes momentos, cifras que oscilam entre 20 e 100 mil manifestantes. É interessante notar que, mais que referente a um dado objetivo, a polêmica com relação ao número de participantes de uma ação como esta é comumente parte daquilo que Champagne (1998: 211) aponta como a “luta- em particular, entre o grupo manifestante e a imprensa -para a imposição de uma visão do acontecimento” (grifos do autor).

11 “McDonald’s e camponês francês iniciam batalha”, *O Estado de São Paulo*, 24/6/00; “Camponês é o inimigo da globalização”, *Zero Hora*, 25/6/00.

12 Em um artigo em que analisa a construção da identidade negra por uma comunidade de agricultores descendentes de quilombolas do sertão baiano, Steil (1998) mostra como acontecimentos externos ao grupo -dentre eles a imagem construída pela imprensa- atuam na conformação da nova identidade do grupo.

13 Nas reportagens publicadas pela imprensa francesa a respeito do julgamento, esse é um aspecto recorrentemente destacado, com a inclusão de pequenos trechos de depoimentos de participantes da manifestação, buscando atestar sua origem urbana e seu perfil não militante, aspectos relacionados ao ambiente de festa do evento, que é quase descrito como um grande piquenique campestre em um lindo dia do verão francês.

14 Em outro interessante trabalho, ao analisar a festa de uma aldeia, Champagne (1987) mostra como, com a revalorização, pelo mundo urbano francês, da cultura e da produção de uma agricultura camponesa tradicional, a aldeia e os agricultores se transformam, recriando suas tradições -roupas, comidas, músicas, móveis e produtos modernos são substituídos pelos “tradicionais”-, realizando a festa “como as de antigamente”, mas agora produzida para os cidadãos.

15 Se na manifestação pública de 1982, como analisa Champagne (1998: 202-09), a FNSEA -criada em 1956- reafirmava o monopólio da representação política do campo francês, será interessante acompanhar a repercussão das ações recentes da *Confédération Paysanne* -minoritária e de esquerda, conforme dito anteriormente- na luta por essa representatividade. Em 1995, nas eleições em que foram escolhidos os representantes sindicais dos camponeses franceses -essas eleições se realizam a cada 6 anos, a próxima estando marcada para janeiro de 2001-, a *Confédération* obteve 4 representantes, enquanto que a FNSEA elegeu 112 (“La ‘Conf’ fait le grand écart -le succès du syndicat de José Bové est d’abord extérieur à la sphère agricole”, *Libération*, 27/6/00; “Les deux visages du syndicalisme agricole”, *L’événement*, 9-15/9/00). Já mais recentemente, uma sondagem de opinião-publicada em 27/2/00, no *Dimanche Ouest France*- apontou que 39% dos entrevistados -contra apenas 13% que indicaram o nome do presidente da FNSEA- consideraram ser José Bové a personalidade que melhor defende os interesses dos agricultores (“La FNSEA ne digère pas Millau”, *Libération*, 7/7/00). Mesmo considerando as restrições a que devem ser submetidas essas sondagens de “opinião pública” (Champagne, 1998), a questão que se apresenta é se a *Confédération* terá, até as próximas eleições, conquistado junto aos agricultores apoio semelhante ao obtido junto à população urbana.

16 Enquanto seus companheiros seriam condenados a penas com *sursis*, Bové teria como sentença a condenação a três meses de prisão. Entretanto, as penas seriam suspensas até que fosse julgada a apelação judicial (“De la prison

‘pour faire entendre raison à Bové’-Le tribunal de Millau l’a condamné à trois mois ferme”, *Libération*, 14/9/00).

17 As informações referentes às lavouras de colza contaminadas por transgênicos na Europa e seus desdobramentos foram -exceto quando explicitada outra fonte- extraídas de diversas reportagens de jornais. *Libération*: “Colza transgénique clandestin”, 20-21/5/00; “Le colza transgénique ne poussera pas”. *Libération*, 26/5/00; “Petite victoire de l’Environnement sur l’Agriculture”, 26/5/00; “Sa force a provoqué sa mort”, 26/5/00; “Qui va indemniser les agriculteurs?”, 26 /5/00. Outros jornais: “Europeu planta GM sem saber”. *Jornal do Brasil*, 19/5/00; “Transgênicos invadem plantações normais”. *O Globo*, 19/5/00; “Franceses localizam sementes transgênicas”, *O Estado de São Paulo*, 25/06/00; “Colza GM assusta EU”, *Jornal do Brasil*, 1/6/00; “EU to pay farmers hit by GM-tainted canadian seed”, *AFX*, 9/6/00; “Advanta remboursera perte de recolte et frais de destruction”, *Les Echos*, 13/6/00; “Compensation for GM muddle farmers”, *The Guardian*, 6/7/00.

18 A empresa afirma ter descoberto o problema em 3 de abril -a contaminação teria sido revelada em um teste de importação realizado na Alemanha-, tendo imediatamente comunicado os governos envolvidos. A notícia só foi divulgada, no entanto, em 17 de maio, pelo Ministro da Agricultura britânico, em resposta solicitada por um parlamentar. Em 18 de maio, a Advanta viria a público admitir o incidente (“La ministre de l’environnement demande la destruction de récoltes de colza transgénique”, *Le Monde*, 20/5/00). Em uma das reportagens consultadas (“Scandal pressures Europe to set labelling standards for GM seeds”, *Ennvironment Daily*, 29/5/00), é também mencionada a contaminação de uma área de 33 hectares em Luxemburgo, cuja destruição teria sido ordenada e indenizada pelo governo. As áreas contaminadas estimadas pela empresa Advanta correspondem a: 600 hectares na França, 500 hectares na Suécia e 400 hectares na Alemanha (“Transgenic rapeseed sown by error in four member states Europe Environment”, *Europe Environment*, 1/6/00). Outras reportagens mencionam que a área contaminada na Suécia teria sido de 1.200 hectares, enquanto que na Grã-Bretanha teriam sido contaminados 4.700 hectares. A colza é utilizada na produção do óleo de canola.

19 Em 1999, o Parlamento Europeu aprovara uma legislação que impedia que os 15 países membros da União Européia autorizassem em caráter permanente o cultivo de qualquer variedade geneticamente modificada. Contudo, em maio de 2000, o Parlamento rejeitaria uma emenda que permitiria a responsabilização por danos causados por cultivos transgênicos à saúde humana e ao meio ambiente. Em junho de 2000, após o escândalo das sementes contaminadas, o Parlamento aprovaria medidas mais restritivas -em

comparação à legislação aprovada no ano anterior -ao cultivo de transgênicos e passaria a discutir a questão da responsabilização civil dos danos causados por esses cultivos. Desde 1998, nenhum novo registro de planta transgênica foi autorizado na Europa.

20 Informações obtidas através de comunicação oral de Frédéric Prat -representante da ONG francesa InfoOgm-, em painel realizado no “Foro Internacional: globalização, agriculturas familiares e democracia rumo ao século XXI”, Porto Alegre, 5/7/00. Mesmo que os dados do representante da ONG pudessem ser considerados otimistas do ponto de vista dos setores contrários aos transgênicos, reportagem publicada no *Le Monde* mostra de forma ainda mais drástica a redução da área cultivada com milho transgênico na França: 2.000 hectares em 1998 e apenas 80 hectares em 1999 (“La ministre de l’environnement demande la destruction de récoltes de colza transgénique”, 20/5/00).

21 “Presence fortuite d’OGM dans un lot de colza de printemps”, *Communique de presse*, Advanta-France, junho/2000.

22 Na ausência de instrumentos legais que permitissem a responsabilização da empresa importadora das sementes clandestinas, o governo francês gestaria junto à empresa e à União Européia compensações aos agricultores.

23 “Arrachage des OGM: toujours pas de décision”, *Libération*, 7/7/00.

24 Exceto quando explicitada outra fonte, as informações contidas nesse item têm origem em Menasche (2000[a]).

25 É importante ter presente que essa declaração, bem como pronunciamentos, no mesmo sentido, da Monsanto ou de membros do governo federal e o tom de várias reportagens publicadas na imprensa -especialmente a gaúcha e, particularmente, o jornal *Zero Hora*-, não tem qualquer compromisso com a informação objetiva a respeito da dimensão da área plantada clandestinamente com soja transgênica, devendo ser interpretada como parte da luta política para a construção da opinião, na sociedade, da inexorabilidade dos cultivos transgênicos no país, particularmente no Rio Grande do Sul, onde o governo estadual sustenta posição contrária aos cultivos geneticamente modificados.

26 A soja Roundup Ready é modificada geneticamente para ser resistente ao herbicida Roundup, também produzido pela Monsanto. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, criada em 1996, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem por função examinar a biossegurança dos organismos geneticamente modificados. À CTNBio cabe emitir pareceres no que se refere a esses organismos, sendo atribuição dos Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente a autorização de sua comercialização para uso humano, animal ou em plantas e para liberação no meio ambiente.

27 Em 20 de junho de 2000, Greenpeace e Idec divulgaram que análises de 42 alimentos comercializados no Brasil, encomendadas pelas duas entidades em laboratórios suíços e austríacos, detectaram a presença de transgênicos em 11 produtos. Em 20 de setembro do mesmo ano, Greenpeace divulgaria uma nova lista, denunciando outros quatro alimentos contaminados.

28 A pedido do Ministério da Agricultura, a CTNBio elaborava parecer técnico sobre a biossegurança da importação de milho transgênico para alimentação animal quando, em 26 de junho, a Justiça -julgando a ação civil pública que trata de toda e qualquer espécie geneticamente modificada- profere sentença que obriga o governo federal a exigir a realização de Eia-Rima antes da liberação do plantio de alimentos geneticamente modificados no país, considerando inconstitucional parte de decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, que faculta à CTNBio dispensar a exigência do estudo. A sentença determina, ainda, que a União exija da CTNBio a elaboração de normas de segurança alimentar, comercialização e consumo de alimentos transgênicos, no prazo de 90 dias, e *proíbe a CTNBio de emitir parecer técnico conclusivo enquanto não cumprir a exigência*. Afrontando a sentença judicial, a CTNBio emite, com aval do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 30 de junho, parecer favorável à importação de 13 variedades de milho transgênico para utilização em ração animal. O parecer (ilegal) seria utilizado pelo governo federal para, em 6 de julho, derrubar na Justiça a suspensão do descarregamento das 38 mil toneladas de milho transgênico argentino do navio Norsul Vitória, que aguardava -desde 29 de junho, no Porto de Recife- autorização para o desembarque da carga.

29 Em 6 de julho de 2000, o governo federal divulgaria nota oficial -assinada pelos Ministros da Casa Civil, da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, da Justiça, do Meio Ambiente, e da Saúde-, defendendo a adoção dos organismos geneticamente modificados no país. Esse posicionamento levaria o Idec a propor a parlamentares a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o envolvimento do governo federal com as empresas de biotecnologia.

30 O decreto determinava a notificação ao poder público estadual das áreas em que fossem realizadas pesquisas com transgênicos, estabelecendo exigências como a apresentação de Eia-Rima. A partir de então, o Departamento de Produção Vegetal, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, passaria a notificar as áreas com experimentos, anteriormente liberadas pela CTNBio.

31 A Assembléia Legislativa derrubaria, posteriormente, o veto do governador a esse projeto de lei -que se propunha a retirar do governo estadual a atribuição para dispor acerca das atividades relacionadas aos transgênicos-, apresentado com o objetivo imediato de suspender a ação fiscalizadora do

governo gaúcho nas lavouras de soja transgênica clandestinas. Entretanto, o governo estadual declararia considerar inócua a aprovação dessa lei, uma vez que a Constituição Federal atribui às unidades da Federação corresponsabilidade na fiscalização em questões relacionadas à preservação do meio ambiente.

32 MST: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Farsul: Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a organização sindical patronal rural; ONGs: Organizações Não-Governamentais.

33 A campanha coletaria 45 mil assinaturas em apoio ao projeto de lei que tramitava na Assembléia Legislativa propondo a proibição dos transgênicos no estado. As assinaturas seriam entregues, em novembro, à Assembléia, em ato organizado pelo Greenpeace juntamente com outras ONGs e entidades -dentre as quais Núcleo Amigos da Terra/Brasil, Agapam, União Pela Vida, Colméia, Igreja Evangélica Luterana, Igreja Católica, Centro Ecológico Ipê, Movimento das Donas de Casa e Consumidores e Departamento de Ecologia da OAB.

34 Já em novembro de 1998, o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Porto Alegre havia divulgado, no Brique da Redenção, a campanha “Alimento saudável, direito de todos: cuidado com os transgênicos”.

35 As entidades solicitavam que fossem investigados os Clubes Amigos da Terra de Cruz Alta, Júlio de Castilhos e Tupanciretã, assim como a empresa Monsanto e os prefeitos de Cruz Alta e Jóia.

36 Aprovaram leis proibindo o cultivo de organismos geneticamente modificados os municípios de Espumoso (dezembro/98) e Pelotas (outubro/99), enquanto outros criariam legislações autorizando os transgênicos em seus territórios -Cruz Alta, em julho/99, e Jóia, Tupanciretã, Não-Me-Toque e Redentora, entre setembro e novembro/99. Entretanto, as leis municipais pró-transgênicos seriam -entre novembro de 1999 e janeiro de 2000-, por serem consideradas inconstitucionais (a proibição ao cultivo de organismos geneticamente modificados é válida em todo o território nacional), suspensas pelo Tribunal de Justiça do Estado.

37 A polêmica dos transgênicos ocuparia o centro dos debates da 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em julho de 1999, em Porto Alegre. Nesse encontro, a SBPC reiteraria a proposta de moratória para a liberação comercial dos alimentos transgênicos.

38 Em julho de 1998, reunindo 200 pesquisadores em Cruz Alta, a Comissão de Genética, Melhoramento e Tecnologia de Sementes, da 26ª Reunião de Pesquisa da Soja da Região Sul, aprovou um manifesto em apoio ao uso de

culturas geneticamente modificadas na agricultura brasileira; enquanto que, em maio de 1999, em Pelotas, pesquisadores reunidos no “Seminário Internacional de Produtos Transgênicos”, criticando abertamente a ação do governo estadual, manifestariam sua discordância com relação às “legislações que proíbem o desenvolvimento de pesquisas sobre transgênicos”.

39 Em entrevista concedida, no início de dezembro, em um programa da rádio Tupanciretã, frei Sérgio Görgen denunciara que o milho transgênico da variedade Bt estaria sendo obtido por meio da inoculação dos vírus HIV e da hepatite B. Suas declarações foram amplamente utilizadas pela imprensa e pelos parlamentares opositores em tentativa de desqualificar a ação do governo estadual no tema. Tendo ficado esclarecido que o frei não se pronunciara em nome do governo, Görgen diria, em sua defesa, que cometera uma “imprecisão científica”.

40 Ainda, o debate estadual repercutiria, com forte incidência, no debate nacional, bem como encontraria eco no debate internacional. Dentre outros, podemos lembrar o fato da polêmica gaúcha ter sido, em 2 de agosto, assunto de extensa reportagem no jornal francês *Le Monde* (“L’État ‘grenier’ du Brésil résiste à l’attrait des semences transgéniques”), a aprovação, em 12 de maio, pelo parlamento britânico, de moção de apoio à posição do governo gaúcho e, também, a declaração do chefe da delegação de 14 países, no Encontro de Embaixadores da União Européia, em outubro, em Porto Alegre, afirmando considerar a posição do governo gaúcho positiva para as relações comerciais com a Comunidade Européia.

41 Em reportagens publicadas pela imprensa local, é mencionada a existência, ainda em março, de 79 áreas experimentais interditadas. A suspensão de cada interdição seria, durante os meses que se seguiriam, objeto de disputa judicial, promovida pelas empresas de pesquisa e produtoras de sementes, até que, em fevereiro de 2000, prevaleceria a tese da não competência do estado para legislar sobre a matéria.

42 O uso dos *kits* era anunciado como parte de uma campanha do governo estadual contra os transgênicos -com o lema “Transgênicos: não plante essa idéia”-, que incluiria, ainda, a divulgação de mensagens pela TV e pelo rádio, panfletos e cartazes, além de uma linha telefônica “disque-transgênicos”, destinada a receber denúncias.

43 Em março de 2000, reagindo à aplicação do teste para detecção de transgenia no momento do recebimento do produto nos armazéns da Cesa, o Sindicato Rural de Cruz Alta declararia não aceitar a decisão da Cesa de proibir a armazenagem de produtos transgênicos (cuja produção continuava sendo ilegal!).

44 Note-se que a apreensão se realizara quando Olívio Dutra não havia sequer sido eleito governador. Fora o primeiro registro de apreensão de grãos

transgênicos colhidos em território nacional e também o primeiro em que os responsáveis seriam indiciados pelo cultivo ilegal de soja geneticamente modificada.

45 Em reunião em que estavam presentes 17 cooperativas, a Secretaria de Agricultura, a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs) e a Fecoagro definiriam lançar uma nota conjunta, alertando os produtores para que não plantassem sementes de soja transgênica.

46 “Bigodudo” ou “Bigode” foram os termos utilizados por agricultores para se referir ao governador Olívio Dutra. Essa pesquisa de campo foi realizada, em junho de 2000, em um município da área central do estado.

47 Durante a primeira semana de novembro, as 13 equipes de fiscalização -tendo visitado 200 propriedades, nas regiões de Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Erechim, Santa Rosa e Tupanciretã- haviam apreendido 3.588 sacas de soja transgênica. Foram realizados 700 testes de transgenia, dos quais 3,5% deram positivo. Vinte e quatro produtores -dos municípios de Júlio de Castilhos, Fortaleza dos Valos, Santa Bárbara do Sul, Cruz Alta, Quinze de Novembro, Augusto Pestana, Condor, Tupanciretã, Eugênio de Castro, Campos Borges e Dois Irmãos das Missões- foram considerados infratores, por armazenar sementes de soja transgênica. A lista dos produtores que armazenavam ou estavam plantando a soja transgênica seria encaminhada pela Secretaria de Agricultura ao Ministério Público Federal, que a repassaria à Polícia Federal. Para a realização da perícia, deveriam ser colhidas novas amostras, para que os testes definitivos fossem realizados pela Embrapa, com o apoio do Instituto Nacional de Criminalística. Todos os testes de transgenia realizados pela Embrapa apresentariam, surpreendentemente, resultado negativo.

48 Nessa reunião, a falta de consenso apontaria para a continuidade da suspensão da fiscalização nos municípios de Júlio de Castilhos, Jóia, Cruz Alta e Tupanciretã, e para outra reunião, que viria a ser suspensa -devido à ação cautelar solicitada pelo Sindicato Rural de Tupanciretã, pedindo a suspensão das vistorias. A Secretaria de Agricultura entenderia que a opção dos produtores pela via judicial abortava o processo de negociação então em curso. Em audiência de conciliação no Fórum de Tupanciretã, a Secretaria de Agricultura suspenderia, até o final do mês, a fiscalização de transgênicos nos limites de Tupanciretã e Jari. Na avaliação do governo do estado, este seria o prazo para que os agricultores da região substituíssem as sementes transgênicas por variedades convencionais. Na audiência, o Sindicato Rural se comprometeria a realizar uma campanha educativa entre os produtores, aconselhando-os a substituir a soja transgênica pela convencional.

49 A respeito do lugar da comida no imaginário social francês e sua relação com a rejeição aos alimentos geneticamente modificados, ver Menasche (2000[b]).

50 Os depoimentos mencionados a partir daqui -com representantes de um Clube Amigos da Terra e de entidades sindicais rurais patronais- foram extraídos de entrevistas realizadas, no início de julho de 2000, por Jean-Bernard Andro e Nathalie Deschamps, que gentilmente me possibilitaram acesso às fitas gravadas.

51 Em suas palavras: “Como eles não tinham poder, não tinham legitimidade pra vir invadir as propriedades, nós não deixamos eles fazerem isso. Nós atacamos. E aí o Sr. Secretário da Agricultura se juntou com o Secretário de Segurança, e mandaram o pelotão de choque da polícia para dar garantia para que seus funcionários invadissem nossa propriedade. Nós não deixamos”.

O Eldorado do Brasil central: história ambiental e convivência sustentável com o Cerrado

Ricardo Ferreira Ribeiro*

Sérgio Buarque de Holanda (1936), em *Raízes do Brasil*, define a colonização dos portugueses no Novo Mundo como “litorânea e tropical”, em contraposição à dos espanhóis, cuja política de conquista buscava as terras do interior e os planaltos. Estes, dessa forma, fugiam do perigo dos corsários e se resguardavam do rigor climático dos trópicos, procurando, nas regiões mais elevadas, as mesmas condições de vida das suas terras de origem. Segundo esse historiador, as razões daquele tipo de colonização estavam no interesse da Coroa Portuguesa em manter sob seu estrito controle as iniciativas de busca e exploração das possíveis riquezas da Colônia.

Os lusitanos haviam construído um modelo de contato na África e na Índia mais baseado em relações comerciais do que em ocupação do território. A própria geografia de Portugal, com muito mais litoral do que sertão, a se projetar para o Atlântico, deve ter contribuído para formar uma nação de navegantes e mercadores. Com tal motivação, a colonização no Brasil se estruturou principalmente, no primeiro momento, na perspectiva de explorar as riquezas da terra e voltar à metrópole, para lá usufruir os ganhos obtidos. Construiu-se, assim, uma nação de costas para a terra e de frente para o oceano, ou melhor, para o Velho Mundo que se situava no além mar.

* Sociólogo, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em agricultura e sociedade pelo Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.

Terminado o primeiro século de colonização, tínhamos uma sociedade sobretudo litorânea, na qual o sertão permanecia como um grande desconhecido, conforme a famosa passagem de Frei Vicente do Salvador:

“Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato, porque até agora não houve quem a andasse por negligencia dos portugueses, que, sendo grandes conquistadores de terras, não se aproveitam delas, mas contentam-se de as andar arranhando ao longo do mar como caranguejos” (Salvador, 1918: 19).

As várias novidades da América encantaram aos europeus, e muitos, acalantados pelas narrativas dos indígenas, se punham a imaginar que outras maravilhas o interior deste continente lhes reservaria. A fantasia de um lugar de riquezas minerais inestimáveis, do Eldorado, migrou por várias regiões do Novo Mundo e, no Brasil, esteve associada à imagem da “serra resplandecente” do Sabarabucú, ou da lagoa dourada, chamada de Eupana, que, por várias deformações no falar e escrever, resultaria ser o mesmo lago de Paraupaba ou Vapabussu.

A cartografia dos séculos XVI e XVII, pelas informações seguras já disponíveis, conseguia desenhar com detalhes a costa brasileira, mas o seu interior era ainda um esboço de suposições, onde esse lago central aparece de forma recorrente. O Alagoado Eupana aparece no mapa-múndi de Bartolomeu Velho, feito em Lisboa, em 1561, dele partindo vários rios em direção ao norte, para o Amazonas, ou ao sul, rumo à bacia do Prata, estando esta interligada com o Rio São Francisco, também beneficiário das águas daquele lago. Ele também está presente no trabalho de outros cartógrafos e cronistas do período, conforme Taunay, que destaca que “o grande lago fantástico brasileiro, o Vapabussu do Sul, vemo-lo já citado por Johann van Doet, em 1585, e nas edições e reedições de Hulsius, de 1599 e 1663. Desse Lacus Eupana saíam o Paraná, o Real, o São Francisco, o rio Grande de São João, afluente do Maraño” (Taunay, 1999: 62).

Tantas hipóteses e fantasias em torno de sua existência colocavam sua localização em diferentes pontos dos desconhecidos sertões do Brasil. “É preciso ter-se em conta que essa lagoa mágica, situada quase invariavelmente às cabeceiras de um ou mais rios caudalosos, se deslocava freqüentemente segundo a caprichosa fantasia dos cronistas, cartógrafos, viajantes ou conquistadores” (Holanda, 2000: 68). Qual todo mito, a existência desse riquíssimo lago estava fundada em fatos concretos, como a ocorrência de vários grandes rios a desaguar por diferentes direções no Atlântico, supondo-se, assim, uma existência comum entre eles, situada em um ponto alto do interior do continente, certamente próximo ou tão rico quanto as já conhecidas minas do Peru.

Em verdade, como se pretende mostrar adiante, Eldorado do Brasil Central, longe de ser uma construção fantasiosa das mentes ainda povoadas por delirantes

imaginações do início da Era Moderna, trata-se de uma realidade que vem se desvelando aos colonizadores de origem européia e seus descendentes, se não antes, seguramente, desde o século XVIII.

O Cerrado e suas riquezas no centro do Brasil

O lago perdido no interior da América do Sul, segundo o cartógrafo seiscentista holandês Jodocus Hondius, poderia ter “enormes dimensões, nada menos de duzentas léguas de comprimento!” (Taunay, 1999: 62). Já para o padre jesuíta Simão de Vasconcelos, conforme “contam os índios versados no sertão”, esse ponto, de onde partiam as águas para as principais bacias deste continente, era um “lago profundo” (Vasconcelos, 1977: 63). Se considerarmos uma nascente comum de tão grandes proporções, ela não poderia ser a céu aberto, uma espécie de “mar interno”, mas uma fonte subterrânea a verter água em várias direções, excluindo-se, é claro, a possibilidade de galgar as grandes altitudes ocidentais da Cordilheira do Andes.

Essa fonte é, nada mais, nada menos, o Cerrado, chamado de a “cumieira do Brasil” e também da América do Sul. Localizado no Planalto Central, em altitudes que variam de 300 a 600 metros, aquele bioma distribui uma significativa quantidade de água que forma as principais bacias do continente: Amazônica, do São Francisco, do Paraná/Prata, do Doce, do Jequitinhonha, do Parnaíba, dentre outras (Pimentel, 1977).

Além de sua importância na dispersão hídrica no continente, por sua posição central no território brasileiro, o Cerrado se encontra em contato e estabelece áreas de transição com quase todos os seus principais biomas (Floresta Amazônica, Caatinga, Mata Atlântica, Mata de Araucária e Pantanal), constituindo um ponto de equilíbrio entre eles. Trata-se, também, do segundo maior bioma em área, ocupando quase um quarto do Brasil, o que totaliza cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo ao tamanho da Europa Ocidental. Ele se distribui pelas seguintes unidades da Federação: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, São Paulo e Rondônia, alcançando até uma pequena área no nordeste da Bolívia (Alto Mamoré).

Do ponto de vista de seu enquadramento em outras paisagens do planeta, o Cerrado é conhecido como a “savana brasileira”, por suas semelhanças com outras formações vegetais presentes na faixa intertropical do globo, encontradas no norte da América do Sul, em uma larga área do centro da África, litoral da Índia e norte da Austrália. Ele possui alta disponibilidade de água e baixa de nutrientes, situação inversa à verificada na Austrália, enquanto os diferentes tipos de savanas africanas situam-se em condições intermediárias.

Uma de suas principais características é uma enorme diversidade, tanto no que se refere à variedade de espécies como de paisagens internas a esse bioma. Em relação à fauna, estima-se que seja composta por 935 espécies de aves, 298 de mamíferos e 268 de répteis (Costa, 1981), 150 de anfíbios e 1.000 de peixes, além de mais de 90.000 de insetos (Dias, 1996). Calcula-se que em sua flora possa haver entre 4 e 10 mil espécies de plantas vasculares, o que a coloca entre uma das mais ricas do planeta (WWF, 1995).

A diversidade de paisagens inclui desde ambientes florestais, nos quais a vegetação é mais densa, como o Cerradão, onde o número de árvores por hectare é onze vezes maior do que as áreas abertas, como o campo sujo, e cerca de duas vezes e meia em relação a áreas intermediárias, como o Cerrado (WWF, 1995).

“São descritos onze tipos fitofisionômicos gerais, enquadrados em formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado sentido restrito, Parque Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Rupestre e Campo Limpo), muitos dos quais apresentam subtipos” (Ribeiro & Walter, 1998: 104).

Foram as formações savânicas que acabaram por melhor caracterizar esse bioma e dar origem ao nome que passou a identificá-lo, dado pelos primeiros colonizadores e estudiosos da região. Por se encontrar em uma situação intermediária entre as “matas” e os “campos”; por serem mais fechadas que estes, acabaram sendo identificadas como um “campo cerrado” ou simplesmente “Cerrado”.

Seu clima é marcado por duas estações bem definidas: uma chuvosa (de outubro a março), quando ocorrem mais de 90% das precipitações, e outra seca (de abril a setembro). Grande parte do Cerrado (86%) recebe entre 1.000 e 2.000 mm de chuva por ano, estando sua média pluviométrica anual entre 1.300 e 1600 mm, muito superior, portanto, à da Caatinga, que se situa entre 500 e 700 mm, mas também bastante inferior às da Mata Atlântica (2.000 a 2500 mm) e da Floresta Amazônica (2.000 a 3.000 mm). Sua temperatura média anual é de 20,1°C, sendo inferior a todos os demais biomas brasileiros, exceto aos dos Campos e das Florestas Meridionais (Ribeiro & Walter, 1998).

As origens da longa convivência humana no Cerrado

Essa nítida demarcação de dois períodos climáticos anuais e a grande diversidade de ambientes e espécies possibilitou um tipo de ocupação humana do Cerrado muito característica. Cada uma das estações estava relacionada à exploração de certos ambientes e ao uso e manejo de espécies específicas da flora e fauna, em uma estratégia de reprodução social que foi acrescentando e combinando atividades econômicas ao longo da trajetória dos vários grupos humanos que aí conviveram e se sucederam.

A presença humana nessa região poderia, segundo alguns arqueólogos (Prous, 1992; Barbosa & Schmitz, 1998), ultrapassar os 11 mil anos, embora ainda haja muito por se investigar a respeito de seu próprio surgimento no continente americano. Essas primeiras populações eram formadas por pequenos grupos migrantes, “compostos provavelmente por algumas famílias e [que] moviam-se como bandos frouxos dentro de um espaço limitado” (Barbosa & Schmitz, 1998: 19). Esses grupos utilizavam grutas e abrigos, com disponibilidade de água potável em abundância e de recursos minerais, vegetais e animais de uma diversidade de ambientes próximos.

Em Santana do Riacho (Estado de Minas Gerais), sepultamentos entre 10 mil e 8 mil anos atrás apresentaram carcos do pequi queimados, frutos de *Symplocos* sp (conhecidos popularmente como congonha-do-campo, congonha-de-caixeta ou sete-sangrias), cocos de licuri e de outras espécies, uma semente, provavelmente da família *Convolvulaceae*, fragmentos de canela de ema e “fibras paralelas talvez de ‘tayuba’, formavam uma espécie de pincel junto do esqueleto do sepultamento” (Resende & Prous, 1991: 96). No mesmo período, a caça no sudoeste de Goiás incluía cervos, veados, capivaras, macacos, tamanduás, tartarugas, lagartos, emas, vários tipos de aves e pequenos peixes, bem como se utilizavam ovos de emas (Barbosa & Schmitz, 1998).

A caça e a coleta de espécies da fauna e flora típicas do Cerrado constituíram as atividades básicas das estratégias de reprodução social dos primeiros habitantes dessa região. Os sinais da presença de agricultura só iriam surgir em torno de 4 mil anos atrás, período para o qual foram datados grãos de milho e restos de amendoim, cabaça e abóbora, descobertos em alguns sítios no centro e noroeste de Minas Gerais (Dias Jr., 1978-1980; Prous, 1992).

A agricultura veio complementar a dieta alimentar já desenvolvida, e não substituir o consumo de produtos da caça e da coleta, possivelmente preenchendo uma lacuna no abastecimento no período de transição entre a estação chuvosa e a seca, correspondente aos meses de março e abril. Seu aparecimento pode estar ligado tanto à domesticação de espécies nativas do Brasil, a exemplo do amendoim, como indicar a existência de formas de intercâmbio cultural entre populações do Cerrado e de outras partes da América do Sul, como sugere a presença do milho e da abóbora, provavelmente vindos do Peru (Miller, 1978-1980; Sauer, 1986).

O surgimento da agricultura se dá ainda em um período pré-cerâmico, que, junto com outras formas de artesanato, se desenvolveria a partir de 3.500 anos atrás. Os estudos arqueológicos apontam para uma grande diversidade cultural desde então, com a convivência e influência entre várias fases e tradições, presentes em diferentes áreas do Cerrado. Cabe destacar, no entanto, que durante todo o período da pré-história dessa região, rapidamente aqui sintetizado, as tradições culturais ali presentes se distinguiram de outras surgidas nos vários biomas próximos.

Muitas dessas tradições do período cerâmico no Cerrado têm sido identificadas por alguns arqueólogos (Prous, 1992; Barbosa & Schmitz, 1998) com os traços culturais de povos indígenas do tronco lingüístico macro-jê. Esses povos constituíam a grande maioria das populações presentes naquele bioma, quando da chegada dos colonizadores europeus ao Novo Mundo, no século XVI. Estes estabeleceram contato inicialmente com os povos de língua Tupi, residentes no litoral e pertencentes a outra grande tradição cultural. Tais povos chamavam os jês de “tapuias”, “significando o ‘gentio bárbaro’ ou ‘inimigo’ (...)”, em que “se incluíram todos os grupos não-tupis” (Ramos, 1951: 46).

Aliados dos portugueses, os tupis acabaram por nos legar uma visão preconceituosa daqueles povos do interior, que influenciou os cronistas dos primeiros séculos da colonização. Frei Vicente Salvador assinalava, então, que, entre os indígenas brasileiros, os “mais bárbaros se chamam in genere Tapuhias (...)” (Salvador, 1918: 51-2). Já o jesuíta Simão de Vasconcelos assim dividia os povos aqui encontrados:

“Todos os índios quantos há no Brasil, vemos que se reduzem a índios mansos, e índios bravos. Mansos chamamos, aos que com algum modo de república, (ainda que tosca) são mais tratáveis, e perseveráveis, entre os portugueses, deixando-se instruir, e cultivar. Chamamos bravos, pelo contrário, aos que vivem sem modo algum de república, são mais intratáveis, e com dificuldade se deixam instruir” (Vasconcelos, 1977: 110).

Dentre os primeiros, estão os tupis; os últimos seriam os tapuias. A definição da palavra “tapuia” ou “tapuio” como índio bravio está também presente no mais conhecido dicionário da língua portuguesa editado no Brasil, o “Aurélio” (Ferreira, 1975), bem como em vários outros, mostrando a atualidade desse atributo entre nós.

Os jês -ou gês- continuavam, no início do século XX, marcados pelo estigma de tapuias: em 1908, Nelson Coelho de Senna considerava que “Os Gês foram sempre um obstáculo à marcha da civilização (...)” (Senna, 1908: 195). Muito da visão elaborada pelos cronistas coloniais em torno dos tapuias foi assumida pela antropologia brasileira em construção nesse século. Arthur Ramos, após citar alguns desses cronistas, conclui que “Os Gê ocupam, no Brasil, a fase mais primitiva na cultura econômica. Estão ainda na fase da coleta (...). A habitação é das mais rudimentares. Como povos coletores, os Gê não têm moradia fixa como os Tupi” (Ramos, 1951: 114-5).

Mais recentemente, os jês foram apontados como possuidores de uma cultura que representaria a combinação de uma tecnologia “simples” e um meio ambiente “pobre”, identificado com as savanas brasileiras, ou seja, o Cerrado (Zarur, 1986). Lévi-Strauss considerava a savana “imprópria não apenas para ao cultivo, como à coleta de produtos selvagens: aí, a vegetação e a vida animal são pobres.

Ao contrário, a floresta brasileira, porém, é pródiga em frutos e caça e, desde que nos limitemos a arranhá-lo, o solo é rico e fértil” (Lévi-Strauss, 1973: 131).

Descobertas arqueológicas posteriores contestam essa visão, revelando um passado diferente para os grupos jês, do que foi consagrado pelos cronistas coloniais e por esses estudos etnológicos:

“Os europeus chegaram no momento em que os Tupis se esforçavam para concluir a conquista do litoral, sendo os primeiros a sofrerem o impacto do contato com os brancos. Logo desapareceram, ao contrário dos grupos Jês meridionais, Jês centrais e Macro-Jês, que sobreviveram até o século XIX na maior parte do território, no entanto descaracterizados pelo decréscimo populacional, já que as epidemias chegaram ao sertão antes dos bandeirantes e exploradores. Isso explica por que os cronistas não testemunharam a vitalidade das populações primitivas do interior, ficando a idéia de que as tribos ‘Tapuias’ eram formadas por pequenos bandos errantes, bárbaros caçadores sem agricultura nem cerâmica, idéia que o desenvolvimento da arqueologia no país permite refutar: os brancos apenas conheceram povos decadentes que eles mesmos tinham reduzido a este estado. Explica-se, portanto, o espanto dos primeiros arqueólogos no século XIX diante de manifestações culturais que não podiam creditar ao indígena brasileiro, considerado racialmente inferior aos ‘civilizados’ e cujo tipo de sociedade não podiam entender. Esta idéia errônea do indígena brasileiro é infelizmente, ainda dominante na sociedade ‘moderna’. Imaginava-se que os mais ‘evoluídos’ dos primitivos habitantes do país tenham sido, de longe, os Tupis, que foram conhecidos e descritos antes de sua decadência” (Prous, 1992: 368-9).

Os grupos indígenas do tronco lingüístico macro-jê seriam os herdeiros históricos de todo complexo cultural, presente no Cerrado, caracterizado por uma agricultura baseada em plantas semeadas (abóbora, milho, algodão e feijão) e por um tipo de cerâmica parda alisada, às vezes polida (Miller, 1978-1980). O uso desses produtos na alimentação seria complementado com a proteína de origem animal, obtida através da caça. Estudos etnográficos realizados entre diversos grupos jês mostram que “as roças de milho eram abertas e plantadas, dispersando-se o grupo em pequenas bandas para a atividade de coleta, caça e pesca, as quais, voltavam-se a se concentrar, pela época da colheita” (Galvão, 1979: 245).

A coleta e a agricultura, mais do que representar “estágios” de desenvolvimento econômico ou cultural ou estar associadas em estratégias de uso e manejo dos recursos naturais em diferentes ambientes e estações do ano, podem apresentar limites tênues e incluir todo um conjunto de experiências e atividades produtivas intermediárias com espécies semidomesticadas. Darrell A. Posey desenvolveu um importante estudo, investigando o uso e manejo da floresta secundária, capoeiras, campos e cerrados pelos kayapós setentrionais, um grupo

do tronco macro-jê, localizado nos limites entre a Amazônia e o bioma do Brasil Central.

“O uso e remanejamento das florestas e savanas tropicais são melhor entendidos quando vistos como séries contínuas entre plantas que são domesticadas e as que são semidomesticadas, manipuladas ou selvagens. Dentro deste raciocínio não se pode estabelecer demarcação explícita entre ecossistemas naturais e remanejados. Grande parte do que tem sido chamado de florestas e savanas ‘naturais’ na Amazônia é, possivelmente, o resultado de milênios de remanejamento e co-evolução humanos” (Posey, 1986: 184).

Posey descreve o que ele denomina “agricultura nômade”, isto é, o cultivo de várias plantas nativas por eles utilizadas, algumas semidomesticadas. Esses “campos na floresta” estão situados nas proximidades dos acampamentos e ao longo das trilhas, percorridas pelos kayapós em expedições que duram vários meses. O manejo desenvolvido por esses índios inclui outras formas de agricultura, dentre as quais destaca-se a “criação do apêê -‘ilha’ de floresta no cerrado”-, cuja finalidade seria funcionar como “abrigo em casos de calamidades, investidas guerreiras ou epidemias, quando se tornava mais seguro abandonar, temporariamente o local da aldeia” (Posey, 1986: 183). Estas, em geral, são localizadas nos campos, região considerada mais saudável do que a floresta.

Os kayapós setentrionais realizam, portanto, um complexo manejo das diversas paisagens presentes em seu território, mantendo, assim, um relacionamento estreito com o seu hábitat, que vai muito além da aldeia e de seus arredores. As espécies manejadas por eles e outros povos indígenas são parte de um conhecimento profundo do Cerrado, só recentemente valorizado e pesquisado.

Os colonizadores europeus encontram o Eldorado

Os bandeirantes paulistas, os primeiros colonizadores de origem européia e seus descendentes mestiços, recorreram a esses conhecimentos indígenas ao penetrarem nesse bioma em busca de escravos índios e riquezas minerais do sonhado Eldorado dos sertões brasileiros. Em suas longas jornadas exploratórias, aproveitavam-se das trilhas indígenas e viviam da caça, coleta e agricultura nômade, pois, em um primeiro momento, aqueles seus objetivos não os fixavam à terra. Esse aprendizado capacitou-os a impulsionar a ocupação territorial portuguesa em direção ao interior do Brasil, ao longo dos séculos XVII e XVIII, mesmo após a descoberta das primeiras lavras de ouro nos limites orientais do Cerrado, em área de transição com a Mata Atlântica.

Logo se formaram aí núcleos mineradores com o enorme afluxo de gente vinda de outras partes da Colônia e de Portugal, gerando conflitos entre os descobridores paulistas e os recém-chegados. Os primeiros, derrotados, acabaram por promover novas descobertas de ouro e também de diamantes, no Sertão Mineiro, em Goiás e Mato Grosso, revelando que, junto ao imenso “lago” subterrâneo do Brasil Central, havia mesmo um Eldorado com riquezas incalculáveis.

A mineração impulsionou a importação de mão-de-obra escrava da África, determinando uma nova configuração para a população do Cerrado, à medida que os índios iam se interiorizando ou se mesclando com os colonizadores. Os brancos constituíam minoria nas áreas de mineração, e a presença de negros e mulatos predominava na região, seja pelo grande contingente de escravos, seja pela participação menor de forros e quilombolas, que aproveitavam as vastidões daquelas áreas para ali buscar um espaço de maior liberdade. A contribuição da cultura africana para a nova sociedade que se formava no Sertão do Brasil Central foi muito grande, estendendo-se suas influências pela arte, religiosidade, medicina, alimentação, etc.

Mesmo na extração do ouro, a participação dos negros não se deu apenas como mão-de-obra braçal, pois o que muitos desconhecem é a contribuição africana nas técnicas de mineração. Inicialmente, os mineradores de origem européia conheciam pouco dessa atividade e usavam métodos rudimentares, como informava, no início do século XIX, o mineralogista alemão Eschwege:

“Somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem do ouro, e de cuja experiência o natural espírito inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito, foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração” (Eschwege, 1979: 167).

Mais do que pelo espírito inventivo, a mineração foi orientada pela ambição e a fantasia do enriquecimento rápido e a todo custo. Com isso, os mineradores deixaram não só um rastro de danos ambientais, mas acabaram por “matar a sua galinha dos ovos de ouro”. O mesmo Eschwege já apresentava, em 1832, as consequências da ambição desregrada relacionada com o primeiro momento dessa atividade:

“Aprincípio fazia-se com certa facilidade a extração do ouro nos leitos dos rios e córregos, bastando para isso, no tempo das secas, em que as águas são em pequena quantidade, desviar o rio ou o córrego, o que se conseguia com muito menos dificuldade, porque a lama ainda não cobria os mais ricos sedimentos do leito, como aconteceu poucos anos depois”.

“De fato, revolvendo-se freqüentemente as cabeceiras dos rios, estes se carregam cada vez mais de lama, a qual se foi depositando sobre a camada rica, alcançando de ano para ano maior espessura, tal como vinte, trinta e até mesmo cinquenta palmos. Por esse motivo, as dificuldades tornaram-se tão grandes, que não se pôde mais atingir o cascalho virgem” (Eschwege, 1979: 168).

Um outro observador da mesma época, o botânico francês Saint-Hilaire, em visita a Paracatu, uma importante vila mineradora do Cerrado de Minas Gerais, apontava os impactos ambientais do desmatamento, ligado àquela atividade, como uma das prováveis causas de seu declínio:

“Houve tempos em que, com a ajuda de uma bateia, retirava-se de uma só vez, do Córrego Rico, até meia libra de ouro, e ainda hoje as jazidas de Paracatu são muito ricas. (...) Não obstante a falta de escravos e de capitais não permite que os habitantes do lugar se dediquem a uma exploração em grande escala. Outra causa é a escassez de chuvas, que cria um obstáculo a mais. Quando os primeiros mineradores vieram estabelecer-se na região todos os riachos eram rodeados de matas. Elas foram derrubadas e água se tornou menos abundante. É esse o resultado dos desmatamentos tanto na América como na Europa” (Saint-Hilaire, 1975[b]: 150-1).

Apesar de sua decadência, no final do século XVIII, a mineração continuou a ser praticada pelos habitantes da região do Cerrado e se incorporou às suas estratégias de reprodução social. Por ser, em geral, praticada na estação seca, ela combina com a agricultura, desenvolvida durante os meses de chuva, complementando-a, em algumas áreas daquele bioma. Essa também combina com uma outra atividade implantada no Cerrado durante o período colonial: a pecuária.

O gado bovino, seja acompanhando a penetração dos paulistas, seja vindo do Nordeste, subindo o Rio São Francisco, foi se espalhando pelo Brasil Central, transformando sua criação na mais importante e duradoura atividade econômica do Cerrado ao longo dos três últimos séculos. Sua expansão foi favorecida pela disponibilidade do mercado consumidor de carne e couro nos centros mineradores da região, no século XVIII, contribuindo de forma decisiva para sua consolidação e permanência no período posterior.

Sua primeira vantagem é o fato de ser um produto que, com relativa facilidade, se autotransporta, ao contrário, por exemplo, das colheitas agrícolas e, mesmo, da criação de outros animais de menor porte. Por toda a região do Cerrado, a expansão da pecuária se deve à combinação de alguns fatores naturais que tornaram essa atividade possível, dentre os quais se destaca a presença de pastagens nativas, incluindo centenas de espécies de ervas, subarbustos, arbustos e árvores, cujas folhas, frutos e até o caule são consumidos pelo gado (Macedo,

1978). Outro recurso diferencial favorável à criação de gado na região é a existência, em alguns pontos, de terrenos e fontes de água salobras, possibilitando aos pecuaristas evitar gastos com a compra de sal, como observou, no início do século XIX, Saint-Hilaire:

“O que torna muito preciosos os terrenos salitrados do sertão, é que eles substituem, para o gado, o sal que se é forçado a dar aos animais nas outras zonas da Província de Minas e na de S. Paulo. A essa vantagem a região acrescenta ainda, como já vimos, a de possuir pastagens imensas; por isso os gados bovino e cavalar podem ser considerados como sua principal riqueza” (Saint-Hilaire, 1975[a]: 313).

As pastagens nativas eram manejadas pelo uso do fogo nas áreas de campo e de savanas, cuja vegetação formada por “gramíneas ou arbustos baixos (...) fica inteiramente queimada durante o estio, ocasião em que têm início as queimadas. A cinza aduba a terra e incentiva o surgimento do capim tão logo caem as primeiras chuvas” (Eschwege, 1996: 97). Essas queimadas exigiam uma série de conhecimentos e cuidados para se evitar a propagação descontrolada do fogo. Naquelas áreas, essa prática não resultava em danos significativos para a vegetação arbórea do Cerrado. O botânico Saint-Hilaire constatou o seguinte: “Como o fogo consome o capim dos pastos com grande rapidez, ele não chega a queimar o tronco das árvores espalhadas pelos tabuleiros cobertos. Apenas deixa-as enegrecidas e resseca suas folhas, as quais logo brotam de novo, porém” (Saint-Hilaire, 1975[b]: 138).

Outro fator impulsionador da pecuária no Cerrado foi a enorme disponibilidade de terras, possibilitando a criação extensiva de grandes rebanhos, com milhares de cabeças de gado. A vastidão do território permitiu o estabelecimento de um padrão de doação de sesmarias de 3 por 1 légua para essas áreas do Sertão, mas o mesmo não valia para as “terras onde se acharem minas, ou caminhos para ellas, [que] devem ser de meia legua em quadro (...)” (Teixeira Coelho, 1852: 447). Cabe ressaltar que a légua de sesmaria tem 6.600 metros (Costa Filho, 1958: 113); portanto, aquele padrão correspondia a 13.068 hectares.

A estratégias de reprodução social das populações tradicionais do Brasil central

Em torno dessas fazendas de gado, constituiu-se uma economia camponesa, baseada na agricultura, cuja produção de milho, feijão, arroz e mandioca teve, em geral, uma expressão mais local e, no máximo, regional. As únicas lavouras que, envolvendo, muitas vezes, proprietários maiores, em alguns momentos, tiveram uma significação econômica maior foram a de algodão e a de cana-de-açúcar. Esta se destinava à produção de rapadura e cachaça, que, em certas áreas do

Sertão, possuíam importância no comércio extra-regional. O algodão foi fiado e tecido artesanalmente em algumas regiões, mas, também, foi exportado em rama para atender à demanda das fábricas européias, no começo do século XIX, e, mais tarde, esteve associado às primeiras iniciativas de industrialização na região.

Menos visível, o mundo camponês podia possuir, em algumas regiões, maior ou menor significação e independência econômica, social e política em relação ao domínio dos grandes proprietários. Essa população, composta por brancos pobres e, sobretudo, mestiços e negros livres, era mais autônoma quando ocupava pequenas áreas nos espaços indefinidos entre as fazendas ou em torno dos núcleos de mineração, que liberavam mão-de-obra devido ao declínio dessa atividade. Muitas comunidades camponesas também se formaram pelas sucessivas divisões das fazendas entre várias gerações de herdeiros, fracionando a terra em médias e pequenas glebas, especialmente quando diminuía a disponibilidade de terras livres.

Vivendo dentro das fazendas, trabalhando como parceiros e até como vaqueiros, em uma relação de subordinação e de reciprocidade passada, de ambos os lados, de pai para filho, alguns conseguiam, por doação ou compra, adquirir sua própria terra. Os vaqueiros podiam formar um pequeno rebanho, como observava o naturalista mineiro José Viera Couto, em 1801: em “todo o sertão, pagam os donos das fazendas, de 4 cabeças, uma aos chamados Amos, que são aqueles que administram a mesma fazenda, andam continuamente no campo, vigiam o gado dos bichos ferozes e cuidam em tudo que diz respeito às criações” (Couto, 1905: 118).

Essa população, algumas vezes junto com os remanescentes indígenas e quilombolas, vivendo hoje em condições semelhantes à dos camponeses dos sertões do Brasil Central, é herdeira do patrimônio cultural construído ao longo de toda a trajetória humana de convivência com o Cerrado, delineada até aqui.

Uma pesquisa de campo, realizada pelo autor, com vistas à elaboração de sua Tese de Doutorado¹, junto a essas populações tradicionais, em quatro regiões desse bioma no Estado de Minas Gerais (Alto Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Alto Paranaíba), permite esboçar, em linhas gerais, alguns aspectos desse patrimônio cultural sertanejo em sua relação com o meio ambiente no qual ele se insere. Há, sem dúvida, particularidades locais em cada uma das comunidades ou regiões pesquisadas; buscou-se, no entanto, aspectos comuns entre elas, muitos deles partilhados por essas populações presentes em outros estados da região do Cerrado, às quais o autor teve acesso por meio de visitas ou de outros estudos.

O primeiro aspecto a destacar é a importância da agricultura para populações constituídas, sobretudo, por camponeses, pois dessa atividade retiram grande parte de sua alimentação e parcela significativa de sua renda monetária. A policultura é sua característica básica e compreende, além de roças com os vários

produtos já citados, o cultivo de hortaliças e frutíferas, geralmente nas proximidades da moradia. Em termos ambientais, tanto a casa como esse conjunto de atividades desenvolvidas em suas proximidades, incluindo também a criação de pequenos animais (principalmente, suínos e aves), estão situados nas áreas chamadas de “terra de cultura”.

Esse ambiente corresponde às formações florestais inseridas no Cerrado, especialmente aquelas próximas dos cursos d’água, onde tais atividades se beneficiam tanto da disponibilidade deste recurso quanto da fertilidade natural do solo. Aí se praticam técnicas agrícolas indígenas, como a chamada “roça de toco”, consistindo na derrubada da mata, queima e coivara, sem a destoca, ou o uso de arado, no preparo do solo. Depois de três a quatro anos de cultivo, inicia-se o período de pousio, com a retomada da área pela vegetação nativa. Este varia de acordo com a disponibilidade de áreas de “terra de cultura” acessíveis a uma família nuclear ou a um conjunto delas, conforme o tipo de posse/propriedade que estabelecem entre si. Assim, pode-se iniciar um novo roçado a partir de uma “capoeira fina” 3, 4 anos depois, ou, até mesmo, em uma área semelhante a uma “mata virgem”, após mais de 15 anos de “descanso”.

A criação de bovinos, por outro lado, não se restringe a esse ambiente, mas combina o seu manejo por vários deles, em diferentes períodos do ano. Os pastos da “terra de cultura”, formados pelo desmatamento sucessivo ou pelo plantio de gramíneas, não resistem ao final do período da seca, quando o gado busca as áreas de campo e cerrado. Estas brotam já com as primeiras chuvas, enquanto aqueles pastos são preservados para se recuperar e estar verdes com o avanço da estação das águas e no início da seca.

As poucas cabeças de gado, além de contribuírem com a alimentação com o fornecimento de leite, também usado na geração de renda com a fabricação de queijo e requeijão, se configuram em uma espécie de reserva de valor. Em momentos de “precisão”, como em casos de doença ou de necessidade de recursos monetários para a aquisição de bens, essa reserva é facilmente convertida em dinheiro, para ser utilizado em tais despesas. Quando estas são menores ou a família é mais pobre, podem ser vendidos pequenos animais (porcos, aves, cabras, etc) ou estoques de produtos agrícolas armazenados, especialmente aqueles beneficiados pelas pequenas fábricas rurais, como farinha, rapadura e cachaça.

Embora a agricultura e a pecuária sejam dois importantes pilares nas estratégias de reprodução dessas populações tradicionais do Brasil Central, são complementadas por diversas atividades. Algumas tão generalizadas quanto essas; outras mais específicas para certas comunidades ou regiões; várias delas, porém, são tão ou mais significativas, inclusive em termos de geração de renda monetária.

Dentre as mais comumente realizadas, estão as que complementam a alimentação pelo uso de recursos naturais obtidos pela caça, pesca e coleta, recorrendo-se, algumas vezes a técnicas empregadas, ao menos, desde o período pré-colonial, pelos povos indígenas da região. A pesca e, particularmente, a caça são importantes fontes de proteína animal, nem sempre disponível na alimentação cotidiana, pelo consumo de carne de pequenos animais ou de bovinos. A pesquisa de campo revelou, ainda que com aceitações variadas, o consumo de carne de 34 animais silvestres, incluindo mamíferos, aves e répteis.

Também foram identificados dez tipos de abelhas produtoras de diferentes méis, alguns consumidos com finalidades medicinais.

A extração de palmitos e frutos de várias espécies do Cerrado, especialmente nos ambientes savânicos e campestres, também tem um significativo papel na alimentação sertaneja. Além de sua importância nutricional e calórica, grande parte desses frutos nativos ocorre no período em que os produtos de origem agrícola armazenados já estão no final, permitindo completar a alimentação até a nova colheita. Um levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo realizada pelo autor apontam a existência de 65 espécies nativas do Cerrado que fornecem frutos para os sertanejos.

As mesmas fontes revelaram a disponibilidade de mais de 170 espécies que se prestam ao uso medicinal, sendo especialmente encontradas nos ambientes savânicos e campestres. Tal recurso é muito importante, mesmo nos dias de hoje, pelas dificuldades de acesso aos serviços médicos e de aquisição de remédios da medicina oficial. A esta se soma, algumas vezes, o descrédito em relação à sua eficácia, principalmente entre as pessoas mais velhas, já acostumadas aos “remédios do mato” e a outras práticas terapêuticas da medicina popular.

Grande parte dos materiais de construção empregados também é retirada diretamente da natureza, incluindo-se vários tipos de argila e pedra, bem como 130 espécies vegetais fornecedoras de madeira para várias finalidades. São empregadas, ainda, 32 espécies na obtenção de fibras para produção de cobertura de moradias, confecção de balaies, cestas, peneiras, diferentes peças de artesanato e para outros fins. Há 29 espécies, das quais são extraídos óleos aproveitados no uso alimentício, na fabricação de sabões, etc.; 24 são usadas para tingir tecidos de algodão ou lã e 20 possuem tanino, substância importante para o trabalho de curtir couros.

Grande parte dessa atividade extrativista tem como objetivo o consumo pelas próprias famílias e, apenas em alguns casos, tem fins comerciais. Dentre estes, podemos apontar, excepcionalmente, a venda de madeira ou de plantas medicinais; já a comercialização de palmitos (em particular a do coqueiro gueroba) e, especialmente, de frutos (principalmente o pequi, o buriti, a panam, o coquinho azedo, o baru) é muito mais comum, envolvendo toda uma cadeia mercantil.

Historicamente, alguns recursos naturais do Cerrado foram explorados comercialmente, como, por exemplo, a exportação de couros de veado, no período colonial, ou a extração de óleo de coco de macaúba e babaçu, mais recentemente. De forma ainda mais destacada, temos a borracha de mangabeira e maniçoba, produzida em Minas Gerais e Goiás, cujo centro de negócios foi a cidade mineira de Januária. Esta atividade teve seu grande surto nas primeiras décadas do século XX, quando o mesmo produto era também largamente extraído da seringueira na Amazônia.

Atualmente, algumas comunidades ainda retiram parte expressiva de sua renda do garimpo de diamantes, ouro e cristal, em regiões específicas, onde essa tradição remonta ao período colonial. Outras atividades extrativistas, eminentemente comerciais, porém de data mais recente, são a produção de carvão e a coleta de flores e frutos secos, com fins ornamentais, assim como o uso de diferentes recursos naturais para a confecção de variados tipos artesanato.

Além dessas várias atividades de exploração de recursos naturais, essa população também se dedica a distintas formas de trabalho para terceiros, dentre elas se destacam a prestação de serviço para vizinhos, a parceria, as funções de vaqueiro, o trabalho assalariado em fazendas e empresas da região e a migração sazonal em busca de emprego temporário no campo ou em cidades até de outros estados.

Essas diversas atividades (agricultura, pecuária, extrativismo, trabalho para terceiros, etc) se combinam dentro das estratégias próprias de cada comunidade, ou até de cada família, tendo-se em vista as necessidades destas, a possibilidade de acesso aos recursos naturais demandados, a disponibilidade de mão-de-obra familiar ou de vizinhos e o encadeamento de cada uma no calendário anual de atividades.

Assim, dedicam-se à pecuária e, em certa medida, também à caça, durante todo o ano, embora haja horas, dias e mesmo certos períodos de maior atenção. A agricultura e a coleta de frutas nativas ocupam o sertanejo especialmente na estação das chuvas, enquanto a fabricação de farinha, rapadura e cachaça, o artesanato, o garimpo, a coleta de flores e frutos secos, a extração de madeira, ou a produção de carvão, o trabalho nas olarias e a pesca são atividades mais características do período de estiagem.

Cada atividade pode ser parte de uma divisão do trabalho entre as famílias da comunidade, por faixa etária ou, especialmente, por sexo, concentrando-se o trabalho feminino na moradia e em seus arredores. Embora, ao observador externo, aparente existir uma uniformidade nas atividades desenvolvidas pelas famílias e pessoas de uma mesma comunidade, um olhar mais atento evidencia uma especialização em certos tipos de trabalho, imposta pela herança da atividade, condição financeira, habilidade pessoal, etc.

A trajetória recente das populações tradicionais do Cerrado

A valorização e o consumo crescente de bens industriais vem alterando não só essa especialização, mas várias atividades acima mencionadas, pois contribui para a diminuição da demanda por certos recursos naturais substituídos por aqueles bens. Por outro lado, aumenta a demanda por outros, cuja oferta no mercado permite a obtenção de renda monetária para a compra dessas novas “necessidades”. Contribuem, assim, para a degradação de ambientes onde eles ocorrem ou para a ameaça de extinção de certas espécies de valor comercial.

O acesso aos recursos naturais, no entanto, tem sido um dos principais fatores das recentes transformações nas relações entre as populações tradicionais do Brasil Central e o Cerrado. É importante destacar que essas mudanças se dão dentro de um processo de mais longo prazo, em que vários daqueles recursos vêm sendo apropriados por alguns poucos, em geral, em detrimento daquelas populações. Porém, principalmente nos últimos trinta anos, tais transformações se generalizaram e se aprofundaram, resultando em perdas significativas para suas estratégias tradicionais de reprodução social.

Embora variando o momento em que se deu de uma região para outra, conforme constatação feita em minha pesquisa de campo, uma das mudanças preliminares foi a das restrições impostas à criação de pequenos animais (suínos, caprinos e ovinos). Tradicionalmente, as roças deviam ser cercadas, e esses animais, bem como o gado bovino e equino, criados soltos, com livre acesso a diferentes ambientes, onde pudessem pastar. Os fazendeiros, em geral, possuindo roças maiores, resolveram suspender o “pé da cerca”, ou seja, alteraram essa regra, exigindo que as lavouras fossem protegidas apenas contra as criações de grande porte. Desta forma, diminuía os custos com a confecção de cercas, que precisavam ser reformadas ou mudadas à medida que as lavouras iam se mudando no sistema de agricultura itinerante, já apresentado. Assim, quem tivesse pequenos animais passava a ter que os manter presos em cercados de “pé baixo”. Anova “lei” dificultava essa atividade para os camponeses, seus principais criadores, pois grande parte da alimentação dos animais não poderia mais ser obtida no pasto, na vegetação nativa, mas deveria ser suprida pelo proprietário, aumentando o seu custo de produção.

Muitas vezes, essa transformação se deu paralelamente ao aparecimento do arame em substituição ao uso da madeira ou de pedras na confecção de cercas, pois estas, quando são feitas “contra” pequenos animais, consomem muito mais do que os três ou quatro fios empregados para proteger as roças contra bois ou animais de montaria.

A difusão do uso do arame também contribuiu para uma transformação ainda maior no que se refere à apropriação dos recursos naturais do Cerrado: o fim da “solta”, “larga” ou “largueza”. Essas expressões de variação regional indicam as áreas de uso comum para a criação do gado, onde predominavam a vegetação de

tipo savânico e campestre. Se apenas as áreas em torno das moradias, as lavouras e alguns pastos plantados eram cercados, o resto se constituía em áreas abertas, indivisas, onde os vizinhos podiam soltar suas criações, tirar madeira, caçar, coletar frutos e plantas medicinais, etc. A propriedade sobre o gado não era assegurada por sua contenção nos limites da fazenda, mas pela marca do dono feita na orelha ou, principalmente, a ferro quente no seu couro.

Mesmo a documentação das terras era pouco precisa em termos dos seus limites nesses ambientes não usados para fins agrícolas. À medida que as terras iam se valorizando com a intensificação da pecuária, eram realizadas “medições” com a finalidade de “retificar” os limites de cada propriedade e, em seguida, o seu perímetro ia sendo cercado. Tal processo foi imprensando os camponeses, pois não dispunham de recursos financeiros para contratar agrimensores ou advogados nem de força política para se impor aos fazendeiros. Mesmo que não houvesse questionamentos sobre os limites de suas terras, com o fim da solta, eles perdiam a possibilidade de manter um rebanho um pouco maior, pois teriam que restringir o número de suas cabeças àquele compatível com a área de sua propriedade.

Em algumas áreas, esse processo é anterior, em outras, a “solta” ainda sobrevive de forma residual até hoje, em todas as regiões pesquisadas, no entanto, a partir dos anos 1970, essa apropriação de áreas de uso comum se evidencia. Essa “coincidência” histórica se deve à implantação de programas de desenvolvimento do Cerrado, promovidos pela Ditadura Militar como uma estratégia de expansão da fronteira agrícola. Financiados principalmente pelo capital japonês, esses programas se enquadravam em uma política mais ampla de modernização da agricultura voltada para a exportação de grãos e para o fornecimento de insumos para a indústria nacional. Paulo Afonso Romano, presidente da CAMPO, empresa binacional (Brasil-Japão) responsável pela coordenação de um desses programas, resume bem o discurso oficial que fundamentou sua implantação:

“A intensa utilização das áreas agrícolas no Sul e Sudeste, chegando a situações de completa saturação, leva o País à necessidade de busca de áreas novas, (...) a acentuada euforia com a Amazônia na segunda metade da década de 60 e início da década de 70, fez os brasileiros imaginarem ser ali, e de pronto, o novo celeiro. Talvez o ufanismo predominante (...) tenha levado à extrapolação da busca de um objetivo geopolítico - a integração nacional da Amazônia - com um objetivo econômico: o de produzir alimentos. O engano foi detectado.

Prossegue a ocupação da Região Amazônica, porém em pólos selecionados, pois ainda persistem condições precárias de infra-estrutura, riscos ecológicos e escasso conhecimento científico e tecnológico para ampla utilização dos recursos amazônicos. O bom senso de atrair maior atenção para os cerrados, enquanto se amadurece a solução amazônica, deve ser considerado como uma histórica correção de rumos na busca de novas regiões agrícolas” (Romano, 1985: 155-6).

Desta forma, o Cerrado e a Amazônia eram vistos como vazios econômicos a serem mais bem explorados; no entanto, aquele possuía algumas vantagens que favoreceriam sua ocupação mais rápida. No Cerrado, a questão ambiental não aparecia, do ponto de vista político interno e externo, de forma tão polêmica quanto a repercussão que ganhava a destruição da Floresta Amazônica. Com suas árvores pequenas e tortas, ele não apresentava, aos olhos da opinião pública, o mesmo efeito grandioso da imensidão verde daquela floresta. O mais importante estava, entretanto, em outra vantagem do Cerrado, que, apesar de ter problemas de fertilidade do solo, já possuía, naquele momento, conhecimento científico e tecnológico suficiente para torná-lo produtivo e economicamente viável. Vantagem que se somava à sua localização e infra-estrutura disponível, capazes de oferecer melhores condições de produção, bem como favorecer o seu escoamento para os grandes centros urbanos e os mercados internacionais.

A partir do início dos anos 70, o Eldorado do Brasil Central é redescoberto: o Estado implementou diversos programas de desenvolvimento do Cerrado, baseados em um uso intensivo de tecnologia e capital e no preço baixo das terras, favoráveis à mecanização e que compensavam os investimentos destinados à “correção” do solo. Em pouco tempo, o Cerrado adquiriu grande importância na produção agrícola brasileira, contribuindo com 25,4 % da soja, 16% do milho, 13,2 % do arroz de sequeiro e 8,3 % do café (Shiki, 1995). Esses projetos de desenvolvimento tiveram como pólo irradiador o oeste de Minas, espalhando-se gradativamente, até os dias atuais, para os outros estados incluídos na área desse bioma, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 1
Programas governamentais de desenvolvimento agrícola do Cerrado

PROGRAMA	CRIAÇÃO	CUSTO (US\$)	ÁREA (ha)	LOCAL (ESTADO)
PCI	1972	32 milhões	111.025	MG
PADAP	1973	200 milhões	60.000	MG
POLOCENTRO GO	1975	868 milhões	3.000.000	MG, MS, MT,
PRODECER I	1979	94 milhões	60.000	MG
PRODECER II GO, MS	1985	409 milhões	180.000	MT, BA, MG,
PRODECER III	1994	66 milhões	80.000	MA, TO
TOTAL	-	1.669 milhões	3.491.025	-

A análise mais pormenorizada dos resultados desses programas extrapola os objetivos do presente trabalho; entretanto podemos sintetizar, em linhas gerais, suas consequências ambientais e sociais nos seguintes pontos:

a) Impactos ambientais:

- perda da biodiversidade com o plantio de enormes áreas de soja, milho, arroz, café, pasto, eucalipto, etc., em substituição à rica variedade de espécies do Cerrado²;
- degradação do solo pelo uso de maquinaria pesada e produtos químicos, resultando em erosão e esterilização;
- poluição e contaminação dos solos e da água e contaminação dos seres vivos, ao lado do aumento de pragas agrícolas devido ao emprego intensivo de agrotóxicos e adubos químicos;
- assoreamento e diminuição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos causados pelo desmatamento e pela irrigação;
- risco de contaminação genética através do plantio de sementes transgênicas.

b) Impactos sociais:

- concentração fundiária;
- exclusão dos agricultores familiares e de populações tradicionais da participação e dos benefícios econômicos de tais projetos (Salim, 1986);
- redução relativa do emprego de mão-de-obra (Cunha, 1994);
- intensificação da migração rural-urbana (Guanziroli e Figueira, 1986);
- aumento da dívida externa em benefício de uma minoria.

As populações tradicionais vivenciaram de perto vários desses impactos e tiveram seu modo de vida profundamente modificado. Em primeiro lugar, áreas de “solta” de uso comum foram apropriadas, seja por fazendeiros, seja por grileiros; outras foram desapropriadas ou simplesmente consideradas terras devolutas pelo Estado e colocadas à disposição de colonos de outras regiões e de empresas agropecuárias e florestais, em condições extremamente vantajosas.

Tais áreas, formadas basicamente por ambientes savânicos, eram vistas como inaproveitadas pelos gestores daqueles programas de desenvolvimento, pois não eram empregadas, conforme foi visto, nem para o cultivo de lavouras nem para o de pastos. Com a introdução da nova tecnologia de “correção” do solo, tornou-se viável seu uso agrícola, o plantio de pastos e a implementação de maciços florestais.

A apropriação dessas áreas por grandes empreendimentos representou o cerco de comunidades inteiras, com a ocupação das terras altas e planas das chapadas, com enormes parcelas cobertas de soja, café, eucalipto ou de outros tipos de monocultura. Assim, essas comunidades foram expropriadas dos usos coletivos que antes aí realizavam, diminuindo sua capacidade de criação de bovinos e reduzindo ou inviabilizando a caça e várias formas de extrativismo vegetal (lenha, madeira, frutos, plantas medicinais, fibras, etc).

Suas atividades tiveram que se reduzir, principalmente, às áreas de “terra de cultura”, as quais, conforme foi analisado, representavam o principal ambiente explorado pelas populações tradicionais em termos de moradia, agricultura, criação de animais, etc. Sua utilização foi intensificada, especialmente, com o plantio de capim para cobrir a perda do pasto nativo das áreas apropriadas. A concentração da terra e o aumento da população, em algumas regiões, já vinham desgastando a fertilidade natural dessas áreas pela diminuição dos períodos de pousio, obrigando a adoção de novas técnicas aprendidas com o exemplo dos empreendimentos vizinhos. Fato que, de um lado, aumentava os custos de produção e, de outro, ampliava os impactos ambientais assinalados acima para aqueles grandes projetos.

Algumas comunidades foram expropriadas até mesmo de suas áreas de “terra de cultura”, pela construção de barragens para geração de energia e irrigação, pois as indenizações recebidas não cobriam a reposição dos bens perdidos, impossibilitando a retomada das mesmas condições de vida em outro lugar. Por outro lado, a introdução de gigantescos projetos de irrigação resultou na redução da água disponível para comunidades a jusante, circunstância agravada pela diminuição da vazão de rios e córregos, provocada pelo desmatamento de suas nascentes e assoreamento dos seus leitos.

As populações tradicionais, apesar de não se constituírem os principais responsáveis pela degradação ambiental no Cerrado, se viram como o alvo mais fácil da atuação das autoridades ambientais locais. A legislação nesse sentido data da segunda metade dos anos 1960, com o código Florestal, o de Pesca e o de Proteção à Fauna, quando efetivamente se iniciou uma fiscalização do uso de vários recursos naturais. Sua implantação coincidiu, dessa forma, com aqueles primeiros programas de desenvolvimento do Cerrado. Estes, no entanto, como parte de políticas estratégicas da Ditadura Militar, não foram, em grande parte, afetados pela legislação ambiental ou pelos órgãos responsáveis por sua fiscalização. Alguns deles, inclusive, estavam diretamente envolvidos na implementação, por exemplo, de projetos florestais, com a substituição de milhares de hectares de vegetação nativa por maciços de eucalipto ou pinus.

Muito diferente foi a situação das populações tradicionais do Cerrado que tiveram várias atividades de grande importância dentro de suas estratégias de reprodução social restringidas ou proibidas a partir de então. Dentre elas, podem-se destacar:

- a derrubada de matas e capoeiras;
- a realização de queimadas;
- a retirada de madeiras e fibras;
- a coleta de frutos (restringida) e palmitos;
- a extração de mel silvestre;
- apanha de flores do tipo sempre-viva;
- a coleta de plantas medicinais;
- a prática da caça;
- a pesca (restringida);
- a produção de carvão;
- o garimpo.

Muitas comunidades se queixam de que a legislação ambiental só era aplicada aos “pobres”, não afetando os fazendeiros e as grandes empresas. Também apontam que, em vários aspectos, ela não proíbe a destruição do meio ambiente, mas apenas procura restringi-la pela cobrança de taxas para o uso de recursos naturais, reafirmando o seu caráter injusto do ponto de vista social. Nesse sentido, o respeito àquelas leis significaria mais um ônus financeiro sobre uma população que, por todo o processo analisado, vinha se pauperizando crescentemente.

Aquelas atividades proibidas, embora em menor grau e de forma clandestina, continuam a ser praticadas, pois a sua suspensão total praticamente inviabilizaria o modo de vida das populações tradicionais do Cerrado. Preferem correr o risco de serem multados e sofrerem outras penalidades por fazerem um desmate ilegal para um roçado a simplesmente parar de plantar suas lavouras. Muitos mantêm o mesmo raciocínio quanto à prática de atividades menos essenciais, como a caça, a retirada de madeira ou a produção de carvão; vários, no entanto, preferem abandonar tais atividades, por serem mais visadas pelos agentes de fiscalização ambiental.

Longe de se pretender questionar a importância da legislação ambiental, instrumento valioso na preservação do Cerrado e de outros biomas, o que ora está em questão são as falhas na sua aplicação. Como ocorreu com outras leis, no passado autoritário recente, tal aplicação continua, ainda hoje, muitas vezes, a reproduzir práticas de favorecimento ilícito, corrupção e injustiça social. Por outro lado, ao restringir várias possibilidades das estratégias tradicionais de reprodução daquelas populações, essa legislação não se preocupou com a questão social e, por consequência, com a ambiental, pois não há, na prática, como dissociá-las, porque não se preocupou em construir alternativas sustentáveis para a continuidade do seu modo de vida, empurrando-as simplesmente para a ilegalidade.

Construindo o futuro do e no Cerrado

Recentemente, em vários pontos da região do Cerrado, a exemplo do que acontece também em outros biomas, uma série de iniciativas vem se desenvolvendo no sentido de construir tais alternativas. Elas se configuram em pequenas experiências realizadas, isoladamente ou em conjunto, por comunidades rurais, indígenas, negras, ribeirinhas, assentamentos de Reforma Agrária, organizações não-governamentais, universidades, órgãos públicos, empresas, etc.

A Rede Cerrado de Organizações Não Governamentais realizou, na área desse bioma, uma pesquisa junto a 60 dessas iniciativas (Pires & Santos, 2000). Participei, como consultor, desse projeto que resultou no levantamento de variadas experiências, envolvendo:

- uso plantas medicinais;
- produção de mudas de espécies nativas do Cerrado;
- coleta de frutos nativos e sua industrialização;
- desenvolvimento da apicultura;
- manejo de pastagens nativas do Cerrado;
- extração de flores, folhas, frutos secos, fibras e madeira para trabalhos artesanais;
- realização de práticas em agroecologia e agrossilvicultura;
- manejo de espécies da fauna silvestre;
- ecoturismo;
- trabalho com educação ambiental.

Essas iniciativas e outras também em curso naquela região possuem alguns aspectos comuns, dentre os quais se destacam como os mais importantes os seguintes:

- crítica ao modelo de desenvolvimento recente do Cerrado, promovido a partir dos anos 1970;
- articulação de preocupações ambientais, socioeconômicas e culturais com vistas a combinar a preservação do meio ambiente com seu uso sustentável e socialmente justo;
- resgate e revalorização do conhecimento popular em diálogo com a ciência, como forma de pensar e realizar pesquisas e experiências de acordo com aquelas preocupações;

- pequeno investimento financeiro, comparado com o grande resultado social e ambiental conseguido por projetos, em sua maioria experimentais, que ainda lutam por conquistar, muitas vezes, um espaço no mercado;
- desenvolvimento local e participativo, com vistas à construção de projetos democráticos fundados na vivência concreta dos envolvidos, em contraposição a modelos predefinidos e autoritários;
- iniciativas não-governamentais e associativas, na perspectiva de consolidação de uma sociedade civil plural articulada em diferentes redes, desde o nível local até internacional.

Um dos aspectos mais importantes dessas iniciativas se refere à perspectiva de continuidade do patrimônio cultural sertanejo, construído ao longo da trajetória milenar da convivência humana no Cerrado. Os programas de desenvolvimento implantados nos últimos trinta anos representavam uma negação total do bioma: sua flora era destruída, servindo, quando muito, para produzir carvão; sua fauna desaparecia ou ficava restrita às poucas áreas de parque; seu solo tinha que ser “corrigido”, pois era quimicamente “pobre” para qualquer aproveitamento econômico; sua gente, apesar de viver ali há gerações, não era capacitada para aproveitar as riquezas daquele Eldorado, servindo, no máximo, de mão-de-obra barata. Tal qual os conquistadores típicos de histórias de aventura de romances e do cinema, seus empreendedores, deslumbrados com tamanha possibilidade de riqueza, quiseram possuí-la, indiferentes ao fato de que todo o fantástico templo onde ela se escondia estaria sujeito ao desmoronamento.

Alguns séculos depois, confirma-se a lenda de um Eldorado no Brasil Central, assim como existem outras maravilhas, em outras partes do mundo. O que ainda não se descobriu efetivamente é que seu segredo não está em encontrá-las, mas, sim, em como usufruir tantas riquezas. E mais ainda: elas não se resumem ao brilho fácil dos metais preciosos; seu valor está em todo o conjunto que as abriga, incluindo a vegetação, o templo, símbolo de uma cultura antiga e, principalmente, seus “primitivos” e “atrasados” guardiões, que a conservam há milênios.

Bibliografía

- Barbosa, Altair Sales & Pedro Ignácio Schmitz 1998 “Ocupação indígena do Cerrado - esboço de uma história”, en Sano, S.M. & S. P. Almeida (editores) *Cerrado: ambiente e flora* (Planaltina: EMBRAPA-CPAC).
- Brasil/ MMA. 1998 Pimeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica: Brasil (Brasília: Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal).
- Costa, C.C.C. *et al.* 1981 *Fauna do cerrado: lista preliminar de aves, mamíferos e répteis* (Rio de Janeiro: SUPREN).
- Costa Filho, Miguel 1958 “As terras dos Guedes de Brito nas Minas Gerais”, en *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* (Rio de Janeiro) Vol. 24.
- Couto, José Vieira 1905 (1801) “Memória sobre as Minas da capitania de Minas Gerais. Suas descrições, ensaios e domicílios próprios à maneira de itinerário”, en *Revista do Arquivo Público Mineiro* (Belo Horizonte) Vol. X.
- Cunha, Aécio S. (coordinador) 1994 *Uma avaliação da sustentabilidade da agri cultura nos cerrados* (Brasília: IPEA).
- Dias, Braulio F. de Souza 1996 “Cerrados: uma caracterização”, in Dias, Braulio F. de Souza *Alternativas de desenvolvimento dos cerrados: manejo e conservação dos recursos naturais renováveis* (Brasília: Fundação Pró-Natureza).
- Dias Jr., Ondemar Ferreira 1978/1980 “O Arcaico do interior brasileiro”, in *Temas de Arqueologia Brasileira* (Goiânia) Nº 9.
- Eschwege, Wilhelm Ludwig von 1979 (1833) *Pluto brasiliensis* (Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo).
- Eschwege, Wilhelm Ludwig von 1996 (1824) *Brasil, novo mundo* (Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais, Fundação João Pinheiro).
- Fundação João Pinheiro 1985 *Estudos para a redefinição do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados-POLOCENTRO: sumário executivo* (Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro).
- Galvão, Eduardo 1979 *Encontro de sociedades: índios e brancos no Brasil* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).
- Guanziroli, Carlos Enrique e Creuza Stephen Figueira 1986 *Cerrados: uma contra-reforma agrária capitalista* (Rio de Janeiro: IBASE).
- Holanda, Sérgio Buarque de 1936 *Raízes do Brasil* (Rio de Janeiro: José Olympio Ed).

Holanda, Sérgio Buarque de 2000 (1959) *Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil* (São Paulo: Brasiliense; Publifolha).

Ipea 1973 *Aproveitamento Atual e Potencial dos Cerrados* (Brasília: IPEA).

Jica-Agência de Cooperação Internacional do Japão 1994 *Assinatura do contrato de financiamento e contrato da terceira fase do Programa de Cooperação Brasil/Japão para o Desenvolvimento do Cerrado - PRODECER III* (Press release).

Jica/Embrapa 1991 *Relatório da avaliação conjunta nipo-brasileira sobre o projeto “suporte técnico-científico para desenvolvimento dos cerrados”* (Brasília) Mimeo.

Lévi-Strauss, Claude 1973 *Antropologia estrutural* (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro).

Macedo, Geraldo Antonio Resende 1978 *Dieta de novilho em pastagem nativa de cerrado* (Belo Horizonte: EPAMIG).

Miller Jr., Tom Oliver 1978/1980 “Os cultivadores do planalto e do litoral”, em *Temas de Arqueologia Brasileira* (Goiânia) Nº 2.

Pimentel, M. F. *et alli.* 1977 “Recursos hídricos no cerrado”, em Ferri, Mário Guimarães (coordenador) *IV Simpósio sobre o cerrado: bases para a utilização agropecuária* (Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo).

Pires, Mauro de Oliveira & Irene Maria dos Santos (org) 2000 *Construindo o Cerrado Sustentável: Experiências e Contribuições das ONG's* (Goiânia: Rede Cerrado).

Posey, Darrell A. 1986 “Manejo da floresta secundária, capoeiras, campos e cerrados (Kayapós)” in Ribeiro, Darci (editores) *Suma etnológica brasileira. Edição atualizada do Handbok of South American Indians* (Petrópolis: Vozes) Vol. 1.

Prous, André 1992 *Arqueologia brasileira* (Brasília: Editora da Universidade de Brasília).

Ramos, Arthur 1951 *Introdução à Antropologia Brasileira* (Rio de Janeiro: Editora Casa do Estudante do Brasil).

Resende, E. T. & A. Prous 1991 “Os vestígios vegetais do Grande Abrigo de Santana do Riacho”, in *Arquivos do Museu de História Natural* (Belo Horizonte) Vol. XII.

Ribeiro, José Felipe & Bruno Machado Teles Walter 1998 “Fitofisionomias do bioma Cerrado”, em Sano, S.M. & S. P. Almeida (editores) *Cerrado: ambiente e flora* (Planaltina: EMBRAPA-CPAC).

- Romano, Paulo Afonso 1985 “Organização da agricultura nos cerrados”, en *I Simpósio sobre o Potencial Agrícola dos Cerrados* (Campinas: Fundação Cargill/Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária).
- Saint-Hilaire, Auguste de 1975[a] (1830) *Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais* (Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo).
- Saint-Hilaire, Auguste de 1975[b] (1847) *Viagem às nascentes do rio São Francisco* (Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo).
- Salim, Celso Amorim 1986 “As políticas econômica e tecnológica para o desenvolvimento agrário das áreas de cerrados no Brasil: avaliação e perspectivas”, en *Cadernos de Difusão* (Rio de Janeiro).
- Salvador, Frei Vicente do 1918 (1627) *História do Brasil* (São Paulo: Weiszflog Irmãos).
- Sauer, Carl O. 1986 “As plantas cultivadas na América do Sul tropical”, in Ribeiro, Darci (editor) *Suma etnológica brasileira. Edição atualizada do Handbook of South American Indians* (Petrópolis : Vozes) Vol. 1.
- Senna, Nelson Coelho de 1908 “Os Índios do Brasil-Memoria Ethnographica”, en *Revista do Arquivo Público Mineiro* (Belo Horizonte) Ano XIII.
- Shiki, Shigeo 1995 “Sustentabilidade do sistema agroalimentar nos cerrados: em busca de uma abordagem incluyente”, in *Agricultura Sustentável* (Jaguariúna, São Paulo) Vol. 2, Nº 1.
- Silva, José Antônio *et alli*. 1994 *Frutas nativas dos cerrados* (Brasília: EMBRAPA/CPAC).
- Taunay, Afonso de Escagnolle 1999 *Zoologia Fantástica do Brasil (Séculos XVI e XVII)* (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Museu Paulista da Universidade de São Paulo).
- Teixeira Coelho, José João 1852 (1780) “Instrução para o Governo da Capitania de Minas Gerais”, in *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* (Rio de Janeiro) Vol. 24.
- Vasconcelos, Simão de 1977 (1663) *Crônica da Companhia de Jesus* (Petrópolis: Vozes).
- WWF/Procer 1995 *De grão em grão, o Cerrado perde espaço (Cerrado - impactos do processo de ocupação)* (Brasília: WWF).
- Zarur, George Cerqueira Leite 1986 “Ecologia e cultura: algumas comparações”, en Ribeiro, Darci (editor) *Suma etnológica brasileira. Edição atualizada do Handbook of South American Indians* (Petrópolis: Vozes) Vol. 1.

Notas

1 A pesquisa de campo foi apoiada pelo Programa "Natureza e Sociedade", do Fundo Mundial para a Natureza -WWF, resultando na tese "'Certão-Serrado': História Ambiental e Etnoecologia na Relação entre Populações Tradicionais de Minas Gerais e o Bioma do Brasil Central".

2 Em documento recente, o próprio Ministério do Meio Ambiente reconhecia que o Cerrado "já perdeu 40% da vegetação nativa e abriga alguma forma de utilização econômica em quase toda a área restante" (Brasil/MMA, 1998: 22).

*Conflicto ambiental y acción colectiva en Chile: el caso de la contaminación atmosférica de Santiago **

Fernando Marcelo de la Cuadra**

Presentación

Al momento de asumir el primer gobierno democrático civil (después de diecisiete años de dictadura militar), los principales actores políticos y sociales que participaban de la “reconstrucción democrática” del país estaban conscientes de los enormes desafíos que tenían enfrente para superar los innumerables obstáculos y problemas dejados como herencia por el régimen autoritario. Uno de esos desafíos consistía en elaborar una política que permitiera vencer los graves problemas medioambientales que se habían desatado por la puesta en práctica del modelo neoliberal impuesto por los militares y sus asesores.

Según un diagnóstico realizado por el Ministerio de Agricultura, al inicio de la nueva etapa democrática se pudo constatar la existencia de un acelerado proceso de deterioro del medio ambiente y destrucción de los recursos naturales. En particular “la fuerte expansión de la actividad privada, la ausencia de una adecuada normativa y la incapacidad del aparato estatal para cumplir su papel de garante e impulsor del bien común, provocaron un severo daño al medio ambiente colocando en peligro la sustentabilidad del crecimiento a largo plazo”. De esta forma, concluye el texto, “la experiencia de la fase expansiva de la economía chilena, bajo el modelo impuesto por el régimen autoritario, demostró de forma elocuente que el crecimiento económico puede coincidir con la agudización de la marginalidad y la pobreza, y con la sobreexplotación y deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente” (Ministerio de Agricultura, 1994: 19).

* El autor desea agradecer a Pablo San Martín por sus valiosos y documentados comentarios a una versión preliminar de este trabajo.

** Sociólogo, graduado en la Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Políticas de Desarrollo Agrícola y Rural del Curso de Post-graduación en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (CPDA/UFRRJ). Profesor Titular de la Universidad Alberto Hurtado.

A pesar de este diagnóstico y de las diversas declaraciones de intenciones pronunciadas por innumerables personeros de gobierno, la experiencia acumulada demuestra que los sucesivos gobiernos de la Concertación han sido incapaces de revertir los procesos de deterioro ambiental en curso, tal como lo atestiguan diversos informes elaborados en los últimos años. En uno de ellos se constata que cada vez existen más evidencias de que muchos sectores han experimentado un impacto ambiental negativo, debido justamente “al imperio de un modelo económico claramente depredador, que no sigue la senda del desarrollo sustentable y que merece un minucioso examen desde una perspectiva social, cultural y ecológica” (Altieri y Rojas, 1999: 128).

La contaminación atmosférica de Santiago

En este sentido, los problemas de contaminación de Santiago pueden considerarse un caso emblemático de la incapacidad de los gobiernos democráticos para revertir las serias consecuencias que han tenido sobre la salud y la calidad de vida de la población el aumento excesivo del parque automotor y la implantación de un sistema de transporte indiscriminado que no ha tenido ningún tipo de normas o mecanismos que lo regulen.

La contaminación de Santiago no es un fenómeno reciente; sin embargo, en la última década ha tomado ribetes dramáticos. Cada año son miles las personas, en particular niños y adultos mayores, que se ven afectados en su salud por los altos niveles de contaminación atmosférica existente. Pese a que desde hace varios años se realizan esfuerzos por disminuir la ocurrencia y los graves efectos de este fenómeno, hasta el momento tales iniciativas no han conseguido disminuir significativamente las consecuencias que dicha contaminación tiene sobre la salud de la población, transformándose en un inquietante y complejo problema de salud pública. Esta complejidad se expresa especialmente en la multidimensionalidad que presenta este fenómeno (epidemiológica, meteorológica, política, económica, social, técnica, etc.) y en la gran gama de intereses contrapuestos entre los diversos agentes que provocan su profundización y los actores involucrados en buscar alternativas de solución. A continuación intentaremos desglosar los diferentes componentes de esta problemática.

Factores causantes de la contaminación

Santiago es en la actualidad una de las tres ciudades más contaminadas del mundo. Por lo mismo, los lectores se preguntarán con razón: ¿por qué causa esta ciudad tiene tan serios problemas de contaminación? Podríamos responder en una frase sintética que la contaminación de Santiago es producto de un desajuste funcional entre las características del medio natural sobre el que se fundó y creció la

ciudad, y los efectos del crecimiento caótico de su casco urbano. Es decir, una parte de la respuesta se encuentra en las características meteorológicas de la región donde se encuentra emplazada la capital de Chile. Los factores climáticos que en otras ciudades ayudan a la dispersión de contaminantes, en Santiago se encuentran ausentes o son desfavorables para dicho propósito. Ello se debe a la presencia simultánea del Anticiclón del Pacífico y del fenómeno de inversión térmica.

El Anticiclón del Pacífico es un sistema de altas presiones que da origen a un clima estable, cálido y soleado en verano; y estable, frío y despejado en invierno. Por su parte, la inversión térmica se origina por este predominio de altas presiones. Consiste en un aumento de la temperatura del aire con la altura, que se sitúa entre los 700 y 1.000 msnm (metros sobre el nivel del mar) en invierno. Esta condición impide el ascenso del aire y, por consiguiente, la dispersión vertical de contaminantes. Lo anterior implica que sobre la zona central se genera un verdadero techo, que impide la mezcla del aire inferior con el superior. En esta situación, las partículas de aire que tratan de subir desde la capa inferior encuentran aire más cálido que impide su ascenso. En forma adicional, y principalmente durante los meses de otoño e invierno, existe una capa de inversión causada por el enfriamiento de la superficie terrestre. Esta inversión térmica radiactiva de superficie normalmente se debilita durante el transcurso del día por el efecto de la radiación solar. El patrón de vientos superficiales también ayuda a la contaminación, pues en la mañana y durante el día los vientos soplan desde el sector sur poniente (zona industrial Cerrillos) hacia la ciudad, llevando los contaminantes emitidos por las innumerables industrias que están instaladas en esa área circundante de la ciudad.

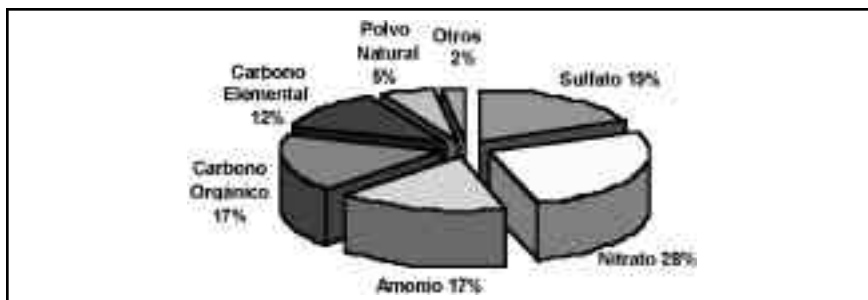
Las condiciones meteorológicas en el verano logran ventilar la cuenca (mayor velocidad del viento y menor potencia de la inversión térmica). En cambio, durante el invierno no se produce el efecto anterior, lo que redundará en una recirculación de los contaminantes en la cuenca y el sucesivo aumento de contaminantes a través de los días. Por lo tanto, a los problemas de recirculación del aire contaminado que generan las industrias, se suman las consecuencias de la alta concentración de las personas que habitan en la Región Metropolitana. Durante los últimos veinte años esta región ha venido experimentando notables procesos dinámicos de expansión urbana y crecimiento demográfico. En efecto, según estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2000), en Santiago y alrededores se congrega actualmente el 35,6% de la población del país, y se espera que para el año 2005 ésta supere el 40%. Actualmente su población alcanza los 6 millones, y se estima que en el año 2022 la capital de Chile llegará a congregarse casi 8 millones de personas. Su densidad demográfica también es la mayor del país, llegando a tener 332 hab./km², mientras que el promedio nacional es de 18 hab./km². Producto de este crecimiento demográfico, Santiago se ha expandido a un ritmo acelerado en los últimos años¹, principalmente hacia la periferia sur y sur poniente, justamente aquellas zonas desde donde provienen los flujos matinales de aire contaminado.

La composición del material particulado

Con relación a las fuentes de polución existentes en Santiago, análisis recientes efectuados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) señalan que el ozono (O₃), el monóxido de carbono (CO) y el material particulado respirable (PM₁₀ y PM_{2,5}) son los principales contaminantes a los que se expone diariamente la población que habita en nuestra ciudad². Sin embargo, por sus características, el PM_{2,5} se ha constituido en el principal y más nocivo agente contaminante, puesto que representa el material particulado de fracción más fina³. Prácticamente no existen barreras naturales para que estas partículas no sean inhaladas por los seres humanos, causando de esta manera los mayores daños a la salud de la población. La presencia excesiva de este material en el aire es lo que ha provocado la declaración de situaciones de alto riesgo con la consecuente aplicación de medidas de emergencia en la ciudad de Santiago.

Las emisiones de CO fueron reducidas a partir de la restricción de la principal fuente de contaminación, los vehículos no catalíticos. Desde septiembre de 1992 se impuso la obligación de que todos los vehículos livianos debían incorporar un convertidor catalítico. Los vehículos de fabricación anterior a esa fecha que no contasen con este artefacto, tienen prohibición de circular en determinados días de la semana durante la mayor parte del año (medida en vigor durante 10 meses de cada año). Esto ha significado una disminución de las emisiones provocadas por autos sin convertidor catalítico, ya sea por la vía de la renovación del parque de vehículos, o por el menor uso de los vehículos antiguos. En el caso de las emisiones de ozono, éstas representan el mayor problema en un futuro cercano, pues son producidas por la reacción fotoquímica entre el óxido de nitrógeno (NO_x) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Ambos agentes precursores del ozono seguirán siendo emitidos cada vez en mayor proporción por las distintas fuentes contaminantes⁴. Por su parte, el material particulado respirable está constituido por una mezcla de partículas directamente emitidas a la atmósfera y por otras formadas en el aire por la transformación química de gases precursores (partículas secundarias), encontrándose los compuestos más agresivos para la salud de la población entre la fracción fina de este material.

Figura 1
Composición promedio del PM_{2.5} en Santiago, julio-agosto de 1999



Fuente: CONAMA, 1999.

La Figura 1 presenta una estimación de la composición promedio en la ciudad de Santiago del PM_{2,5}, obtenida de un análisis realizado entre mediados de julio y fines de agosto de 1999. Se ha encontrado que los aerosoles secundarios (sulfato, nitrato y amonio) representan el orden del 60% del PM_{2,5}, mientras el 30% corresponde a compuestos derivados de carbono, y el resto a polvo natural y otros elementos como metales.

El carbono orgánico y el carbono elemental son el resultado de la combustión de combustibles fósiles (diesel, gasolinas, industrial) y de compuestos orgánicos volátiles (emisiones evaporativas). En el caso de los aerosoles secundarios, el sulfato proviene de transformaciones de emisiones de dióxido de azufre (SO₂), que son causadas por fuentes móviles (vehículos) e industriales; el nitrato que proviene de transformaciones de emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x), también causado por fuentes móviles; y el amonio que deriva de emisiones de amoníaco (NH₃), el cual es generado por autos catalíticos, aguas servidas y pesticidas utilizados en la agricultura. Si bien las proporciones anteriores pueden variar a medida que se mejora el conocimiento de la contaminación atmosférica en Santiago, es claro que el control de los precursores de aerosoles secundarios toma vital importancia si se pretende reducir el impacto del material particulado en la salud de los habitantes. Asimismo, el aporte del polvo natural (calles con y sin pavimentar, construcción, etc.) es menor del que intuitivamente se creía, no sólo en el PM_{2,5}, sino también en el PM₁₀, donde se estimó de 15 a 30% para el mismo período de la Figura 1 (CONAMA, 1999: 8).

Sobre la base de la superación de las normas válidas en el país para material particulado respirable, ozono y monóxido de carbono, durante el invierno del año 2000 la ciudad de Santiago fue declarada zona saturada por dichos contaminantes. También fue declarada zona latente por NO₂, ya que las concentraciones de este contaminante superaban el 80% de la norma. Se ha establecido con precisión que los vehículos de la locomoción colectiva son responsables de una proporción significativa de los gases emitidos a la atmósfera, como así también los automóviles a gasolina, sobre todo aquellos que no tienen convertidor catalítico (especialmente en el caso del CO). Además, investigaciones realizadas en el último tiempo han demostrado que los autos con convertidor catalítico son responsables de un porcentaje importante del material particulado respirable, especialmente de la fracción fina PM_{2,5}. Volveremos sobre este punto posteriormente.

Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud

Como ya es ampliamente sabido, la contaminación atmosférica tiene graves efectos sobre el bienestar de las personas debido a su incidencia en la salud de la población, en la visibilidad, en el olfato, etc. Los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de la población pueden ser de tres tipos: agudos, crónicos y diferidos⁵.

Existe una variedad de estudios epidemiológicos que se han propuesto medir los efectos que tiene la contaminación sobre la salud. Uno de esos trabajos sostiene que la contaminación es la causante directa del aumento en el número de admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias en adultos y niños⁶, visitas de emergencia, ataques de asma y enfermedades crónicas asociadas a la mortalidad (Ostro, 1992). Para el caso de Santiago, otro estudio del gobierno regional relacionó el material particulado con los graves efectos en la salud de la población de la capital, al comparar las estadísticas de atención hospitalaria de esta ciudad con la existente en la ciudad de Los Andes, ubicada en la precordillera de la región central de Chile. (Gobierno Región Metropolitana, 1999).

Otra línea de investigaciones se ha dedicado específicamente a determinar los costos económicos de las enfermedades asociadas con la contaminación atmosférica. Esta línea se desarrolló en los últimos años, ya que a pesar de la evidencia de que existía una clara asociación entre contaminación y estado de la salud, no se habían realizado muchos esfuerzos para llegar a estimar con precisión el costo que representa para el sistema sanitario del país la mayor incidencia de enfermedades respiratorias. Dado lo anterior, se realizaron algunas investigaciones orientadas específicamente a determinar estos costos. En una de ellas se ha considerado que los costos asociados con morbilidad debido a la contaminación son de tres tipos: a) costos médicos directos, tanto por prevención como por tratamiento; b) costos por productividad perdida por la enfermedad (días de trabajo perdido); y c) costo de oportunidad del tiempo perdido y por la disminución del bienestar del paciente. Considerando solamente los costos por tratamiento ambulatorio, este estudio concluye que frente a una reducción de un 50% en el PM10 las consultas respiratorias podrían disminuir en un 20%, lo que en la actualidad representa aproximadamente unas 200 mil consultas en la ciudad de Santiago (Sánchez y Morel, 1997: 170).

Las primeras medidas para detener la contaminación

Sosteníamos en líneas previas que uno de los factores coadyuvantes de la contaminación atmosférica es el crecimiento desordenado de la ciudad de Santiago y, especialmente, de su red de transporte urbano. Esta dinámica caótica del sistema urbano presenta fuertes impactos sobre el cotidiano de los habitantes de la ciudad, especialmente si consideramos la existencia de instrumentos incipientes de planificación y coordinación en este ámbito: desregulaciones, *laissez faire*, y también deliberadas políticas neoliberales han provocado procesos de segregación socio-espacial, desequilibrios en el sistema de localización y producción de actividades económicas, aumentos en la presión ambiental sobre la cuenca, así como desajustes en la malla de transporte y redes viales.

Sumado a lo anterior, la implantación de una política caótica de importación de vehículos implicó que el parque automotor de la ciudad de Santiago aumentase en un 150% en la última década. Tal falta de planificación ha significado que en la actualidad exista aproximadamente 1 millón de autos particulares, cuando hace solamente diez años esta cifra no superaba las 400 mil unidades. Apreciaciones del Ministerio de Transporte señalan que el parque de 15 mil vehículos de la locomoción colectiva y 30 mil taxis está sobredimensionado, aproximadamente en un 36%. Efectivamente, durante el régimen militar el Ministerio de Transporte decretó la libertad de recorrido, lo cual significó la eliminación de todas las barreras de entrada a la importación de vehículos y de todas las regulaciones en los recorridos: quien quería prestar servicio de transporte público pudo hacerlo sin necesidad de pedir autorización alguna, hasta el punto de que cuando el gobierno democrático asumió en 1990, en el Ministerio de Transporte no existía ni una lista de los recorridos activos en ese momento ni un registro de los vehículos que estaban prestando servicio. Los casi 7 mil propietarios y mini-empresarios que operaban en esa fecha se organizaron en un sindicato, cuyo comportamiento económico “tuvo las características de un verdadero cartel” (Van Hauwermeiren, 1995: 210-211).

En consecuencia, Santiago, la ciudad capital, se encontraba a inicios de los años ‘90 al borde del colapso ambiental, lo cual hacía imprescindible tomar medidas de emergencia tanto para disminuir el flujo de vehículos en circulación como para frenar el desmesurado crecimiento de la ciudad. Para ello era menester impulsar con osadía una política de despoblamiento y descongestión y de su núcleo central, es decir, del centro cívico. Como los resultados de estas políticas ciertamente no habrían de apreciarse en el corto plazo, se requirió pensar en políticas e instrumentos de corto plazo que permitieran amainar, aunque fuera en parte, los efectos del crecimiento desmedido de la ciudad y, muy especialmente, se hizo necesario ejecutar acciones que permitieran frenar la agudización de la contaminación ambiental, por el fuerte impacto que estaba teniendo sobre la salud física y mental de sus habitantes.

Así es como, con el advenimiento de la democracia, el primer gobierno de la Concertación decidió formar en 1990 la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, la cual quedó encargada de elaborar y desarrollar los planes de descontaminación y de coordinar los esfuerzos desplegados por las diversas entidades estatales. Este Plan de Descontaminación incluyó dos líneas de acción autónomas, a saber: a) el Plan Maestro de disminución permanente de las emisiones; b) el Programa de Emergencia.

El Plan Maestro consistía en establecer un sistema de monitoreo de la calidad del aire, un programa de vigilancia epidemiológica de los efectos de la contaminación sobre la salud de las personas, un programa de tratamiento para el tratamiento de afecciones respiratorias agudas, planes específicos de rebaja de emi-

siones para buses, automóviles, industrias, residencias, fuentes de polvo natural y reforzamiento de los sistemas de fiscalización y control.

El Programa de Emergencia consistía en un conjunto de medidas que tenían por propósito evitar los graves daños de la polución a la salud de la población. Entre las medidas consideradas habría que destacar la disminución o limitación de entre el 20% y el 40% del transporte cuando los índices de contaminación superasen el nivel permitido (entre 300 y 500), así como también el 20% de las emisiones industriales. Cuando los índices superaban el nivel 500, se determinó hasta un 60% de restricción en el transporte y hasta un 40% de corte en las emisiones industriales. Como mencionamos anteriormente, estas restricciones de circulación vehicular no operaban en el caso de automóviles con convertidor catalítico, cuya importancia numérica en el parque automotor ha crecido constantemente, debilitando la eficacia de la medida de restricción vehicular obligatoria. Estas medidas de emergencia siguen vigentes hasta la actualidad, debido a que fueron incorporadas en la nueva estrategia de descontaminación instaurada a partir de 1998.

El Plan de Prevención y Descontaminación de Santiago

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA) comenzó a formularse a partir de octubre de 1996, proceso que culminó con su promulgación en junio de 1998. Este nuevo plan surge por la evidente incapacidad demostrada por el Plan Maestro y el Plan de Emergencia en producir resultados positivos en el combate a la contaminación. El nuevo PPDA buscaba superar las deficiencias detectadas en los planes anteriores que operaron en forma autónoma, proponiéndose desde un comienzo definir un marco completo e integral para enfrentar la contaminación, imponiendo metas de reducción para cada actividad responsable y plazos claros para su cumplimiento. Sin embargo, desde un comienzo este plan no estuvo libre de problemas de credibilidad pública, lo cual llegó a comprometer seriamente el compromiso de la comunidad en su aplicación.

Un camino de solución a esta falta de credibilidad y compromiso de la ciudadanía consistió en convocar a diversos actores vinculados de una u otra manera a los problemas de la contaminación de Santiago, con el fin de participar en la elaboración de una propuesta programática y de actividades que sería incorporada en el PPDA de esa ciudad. Para ello se convocó a más de trescientos representantes de diversos ámbitos para discutir y analizar en talleres los principales problemas causados por la contaminación, visualizando seguidamente las posibles vías de solución. A partir de estos encuentros, los participantes conformaron diversos equipos de trabajo que se abocaron a la tarea de elaborar propuestas por temas específicos, las que dieron forma a un documento donde se identificaron una infinidad de acciones necesarias para reducir la contaminación (CONAMA, 1997).

Bajo el nombre de “Santiago limpia el aire de Santiago”, el documento en cuestión contiene un completo abanico de propuestas de acción concretas. Específicamente, se trata de doscientos sesenta y tres instrumentos de gestión de la calidad del aire que se suponía deberían ponerse en práctica. Sin embargo, fue tan grande el número de instrumentos y líneas de acción contempladas que, a la postre, fue imposible poder llevarlos a cabo con éxito, generando nuevamente una sensación de frustración por parte de las organizaciones y actores involucrados en su gestación. En consecuencia, al poco tiempo de haber salido a la luz, este documento se ha transformado en una declaración de buenas intenciones, es decir, en todo lo contrario de lo que sus principales creadores e impulsores concibieran originalmente⁷.

Otra vía de solución al problema ha consistido en la implementación de políticas públicas desde las distintas reparticiones vinculadas al tema, en este caso la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte o el gobierno regional y sus respectivas Secretarías. A continuación analizaremos los efectos de una de dichas políticas.

Las nuevas medidas del gobierno y la acción colectiva

Uno de los aspectos en que las autoridades consideraron necesario y posible implementar medidas de carácter urgente tiene relación con la disminución del flujo vehicular en la ciudad. Al respecto, profesionales de la Secretaría Regional de Transporte idearon un sistema de “vías exclusivas” para la circulación de vehículos de locomoción colectiva. La finalidad de esta medida consiste en que los ciudadanos que se movilizan diariamente en sus vehículos los dejen en su casa para pasar a trasladarse en medio de locomoción colectiva, con lo cual se disminuiría el flujo vehicular. En Santiago, diariamente las personas realizan más de 10 millones de viajes. Si todos estos viajes fueran realizados por automóviles particulares, las calles y vías transitables quedarían totalmente colapsadas. A diferencia de ello, los buses, el metro y el tren poseen mucha mayor capacidad para el traslado de personas. Un estudio en el que se comparan las emisiones por el traslado de cada persona que viaja en un kilómetro, en automóviles y microbuses, arrojó el siguiente resultado:

Cuadro 1
Contaminantes emitidos por traslado de pasajeros en autos y buses
(gramo/pasajero por kilómetro transportado)

Contaminante	Automóviles	Buses
Material particulado respirable (PM10)	0,73	0,55
Monóxido de carbono (CO)	8,52	0,22
Óxidos de nitrógeno (NOx)	0,98	0,24
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	0,81	0,06
Anhídrido sulfuroso (SO2)	0,08	0,04

Fuente: CONAMA, 1999.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el transporte público contamina bastante menos que el automóvil en promedio por pasajero. En este sentido, la concepción que está detrás de la implantación de las vías exclusivas para microbuses es que tal medida evitaría embotellamientos y, en consecuencia, disminuiría la emisión de contaminantes al permitir un tránsito más fluido de la locomoción colectiva, sin tantas detenciones ni aceleraciones por recorrido, lo cual representa una de las principales razones de emisión de partículas al aire. Las vías exclusivas se aplican en aquellas arterias generalmente más congestionadas, impidiendo entre determinados horarios (a partir de la 7 de la mañana y hasta las 19 horas) el paso de vehículos particulares. Ello, a su vez, también reduciría el tiempo de traslado de las personas a sus puntos de destino, por lo cual el sistema como un todo se beneficiaría. No obstante las ventajas que en teoría podía representar la aplicación de las vías exclusivas, amplios sectores de la ciudadanía, la prensa y grupos de oposición se mostraron sumamente reacios a esta medida. Un argumento común esgrimido por la mayoría de los “afectados” fue que las vías exclusivas coartaban la libertad de circulación de las personas.

Las aprensiones y rechazos expresados por estos diversos actores nos permiten pensar que el éxito o el fracaso de una medida de este tipo supone una transformación radical de los actuales parámetros de comportamiento mostrados por la población que se moviliza en autos particulares. Ello nos remite al problema de la acción colectiva en la obtención de bienes públicos. Tales cuestiones han tenido un tratamiento a partir de la teoría de la acción colectiva y su desarrollo posterior en la teoría de juegos.

La teoría de la acción colectiva ha sido expuesta por diversos autores, pero seguramente fue Mancur Olson quien le dio el status que posee en la actualidad. El punto de partida para Olson es su rechazo a aquellas teorías que suponen que el interés común lleva a los individuos a organizarse para alcanzar sus objetivos

ya que, según él, una vez que las personas integran las organizaciones siguen actuando en su propio interés, perjudicando los objetivos del grupo. Así, el carácter racional y egoísta del comportamiento de los individuos avala la idea de que los miembros de cualquier grupo -en especial los grupos grandes- tratarán racionalmente de maximizar su bienestar personal, dejando de lado los intereses comunes del colectivo que integra, a menos que existan formas de coacción o algún tipo de incentivo que los ayude a “soportar los costos o las cargas que implica el logro de los objetivos del grupo” (Olson, 1992: 12).

Desde esta perspectiva se puede afirmar en pocas palabras que el problema de la acción colectiva consiste en el fracaso que reviste para el grupo el hecho de que individuos egoístas y racionales no están dispuestos -a partir de una iniciativa espontánea- a trabajar para obtener un bien público o a promover el bien común que beneficie a la colectividad. Uno de los desdoblamientos del problema de la acción colectiva, que se ha desarrollado con bastante intensidad en el último período, consiste en la modalidad del juego llamado “dilema del prisionero”⁸. A pesar de que la historia original del dilema del prisionero se refiere a dos individuos frente a la decisión de cooperar o no cooperar, posteriormente este dilema ha sido utilizado, sobre todo, para analizar situaciones de cooperación y no-cooperación entre los individuos y la colectividad. En pocas palabras, este dilema muestra cómo la racionalidad individual puede conducir a la irracionalidad colectiva, esto es, a un resultado global no deseado por nadie (Aguiar, 1995: 10-11).

En el caso de los automovilistas de Santiago, este dilema se puede traducir de la siguiente manera. Un individuo con auto ha podido optar entre seguir las recomendaciones del gobierno y utilizar los medios de transporte público, ayudando de este modo, junto al resto de los automovilistas, a descongestionar la ciudad. Ese mismo individuo puede conducirse en forma oportunista, optando preferentemente por ir a trabajar en su vehículo propio, esperando que los demás lo dejen en la casa, con lo cual el tránsito quedará descongestionado para él, sin tener que pagar el costo de tomar el transporte colectivo. Pero si los demás decidieran no cooperar, este individuo no tendría motivos para hacerlo unilateralmente, no mejoraría el tránsito y él sería el único perjudicado. El resultado más perjudicial de dicho dilema es que al final nadie coopera, aumentando el número de vehículos en circulación con sus consecuentes efectos negativos sobre la calidad del aire. Si bien es cierto, un desarrollo posterior de la teoría de juegos supone que cuando un evento es realizado en repetidas oportunidades, los individuos están dispuestos a mejorar su comportamiento en futuras ocasiones (es decir, cooperar) apostando a un mejor desenlace del juego, en la medida que la alternativa “nadie coopera” es también perjudicial a los propios intereses racionales y egoístas de cada uno de los jugadores.

En el caso específico que estamos analizando, hasta el momento se puede constatar que sigue vigente la opción de no cooperar en el conjunto de la población de

Santiago. Pensamos que ello es expresión de la actual fase por la cual transita la sociedad chilena, marcada por el individualismo y la desconfianza en los “otros”, rasgos que fueron fortalecidos durante los 17 años del régimen militar.

Consecuentemente, el resultado concreto de este dilema aplicado en la situación de Santiago, es que casi la totalidad de las personas que poseen vehículos han escogido ir a trabajar en ellos, no colaborando con las recomendaciones de las autoridades. Ello, por cierto, generó un resultado tanto no deseado por nadie como inevitable: las arterias de la ciudad siguieron congestionadas, la contaminación producida por las emanaciones de los vehículos no declinó, y los problemas de salud que tales emanaciones conllevan siguieron afectando al conjunto de los habitantes de la capital⁹.

A modo de conclusión, quisiéramos señalar que los problemas de contaminación del aire en el Gran Santiago son la más clara expresión de las nefastas consecuencias ambientales que tuvo la aplicación en nuestro país de un modelo económico impuesto a ultranza, sin ningún tipo de regulaciones y que velaba exclusivamente por los intereses de algunos grupos y agentes productivos con influencia en el gobierno. Por su parte, los sucesivos gobiernos de la Concertación no han sido capaces de revertir esta herencia nefasta dejada por el régimen autoritario, pese a los varios esfuerzos que se han realizado en la última década. Si bien es cierto que en los últimos dos años se hicieron avances en este sentido, las mismas autoridades encargadas de darle solución al problema han reconocido que las medidas aplicadas hasta ahora siguen siendo insuficientes para lograr que el aire de Santiago sea respirable en el mediano plazo. Dificultades en la gestión de los acuerdos, aumento de la actividad industrial en la región, falta de credibilidad de la comunidad y escasa cooperación de los habitantes son algunos de los problemas aún no resueltos, que deberán ser encarados con mayor determinación en los próximos años.

Bibliografía

- Aguiar, Fernando 1995 “La lógica de la cooperación”, en Aguiar, Fernando (compilador) *Intereses individuales y acción colectiva* (Madrid: Editorial Pablo Iglesias).
- Altieri, Miguel y Alejandro Rojas 1999 “La tragedia ecológica del ‘milagro’ chileno”, en *Persona y Sociedad* (Santiago de Chile) Vol. XIII, Nº 1, 127-141.
- Claro Mimica, Jorge 1997 “El rol del Estado en el control de la contaminación”, en Varas, Juan Ignacio (editor) *Economía del Medio Ambiente en América Latina* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile) 265-281.
- Comisión Nacional del Medio Ambiente 1997 *Santiago limpia el aire de Santiago* (Santiago: CONAMA-Dolmen Ediciones).
- Comisión Nacional del Medio Ambiente 1999 *Propuesta de Bases para una Política Ambiental Regional* (Santiago: CONAMA).
- Comisión Nacional del Medio Ambiente 2000 *Diagnóstico de la calidad del aire y sus impactos en la salud. Antecedentes para la actualización del PPDA* (Santiago: CONAMA).
- Gobierno Región Metropolitana 1999 *Plan Regional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial* (Comité Técnico Ejecutivo: Santiago).
- Jiliberto, Rodrigo 2000 “¿Qué Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica necesitamos?, presentación realizada en el V Taller de Ciudades Limpias (Santiago) manuscrito cedido por el autor.
- Instituto Nacional de Estadísticas 2000 *Anuario Estadístico* (Santiago: INE).
- Makroconsult 2000 *Modelo de saturación urbana o de crecimiento óptimo de la ciudad de Santiago* (Santiago de Chile) Agosto.
- Ministerio de Agricultura 1994 *Política Agro-rural 1990-1993* (Santiago: Oficina de Estudios y Política Agrícola – ODEPA).
- Olson, Mancur 1992 *La Lógica de la Acción Colectiva. Bienes Públicos y la Teoría de Grupos* (México: Limusa/Noriega).
- Ostro, Bart 1992 *Generic Estimates of the Economics Effects of Criteria Air Pollutants: A Review and Synthesis* (Washington) documento no publicado preparado para el Banco Mundial.
- Sánchez, José Miguel y José Tomás Morel 1997 “Una estimación de los beneficios en salud de reducir la contaminación en Santiago”, en Varas, Juan Ignacio (ed.) *Economía del Medio Ambiente en América Latina* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile) 155-178.

SERPLAC/ILPES 2000 *Estrategia de Desarrollo Regional* (Santiago).

Van Hauwermeiren, Saar 1995 “Consecuencias del crecimiento económico sobre el medio ambiente: casos ilustrativos”, en Quiroga, Rayen (editor) *El Tigre sin Selva. Consecuencias ambientales de la transformación económica de Chile* (Santiago de Chile: Instituto de Ecología Política) 197-245.

Notas

1 Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Vivienda, la ciudad ha crecido un promedio de 6 mil hectáreas en los últimos años, llegando en la actualidad a ocupar una superficie de más de 70 mil hectáreas, lo que representa un tercio de la superficie cultivable de toda la región metropolitana. Por su parte, estudios recientes también constatan que la ciudad de Santiago se devora cada año cientos de hectáreas de terrenos fértiles, lo cual, de mantenerse como tendencia, hace prever que para el año 2010 el ritmo de crecimiento del suelo urbano de la región alcanzará a una tasa del 17%, llegando a ocupar prácticamente 100 mil hectáreas de superficie. Para mayores antecedentes se puede consultar, entre otros, SERPLAC/ILPES (2000), Makroconsult (2000), Gobierno Región Metropolitana (1999).

2 Otro contaminante emitido en el aire de Santiago es el dióxido de nitrógeno (NO₂), para el cual no existe información validada por parte de los organismos competentes (SESMA y CONAMA).

3 Entre los contaminantes que conforman la fracción fina de material particulado respirable destacan los aerosoles secundarios (sulfato, nitrato, amonio) y los derivados del carbono.

4 El primero de estos contaminantes (NO_x) es emitido principalmente por la locomoción colectiva, y el segundo de ellos (COV) se reparte entre fuentes fijas y fuentes móviles. Entre las fuentes fijas, destaca la emanación producida por la combustión de gas licuado, en las pinturas al aerosol, etc. Entre las fuentes móviles, nueve décimos de las emisiones provienen de los autos y el décimo restante de los vehículos de locomoción colectiva.

5 Los efectos agudos generalmente corresponden a los cuadros clínicos que predominan en el invierno e incluyen: conjuntivitis, faringitis, laringitis, bronquitis, irritación de mucosas, enfisemas, cardiopatías coronarias, crisis asmáticas y, en general, disminución de la capacidad del sistema inmunológico. Los efectos crónicos se deben a la exposición continua de contaminantes por períodos largos de tiempo, lo cual incrementa la incidencia de enfermedades crónicas como asma bronquial, enfisema pulmonar y bronquitis obstructiva. Por su parte, los efectos diferidos son provocados por la presencia de contaminantes de alta reactividad que pueden dañar el material genético y que pueden causar mutagénesis y carcinogénesis.

6 Las enfermedades respiratorias más frecuentes son rinofaringitis aguda, sinusitis aguda, faringitis aguda, laringotraqueítis aguda, inflamación aguda de las vías respiratorias, bronquitis no especificada, bronquitis-bronqueolitis, asma bronquial, neumonías y bronconeumonías.

7 Uno de los artículos más lúcidos que se han escrito con relación al fracaso del PPDA sostiene en una de sus secciones: “En la aplicación del PPDA es evidente que la institucionalidad y buena parte de la sociedad no están preparadas para asumir el plan y no se interesa en lo más mínimo por intervenir favorablemente en la parte del sistema que le corresponde” (Jiliberto, 2000: 3).

8 Se lo denominó de esta forma debido a que el primer ejemplo que aparece en la literatura sobre el tema se refiere al hecho de que dos prisioneros sospechosos de un crimen son conducidos a prisión e interrogados por separado. Si ambos confiesan se les condena a diez años de prisión a cada uno, en lugar de los veinte de la pena completa, por haber colaborado con la justicia. Si no confiesa ninguno, tan sólo se les puede condenar a cinco años de cárcel. Pero si uno confiesa y el otro no, el que lo hace queda libre (como premio a su arrepentimiento) y el otro va a prisión veinte años.

9 Al momento de escribir estas líneas, las autoridades han decidido introducir un nuevo componente al Plan de Transporte Urbano, las llamadas “vías segregadas”. Estas consisten en definir un tránsito diferenciado en la Alameda (la principal arteria de la ciudad), con pistas exclusivas para buses y pistas exclusivas para automóviles. La medida ya está generando una gran polémica entre taxistas y automovilistas.

Conflito social e risco ambiental: o caso de um vazamento de óleo na Baía de Guanabara

Henri Acselrad* e Cecília C. do A. Mello**

A partir de 1997, uma série de acidentes industriais ampliados foi observada no curso das atividades da Petrobrás, grande empresa estatal brasileira do setor petróleo. De vazamentos de óleo a explosões em plataformas marítimas, esses episódios foram vistos, ao mesmo tempo, como acidentes de trabalho e catástrofes ambientais, suscitando simultaneamente debates sobre segurança industrial e política de terceirização/privatização, sobre movimentos grevistas e gestão de riscos associados a grandes empreendimentos industriais. A complexidade desse entrelaçamento entre processos sociais e ecológicos, materiais e simbólicos, evidenciada por essa série de eventos, será aqui analisada em polêmica com a crescentemente difundida teoria da sociedade de risco, de Ulrich Beck, tendo como ponto de partida o estudo de caso do vazamento de óleo da Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ocorrido em janeiro de 2000.

A Sociedade de Risco de Ulrich Beck

O “risco ecológico”, para o sociólogo alemão Ulrich Beck, resulta da potência disruptiva – “revolucionária” - da tecnologia, como culminância de um processo de dominação técnico-científica da racionalidade instrumental. A potência destrutiva das técnicas avançadas da química, do nuclear e da engenharia genética se caracterizaria por seu caráter espaço-temporal ilimitado/indeterminado.

* Professor do IPPUR/UFRJ e pesquisador do CNPq.

** Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/Museu Nacional/UFRJ.

Beck apresenta-nos, assim, uma teoria “cognitivista” do risco -a sociedade é destrutível por suas tecnologias e confronta-se reflexivamente com as consequências indesejáveis de sua própria dinâmica reprodutiva. O risco técnico contemporâneo chega, de acordo com o autor, a redefinir o próprio social, o que permite a Beck configurar sua teoria da sociedade de risco, segundo a qual o risco é o princípio axial de organização do social, e o conhecimento é o princípio axial do risco.

Duas grandes implicações analíticas decorrem da Teoria da Sociedade de Risco de Beck (1992; 1994; 1995):

O destino da sociedade coloca-se nas mãos dos “experts” técnico-científicos. A Ciência e a Tecnologia não apresentam as soluções para a crise ambiental, mas constituem a instância de poder sobre a informação e sobre a avaliação do risco, configurando uma “irresponsabilidade organizada” que reproduz o poder dos técnicos.

A crise ecológica decorre de uma inadequação institucional, pois haveria uma diferença entre o risco na sociedade industrial (que pode ser previsto e assumido pelo seguro) e a ameaça da sociedade “pós-industrial” de risco (que não pode ser controlado e assumido pelo seguro). As ameaças das novas tecnologias teriam rompido os quatro pilares do seguro privado, que calculavam o incalculável – a compensação, a antecipação das consequências, a limitação temporal e espacial e a causalidade estrita com individualização de responsabilidades. A sociedade de risco surgiria no momento em que os riscos se desconectam desses fundamentos do seguro e da “calculabilidade”, segundo Beck, típicos das sociedades industriais do século XIX.

Nesta perspectiva, portanto, a crise ecológica contemporânea é permanente, decorrendo do fracasso das instituições responsáveis pelo controle e pela segurança, que sancionam, por outro lado, a normalização legal de riscos incontroláveis. Nessas sociedades, a proteção declinaria com o crescimento do perigo. A sociedade de risco, seria, pois, uma derivação da sociedade fordista sob a ação ecologista. A denúncia dos atores do ecologismo organizado apontaria a “irresponsabilidade organizada” e a “confusão paradigmática” de uma sociedade que enfrenta os riscos do século XXI com os conceitos típicos do que Beck chama de “risco proto-industrial”.

Algumas críticas têm sido já dirigidas a aspectos centrais da teoria de Beck. Blowers (1997) sustenta que Beck vê a sociedade ocidental como homogênea, ignorando que os impactos ambientais são socialmente diferenciados, afetando principalmente os mais pobres. López e Alhama (1998) afirmam que, se há conhecimento dos riscos, não há, então, descontrole do complexo técnico, mas intenção política. Tratar-se-ia, assim, de um descontrole voluntário, e não de risco. E se esse “risco” decorre da desinformação planejada, isso implica sua

distribuição de forma desigual e mais particularmente aos pobres. Para Hajer (1995), a “modernização reflexiva” caracterizada por Beck restringe-se, equivocadamente, à ação dos homens sobre o mundo, negligenciando-a naquilo que ela se aplica às próprias categorias de percepção da realidade. Wynne (1996) critica em Beck a consideração excessivamente realista da geração de uma nova consciência cultural decorrente de riscos reais universais que introduziriam o ceticismo público e a auto-refutação na modernidade e em suas instituições.

Assim como os autores ora citados, e particularmente na linha de interrogação levantada por Wynne, tentaremos avançar, a seguir, apontando um certo número de problemas da concepção de risco adotada por Beck e das implicações que daí decorrem para a sua teoria.

O papel do conhecimento e da reflexividade cognitiva na enunciação e superação da crise ecológica

A crise ecológica de Beck descreve o risco de ruptura direta das condições da existência material da sociedade, ou seja, da destruição objetiva da base material desta sociedade. A crise de Beck resulta, portanto, da potência destrutiva material da técnica - destruição técnica da matéria, e não crise de reprodução das relações sociais. Trata-se, conseqüentemente, de uma visão fetichizada da crise social, uma vez que a técnica concentraria o poder de produção e resolução da crise. Os atores sociais, por sua vez, seriam coadjuvantes de um processo caracterizado pela possibilidade de destruição material da sociedade.

A reflexividade cognitiva exprime, segundo esse autor, a idéia de que o poder crescente da tecnologia é acompanhado pela capacidade crescente dos indivíduos refletirem autonomamente nas conseqüências da tecnologia. A informação, para Beck, é dada, portanto, a conhecer; não é construída socialmente. Os “fatos na mídia” desencadeiam a reflexividade, e os cidadãos percebem que os responsáveis políticos normalizam legalmente as ameaças (Beck, 1992:115).

Os fatos expostos na mídia, diz o autor, provocam consensos que encobrem as diferentes estratégias de transferência de responsabilidades e de desvio da atenção sobre os riscos que estão em evidência. Para Beck, portanto, da técnica resulta objetivamente o risco, e do risco técnico constitui-se a sociedade. O risco é percebido e não construído como tal -como risco.

Surge aqui uma primeira ambigüidade nos propósitos de Beck: ele pretende evitar a percepção naturalista da ameaça - aquela que desconhece ser a ameaça configurada socialmente-, mas reduz o problema ambiental ao resultado do ato de se observar ou não -conhecer ou desconhecer- algo que existe e de escolher entre os fatos existentes; o fato risco é dado, faltando apenas ser percebido.

Para Beck, os fatos falam por si, e os sujeitos ouvem por si. O dizer o fato técnico é um reflexo unívoco do fato técnico. Ou seja, a especificidade dos fatos técnicos nucleares-genéticos-químicos teria acabado com a ilusão de transparência empirista e tornado-a efetiva. Não há transparência que possa ser obscurecida quando os fatos são dessa ordem. O fato técnico torna-se mesmo crítico e “revolucionário”, assumindo para si a causalidade dos processos sociais, dada a cadeia explicativa “fato técnico-informação-reação social”.

Na sociedade de risco, ocorre uma autonomização política da tecnologia e transformações “revolucionárias” emergem da técnica

Na sociedade de risco, o lado negativo do progresso domina o debate público, e a auto-ameaça tecnológica torna-se a força motora da História. Os perigos em grande escala poderiam ser, segundo Beck, interpretados como um tipo de revolução. O poder social da ameaça constituiria um tipo de revolução autonomizada e latente. Para o autor, o mais influente oponente da indústria perigosa seria a própria indústria perigosa. O adversário da indústria perigosa seria a liberação de substâncias perigosas e suas consequências na mídia e na maior sensibilidade ecológica.

A reflexividade política da sociedade de risco teria substituído o sujeito revolucionário na medida em que os cidadãos percebem que os guardiões da ordem legalizam as ameaças. A população, informada dos riscos pelos fatos narrados pela imprensa, irritaria as instituições e as faria se moverem. A eficácia dessa reflexividade repousaria na crença na soberania dos sentidos -os olhos tornam-se instituições de pesquisa, e os ouvidos, autoridades de saúde, afirma Beck. Para ele, portanto, na Sociedade de Risco, a plena politização da tecnologia faria dos cientistas e técnicos sujeitos diretos do poder. Para ele, o poder da tecnologia ultrapassaria o poder das decisões políticas, pelo comando da prática. A tecnologia seria a política do fato realizado, e o monopólio da tecnologia se tornaria o monopólio da mudança social (Beck, 1992:109).

O poder dos cientistas/técnicos seria exercido pelo silêncio quanto à potência disruptiva das técnicas e pela “normalização legal das ameaças globais”. A tecnologia se tornaria um sujeito revolucionário, pelo efeito que desencadeia – a reflexividade política. Chernobyl, diz Beck, teria feito o papel da crítica de modo mais convincente que os contramovimentos políticos. O risco ativaria a “reflexividade política”. O “acidente” ocupa, portanto, o lugar da crítica do poder técnico. A “crítica do nuclear”, por exemplo, aparece sem que se pague nos grandes jornais, pois “a leitura dos jornais” -afirma Beck- “torna-se um exercício de crítica à tecnologia”(Beck, 1992:116).

Vemos aqui um certo número de assertivas resultantes de uma reificação das técnicas: a destruição material é vista como “revolução”, e o poder destrutivo material, como força revolucionária (Beck, 1995:8). No entanto, as consequências ampliadas da capacidade destrutiva das técnicas não as tornam necessariamente políticas em si. Político seria o uso do poder tecnológico para impor os rumos e projetos à sociedade, pois há uma relação de subordinação do poder técnico sobre as coisas ao poder político sobre a sociedade. Existe um “centro”, como dizem Mary Douglas e Aaron Wildarsky” (1982), que faz o possível para esterilizar o surgimento de qualquer eventual subcentro dotado de informação suficiente para contestar as opções técnicas estratégicas para a acumulação. A esta supervalorização dos “experts” técnico-científicos como constitutivos de um hipotético novo “centro” de poder, soma-se a discutível pretensão beckiana a caracterizar um novo tipo de sociedade -de risco- a partir de algo que lhe falta – uma institucionalidade apropriada de controle e segurança, e não pelo modo como ela se produz e reproduz.

Conflito ecológico na sociedade de risco

Para Beck, na sociedade de risco, o conflito é por distribuição de males, e não mais de bens como na sociedade do século XIX, pois há quem ganhe e quem perca com os riscos. Como o conflito ecológico tem base cognitiva, os que são favoráveis às tecnologias perigosas “se auto-expropriam dos sentidos” e os que são contrários a elas denunciam as ameaças incontrolláveis.

O conflito na sociedade de risco oporia, portanto, capital a capital e trabalho a trabalho em torno à distribuição de perdas. Ao contrário da sociedade industrial, caracterizada pelo conflito entre capital e trabalho em torno à distribuição da riqueza, na sociedade de risco os trabalhadores não são mais apenas fonte de riqueza, mas também fonte de destruição e perigo (Beck, 1994).

Aqui, caberia observar que é a inserção no espaço objetivo das técnicas/setores produtivos que classifica o social. Segundo Beck, os processos técnicos soldam as solidariedades sociais. O perigo é um fato objetivo, e a estrutura técnica da produção desses perigos determina a estrutura de classes, configurando uma espécie de estruturalismo das técnicas.

Beck substitui, conseqüentemente, a luta de classes pela externalidade. Torna-se para ele central, nesse novo tipo de sociedade, o fenômeno dos impactos extramercantis da produção capitalista.

Caracteriza-se, assim, uma desconexão entre a teoria cognitivista do risco, de Beck, e sua abordagem das condições de “ressonância sociocultural” (Beck, 1994: 123), por meio das quais os cidadãos curariam a sua cegueira, de modo a conseguir substituir a democracia truncada da sociedade de risco por uma

democracia ecológica. A reificação das tecnologias, o estruturalismo das técnicas e a desconsideração da luta simbólica em que se inscreve a construção do social de riscos inabilita-o a entender e explorar as possibilidades de democratização das decisões tecnológicas.

Veremos, a seguir, a partir do estudo de caso do vazamento de óleo na Baía da Guanabara, ocorrido em janeiro de 2000, de que modo as possibilidades de tal democratização dependem não apenas da quebra do monopólio da produção de informação, mas também dos meios de difusão das interpretações do risco. Para tanto, o estudo constou de análise documental e de entrevistas com atores relevantes, de forma a reconstituir o histórico do acidente em 16 cenas, traçando o desenvolvimento da percepção e da articulação lógica entre a natureza da atividade produtiva e as condições ambientais tidas por indesejáveis verificadas ao redor da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) da PETROBRÁS, no Rio de Janeiro.

Um histórico em 16 cenas

Cena 1: Projeto e implantação da refinaria – a desconsideração do risco

O projeto original da REDUC foi elaborado no início da década de 50. A partida da refinaria ocorreu em setembro de 1961. Nessa época, as técnicas de análise de confiabilidade e de risco não se encontravam desenvolvidas para aplicação em projetos desse tipo. Toda a concepção básica do projeto da refinaria foi desenvolvida, portanto, sem os estudos básicos necessários ao planejamento do controle/mitigação de acidentes.

Foi-se criando, assim, um grande passivo acumulado, pois às ampliações nas refinarias não correspondeu nenhuma adaptação da segurança industrial. O conhecimento técnico da engenharia industrial associa fortemente a idéia de risco aos episódios de ampliação da capacidade produtiva das refinarias e modificações de projeto (Souza Jr, 1996: 80). Há, nesses casos, dois novos tipos de riscos: os inerentes à nova unidade e aqueles provenientes da interação da unidade antiga com a nova. As modificações, portanto, estão também relacionadas com a qualificação da mão-de-obra, à medida que esta passa a lidar com novas rotinas e diferentes características dos acidentes potenciais.

O Manual da REDUC de 1990 lista 60 mudanças ocorridas em unidades da refinaria no sentido do aumento da “capacidade efetiva de processamento”, entre os anos de 1961 e 1987, sem a correspondente adaptação dos sistemas de prevenção de acidentes industriais. Os primeiros casos conhecidos de análise de risco relacionados à ampliação da capacidade das refinarias brasileiras datam de 1985. A explosão de uma esfera de GLP em 1972 provocara já incêndio, pânico e lançamento de fragmentos até o centro de Caxias. Foram anunciadas 42 mortes, mas houve menção a desaparecimentos, com difícil possibilidade de apuração

devido à vigência do regime militar e à definição da refinaria então como área de segurança nacional.

Cena 2: Assinatura do Termo de Compromisso entre a Petrobrás e o Governo do Estado, com 27 itens de controle ambiental - junho de 1987

O termo de compromisso assinado em 1987 exprime bem a consciência que a própria empresa desenvolveu sobre o risco de suas atividades: foram listados 27 itens a serem submetidos ao controle ambiental, como “redução dos gases nas tochas”, “redução de óxidos de enxofre”, “tratamento biológico de efluentes”, “redução da carga de óleo”, dentre muitos outros, estimados em mais de 85 milhões de dólares, mas o órgão de controle ambiental não fiscalizou de forma efetiva se esses investimentos contribuíram para reverter o quadro de risco assumido pela empresa. Não houve um balanço periódico entre empresa, sociedade e órgão de controle ambiental, do que foi efetivamente realizado, do que foi sendo gasto ou dos impactos e melhorias resultantes para o meio ambiente. Não se avaliou tampouco o pólo como um conjunto de indústrias que deveriam ser fiscalizadas em sua interferência conjugada no meio (Bredariol, s.d.: 20).

Cena 3: Queima de gás sulfídrico na tocha da Petroflex – 1987-1988

Entre 1987 e 88, durante cerca de 16 meses, enquanto era construída a unidade de reaproveitamento da REDUC, a unidade da Petroflex ficou paralisada e ficou queimando H₂S (ácido sulfídrico) na tocha por 16 meses. Houve grande impacto ambiental e notícia de precipitação de chuva ácida na serra (Entrevista com sindicalista da Comissão de saúde da CUT-RJ realizada em 4/11/99). Essa experiência propiciou importante aprendizado dos trabalhadores quanto aos impactos ambientais da refinaria.

“O grande risco em termos de efluentes gasosos” – afirma um sindicalista – “é quando ocorrem acidentes de porte: grandes vazamentos de amônia ou de outros gases. (...) Os efluentes líquidos geram uma poluição crônica na região. Já os gasosos, geram mais problemas: quando, por algum problema, essa unidade de reaproveitamento de H₂S pára, toda a carga de H₂S é queimada na tocha e essa queima não é perfeita”.

Cena 4: O contexto internacional (as instruções PNUMA) e a implantação do Projeto APELL na REDUC. Articulação com entidades locais e instituições públicas –1991

O período de meados da década de 80 foi marcado, no contexto internacional, por um aumento do número de acidentes industriais e do número de vítimas, como é o caso do acidente de Bhopal, na Índia. A superintendência da REDUC à

época decidiu, seguindo orientação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), aplicar uma série de diretrizes e procedimentos de resposta a emergências, organizados sob uma metodologia intitulada Projeto APELL (*Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level*, ou seja, Cuidados e Preparação para Emergências no Nível Local).

As técnicas de planejamento de emergências do APELL enfatizam a questão da relação com a comunidade, isto é, considera-se que o risco não está restrito à unidade produtiva, mas engloba as comunidades circunvizinhas, o que requer um tipo de coordenação das ações de emergências que articule os níveis local e geral.

O modelo do APELL parte do princípio de que é preciso construir uma relação com a comunidade de forma que a empresa ganhe credibilidade junto à população local e possa contar com seu apoio para mitigar as consequências de possíveis acidentes. A relação com os órgãos públicos é apontada como necessária, e a empresa pode ter um papel importante no suprimento das carências das instituições públicas.

Segundo os sindicatos, a empresa criou estratégias para lidar com o risco que não envolvem o seu enfrentamento direto: são comuns as práticas de cooptação, mascaramento dos problemas e “marketing” ambiental, combinadas entre si. A empresa, por um lado, faz queimas e lança resíduos tóxicos clandestinamente em lixões e, por outro, busca aproximar-se da população circunvizinha, oferecendo recursos às entidades locais e gerando um quadro de desmobilização daquelas pessoas que são as primeiras a serem atingidas pelas práticas poluidoras. Diz um sindicalista entrevistado:

“As empresas normalmente sonégam os fatos fazendo as queimas à noite ou nos finais de semana. Quando chega na segunda-feira não se tem praticamente resíduos ou rejeitos a serem pesquisados e fiscalizados. Sabendo que inexistente fiscalização nesses horários, eles aproveitam para realizar esses descartes.(...) Toneladas de substâncias orgânicas são jogadas nos manguezais. Eles colocam uma camada de terra sobre esse lixão para esconder e enterram as substâncias deterioradas dentro desse manguezal, principalmente em tambores. Muitos efluentes sólidos vão para o lixão de Gramacho camuflados junto com papel. Aparentemente são resíduos inofensivos, mas lá embaixo há resíduos industriais. (...) Além disso, existe uma relação de cooptação das empresas com boa parte da população da região. A REDUC mantém uma escolinha ali num determinado setor, mantém um pequeno jardim chamado “Jardim Botânico”, dá benefícios materiais às associações de moradores. Então, as pessoas só se mobilizam quando há acidentes de grandes proporções” (Entrevista com sindicalista da Comissão de Saúde da CUT-RJ realizada em 4/11/99).

Cena 5: Convênio com a COPPE/UFRJ para auxílio técnico para análise e prevenção de riscos e para atuação em caso de acidentes - 1992

Foram mapeados 14 pontos da área vizinha que poderiam ser atingidos em caso de ocorrer algum acidente dentro da refinaria, tendo em vista não apenas o risco de um impacto direto sobre a população desses pontos, mas também o risco do impacto indireto, isto é, o pânico e o impacto emocional, que podem produzir situações de risco concreto. Deste modo, a empresa reconhecia formalmente os riscos potenciais que a sua atividade produtiva pode representar para a população do entorno.

Os sindicatos, por sua vez, entendem o Projeto APELL como um processo de cooptação das populações vizinhas, fundamentado em uma estratégia de “marketing” ambiental. Essa prática não estaria restrita às populações circunvizinhas da empresa, mas englobaria setores da universidade dispostos a “serem contratados para fazer o que a empresa quer”.

“A Universidade é contratada pela Petrobrás para fazer o que ela pede. O Projeto APELL é o seguinte: a direção da REDUC é vinculada à direção da Petrobrás, que é vinculada ao Ministro das Minas e Energia, que é vinculado ao Presidente da República. A política do governo federal é uma política de “marketing”. O governo Fernando Henrique veio com “marketing” político para as comunidades. Fomos nas associações de moradores falar com o pessoal que eles estavam sendo usados para dar legitimidade aos erros da refinaria. Mas não atentaram para esse detalhe. O Projeto APELL é um projeto de “marketing”. Vemos como agora, com esse acidente [o derramamento de Petróleo de janeiro de 2000], ninguém apareceu pois não havia nada de concreto. Não havia bóias – será que eles não sabiam que tinha que ter bóias na REDUC? E como é que ficaria se o óleo da baía de Guanabara fosse por um dos canais de resfriamento, incendiasse aquilo ali e explodisse as tubulações que vão para as distribuidoras?” (Entrevista com liderança sindical realizada em 22/2/00).

Cena 6: Formação do GERA em 1993

Sendo a idéia central do Projeto APELL alertar e preparar as comunidades para o caso de uma emergência, buscou-se estabelecer um contato maior com os representantes desses grupos, ou seja, as associações de moradores da área. Quando o APELL começou a ser posto em prática, os laços da direção da refinaria com as lideranças locais se estreitaram, e estas ficaram responsáveis por distribuir cartilhas, organizar os cursos de primeiros-socorros, fazer reuniões com a população e levantamentos a seu respeito. Nesse momento nasceu o Grupo de Estudo, Educação e Recuperação Ambiental (GERA), formado por pessoas ligadas às associações de moradores de Caxias.

Foi papel do GERA servir de elo entre a empresa e a comunidade, produzindo um novo campo de interlocução, que o sindicato não foi capaz de criar ou não teve interesse em fazê-lo, devido à relação de desconfiança mútua entre sindicato e empresa. No entanto, as informações sobre os problemas internos do processo produtivo da empresa que poderiam ter conseqüências externas eram fornecidas ao GERA pelo sindicato. Nas palavras de um diretor dessa organização não-governamental:

“Ficávamos sabendo dos problemas da refinaria pelo Sindicato dos Petroleiros. Sindicato é corporativista, ele tem que ser, nasceu para isso, com essa função. Somos mais amplos, ambientalistas; pensamos em todo contexto. São coisas diferentes. Temos um diálogo muito mais fácil com a refinaria. Eles vêm menos armados conversar com a gente do que com o sindicato, que é uma coisa mais truculenta mesmo. Às vezes, o sindicato não gosta disso, querendo que fiquemos do lado deles. Mas são formas diferentes de ver o mesmo problema” (Entrevista com diretor do GERA realizada em 9/12/99).

Cena 7: A gradativa desarticulação do Projeto APELL, a reestruturação da refinaria, a troca de superintendente e a saída da COPPE do projeto – 1994

“Em 1994 veio o Brandão. Depois da saída do grupo do Superintendente Luiz César, entrou uma nova visão de empresa, que veio derrubando tudo” -contam os sindicalistas (Entrevista com sindicalista do Sindipetro de Caxias realizada em 22/2/00). Os anos de 1993 e 1994 foram marcados pela gradativa desarticulação do projeto. Ao processo de reestruturação da refinaria e troca de superintendente, somou-se o descaso das demais empresas do pólo, bem como do poder público municipal e estadual. O discurso empresarial também se modificou: “a dívida social deve ser cobrada dos governos, que recebem os impostos pagos”, alegavam seus representantes. “As reuniões escassearam. O sistema de aviso às comunidades – em todas as suas versões discutidas – transformou-se em sonho, fruto do imaginário coletivo”.

Cena 8: Maio de 1995 – a greve dos petroleiros

A greve de maio de 1995 foi um movimento que desencadeou a mobilização do sindicato em torno da defesa do patrimônio público nacional. Como desdobramento dos embates nela ocorridos, o sindicato acusou a direção da REDUC de desenvolver práticas administrativas irregulares. Quanto a isso, preparou dossiês, que, em um primeiro momento, funcionaram como instrumento de barganha com a direção. Tendo, porém, esse tipo de negociação se mostrado

ineficaz, esse dossiê acabou se tornando, mais tarde, a base para uma série de denúncias do sindicato aos Ministérios Públicos Estadual e Federal:

O governo federal acusou os trabalhadores de estar destruindo o patrimônio público. Desde então, o Sindipetro Caxias tomou a decisão de fazer um inventário da administração da Petrobrás e mostrar para a opinião pública que era a direção da empresa quem o destruía, e não ele.

“Para desdenhar a iniciativa do Sindipetro, a direção da Petrobrás indicou para a comissão quem iria apurar as irregularidades, justamente as pessoas que estavam sendo acusadas de irregularidade administrativa, incluindo o coordenador da comissão. A apuração não resultou em nada” (Entrevista com sindicalista do Sindipetro de Caxias realizada em 22/2/00). A greve nacional foi sustentada por 32 dias, e o sindicato recebeu uma multa recorde.

Cena 9: Intensificação do processo de terceirização e privatização - 1995

Os sindicatos apontam o processo de privatização como responsável por uma deterioração das condições de trabalho e de manutenção dos equipamentos, engendrando um quadro agravado de risco de acidentes. Na Petroflex, empresa do sistema Petrobrás que foi privatizada, isso se refletiu em um aumento do número de acidentes de trabalho, registrando-se inclusive óbitos, principalmente entre trabalhadores de empreiteiras terceirizados.

A terceirização gera um quadro de risco para os trabalhadores de empreiteiras, que assumem justamente as tarefas com mais possibilidade de causar acidentes ou problemas de saúde: “A maioria dos trabalhadores terceirizados são utilizados em atividades de apoio em empresas empreiteiras. Boa parte desses trabalhadores está submetida à atividade de maior risco para saúde: manutenção, limpeza dos equipamentos de produção, lidam com os rejeitos industriais, limpando e manuseando produtos tóxicos” (Entrevista com sindicalista da Comissão de Saúde da CUT-RJ realizada em 4/11/99).

O problema da obsolescência dos equipamentos e da falta de manutenção adequada estaria relacionado, segundo os atores sindicais, à prática de irregularidades pela direção da refinaria, que não teria administrado corretamente os recursos a serem investidos na modernização e manutenção da empresa

Cena 10: Retomada do Projeto Apell - final de 1995 até meados de 1997

“De 1996 até meados de 1997, o trabalho se concentrou na massificação das informações, do tipo ‘colocando o APELL na rua’ (GERA, s.d.). A relação com a comunidade parte de dois tipos de ações: regular e

emergencial. A ação emergencial traduz-se no plano de emergência, composto por um sistema de aviso externo (emissão de sinais sonoros para difundir avisos de emergência de forma rápida e abrangente), em instruções em material gráfico, sinalização de ruas (para rotas de fuga e localização dos abrigos) e apoio da mídia (para comunicação para o público durante as emergências)”.

A relação regular com a comunidade opera, em linhas gerais, por meio de “campanhas de esclarecimento, treinamento de voluntários e transferências de benefícios diretos” (Souza Jr., 1996: 128). A justificativa básica para se manter essa “relação de proximidade” reside na idéia de que o distanciamento pode provocar “um acúmulo de distorções nas percepções do risco” e, portanto, “um sentimento constante de insegurança” (Souza Jr., 1996: 141). Assim, ao promover a integração da empresa com a comunidade, busca-se “equilibrar a percepção do risco” e dar mais credibilidade às instruções e informações contidas no plano de emergência. “A manutenção de um relacionamento regular entre estas partes constitui um elemento que traz contribuições à eficiência do sistema de resposta para emergências” (Souza Jr., 1996: 142).

Em vez de informar os moradores do entorno e os envolver no controle dos riscos, prefere-se simular acidentes e condicionar seus comportamentos para minimizar os danos. Em vez de se apoiar a organização e fortalecer as populações locais, a estratégia escolhida tende, ao contrário, a repartir com a população a culpa pelos efeitos dos desastres.

Cena 11: Acidente em março de 1997 na linha PE-2: 2 mil toneladas de óleo foram despejadas na Baía

A movimentação anormal de um duto no sentido vertical, expondo a tubulação à corrosão, provocou um vazamento de 2.000 toneladas de óleo, segundo o sindicato, e de 600 toneladas, segundo a Petrobrás.

Por ocasião do acidente, a direção do Sindipetro Caxias procurou o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, as Câmaras de Vereadores do Rio e de Caxias, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Câmara Federal. A essas instâncias entregou dossiês completos, formalizando a denúncia do vazamento, juntamente com outras relativas a contratos irregulares, desvio de material, erros gerenciais, dentre outras, constantes de dossiês anteriormente preparados pelos trabalhadores, nos anos anteriores (jornal Sindipetro, maio-junho 1997; jornal Sindipetro, janeiro 2000; entrevista do Sindipetro, em 22/2/2000).

Cena 12: Paralisação do Projeto APELL em meados de 1997

De acordo com relatório da coordenação do GERA, “alguns problemas estruturais persistiram. Cada vez mais a REDUC se queixava da ausência do poder público municipal e da falta de parceria das demais empresas do pólo (inclusive daquelas consideradas *de casa*, como a BR Distribuidora e a DTSE – Dutos e Terminais do Sudeste, empresa prestadora de serviços), o que a obrigava a arcar com todos os custos do projeto. Em meados de 1997 todo o processo é paralisado. A melhoria das ruas chamadas rotas de fuga, a sinalização das mesmas, a fixação dos adesivos de alerta em residências, o sistema de aviso e o simulado geral, previstos no APELL, continuaram no papel” (GERA, s.d.).

Cena 13: Explosão de um tanque de armazenamento de butadieno na Petroflex, vizinha à REDUC - março de 1998

Esse incidente, segundo a coordenação do GERA, expôs ao público a fragilidade da implantação do Projeto APELL. As informações sobre o que estava ocorrendo chegavam à população pela TV, e não pela estratégia de comunicação por rádio prevista. Teria exposto também a falta de articulação entre as empresas. Se o APELL é um plano específico da REDUC, coloca-se a pergunta: o que seria feito em caso de acidente na Petroflex?

Cena 14: Derramamento de 1,3 milhões de litros de óleo combustível na Baía de Guanabara em janeiro de 2000

Em 18/1/2000 ocorreu o vazamento de óleo no duto PE-II, um dos nove dutos que interligam a REDUC ao terminal da Ilha d'Água. O rompimento aconteceu devido à expansão e contração térmica. Segundo a Petrobrás, o duto havia sido inspecionado em 1998, em razão de um acidente nele ocorrido em 1997. O vazamento começou à uma hora da manhã e só foi percebido às 5 horas, porque os mecanismos de controle de fluxo do combustível bombeado também falharam (citam-se problemas relativos à transição nos sistemas de controle e erro de cálculo do nível dos tanques, cometido por um operador). Manguezais foram atingidos, e a atividade pesqueira na Baía de Guanabara teve de ser interrompida. A ação da FEEMA nesse episódio esteve seriamente limitada, pois a REDUC representa alta fonte de recursos para o Estado, e não se cogitou fechá-la, apesar de a empresa não estar em dia com suas obrigações para com a regulação ambiental. O vazamento não foi encarado com surpresa pelos técnicos deste órgão, já que os dutos que passam pela Baía de Guanabara encontravam-se sem licença de operação. “Se a lei de crimes ambientais fosse aplicada, as maiores empresas teriam que ir para a cadeia”, afirmou o presidente da FEEMA em palestra em abril de 2000 (Grael, 2000). A solução encontrada foi a assinatura de

um acordo de adequação de comportamento, em que a REDUC se comprometeu a adequar-se às leis ambientais vigentes. Este, porém, como os termos de compromisso, não tem força de lei.

Cena 15: Pescadores param o trânsito na rodovia Magé-Manilha, reclamando dos critérios de pagamento de indenizações por interrupção da pesca na Baía

Quinhentos pescadores da Colônia de Pesca foram cadastrados pela Petrobrás para recebimento de indenizações, de valores diferenciados, conforme a renda média de cada categoria de trabalhador⁴. Em manifestação de rua, foi questionado o critério de confirmação das informações utilizado para o cadastramento dos atingidos. Entre os pescadores surgiram denúncias de que não só pescadores estavam se apresentando para o recebimento da compensação. Críticas aos procedimentos organizativos da Petrobrás também surgiram da Prefeitura de Magé. A população estava pondo em discussão não apenas quem tinha a condição de pescador, mas sim os critérios pelos quais se deveriam definir os diferentes tipos de impacto sofridos pela população. Três meses após o vazamento, a Petrobrás afirmava que a vida estava normalizada na Baía. No entanto, segundo os pescadores, embora a pesca estivesse liberada, ninguém se arriscava a comprar o pescado da Baía. Colocando o dedo na crise, representantes dos atingidos conclamavam: “a Petrobrás deveria comprar nosso peixe” (O Globo, 9/4/2000: 31).

Cena 16: Assinatura do novo Termo de Compromisso entre Petrobrás e Governo do Estado do Rio de Janeiro

Em 5 de janeiro, duas semanas antes do vazamento de óleo, o governo do Estado resolveu adiar a assinatura de um termo de compromisso com a Petrobrás, considerando-o insuficiente por não incluir, entre outras garantias, a realização de uma auditoria de padrão internacional nos dutos da REDUC, que já haviam sido objeto de vários acidentes. Após o acidente, em 25/4/2000 foi assinado um compromisso de ajustamento de conduta entre a Petrobrás e o Ministério Público Federal, sendo intervenientes a FEEMA, o IBAMA e a ANP. Neste, estabeleceram-se prazos para a entrega, pela Petrobrás, de um plano de inspeção consolidado e de um plano ambiental consolidado, assim como do relatório anual de auditoria interna e de um cronograma para a identificação de novos indicadores e parâmetros para a detecção de impactos ambientais.

Os discursos sobre os riscos enunciados pelos diversos atores sociais

Assinalaremos a seguir como os discursos enunciados em torno ao funcionamento da REDUC tendem a caracterizar os riscos como de origem especificamente técnica, gerencial ou política. Listaremos agora os arrazoados sobre risco segundo as distintas concepções e os atores da enunciação.

Caracterização do risco como de origem técnica

a. Risco derivado das atualizações técnicas do processo (concepção de “experts” e sindicatos de trabalhadores):

- Certos especialistas afirmam que o conhecimento técnico da engenharia industrial associa fortemente a idéia de risco aos episódios de ampliação da capacidade produtiva das refinarias. O Manual da REDUC de 1990 lista 60 mudanças ocorridas em unidades da refinaria no sentido do aumento da “capacidade efetiva de processamento”, que aconteceram entre 1961 e 1987. A esses aumentos da capacidade produtiva não teria havido uma correspondente adaptação dos sistemas de prevenção de acidentes industriais.
- Outros especialistas sustentam que as avaliações de risco são suscetíveis de mudança toda vez que uma nova unidade ou novos procedimentos operacionais são introduzidos. No caso da inserção de uma nova unidade de processo, o risco se evidencia não só pelas características da unidade que está sendo inserida, mas também pelas sinergias negativas que esse processo pode trazer. A integração dos riscos da unidade nova com os da preexistente tenderiam a gerar cenários não considerados.
- O Sindicato de Trabalhadores aponta que a precariedade dos equipamentos acaba por provocar um quadro tensão e de *insegurança operacional* em muitos setores da refinaria. Os trabalhadores afirmam não terem sido feitas transições tecnológicas adequadas ao longo dos últimos 40 anos, ocasionando riscos associados à falta de compatibilidade entre equipamentos novos e antigos.

b. Risco originado na densidade das atividades (concepção da agência reguladora estatal):

- Segundo o Projeto de Revisão do Macrozoneamento Industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – FEEMA/COPPETEC/IBAM –, de 1998, produzido no âmbito do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, das seis zonas industriais do município de Duque de Caxias, quatro estariam saturadas (dentre elas a área de REDUC) e duas, em vias de saturação. De acordo com a agência reguladora ambiental do Estado do Rio de Janeiro, a expansão da REDUC ou de novos empreendimentos em função da prevista

implantação do Pólo Gás-Químico na região da refinaria em uma área industrial classificada como “saturada” representaria, portanto, o surgimento de novos riscos, além dos já existentes.

c. Risco originado na contigüidade das atividades (concepção da agência reguladora estatal e de ONGs locais):

- De acordo com a FEEMA, agência reguladora do estado, a presença na região de diferentes empresas e plantas industriais que envolvem riscos pode criar uma dinâmica que caracteriza a necessidade de uma política geral de prevenção de acidentes. As possíveis interferências entre as empresas para o potencial de risco regional, embora ainda não estudadas, segundo a FEEMA, com certeza existem.

- Para o GERA, entidade ambientalista local, as informações sobre o acidente ocorrido na unidade vizinha, a Petroflex -cujo desenrolar durou cerca de 15 horas-, chegaram às comunidades pelo helicóptero da TV Globo, que sobrevoava o local e que, em certo momento insinuou que “as chamas poderão chegar à refinaria”. O pânico e a angústia teriam tomado conta das pessoas. No posto médico de Campos Elíseos -afirmam representantes do GERA- chegaram a ser feitos os primeiros preparativos para abandonar a unidade.

d. Risco causado por falhas de projeto (concepção de responsável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente):

O Secretário do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro sustentou que o duto fora feito para estar em uma profundidade de um metro, não tendo sido bem analisadas as condições do solo em que estava sendo colocado. O acidente teria ocorrido, segundo ele, justamente porque a variação do solo e a variação de temperatura provocaram a criação de uma espécie de âncora em um determinado trecho do duto, ocasionando uma fissura. A primeira falha teria sido, portanto, de projeto.

Caracterização do risco como de origem gerencial

Risco derivado da mudança de gerentes empresariais responsáveis pelas ações preventivas (concepção do Sindicato de Trabalhadores):

- Segundo lideranças sindicais, “depois da saída do grupo do Superintendente Luiz César entrou uma nova visão de empresa que veio derrubando tudo”. Ao processo de reestruturação da refinaria e troca de superintendente teria se somado o descaso das demais empresas do pólo, bem como do poder público municipal e estadual, com os projetos de resposta a emergências. O discurso da superintendência modificou-se sob a alegação de que “a dívida social deve ser cobrada dos governos, que recebem os impostos pagos”.

Caracterização do risco como de origem política

a. Risco derivado da ausência de licenciamento ambiental (concepção da agência reguladora estatal):

- Segundo a agência reguladora do estado, para efeito de licenciamento de novos empreendimentos previstos para a região de Duque de Caxias pela FEEMA, apenas a empresa Rio Polímeros apresentou projeto, estudo e relatório de impacto, tendo realizado audiência pública e obtido licença prévia para o desenvolvimento do projeto.
- Para a FEEMA, por outro lado, a REDUC não estava cumprindo a lei de auditoria ambiental e não possuía licença ambiental nem de instalação. Os dutos que passam pela Baía de Guanabara encontravam-se sem licença de operação quando do vazamento ocorrido em janeiro de 2000. Segundo o presidente da FEEMA, em palestra realizada em abril daquele ano, “se a lei de crimes ambientais fosse aplicada, as maiores empresas teriam que ir para a cadeia”.

b. Risco originado na ausência de fiscalização ambiental (concepção da agência reguladora estatal, do Sindicato de Trabalhadores, de ONG local e deputado ambientalista):

- Para a FEEMA, embora a REDUC tenha assinado no ano de 1987 um termo de compromisso com 27 itens de controle ambiental, não houve um balanço periódico entre empresa, sociedade e órgão de controle ambiental do que foi efetivamente realizado, do que vem sendo gasto ou dos impactos e melhorias resultantes para o meio ambiente.
- O cadastro da FEEMA de consumo de recursos ambientais tem como parâmetro apenas o consumo de água em relação à área ocupada; não inclui o consumo de energia, as emissões e a carga poluidora, o que tende a mascarar o potencial poluidor das empresas da área, que acabam sendo bem classificadas. A REDUC, por exemplo, embora seja reconhecidamente uma empresa altamente poluidora, é classificada como “indústria de baixo potencial poluidor”.
- Para o Sindicato de Trabalhadores, o Pólo Petroquímico de Caxias se caracteriza pelo potencial poluente e tóxico da indústria petroquímica: há muitos efluentes líquidos e gasosos que prejudicam a saúde do trabalhador nessa indústria. As substâncias aromáticas ficam expostas à atmosfera, e o descarte de água contaminada com resíduo desses produtos é feito na Baía de Guanabara. Segundo sindicalistas, dentro do parque industrial, parte desses efluentes líquidos é transportada por canaletas a céu aberto, propiciando a volatilização.
- Para um deputado estadual ligado a causas ambientais, a realização regular de auditorias ambientais teria evidenciado que a REDUC não possuía à época do acidente sistema de desligamento automático de bombeamento de óleo.

- Lideranças sindicais afirmaram que as empresas normalmente ocultam os fatos, fazendo as queimas à noite ou nos fins de semana. Assim, na segunda-feira, não há praticamente resíduos ou rejeitos a serem pesquisados e fiscalizados. Sabendo da inexistência de fiscalização nesses horários, aproveita-se para realizar esses descartes, sendo jogadas toneladas de substâncias orgânicas nos manguezais. Uma camada de terra seria colocada sobre esse lixo; as substâncias deterioradas seriam enterradas no manguezal, principalmente em tambores. Muitos efluentes sólidos iriam para o lixo de Gramacho camuflados junto com papel. Aparentemente seriam resíduos inofensivos, mas embaixo haveria resíduos industriais.

- De acordo com uma entidade ambientalista local, uma funcionária do posto de saúde em Xerém observou que ali são realizadas proporcionalmente mais nebulizações por mês do que em qualquer outro posto no município do Rio de Janeiro. Afirmou também que o maior temor da população era o de haver um grande vazamento de gás como o que ocorrera na Bayer, em 1992. Segundo ela, a evidência de que a empresa reconhece esse risco é dada pela existência de uma estação de medição da qualidade do ar na área próxima à refinaria nunca acionada.

- A mesma entidade ambientalista registrou que a refinaria passou mais de um ano jogando gás sulfídrico na atmosfera, gerando chuva ácida, sem que nenhuma providência fosse tomada.

c. Risco derivado da flexibilização da legislação (concepção do Sindicato de Trabalhadores):

- Para os sindicatos, as relações de trabalho e a preocupação com a saúde do trabalhador foram comprometidas após a privatização da Petroflex. Teria havido um aumento brutal de terceirização, queda na qualidade da mão-de-obra e, em função disso, acidentes agudos, inclusive ambientais, como incêndios e vazamentos verificados com mais frequência em função da queda da qualidade da mão-de-obra, falta de reposição de equipamentos e de investimentos em manutenção.

- Segundo os representantes sindicais, a maioria dos trabalhadores terceirizados é destinada a desenvolver atividades de apoio, e boa parte deles está submetida às atividades de maior risco para saúde: manutenção, limpeza dos equipamentos de produção e trabalho com os rejeitos industriais, limpando e manuseando produtos tóxicos.

d. Risco associado à falta de democratização das informações técnicas (concepção de associação profissional de representação de engenheiros):

Para o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro, não foi garantida pela Petrobrás a participação dos trabalhadores por meio de suas

legítimas representações na Comissão de Sindicância formada pela empresa para investigar o acidente de 18/1/2000. A Petrobrás deveria reavaliar, segundo o CREA-RJ, sua política de informação quanto à segurança no trabalho e meio ambiente, além de garantir transparência, permanente e de fato, tanto para os trabalhadores como para a sociedade.

e. Risco associado a métodos impróprios de investigação de acidentes (concepção de associação de representação profissional de engenheiros)

Ainda para o CREA-RJ, “caberia à Petrobrás reavaliar sua política de utilização dos conceitos de ‘falha humana’ e ‘ato inseguro’ na investigação e acidentes, passando a aplicar as técnicas atuais de análise de riscos pelo método da Árvore de Falhas”. “APetrobrás”, “continuam os representantes do CREA-RJ, deveria reconsiderar a suspensão aplicada ao operador do DTSE, isentando-o, para todos os efeitos legais, funcionais e administrativos, da culpabilidade pelo vazamento ocorrido, tendo em vista a análise do relato por ele prestado à Comissão do CREA-RJ” (CREA-RJ/SURGENTE, 2000:3-4).

f. Risco originado da falha do plano de emergência (concepção de responsável da Secretaria Estadual de Meio Ambiente)

Para o Secretário Estadual de Meio Ambiente, a pior falha foi a de gestão – a falha em verificar rapidamente o acidente e dar início a medidas para contê-lo. O acidente aconteceu à uma hora da manhã e a falha de gestão fez com que ele só fosse constatado por volta de 5h30min. Além disso, a Petrobrás estaria extremamente despreparada para reagir ao acidente. No terceiro dia após o ocorrido, havia apenas 300m de barreiras de contenção. Se as respostas fossem rápidas e se os instrumentos estivessem ali, afirmou o Secretário, o acidente poderia ter sido contido em uma área pequena. Isso colocou em evidência a percepção de que o plano de emergência para a Baía de Guanabara estava mal dimensionado e só funcionaria em casos de pequenos acidentes. Quando a Secretaria de Meio Ambiente interrogou a Petrobrás quanto ao restante do equipamento necessário, esta respondeu que, por tê-lo utilizado no acidente precedente, ele havia sido gasto. No que concerne ao plano de emergência, também prevaleceu a percepção de que a FEEMA teria falhado por falta de estrutura.

As estratégias argumentativas dos atores sociais

O vazamento de óleo ocorrido em janeiro de 2000 deu lugar, portanto, a intervenções variadas por parte dos diferentes atores presentes no debate público.

A Petrobrás adotou duas estratégias articuladas:

1. Contra as acusações de irresponsabilidade, afirmou a “transparência” e a “coragem” da empresa em aceitar sua responsabilidade em prestar contas à

população. “O principal é a recuperação da imagem da Petrobrás frente à sociedade”-, afirmava-se em um vídeo institucional veiculado na TV. Para tanto foi invocado o imaginário relativo ao passado da empresa, como símbolo de conquistas na luta pela autonomia energética do país. A idéia de que a empresa é um patrimônio nacional foi evocada para justificar a necessidade de “preservá-la” de qualquer ataque que pudesse ferir sua imagem. Como em uma narrativa mítica, a estratégia argumentativa da empresa baseou-se na ética da honra e da responsabilidade. A empresa denominou o desastre ambiental de “desafio” e buscou honrar seu nome: “A Petrobrás não tem desculpas. Tem um compromisso” (cf. anúncio na grande imprensa, em 21/1/2000). “APetrobrás tem a obrigação de prestar contas a você” (cf. anúncio na grande imprensa, em 27/1/2000). “A Petrobrás não se esquivou em momento algum da sua responsabilidade”; “Não vamos deixar essa mancha na nossa história”. “É hora de coragem, transparência e determinação” (cf. vídeo institucional da Petrobrás).

2. Por outro lado, contra as acusações de incompetência, a empresa apresentou as críticas como danosas a um símbolo de eficiência e produtividade, características expressas em certificados internacionais de qualidade técnica e ambiental, assim como em números impressionantes que pretendem traduzir a envergadura de seus empreendimentos e a *qualidade total* de suas práticas. Desse modo, contra as acusações de negligência, descaso e incompetência, invocaram-se as pretensas evidências de sua excelência².

Conjugando essas duas matrizes de significado, a empresa procurou dar respostas rápidas à expectativa que ela criou na opinião pública, através da cobrança que faz a si mesma de “prestar contas à sociedade”. Desse modo, por meio de uma reação espetacular ao desastre, integralmente acompanhada e devidamente divulgada pela grande mídia, e traduzindo seus esforços em números que colocam lado a lado bóias utilizadas, aves resgatadas e pescadores indenizados, a empresa procurou reafirmar seus dons de responsabilidade e eficiência frente a um público que se queria apaziguar.

As ONGs dividiram-se em dois tipos de discurso. O primeiro criticava a disparidade de esforços correntemente despendidos, que privilegiavam as tecnologias da eficiência em detrimento das práticas de redução e prevenção dos riscos. Questionava-se assim a “investida dual” da empresa, ou seja, o financiamento de muitos projetos ambientais, mas a não solução de seus problemas internos (ou, no dizer de um ambientalista: “tem a maior tecnologia em águas profundas, mas não sabe tomar conta de um duto”). Um segundo tipo de discurso, próprio a um “ecologismo de resultados”, tendia a avalizar as iniciativas de recuperação da imagem da empresa, sob a condição do cumprimento de metas sociais e ambientais, assim como da destinação de recursos para compensar danos. O aval de um certo número de ONGs traduziu-se, no caso, em um acordo de sete pontos firmado entre as ONGs ambientalistas

e a Petrobrás, em que esta se comprometeu a cumprir uma série de metas socioambientais. Além disso, a articulação com a Petrobrás também se traduziu na transferência de recursos da empresa para “projetos de desenvolvimento” para as regiões/populações atingidas, a serem geridos pelas ONGs. Porém, permanecem acesas, para um certo número de entidades, as dúvidas quanto ao real compromisso da empresa com a implementação de uma participação social efetiva e democrática.

Os pescadores, como categoria pouco organizada (apenas 10% têm registro profissional; os outros são chamados “pescadores artesanais”), viram-se subordinados à estratégia de compensação e “marketing” da empresa. Como dependem da condição ambiental da Baía para seu sustento básico diário, foram atingidos diretamente com o acidente e reivindicaram prioridade no tratamento de sua situação. Não dispondo de um movimento organizado, viram-se mais suscetíveis a um envolvimento por parte da empresa, de políticos e lideranças locais, que procuraram acumular forças a partir da situação precária deste grupo social. Se em um primeiro momento, o da “*reação espetacular*”, foram considerados prioridade máxima e receberam indenizações por dois meses consecutivos, foram em seguida totalmente abandonados pela empresa com o argumento de que o IBAMA já teria liberado a pesca, embora a própria Petrobrás tenha admitido que a situação do meio ambiente na Baía só iria se normalizar ao longo de dois anos e que ainda havia divergências entre o órgão ambiental federal e o estadual quanto à pertinência da liberação do consumo do pescado da Baía. Assim, no auge da visibilidade pública do vazamento, os pescadores viram-se envolvidos no esforço de legitimação dos critérios de caracterização dos candidatos a receber indenizações. Na baixa conjuntural dessa visibilidade, tiveram de investir no debate sobre a propriedade/impropriedade das condições de pesca, sugerindo, por exemplo, que a empresa, se de fato considerava normalizadas as condições, deveria comprar o pescado, em lugar de pagar indenizações (O Globo, 9/4/2000).

O Sindicato dos Petroleiros de Caxias procurou argüir que a defesa do “patrimônio nacional” representado pela Petrobrás não implica o encobrimento das irregularidades existentes, mas, antes, sua correção. Por ser estatal, acreditam os sindicalistas, a empresa deveria ter maior responsabilidade social - “a Petrobrás é do povo”. Nesse sentido, consideram inaceitável o seu lucro com o risco, produzindo acidentes que atingem trabalhadores, dentro ou fora da empresa. Além disso, denunciam corrupção interna na empresa, a estratégia dita de “esquartejamento”, adotada pelo governo federal, bem como a terceirização de tarefas administrativas e “quaternarização” das tarefas, que provoca um agravamento considerável dos riscos.

A ação da FEEMA nesse episódio esteve seriamente limitada, pois a REDUC representa importante fonte de recursos para o Estado e não se pode cogitar

fechá-la, apesar de a empresa não estar em dia com suas obrigações para com a regulação ambiental. O vazamento não foi encarado com surpresa pelos técnicos desse órgão, já que os dutos que passam pela Baía de Guanabara encontravam-se sem licença de operação. A solução encontrada foi a assinatura de um compromisso de ajustamento de conduta, em que a REDUC se comprometeu a adequar-se às regras ambientais vigentes. A agência governamental esforçou-se assim por conciliar a permanência da atividade econômica com a promoção de ajustes graduais das práticas produtivas às normas legais. Recorrendo-se aos termos de ajustamento de conduta, evita-se a interrupção das atividades e, conseqüentemente, do fluxo de arrecadação de tributos.

Do lado dos *produtores de risco*, portanto, vimos que a preocupação central esteve dirigida aos efeitos dos acidentes: procurou-se investir na preservação da imagem da empresa, na defesa de seu prestígio gerencial, de modo a assegurar os mercados, bem como na limitação do pânico correntemente desencadeado em situações de emergência. Do lado das *populações passíveis de serem atingidas*, revelou-se frágil a capacidade de assegurar medidas de prevenção dos riscos, pelos níveis insuficientes de organização, notadamente pela ausência de articulação entre sindicatos, organização de moradores, ONGs, entidades ambientalistas e associações de pescadores na defesa de um ambiente que lhes é efetivamente comum como espaço de trabalho e moradia. Só uma articulação como esta poderia engajar uma luta capaz de transformar os planos de ação para situações de emergência em processos de controle participativo dos riscos.

Conclusões

Pode-se observar que, à exceção das conjunturas marcadas por “acidentes ambientais”, a empresa envolvida no episódio aqui estudado tendeu a se empenhar com mais sucesso em “ultrapassar os muros da fábrica” ao encontro da sociedade circundante, buscando desenvolver laços de lealdade com a vizinhança, dissolver conflitos e realizar uma disciplinarização mais efetiva -e ampliada para os moradores do entorno- da sua força de trabalho. A cooptação, pela oferta de serviços básicos insuficientemente fornecidos pelo poder público, e a repartição simbólica das responsabilidades pelo risco, por meio de programas de prevenção do pânico em caso de acidentes, exprime, por certo, a preferência empresarial pela manutenção do monopólio sobre a informação técnica.

Ao contrário, portanto, do que supõe Beck, entre os fatos portadores da potência destrutiva das técnicas e a ação social em torno aos riscos há um complexo processo de luta simbólica que penetra as condições de produção, interpretação e difusão das informações. Estratégias discursivas e ações políticas desenham concretamente a cena histórica em que se definem as condições de distribuição de poder sobre as técnicas.

A democratização do controle sobre os riscos apresenta-se, assim, sob uma dupla face. A primeira é a da luta simbólica pela socialização do processo de produção, discussão e interpretação das informações sobre os processos técnicos. A segunda é a da luta “prática” pela desmontagem das armadilhas do desemprego e das carências de serviços públicos que favorecem a desmobilização de atores sindicais e não-sindicais no enfrentamento da concentração do poder sobre os processos técnicos.

Se reificarmos as técnicas, considerando que o risco resulta da apreensão cognitiva do fato técnico, estaremos deixando de considerar o papel das lutas simbólicas e das estratégias discursivas, fatores que, como demonstra a análise do caso do vazamento de óleo da Refinaria Duque de Caxias aqui estudado, se revelam decisivos no processo de organização da sociedade para a democratização efetiva do poder sobre as técnicas.

Bibliografia

- Acselrad, H., 2000 “Justiça Ambiental - novas articulações entre meio ambiente e democracia”, in IBASE/CUT/IPPUR *Movimento Sindical e Defesa do Meio Ambiente, Rio de Janeiro* (Rio de Janeiro) série Sindicalismo e Meio Ambiente N° 3, 7-12.
- Beck, U. 1992 “From Industrial to Risk Society: questions of survival, social structure and ecological enlightenment”, in *Theory* (Culture & Society 9:97-123, London).
- Beck, U. 1994 *Ecological Enlightenment* (New York: Humanities).
- Beck, U. 1995 *Ecological Politics in an Age of Risk* (Cambridge: Polity).
- Blowers, A. 1997 “Environmental Policy: Ecological Modernization or the Risk Society”, in *Urban Studies* Vol. 34, N° 5-6, 845-871.
- Bredariol. C. S, O s/d *Pólo Gás Químico de Duque de Caxias: um ambiente sem qualidade nem controle* (Rio de Janeiro) Mimeo.
- Bulhões, Felix 2000 “Em respeito à Petrobrás”, in *O Globo* (Rio de Janeiro) 9 de febrero.
- CREA/RJ-SURGENTE 2000 Informativo do Sindipetro-RJ, (Rio de Janeiro) 6 de octubre, 4p.
- Douglas, M. & A. Wildarski 1982 *Risk and Culture: an essay on the selection of technical and environmental dangers* (Berkeley: University of California Press).
- Fabiani, J. L. & J. Theys (editores) 1987 *La Société Vulnérable - évaluer et maîtriser les risques* (Paris: Presses de l'École Normale Supérieure).
- Grael, A. 2000 palestra realizada no curso *Cidades do Século XXI* (Rio de Janeiro: International Honors Program/IPPUR/Roda Viva) Abril.
- Grupo de Estudo, Educação e Recuperação Ambiental - GERA s.d. *O Processo APELL* (Rio de Janeiro) Mimeo.
- Hajer, M. 1995 *Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process* (Oxford).
- Herculano, S.; M. F. S. Porto & C. M. Freitas (organizadores) 2000 *Qualidade de Vida & Riscos Ambientais* (Niterói: EdUFF).
- Lopez, C. S. & J. S. Alhama 1998 *Medio Ambiente y Sociedad - de la metáfora organicista a la preservación ecológica* (Granada: Ecorama).
- Petrobrás sd. *Recuperação da Baía de Guanabara: nosso compromisso* (Rio de Janeiro) 7.

Souza Jr., M. D. 1996 *Auditoria e Treinamento para Planejamento de Emergências em Refinarias de Petróleo* (Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ) Tese de Doutorado.

Wynne, B. 1996 "May the Sheep Safely Graze? A reflexive view of the Expert-lay Knowledge Divide", in Lash, S.; B. Szerszynski & B. Wynne (editores) *Risk, Environment and Modernity* (London: Sage Publications).

Notas

1 Em folheto publicitário, a Petrobrás afirmou ter distribuído 8.234 cestas básicas e cadastrado 12.240 moradores para receber assistência (Petrobrás, s.d.: 7).

2 Um representante do Conselho Empresarial do Desenvolvimento Sustentável afirmou na imprensa: "Pode-se acusar uma empresa que ostenta 15 certificados internacionais de qualidade ambiental de agir com indiferença ou negligência, descaso ou incompetência em relação ao controle do meio ambiente? A Petrobrás é uma das empresas do mundo que mais possuem certificados ISO 140001 conferidos dentro dos mais rigorosos critérios do gênero em âmbito internacional" (Bulhões, 2000).

*La valuación de recursos naturales extinguidos: el caso de la merluza en el mar continental argentino **

Ruy de Villalobos**

Introducción

¿Cuánto valen las especies de ballenas extinguidas? ¿Qué valor tiene la pérdida de los quebrachales chaqueños? ¿Qué costo hay que darle a la extinción de la anchoveta del Perú? ¿En qué contexto, si lo hubiere, es legítimo darle precio a pérdidas invalorable? ¿Vale la pena distinguir entre pérdidas de especies “aprovechables” y extinción de especies silvestres “sin valor”?

Los interrogantes anteriores son apenas un breve listado de las múltiples cuestiones que la degradación acelerada y la destrucción parcial o total de recursos naturales renovables mundiales ha generado para filósofos, políticos y científicos naturales y sociales, además de para todo ciudadano consciente.

Este trabajo se circunscribe estrictamente a intentar un enfoque de la economía aplicada al caso de la valuación de recursos naturales extinguidos. No obstante, este modesto cometido inevitablemente lleva a incursionar en dimensiones más complejas y, sin duda, más enriquecedoras para la comprensión y denuncia de procesos aparentemente inmanejables que van generando límites concretos a la reproducción de la vida en nuestro planeta¹.

¹Agradezco a María Onestini, directora del Centro de Estudios Ambientales (CEDEA), Buenos Aires, y a Graciela Gutman, investigadora de ese Centro, por estimular mi interés en esta temática. El excelente informe a la UNEP del CEDEA (Onestini et al., 2001) utilizó lineamientos metodológicos formulados por el autor. Varios datos utilizados en este trabajo se originan a su vez en el informe citado del CEDEA. Los conceptos vertidos en este trabajo no son necesariamente compartidos por el IDES.

²Economista argentino. Ex funcionario del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); ex Subsecretario de Economía Agraria de la Argentina (1987-88); ex Investigador Principal del Centro de Economía Internacional. Consultor de varios organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos.

En las sociedades humanas primitivas, la extinción de especies vegetales y animales fue un proceso ligado indisolublemente al desarrollo de la contradicción fundamental entre naturaleza y supervivencia humana. En estadios muy atrasados, las comunidades recolectoras y/o las primeras sociedades agro-pastoriles produjeron desequilibrios ecológicos que acabaron con numerosas especies. Más allá de la creciente constatación de sabiduría y conductas conservacionistas en muchas sociedades primitivas estudiadas en el presente, tales procesos ocurrieron y la principal razón y legítima excusa histórica puede encontrarse en la ignorancia a propósito de las consecuencias sobre delicados ecosistemas de las actividades de recolección y producción de alimentos para consumo humano.

Tal justificación no es ni válida ni legítima desde hace al menos dos siglos y más aún en los albores del siglo XXI. La dinámica ciega y aplastante de la acumulación capitalista ha puesto bajo tensiones inéditas a la dotación de recursos naturales del planeta y tales desastres irreversibles sobre el patrimonio natural no son producto ni de la ignorancia ni de necesidades que no pudieran satisfacerse mediante otros medios.

La extinción (parcial o total) de recursos naturales no renovables es un tópico ampliamente estudiado. Los recursos minerales elegidos bajo determinados paradigmas tecnológico-económicos están “destinados” a agotarse. Con fe, digna de mejor causa, se supone apologeticamente que el desarrollo de las ciencias y tecnologías permitirá tanto detectar y explotar yacimientos adicionales como sustituir los minerales extinguidos con otros materiales. Economistas de diversas vertientes se ocupan de calcular rentas y simular la evolución de los precios de estos recursos ante distintas hipótesis de demanda y de aparición de ofertas tecnológicas alternativas.

Los paradigmas conservacionistas han centrado sus esfuerzos en la extinción de especies no directamente utilizadas para consumo humano. Las nociones de equilibrio de los ecosistemas, impactos indirectos de actividades antrópicas y disminución y extinción de la biodiversidad ya son tópicos de dominio público. La desaparición irreversible de fauna y flora silvestre mueve cada vez más a la opinión pública con contenidos emocionales de no escasa intensidad. Los economistas, sin embargo, casi no han puesto atención a estos temas, a pesar de que puede fundamentarse sólidamente la necesidad de analizar impactos directos e indirectos de la pérdida de especies que, “aparentemente”, no tienen usos económicos directos.

La extinción de recursos naturales renovables ha sido también objeto de numerosos estudios. En este último conjunto de recursos, la aparente paradoja que encierra la contradicción entre los términos “extinción” y “renovable” encuentra resolución en la causa subyacente e implícita: solamente bajo condiciones de manejo “irracional” un recurso natural renovable puede extinguirse.

Y el ámbito de análisis de los manejos “irracionales” escapa ciertamente al ámbito exclusivo de las ciencias naturales. Se entra de lleno en el dominio de la política y de la economía política. Se trata de analizar qué políticas de (des)protección hicieron posible que un recurso natural renovable fuera manejado de tal modo que se llegara a su extinción.

Enfrentado a la mayor parte de estos casos, el economista tradicional queda perplejo pues los supuestos de racionalidad en las conductas de los agentes económicos se violan flagrantemente: no solamente se provocan desastres ecológicos irreversibles (por ejemplo, la desaparición de una especie) sino que, como inmediata consecuencia, muchas veces también se produce en paralelo la extinción (económica) de los mismos agentes. La “miopía” de cada unidad de producción genera un desastre que afecta a todas y cada una de las participantes, y el resto de la sociedad pierde irreversiblemente una especie natural que ya no solamente deja de ser “recurso” sino que también deja de existir sobre la faz del planeta².

En general, las políticas (o la falta de ellas) son la principal causa de “desmanejo” de recursos naturales renovables y de su extinción. Esas políticas tienen beneficiarios inmediatos y víctimas eternas. En estos contextos, la valuación de las pérdidas parece no solamente relevante sino también de utilidad práctica para la *acción política*. En efecto, el conocimiento de la magnitud de las pérdidas sienta las bases para identificar responsables, exigir indemnizaciones y poder efectuar compensaciones. Estas, aunque siempre parciales frente a la irreversibilidad de la extinción de una especie, podrán servir tanto de reparación para los damnificados más débiles de estos procesos como de amenaza para potenciales (des)administradores de políticas de protección de especies extinguidas³.

Antecedentes

Los recursos del mar argentino

La virtual extinción de una especie ictícola en el Mar Argentino constituía una hipótesis rayana en la fantasía hasta hace pocos años atrás. En toda su historia, el país se desarrolló de espaldas al mar y al aprovechamiento de sus recursos. Esta situación cambió sustancial y abruptamente en los últimos diez años, según se detalla más adelante.

La imagen del gaucho con su ganado o del chacarero con sus trigales nunca fue mínimamente empañada por personajes como el marinero o el pescador a pesar de las enormes dimensiones de la costa marítima y de la innegable riqueza de la vida natural en las aguas del Atlántico Sur. En efecto, la plataforma continental argentina tiene una extensión de poco más de un millón de km² cuyos fondos se componen principalmente de arenas. Estas características, unidas a condiciones especiales de temperatura de las aguas, salinidad y corrientes dominan-

tes generan condiciones para albergar más de 400 especies de peces, alrededor de 200 especies de moluscos y 90 especies de crustáceos. La diversidad de las especies marinas no es tan grande como en condiciones tropicales o subtropicales pero este atributo es más que compensado por la enorme dimensión de la biomasa de casi todas las especies identificadas.

El conocimiento científico sobre la mayor parte de las especies es limitado pero no escaso. El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) ha logrado una clasificación rigurosa de las principales especies ictícolas de acuerdo a su grado de explotación actual, a saber⁴:

Especies sobre-explotadas: se trata de recursos con alto grado de presión pesquera. Las tasas de explotación máxima han sido determinadas a través de estudios rigurosos destinados a determinar grados sostenibles de captura. Las principales son:

- MERLUZA / ARGENTINE HAKE (*Merluccius hubbsi*)
- POLACA / Southern blue whiting (*Micromesistius australis*)
- CORVINARUBIA/ CROAKER (*Micropogonias furnieri*)
- PESCADILLADE RED / Striped weakfish (*Cynoscion guatucupa*)
- BESUGO / RED PORGY (*Pagrus pagrus*)
- MERLUZANEGRA / Patagonian Toothfish (*Dissostichus eleginoides*)
- MERLUZAAUSTRAL / SOUTHERN HAKE (*Merluccius australis*).

Especies en el límite de explotación:

- ABADEJO / LING, KINGKLIP or PINK CUSKEEL (*Genypterus blacodes*)
- GATUZO / patagonian smoothhound (*Mustelus schmitti*)
- PEZ PALO / brazilian flathead (*Percophis brasiliensis*)
- CASTAÑETA or PAPAMOSCAS / CASTANETA or HAWKFISH (*Cheilodactylus bergui*)
- BACALAO CRIOLLO or BACALAO AUSTRAL / PATAGONIAN COD or RED COD (*Salilota australis*)
- SALMON DE MAR / BRAZILIAN SANDPERCH (*Pseudoperca semifasciata*)
- MERO / Argentine sea bass (*Acanthistius brasilianu*)
- CONGRIO / ARGENTINE CONGER (*Conger orbignyanus*)
- PALOMETA PINTADA/ PARONALEATHERJACK (*Parona signata*)
- PARGO / ARGENTINE CROAKER (*Umbrina canosai*)
- LENGUADOS / Flounders (*Paralichthys patagonicu*, *Xystreury*s *rasile*)

A estos peces se agregan los siguientes invertebrados:

- VIEIRA PATAGONICA / PATAGONIAN SCALLOP (*Zygochlamys patagonica*)
- LANGOSTINO / ARGENTINE RED SHRIMP (*Pleoticus muelleri*)
- CALAMAR / ARGENTINE SHORT - FIN SQUID (*Illex argentinus*)
- VIEIRATEHUELCHÉ / TEHUELCHÉ SCALLOP

Especies factibles de incrementar su explotación:

- MERLUZADE COLA/ HOKI or LONG TAILHAKE or PATAGONIAN
- GRENADIER (*Macruronus magellanicus*)
- ANCHOÍTA/ ARGENTINE ANCHOVY (*Engraulis anchoita*)
- CABALLA/ CHUB MACKEREL (*Scomber japonicus*)
- SARDINAFUEGUINA / FUEGIAN SPRAT (*Sprattus fuegensis*)
- CONGRIO DE PROFUNDIDAD or CONGRIO CHICO / HAIRY CONGER or CONGER EEL (*Bassanago albescentis*)
- RUBIO / ROCKY FISH or BLACKBELLY ROSEFISH (*Helicolenus dactylopterus lahillei*)
- CABARILLA or RUBIO DE LAS PIEDRAS / ROCKY FISH or SCULPIN (*Sebaste capensis* or *oculatus*).
- NOTOTENIACOLUDA or LORCHO FINO or CHANCHITO / SOUTHERN LONGTAILCOD (*Paganothen ramsayii*)
- TUNA FAMILY

La pesca en el mar argentino: evolución

La explotación pesquera hasta inicios de la década de los '90 constituyó siempre una actividad marginal de la economía nacional. La pesca comercial se concentró en el puerto de Mar del Plata con una flota semiartesanal que abastecía las escasas necesidades del mercado doméstico dado que las exportaciones eran absolutamente marginales y frecuentemente nulas. De hecho, el consumo de pescado por habitante en la Argentina se mantuvo por décadas entre los más bajos del continente. Pautas culturales y un precio persistentemente bajo de la carne vacuna explican estas características.

La legislación vigente aseguraba un mercado cautivo a empresas pesqueras nacionales. Así, solamente barcos de bandera nacional podían pescar, los barcos usados no podían ser importados y los nuevos estaban sujetos a altas tarifas aduaneras. Además, el 75% de la tripulación debía ser compuesta por argentinos (un 100% en el caso de oficiales). Esta normativa era redundante. Los niveles de entonces de la demanda mundial de pescado y el escaso atractivo del pequeño mercado nacional eran suficientes desestímulos para la presencia de inversores y/o flotas de origen extranjero.

En este escenario no existía, naturalmente, ninguna preocupación por la protección de especies en el mar⁵. La pesca comercial no constituía ningún peligro para la reproducción de la biomasa marina y para el mantenimiento de equilibrios sustentables en los ecosistemas asociados.

Esta situación cambia abrupta y aceleradamente a partir de 1990. En este período (1990-1999) se incrementa en más de cinco veces el tonelaje de la flota pesquera comercial de altura y las capturas totales crecen más de tres veces en volumen. Las exportaciones de productos del mar crecen entre 1988 y 1994 un 384% y alcanzan los US\$ 800 millones en 1994, superando holgadamente al valor de las exportaciones de carne vacuna. Varias especies, entre las cuales se destaca la merluza, son sobre-explotadas a tal punto de poner en peligro su capacidad de reproducción y, bajo ciertas condiciones, tienden a la extinción⁶.

¿Qué factores explican este abrupto cambio? ¿Son las políticas internas el detonante de este proceso? ¿Acaso una legislación menos proteccionista en lo económico provoca un cambio en el flujo de inversiones externas?

Cuadro 1
Potencia de la flota de buques congeladores
Evolución de la potencia acumulada (en caballos de fuerza-HP)

Año	HP	HPacumulados
1986	21.867	21.867
1987	8.400	30.267
1988	6.332	36.599
1989	0	36.599
1990	1.995	38.594
1991	26.463	65.057
1992	9.847	74.904
1993	21.789	96.693
1994	34.454	131.147
1995	75.311	206.458

Fuente: Godelman et al. (1999).

Todo indica que este no fue el caso. El aluvión de buques pesqueros sobre el Atlántico Sur estuvo directamente relacionado con la crisis de los caladeros del Mar del Norte y con un persistente crecimiento de la demanda de pescado en los países de mayor ingreso per cápita. Esto es, un fenómeno de “mercado puro” explicaría el nuevo interés por los caladeros del mar argentino desde hace diez años a esta parte.

Cuadro 2
Capturas de productos del mar
Evolución 1990 -1999 (en miles de toneladas)

AÑO	CAPTURAS
1990	545
1991	631
1992	692
1993	918
1994	937
1995	1.136
1996	1.225
1997	1.339
1998	1.115
1999	1.016
2000	850

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA) www.sagpya.mecon.gov.ar Pesca y Acuicultura

Podría entonces suponerse que tales presiones motivaron un desmantelamiento de la legislación proteccionista en la Argentina y la suscripción de acuerdos liberales de explotación pesquera por parte de empresas extranjeras (como viene sucediendo en las costas de Africa desde hace más de veinte años). Por el contrario, se constata que estos fenómenos se enmarcaron en un cuadro de mayor protección formal, tanto económica como ecológica, de los recursos pesqueros argentinos.

Esta paradoja es aparente según se explora en la sección siguiente.

Protección económica y protección ecológica: ¿paradojas o hipocresía?

En realidad, es éste el escenario en que se produce la aplicación de los resultados de la Conferencia sobre los Derechos del Mar (vigente desde 1980) y la consecuente delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que garantizó derechos económicos de la Argentina sobre una enorme superficie del Atlántico Sur. Tales derechos, sin embargo, no generaron mayores cambios en la dinámica e intensidad de la explotación pesquera en estas zonas durante al menos un decenio.

Por cierto, las autoridades argentinas promovieron la pesca por parte de buques soviéticos y búlgaros (mediante convenios de gobierno a gobierno) durante la década de los '80 dado el escaso interés de inversionistas nacionales o extranjeros por ampliar la escala de sus actividades.

La década de los '90 se inicia sin mayores cambios legales en el régimen pesquero argentino. En las formas, la legislación existente garantizaba un alto grado de protección económica a los pescadores nacionales, al que se sumaba un grado aún mayor de protección que en tiempos anteriores debido a la vigencia de la ZEE⁸. Al mismo tiempo, el discurso político oficial enfatiza, por primera vez, la necesidad de protección de los recursos naturales del mar y se refuerzan los trabajos del INIDEP destinados a cuantificar la dotación de recursos de distintas especies ictícolas y a conocer su dinámica de reproducción con el objeto de fijar tasas máximas de extracción.

Sin embargo, la fuerte presión de demanda sobre el caladero argentino va provocando prácticas que cambian significativamente la situación previa. En particular, se produce un proceso de radicación como “empresas nacionales” de un numeroso grupo de empresas pesqueras europeas (predominantemente españolas) con el fin de adecuarse a la legislación vigente. Estas nuevas empresas, sin embargo, sólo podían operar nuevos buques si conseguían “licencias de pesca” previamente concedidas a otros buques (restricción legal concebida como elemento limitante a la sobre-explotación pesquera)⁹.

Dado que el proceso de concesión de licencias en las tres décadas anteriores se caracterizó por la falta de transparencia y por el desorden, se generó un “mercado de licencias” desde fines de la década de los '80 que, en definitiva, permitió expandir significativamente la potencia de la flota pesquera y su capacidad de captura¹⁰.

Como corolario, se suscribe con la Unión Europea (UE) el Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima en 1992 y se lo confirma por Ley en 1994. La vigencia del mismo fue de cinco años, renovables por acuerdo de las partes (hecho que no se produjo por decisión argentina). Por cierto, en la UE este acuerdo fue presentado como un enorme avance frente a los tratados preexistentes con varios países africanos criticados por numerosas organizaciones mundiales como instrumentos de depredación de los recursos pesqueros. En efecto, el Acuerdo establece en su primer artículo que se persigue la “conservación, explotación y transformación” de los recursos pesqueros y en su tercer artículo se expresa el objetivo de “promover la preservación y conservación de los recursos vivos” para lo cual la UE financiaba asistencia técnica y el desarrollo de nuevas tecnologías de captura (una donación de Ecus del orden de los 28 millones).

En lo sustantivo, sin embargo, el Acuerdo proveyó de un marco explícito para la aplicación de subsidios comunitarios a empresas pesqueras europeas en crisis. De tal forma, estas empresas debían asociarse o formar *joint-ventures* con empresas nacionales (muchas de ellas con origen europeo) y la Argentina garantizaría la provisión de “licencias de pesca” según la legislación vigente. Estas empresas, además de producir y operar libremente, completaban sus ingresos mediante los subsidios financieros provistos por la UE¹¹. El estímulo a radicarse bajo estas

condiciones se constató con el formidable crecimiento señalado de la flota pesquera comercial. Una Comisión Mixta dirigía las actividades previstas bajo el Acuerdo. De hecho, esta Comisión participó en todas las acciones que permitieron, bajo las ambigüedades legales existentes, violar buena parte del “espíritu explícito” del Acuerdo.

Varios estudios señalan enormes irregularidades en la aplicación de la legislación vigente y en los métodos de control previstos (Godelman et al., 1999; Casal y Prenske, 2000; Onestini et al. CEDEA, 2001). En particular, se ha encontrado que: (a) un alto porcentaje de las licencias de pesca otorgadas eran irregulares (y que prácticas difundidas de corrupción estaban asociadas a la existencia de estas licencias); (b) licencias concedidas para ciertos fines eran utilizadas para otros (por ejemplo, en áreas de pesca, especies autorizadas, etc.); (c) falsas declaraciones de captura y falta de confiabilidad en los mecanismos de control de capturas caracterizaron el período, etc. (Godelman et al., 1999). A estos estudios locales se suman las conclusiones de la Corte Europea de Auditores (datos extraídos de CEDEA: Onestini et al. 2001) la cual, en 1998, caracterizó una larga serie de actividades del Acuerdo como “bordeando el fraude” en relación a la percepción de subsidios. Entre otros, se señaló que se pagaron subsidios mayores a los debidos por engaños en la capacidad de captura de buques, por buques hundidos presentados como operativos y por empresas “fantasmas”.

En breve, la apertura del Mar Argentino a la explotación pesquera comercial en alta escala se presentó en conjunto con una legislación nacional e internacional que, en las formas, parecía garantizar la preservación de las especies pesqueras y la sustentabilidad de los recursos marinos en el largo plazo.

De hecho, tal normativa se aplicó en un contexto institucional y político plagado de irregularidades y corruptelas y con graves déficits de capacidad de control técnico de aspectos cruciales para la regulación de las capturas. Los resultados están a la vista: la merluza argentina está en vías de extinción y existen pocas posibilidades de recuperar esa valiosa biomasa.

Las dimensiones de la sobre-explotación de la merluza: al borde de la extinción de la especie

La merluza argentina está al borde del colapso. Todos los indicadores señalan en la misma dirección y, de hecho, esto ha ocurrido a pesar de que se dieron alertas científicas en momentos oportunos que fueron ignoradas una y otra vez por las autoridades políticas de entonces. Desde antes de la firma del Acuerdo con la UE, la tasa máxima de captura (TMC) fue determinada por el INIDEP en 395.000 toneladas por año (TMC vigente desde 1990 a 1997). Esta tasa fue violada casi desde el inicio y se estima que hacia 1997 la captura real superaba las 834.000 toneladas de merluza (que incluyen la declaración oficial de capturas por 586.000

toneladas). En 1998 la TMC se fijó en 289.000 toneladas y se capturaron oficialmente 458.000 toneladas y en 1999 la TMC descendió a 238.000 toneladas pero se pescaron (según declaraciones oficiales, 314.000 toneladas)

De hecho, las estimaciones sobre capturas de merluza son ambiguas y poco precisas. El sistema de información pesquero está caracterizado por fallas en la captación primaria de información, ambigüedades en las categorías de datos y errores en el procesamiento de los mismos. Estas falencias no pueden considerarse independientes del grado de descontrol que caracterizó a la pesca en la Argentina durante la década pasada. Los datos oficiales sobre capturas surgen de las declaraciones de los buques pesqueros. Tales declaraciones son, a juicio de muchos analistas, claramente inferiores a las capturas reales y no incluyen nunca las capturas de “descarte” de ejemplares (últimamente crecientes por el pequeño tamaño de los especímenes). En promedio, se ha estimado que las capturas reales se situarían un 35% por encima de las declaradas oficialmente. Sobre la base de datos oficiales (SAGPyA) se presentan las siguientes estimaciones de captura:

Cuadro 3
Estimación oficiales de capturas (en miles de toneladas)

Año	Total Capturas	Capturas peces	Capturas Moluscos y crustáceos	Capturas merluza
1990	545	503	42	341
1991	631	573	58	409
1992	692	588	104	369
1993	918	705	213	422
1994	937	717	220	436
1995	1.136	925	211	574
1996	1.225	919	306	590
1997	1.339	914	425	586
1998	1.115	795	320	458
1999	1.016	643	373	314
2000	850	527	323	190

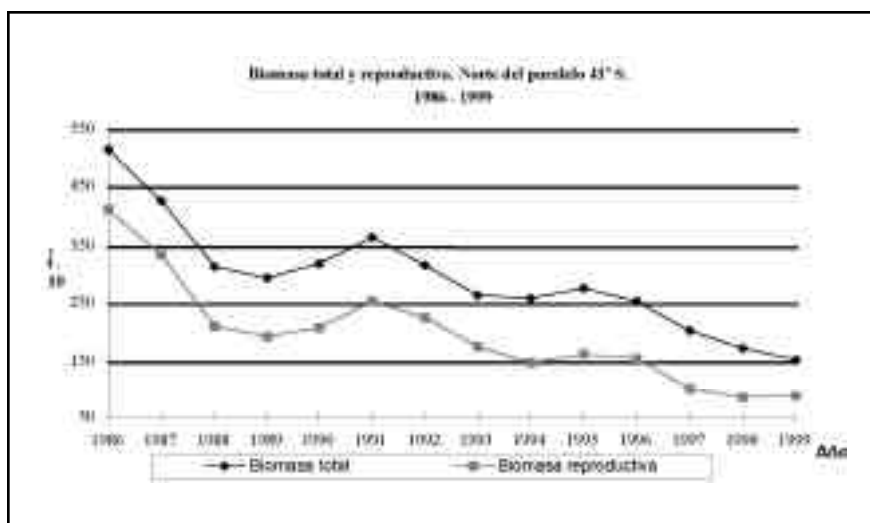
Fuente: estimación sobre datos SAGPyA, www.sagpya.mecon.gov.ar.

La merluza representa alrededor del 63% de las capturas en volúmenes de peces durante todo el período considerado (con la excepción de los últimos dos años).

Ciertamente, las capturas de moluscos y crustáceos han crecido en volumen mucho más que las capturas de peces. El calamar (*Illex argentinus*) representa el 95% de las capturas de la categoría crustáceos y moluscos.

Las consecuencias del ritmo de explotación de la biomasa pesquera y, en particular, de la merluza, fueron inmediatamente evidentes. En efecto, las estimaciones del INIDEP muestran una declinación persistente en la dimensión de la biomasa total y de la biomasa reproductiva, según se muestra en las siguientes figuras (datos extraídos de Casal y Prenski, 2000).

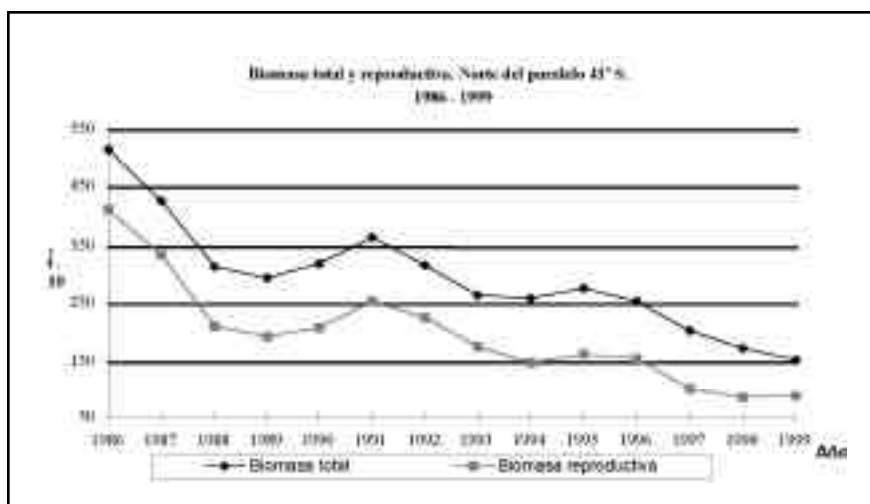
Figura 1
Biomasa total y reproductiva (*Merluccius Hubbsi*)
Area al norte del paralelo 41° S



Fuente: Casal y Prenski (2000).

La especie tiene su principal nicho sobre la plataforma continental en tres grandes áreas: el Golfo de San Matías en la Patagonia y al norte y al sur del paralelo 41° S. Estas dos últimas áreas representan la mayor parte de la biomasa.

Figura 2
Biomasa total y reproductiva (*Merluccius Hubbsi*)
Area al sur del paralelo 41° S



Fuente: Casal y Prenschi (2000).

Un indicador significativo adicional del grado de degradación de la especie es la reducción del tamaño promedio de los individuos capturados, el cual se redujo en más de un 10% entre 1986 y 1998.

La magnitud del proceso de degradación de la especie se ilustra con claridad con los datos presentados. A estos se agregan los indicadores provenientes de información generada en la flota pesquera: el esfuerzo de captura se incrementó significativamente en los últimos años.

En los dos últimos años se ha interrumpido virtualmente la captura de merluza¹². A la veda dispuesta por el Gobierno se suman factores económicos que desestimulan, relativamente, la continua sobre-explotación de este recurso. No existe ninguna prognosis oficial sobre la recuperación eventual de la biomasa en el futuro. Por el contrario, muchos analistas pronostican un colapso de la especie a pesar de la interrupción de toda captura.

En una década caracterizada por un alto dinamismo del sector primario argentino y con una efectiva difusión de prácticas y conciencia conservacionista en varias actividades (por ejemplo, en la siembra directa, la agricultura orgánica, etc.), la excepción de la política pesquera y de sus catastróficas consecuencias configuran un escándalo público y político de proporciones inéditas (Reca y Parellada, 2001).

Sin embargo, ni la opinión pública ni los iniciados en el tema parecen conocer la magnitud de la pérdida. Esta carencia contribuye a la desmovilización de los principales damnificados y deja impunes a sus causantes.

¿Valuación de las pérdidas o valuación de políticas?

La valuación ambiental: precisiones introductorias

La valuación ambiental o valuación de recursos naturales constituye una rama relativamente nueva de la economía aplicada¹³. Los trabajos se encuadran, en general, en derivaciones de técnicas pertenecientes al marco de la economía del bienestar, particularmente, de los enfoques de beneficio-costos.

Estas técnicas se desarrollaron a mediados del siglo XX para proveer de elementos de decisión sobre alternativas de inversión pública. En consecuencia, el enfoque general buscaba identificar todos los beneficios y costos posibles de una alternativa de inversión para compararlos con otras alternativas o con la alternativa de no hacer. Tales características diferenciaban estos análisis de los realizados por los inversores privados pues se incorporaron inmediatamente al menos los siguientes elementos: (i) la identificación de beneficios y costos no internalizados por las empresas; (ii) la valuación de tales beneficios y costos con precios “de cuenta” diferentes a los precios de mercado a fin de corregir las fallas de mercado que se reflejan en los precios; (iii) la utilización de tasas de descuento distintas al costo de oportunidad del capital en los mercados a fin de corregir la “miopía” de los agentes y hacer valer las preferencias supuestas de las futuras generaciones, etc.

Estos enfoques fueron progresivamente adaptándose a otros problemas. De hecho, las técnicas de beneficio-costos se utilizan en general para comparar las ventajas y desventajas de políticas alternativas.

En tópicos ambientales y de ecología, la utilización de estas técnicas se vincula directamente con dos actividades: por un lado, la evaluación de proyectos ambientales o con impactos ambientales explica la mayor parte de estos trabajos¹⁴; por otra parte, la eventual posibilidad de “compensaciones” monetarias por parte del resto del mundo¹⁵ a países o comunidades que prefieren conservar recursos naturales (caso más típico, bosques húmedos) generó la necesidad de determinar la magnitud de tales pagos. Finalmente, pero no por ello menos importante, la creciente conciencia ecológica y la lucha por la conservación de especies en peligro también motivó investigaciones y trabajos para poder dar valor a las pérdidas (evitadas o reales) asociadas a estos casos.

En realidad, el enfoque de beneficio-costos incluye una lista extensa de métodos alternativos que son materia de discusión y análisis. A este enfoque se suma, alternativa pero no contradictoriamente, el enfoque basado en los “valores de

existencia” o en los “valores de no uso” que se desarrolló para intentar dar valor a las preferencias de los ciudadanos (presentes o futuros) sobre la conservación de especies sin uso económico conocido o de ambientes o condiciones naturales determinadas.

Estas técnicas son “neutras”. Su utilización como herramientas de análisis en contextos adecuados constituye un elemento poderoso de denuncia y un estímulo para la transformación de la realidad¹⁶.

En este trabajo se aplica el enfoque de beneficio-costos para: (i) darle valor mercantil a la biomasa de merluza perdida, y (ii) analizar las políticas alternativas a la efectivamente aplicada en el control de la pesca de merluza en el Mar Argentino durante la última década.

El enfoque se encuadra en el método de las pérdidas evitadas si se hubieran respetado las tasas máximas de captura. Tales valores se estiman a precios de mercado, a falta de buenas estimaciones alternativas sobre precios de cuenta a aplicarse a la merluza (estimaciones que requerirían, por ejemplo, cálculos complejos sobre la función de demanda de pescado a nivel mundial y su evolución prevista). Sin embargo, se aplica un conjunto de tasas de descuento alternativas para observar cómo varía el valor global del recurso perdido y, al mismo tiempo, ilustrar sobre las diferentes percepciones sobre este valor según se aplique la “lógica del mercado” o la “lógica de la sociedad”.

Una fuerte crítica dirigida en general a todo el enfoque de beneficio-costos es que el mismo, en sus versiones más clásicas, contabiliza los beneficios y costos en forma indistinta sin tomar en cuenta quiénes son los beneficiarios. En este trabajo se intenta morigerar esta crítica mediante la aplicación de un modelo de asignación de flujos de beneficios y costos a distintos grupos sociales involucrados en la explotación y consumo de la merluza, tanto a nivel nacional como mundial.

Los hallazgos obtenidos no sólo permiten identificar a los principales beneficiarios del proceso y a las principales víctimas, sino valuar en forma satisfactoria el monto de los beneficios y costos para cada grupo involucrado.

Identificación de beneficios y costos

El análisis realizado se circunscribe estrictamente a los beneficios y costos asociados a la captura de la merluza, dejando de lado otras etapas de procesamiento del recurso, los efectos directos e indirectos sobre otras especies y el equilibrio del ecosistema ante la fuerte reducción y eventual extinción de la especie.

Los principales beneficios, en rigor, deberían circunscribirse a los beneficios netos de las empresas pesqueras si se suponen usos alternativos para la mano de obra empleada y para los insumos utilizados en la pesca. No obstante, el análisis

comparativo de políticas se realiza sobre la base de los flujos de Valor Bruto de Producción, los cuales ilustran con mayor rigor la magnitud del valor de la biomasa explotada¹⁷.

El cálculo de estos beneficios implica conocer no solamente los volúmenes capturados sino también los precios de la merluza y los costos asociados a la captura. El precio de la merluza “capturada” no es transparente¹⁸. Sobre la base de varias fuentes de información se llegó a estimarlo en el equivalente a US\$ 850 por tonelada. En efecto, las únicas series de precios son las correspondientes a exportaciones: el precio ponderado del “mix” de productos derivados de la merluza en el período alcanza los US\$ 1.168 por tonelada y, por otra parte, la merluza “entera” exportada tendría un precio declarado de US\$ 700 por tonelada. Ante serias presunciones de analistas sobre la subvaluación de las declaraciones, el precio adoptado parece ser una aceptable estimación.

Por otra parte, el análisis de los costos de producción (Onestini et al., 2001) permitió concluir que la relación Valor Agregado/Valor Bruto Producción alcanza, en promedio, a 0,89.

Los principales costos, para este enfoque, son aquellos asociados con la degradación de la biomasa de merluza. En otras palabras, con el valor del recurso natural extingible¹⁹.

El valor del recurso está determinado por su uso sustentable: con adecuada información científica sobre la tasa máxima de explotación que asegure la sustentabilidad de la especie, es posible (dados los precios) construir un flujo de ingresos a largo plazo y, descontándolo con supuestos adecuados, estimar el valor de este recurso para una cierta fecha (Valor Presente Neto -VPN-).

El valor de la biomasa de merluza

El corolario inmediato de los conceptos anteriores es la estimación del valor para la sociedad de la biomasa existente de merluza (en 1990). En efecto, el “valor” de un flujo infinito de ingresos equivalentes por período se define como la relación entre el ingreso anual equivalente y una tasa de interés adecuada para el descuento²⁰.

Dada la tasa máxima de captura sostenible (determinada científicamente) y los precios de ese volumen, es posible calcular el ingreso equivalente por año. Para nuestros supuestos, tal ingreso anual alcanzaba a US\$ 336 millones²¹.

La Tasa de Descuento “adecuada” debería ser una estimación de la tasa social de descuento entendida como aproximación al valor asignado a los beneficios que recibirían las generaciones futuras. Desde una perspectiva conservacionista, tal tasa es claramente inferior a las tasas de interés de mercado, por lo que se la es-

tima en 2% anual²². Con estos supuestos (prudentes pues suponen un precio constante de la merluza a través del tiempo), el valor de la biomasa de merluza se estima en el equivalente a US\$ 16.800 millones, a precios de 1990.

En rigor, puede afirmarse que la sociedad habría perdido un recurso natural que, con los supuestos adoptados incluyendo la hipótesis de extinción de la especie, tiene este valor²³. Con esta magnitud se podría iniciar un conjunto de acciones para solicitar compensaciones a los responsables de este desastre ecológico y económico.

Si se aplican otras tasas de descuento (TD) al flujo de ingresos estimado, los resultados varían significativamente: en efecto, si la TD adoptada fuera del 10% (tasa usualmente considerada como costo de oportunidad del capital a nivel internacional), el valor de la biomasa de merluza sería de US\$ 3.360 millones y si se aplicase una TD del 20% (tasa adoptada por los típicos empresarios locales), este valor se reduciría al equivalente a US\$ 1653 millones. En otras palabras, a medida que aumenta la tasa de descuento (o su equivalente teórico, que es la tasa de ganancia esperada por los capitalistas), el valor del recurso natural se reduce.

El uso de las técnicas de descuento de flujos futuros de ingresos permite, al menos en este caso en que un recurso natural renovable tiene precios de mercado, reflexionar sobre el concepto de valor de existencia (“existence value”). Este concepto utilizado para su aplicación a la extinción de especies naturales sin uso comercial o económico directo, también puede reflejarse en el caso de un recurso como la merluza argentina: nótese que la sumatoria de los flujos descontados a tasa de interés nula (la cual es un indicador adecuado para darle valor máximo a las preferencias futuras por la vida) da como resultado un valor del recurso tendiente a infinito, que es como decir que la “pérdida es invaluable”.

El análisis de beneficio-costos de las políticas alternativas de manejo del recurso

¿Qué hubiera pasado si se hubiera llevado a cabo una política adecuada de manejo de los recursos pesqueros? ¿Quiénes ganaban y quiénes perdían frente a las opciones efectivamente adoptadas? Esta sección busca dar respuesta a estos interrogantes en la esperanza de que, ante opciones similares en otros casos, el análisis de alternativas sienta bases para fundamentar la defensa de mejores políticas.

El ejercicio supone simular un analista situado en 1990 frente a dos paquetes de políticas alternativas a ser aplicados a la regulación de la pesca de la merluza en el Mar Argentino²⁴. El primer paquete de políticas es el haber adoptado las medidas correctas para asegurar que la captura nunca supere la tasa máxima recomendada.

El segundo paquete de políticas es el que se adoptó en la realidad (la situación “de facto”), suponiendo que las consecuencias futuras impliquen el colapso de la biomasa de merluza.

Construyendo los flujos de ingresos asociados a cada paquete de políticas (incluyendo supuestos fuertes sobre los precios de mercado de bienes y servicios considerados como precios sociales) se obtiene un escenario de comparación. En el escenario óptimo se restan al VBP los costos del adecuado control de las capturas. En el escenario real, se descuentan también los costos asociados a los subsidios externos e internos a las empresas pesqueras, considerados como costos para la sociedad en su conjunto. El VPN de cada flujo obtenido neto constituye un indicador económico de la conveniencia relativa de cada opción.

La tasa de descuento utilizada tiene tres valores: el primero es una aproximación a la tasa social de descuento (2%) que incorporaría las preferencias de las futuras generaciones; el segundo corresponde a la tasa que se acercaría al costo de oportunidad del capital a nivel mundial (10%)²⁵, y el tercero es el correspondiente al costo de oportunidad del capital para los típicos empresarios nacionales en la pasada década (20%).

La comparación entre las dos hipótesis es una adecuada medida del costo que para la sociedad (argentina y global) ha tenido la adopción de políticas de desastroso manejo de la pesca de la merluza.

Cuadro 4
Costo de las políticas adoptadas (en millones de US\$)

Políticas alternativas para el manejo de la pesca de la merluza en el mar argentino			
	VPN del VBPajustado		
Hipótesis	TD 2%	TD 10%	TD 20%
(1) Pérdida Total de Biomasa	2.864	1.938	1.300
(2) Manejo óptimo del recurso	15.800	3.160	1.580
Costo neto (2-1)	12.936	1.222	280

TD: Tasa de Descuento. Costo neto: diferencia entre política óptima y política con pérdida total de la biomasa.

Los resultados obtenidos señalan (con la TD social del 2%) que la sociedad habría evitado un costo neto de aproximadamente US\$ 13.000 millones si hubiera adoptado una política óptima de manejo del recurso pesquero.

Es interesante comparar este resultado con los obtenidos cuando se aplican Tasas de Descuento correspondientes a las “fuerzas del mercado”: en efecto, si estos escenarios alternativos se valúan con las TD de los empresarios nacionales, resulta ser que el costo neto alcanza solamente a US\$ 280 millones (más de cinco veces menos que desde una correcta perspectiva social).

Beneficiarios y víctimas

Se ha señalado que una crítica usual a la utilización de técnicas de beneficio-costos para la evaluación de inversiones o políticas alternativas es que las mismas “ocultan” los efectos distributivos y no pueden identificarse quiénes reciben beneficios y quiénes sufren costos incrementales.

Tal crítica es válida pero de ningún modo irresoluble. En efecto, es posible desagregar los flujos de beneficios y costos según los distintos agentes involucrados en cualquier proyecto o política bajo análisis²⁶.

El caso de la merluza puede ser analizado desde esta perspectiva. El análisis se realiza para las dos hipótesis de política: (a) la política real con colapso de la merluza; (b) la política óptima, con manejo adecuado del recurso que asegura su sustentabilidad a largo plazo. Cabe señalar que los cálculos se realizaron para el flujo de “valor agregado anual” correspondiente a las hipótesis (y no para el flujo de VBP, usado en cálculos anteriores), ajustados con los subsidios recibidos y los costos de control correspondientes.

Los agentes involucrados (*stakeholders*) identificados son²⁷:

Las empresas pesqueras.

Los trabajadores de la flota pesquera y de las industrias conexas.

El fisco argentino.

Los contribuyentes de la Unión Europea.

Las futuras generaciones (principalmente de argentinos).

No hay dudas sobre la relevancia de incluir a las empresas pesqueras que lucraron con la explotación y sobre-explotación del recurso. Tampoco es cuestionable involucrar a los trabajadores que obtuvieron ingresos de esta actividad y que, luego del colapso, perdieron sus empleos e ingresos. Los contribuyentes europeos son los que financiaron los subsidios recibidos por las empresas pesqueras bajo el Acuerdo y el fisco argentino recibió tanto ingresos por impuestos como erogó recursos por subsidios de orden regional. Las futuras generaciones son los verdaderos involucrados en términos de disfrutar el mantenimiento sustentable del recurso o de enfrentar el colapso de la especie y de su aprovechamiento económico a largo plazo.

Cuadro 5
**Matriz de involucrados en los beneficios y costos de la política real:
 pérdida de la biomasa de merluza (en US\$ millones)**

INVOLUCRADOS	GANANCIAS	SALARIOS	SUBSIDIOS	IMPUESTOS	PERDIDAS	TOTAL
EMPRESAS PESQUERAS	1.614		557	-323		1.848
TRABAJADORES		1.431				1.431
FISCO ARGENTINO				323		323
CONTRIBUYENTES			-557		-234	-791
FUTURAS GENERACIONES					-13.951	-13.951
TOTAL	1.614	1.431	0	0	-14.185	-11.140

Nota: los impuestos se calcularon como el 20% de las ganancias.

En síntesis, las malas políticas de manejo de la pesca de la merluza en el mar argentino resultaron en una pérdida neta para la economía de unos US\$ 11.140 millones (bajo los supuestos de precios adoptados).

Tal pérdida implicó, sin embargo, que los principales beneficiarios fueron las empresas pesqueras y los trabajadores, que en conjunto recibieron ingresos netos de aproximadamente US\$ 3.040 millones incluyendo una contribución de la UE y de los contribuyentes argentinos de US\$ 791 millones. El fisco argentino obtuvo una ganancia de US\$ 323 millones. Las futuras generaciones financian estos ingresos mediante una pérdida neta equivalente a US\$ 13.951 millones (equivalente al VPN de los flujos de valor agregado netos de costos de control).

¿Cómo hubiera sido el reparto de beneficios y costos si se hubiera adoptado una política de manejo sustentable de la pesca de la merluza?

Aplicando similar tratamiento a los datos obtenidos, los resultados muestran que la ganancia neta de US\$ 13.951 millones para toda la sociedad hubiera sido repartida en forma casi equivalente entre los empresarios pesqueros y los trabajadores.

Cuadro 6
**Matriz de involucrados en los beneficios y costos de la política
óptima de manejo sustentable del recurso (en US\$ millones)**

INVOLUCRADOS	GANANCIAS	SALARIOS	SUBSIDIOS	IMPUESTOS	PERDIDAS	TOTAL
EMPRESAS PESQUERAS	7.924			-1.585		6.339
TRABAJADORES		7.027				7.027
FISCO ARGENTINO			-1.000	1.585		585
FUTURAS GENERACIONES					0	0
TOTAL	7.924	7.027	-1.000	0	0	13.951

Nota: los impuestos se calcularon como el 20% de las ganancias

Cabe señalar que el monto total de las ganancias de los empresarios en esta hipótesis es casi tres veces y media mayor a las ganancias realmente obtenidas mientras que los trabajadores hubieran obtenido remuneraciones cinco veces superiores a lo que realmente ocurrió. El fisco nacional habría ingresado un monto superior al efectivamente logrado pero los costos de control efectivo del manejo de la pesca habrían insumido un porcentaje importante, dejando igualmente un saldo neto positivo para las arcas estatales. Huelga decir que no hay perdedores en esta hipótesis. Las futuras generaciones seguirían gozando de la existencia de este recurso natural renovable y no habría costos para contribuyentes extranjeros ni para otros grupos sociales.

Es importante resaltar que estos resultados se logran con una hipótesis muy fuerte de mantenimiento de los precios relativos de la merluza a lo largo del tiempo. De hecho, esta hipótesis es sumamente discutible: el crecimiento de la demanda de pescado es sumamente dinámico y con una alta elasticidad de ingreso. Estas características sin duda influirían sobre el nivel de precios del recurso a lo largo del tiempo por lo que puede suponerse que los beneficios serían más altos que los estimados con los supuestos adoptados²⁸.

Conclusiones

En esta etapa de desarrollo histórico de la humanidad nadie osa poner en discusión que la pérdida de una especie natural es un daño irreversible e invalorable.

En los casos de especies sin uso económico aparente (en general, fauna y flora silvestre), el desarrollo de conceptos como el de “valor existencial” o “valores

de no uso” ha sido crecientemente aplicado para intentar dar una dimensión “de valor económico” a la extinción o degradación profunda de estas especies.

En el caso de especies naturales transformadas en “recursos” por su explotación y aprovechamiento económico, la noción de sustentabilidad cobra una importancia crucial para que las mismas puedan transformarse en recursos “renovables” o, en su defecto, colapsen y se extingan.

El caso de la merluza argentina presenta varias características peculiares cuando se lo compara con otros casos conocidos de degradación y/o extinción de especies explotadas económicamente. En efecto:

- a) Se produjo en un período muy corto de tiempo (de siete a diez años) lo cual, a diferencia de muchos otros casos, no permitió “disimular” la magnitud de los daños²⁹.
- b) No se produjo en un “vacío” de normativa legal. Por el contrario, la legislación existente no solamente regía plenamente sino que fue corregida y ampliada por tratados internacionales con el objetivo manifiesto de conservar los recursos del mar. La “distracción normativa” sobre estas problemáticas, entonces, tampoco puede esgrimirse como excusa como en tantos casos ocurridos previamente.
- c) Se tuvo, desde el principio, información científica adecuadamente fundada para determinar los límites máximos tolerables de captura. La ignorancia sobre el comportamiento de la biomasa no puede ser usada, entonces, en este caso.
- d) Los principales actores no están asociados a grandes empresas de capital multinacional (por ejemplo, tantos casos de degradación forestal). Por el contrario, empresas de capital mediano son las principales protagonistas³⁰.
- e) Los Estados no están ausentes de la operatoria y son, en rigor, los principales causantes y protectores de las empresas depredadoras. El Acuerdo Argentina-UE pasa a ser el marco principal para fomentar la radicación masiva de empresas pesqueras europeas y su asociación con capitales locales.

La “sustentabilidad” de un recurso natural está directamente relacionada con, al menos, tres requisitos: por un lado, el conocimiento científico sobre las tasas máximas de extracción o explotación de la especie; por otra parte, con los mecanismos normativos adecuados para regular el manejo de la explotación y, finalmente, con la aplicación efectiva de los mismos para asegurar que los agentes económicos no sobrepasen tales tasas máximas de explotación. El análisis elaborado permite, al menos, concluir que:

- a) En el caso del colapso del caladero de merluza en el Mar Argentino (en rigor, en el Atlántico Sur) dos de los requisitos se cumplieron y no fue suficiente. La ausencia de cumplimiento del tercer requisito (*enforcement*) provocó una catástrofe ecológica y graves consecuencias económicas.

b) La legislación nacional, aún como proteccionista de los intereses locales y conservacionista (en las formas) de los recursos naturales, no es suficiente para enfrentar tanto a las fuerzas del mercado mundial como a la enorme presión ligada a Acuerdos internacionales de los principales países consumidores y pesqueros. De hecho, tales presiones subyacen a la falta de *enforcement* de la normativa nacional y están en la base de la corruptela generalizada que cobijó estas irregularidades.

c) Las técnicas convencionales de “valuación de recursos naturales” son aplicables y de suma utilidad para medir, en términos de valor mercantil, las pérdidas de valores asociados a la extinción o degradación de especies naturales, bajo condiciones determinadas. Además, son utilizables para evaluar los costos y beneficios asociados a la formulación y adopción de políticas alternativas de manejo de recursos naturales renovables, incluyendo la hipótesis de su extinción.

d) Estas técnicas pueden servir para transmitir una dimensión económica de la pérdida sufrida (o del valor del recurso natural renovable) y, sobre todo, para sentar bases y así exigir compensaciones e indemnizaciones a los causantes del daño infligido a la sociedad.

El trabajo presentado permite, finalmente, darle una magnitud económica a la eventual extinción de la merluza en el Mar Argentino.

Tal cuantificación está sujeta a una serie de supuestos sobre precios y evolución de los mercados pero da una idea cabal de la dimensión de la pérdida de la especie.

Claramente, estas conclusiones no incluyen la consideración de todo aquello que escapa a su reducción a los términos de precio capitalista. Aparentemente, en un mundo predominantemente sujeto a la lógica de funcionamiento del capital, cada vez es más difícil transmitir la noción de “valor” a lo que no puede expresarse en “precio”.

Apéndice

Datos y cálculos utilizados

Cálculo del VPN

La fórmula general para el cálculo del valor presente neto (VPN) es la siguiente:

$$VPN = \sum_{t=0}^n \frac{a_t}{(1+i)^t}$$

Para t variando de 0 a $n < \infty$.

Si se supone una serie infinita, el cálculo corresponde a la siguiente fórmula:

$$VPN = \frac{a_t}{i} \text{ cuando } t \text{ tiende a infinito}$$

VPN: es el valor presente neto de un flujo de montos a través del tiempo, en una fecha base adoptada.

a_t : es el monto anual constante para cada año t .

i : es la tasa de descuento adoptada.

Cálculo de los VPN según políticas alternativas

a) Para el caso de la Política óptima se aplica la fórmula anterior a las series de Valor Bruto de la Producción (VBP), Valor Agregado (VA) y Beneficios netos con una tasa de descuento del 2% anual. Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 1.

Cuadro 1
**VPN de diferentes flujos para la política óptima
con tasa de descuento del 2%**

Flujos	Millones de US\$
VBP anual	336
VPN pm	16.800
VA anual	299
VPN va	14.950
Benef. Anual	158
VPN benef.	7.900

b) Para el caso de la Política Real se calcula el VPN de distintos flujos, sin considerar subsidios, según los siguientes datos:

Cuadro 2
Datos básicos

POLITICACOLAPSO Capturas oficiales				
Año	Captura (miles ton)	VBP (en millones \$)	VA	Beneficios
1990	341	290	258	136
1991	409	348	309	163
1992	369	314	279	147
1993	422	359	319	169
1994	436	371	330	174
1995	574	488	434	229
1996	590	502	446	236
1997	586	498	443	234
1998	459	390	347	183
1999	314	267	238	125

c) Los resultados obtenidos en términos de costo neto de la política real (en VBP, VA y Beneficios) son los siguientes:

Cuadro 3

VPN	VBP	VA	Beneficios
VPN al 2% colapso	3.421	3.045	1.608
VPN optima	16.800	14.950	7.900
Costo neto	13.379	11.905	6.292
VPN al 10% colapso	2.295	2.043	1.079
VPN al 10% optima	3.360	2.990	1.580
Costo neto	1.065	947	501
VPN al 20% colapso	1.524	1.357	716
VPN al 20% óptima	1.680	1.495	790
Costo neto	156	138	74

Cálculos para análisis de políticas alternativas y distribución entre beneficiarios

Cuadro 4

HIPOTESIS POLITICAREAL (en millones de US\$)				
AÑO	VBP	SUBSIDIOS	VBP neto de Subsidios	VA
1990	290	25	265	258
1991	348	35	313	309
1992	314	50	264	279
1993	359	60	299	319
1994	371	65	306	330
1995	488	70	418	434
1996	502	90	412	446
1997	498	90	408	443
1998	390	75	315	347
1999	267	70	197	238
VPN (2%)	\$3,421.29	\$557.07	\$2,864.21	\$3,044.94
VPN (10%)	\$2,295.06	\$357.04	\$1,938.02	\$2,042.60
VPN(20%)	\$1,524.31	\$224.46	\$1,299.85	\$1,356.64

Cuadro 5

HIPOTESIS POLITICAOPTIMA (en millones de US\$)			
AÑO	VBP	COSTO CONTROL	BENEFICIOS TOTALES
1990-infinito	336	20	316
VPN (2%)	16.800	1.000	15.800
VPN (10%)	3.360	200	3.160
VPN(20%)	1680	100	1.580

Cuadro 6

VALOR AGREGADO (en millones de US\$)			
	TOTAL	GANANCIAS	SALARIOS
HIPOTESIS OPTIMA	14.950	7.924	7.027
HIPOTESIS REAL	3.045	1.614	1.431

Cuadro 7

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS en miles de toneladas				
AÑO	CALAMAR	MERLUZA	RESTO	TOTAL
1988	12.3	103.5	78.2	194
1989	15.9	103	84.4	203.3
1990	17.4	140.7	77.6	235.7
1991	33	145.8	81.9	260.7
1992	56.5	114.6	88.9	260
1993	183	156.9	117.3	457.2
1994	189.5	178.9	144	512.4
1995	97.9	88.9	63.4	250.2
1996	165.9	77.3	58.4	301.6
1997	308.3	109.2	67.8	485.3
Total	1079.7	1218.8	861.9	3160.4

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS en miles de US\$					
AÑO	CALAMAR	MERLUZA	RESTO	INDUSTR.	TOTAL
1988	1.0261	96.919	147.101	16.467	254.281
1989	12.716	93.704	157.868	20.285	264.288
1990	13.542	139.360	147.556	14.206	300.458
1991	23.981	184.633	187.748	3.840	396.362
1992	40.969	134.652	289.019	11.303	464.640
1993	152.097	173.208	284.264	20.520	609.569
1994	172.814	204.637	345.443	18.347	722.894
1995	119.274	116.494	187.929	13.252	423.697
1996	225.029	105.780	161.431	7.973	492.240
1997	307.874	124.427	160.806	10.424	593.107
Total	1.078.557	1.373.814	2.069.165	13.6617	4.521.536

Bibliografía

- Casal, J. L. y L. B. Prenski (comps.) 2000 *Diagnóstico de los Recursos Pesqueros de la República Argentina* (Mar del Plata: INIDEP).
- Court of Auditors 1998 *Special Report No. 18/98 concerning the Community measures to encourage the creation of joint enterprises in the fisheries sector accompanied by the replies of the Commission* (Brussels: Official Journal of the European Communities) C. 393/1 16, December.
- Cousseau, M. B. y R. Perrotta 2000 *Peces Marinos de Argentina* (Mar del Plata: INIDEP).
- De Andrade, R. 1998 *Litigios Pesqueros en América Latina* (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
- de Moor, A. P. G. 1999 *Perverse Incentives Subsidies and Sustainable Development: Key Issues and Reform Strategies* (The Hague, The Netherlands: Institute for Research on Public Expenditure).
- European Union 2000 *European Union aid for the development of the fishing industry of Spain (1994-1999)* (Brussels: Fisheries Directorate).
- Food and Agriculture Organization (FAO) 2000 "Report of the Expert Consultation on Economic Incentives and Responsible Fisheries", en *Fisheries Report* (Roma) N° 638, December.
- Godelman E., C. Bruno, E. Tamargo, G. Pidal, F. González 1999 *La Política de Subsidios Pesqueros de la Unión Europea, el Acuerdo en materia de pesca marítima entre la UE y la República Argentina, y sus consecuencias en la sustentabilidad de las pesquerías del Atlántico Sudoeste, particularmente en la de Merluza Argentina* (Mar del Plata: CeDePESCA).
- Government of Argentina 1996 *Subsidies notifications pursuant to article XVI.1 of GATT 1994 and article 25 of the agreement on subsidies and countervailing measures* (Geneve: World Trade Organization, Committee on Subsidies and Countervailing Measures) G/SCM/N/3/ARG. 25, March.
- IFREMER 1999 *Evaluation of the Fisheries Agreements Concluded by the European Community, Summary Report* (Brussels).
- INIDEP 1999[a] *Cantidad de Personal Empleado en Tierra por la Industria. Informe Técnico Interno* (Mar del Plata) N° 53.
- INIDEP 1999[b] *Resultados del Censo Nacional Industrial Pesquero 1996* (Mar del Plata).
- INIDEP 2000[a] *Estimaciones de la Participación por Tipo Flota en el Valor Agregado (Manuscript)* (Mar del Plata).

INIDEP2000[b] *Principales Características del Mercado Interno de Productos Pesqueros Marinos* (Mar del Plata) Informe Técnico N° 43.

Lipietz, Alain 2000 "Political Ecology and the Future of Marxism", en *Capitalism, Nature, Socialism* (Paris) March.

Londero, Elio 1987 *Beneficios y Beneficiarios* (Washington D. C.: BID).

Martínez I., A. R. Prat, I. Tudela y S. Casanovas 1995 *Peces, Flotas y Mercados. Los Efectos de las Políticas Pesqueras de la Unión Europea en los Países del Sur* (España) Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

Novick, M., C. Tomada, G. López Galelo y W. Poplawski 1999 *Impacto Sociolaboral de la Crisis del Recurso de la Merluza. Informe Final* (Mar del Plata).

Onestini, María et al. 2001 *Environmental and Socio-Economic Impacts of Trade Liberalisation in the Argentine Fisheries Sector: An Integrated Assessment* (Buenos Aires: Centro de Estudios Ambientales-CEDEA) Preparado para UNEP, Junio.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 2000 *Briefing on the OECD Study on Government Financial Transfers and Resource Sustainability: Further Work on Fisheries Trade, Resource Sustainability, and Government Financial Transfer* (Paris: Committee on Trade and Environment) Presented at the WTO, November.

Pearce, D., A. Markandya and E. B. Barbier 1989 *Blueprint for a Green Economy. A report by the London Environmental Economics Centre* (London: Earthscan Publications).

Pearce, D. and R. K. Turner 1990 *Economics of Natural Resources and the Environment* (Maryland, USA: John Hopkins University Press).

Pearce, D. and D. Motran 1994 *The Economic Value of Biodiversity* (London: Earthscan Publications).

PNUMA 2000 *Environmental Valuation* (Geneve).

Porter, Gareth 1998 *Fisheries Subsidies Overfishing and Trade* (Geneva, Switzerland) Environment and Trade 16, United Nations Environment Programme.

Reca, Lucio y Gabriel Parellada 2001 *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) N° 160, Primer Trimestre.

Rietbergen-McCracken, J. y H. Abaza 2000[a] *Economic Instruments for Environmental Management, A Worldwide Compendium of Case Studies* (London, UK: UNEP).

Rietbergen-McCracken J. y H. Abaza 2000[b] *Environmental Valuation, A Worldwide Compendium of Case Studies* (London, UK: UNEP).

Schonberger S. and J. Agar 1999 *Argentina: Towards Rights-Based Fisheries Management* (Washington D.C.: World Bank).

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA) 1997 *Argentina Agropecuaria, Agroindustrial y Pesquera* (Buenos Aires).

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA) 2000 *Actas del Consejo Federal Pesquero* (Buenos Aires).

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA). www.sagpya.mecon.gov.ar

UCA, Escuela de Ciencia Política 1999 *El Sector Pesquero Argentino. Informe General* (Buenos Aires).

UNEP 1999 *Global Environmental Outlook 2000* (London: United Nations Environment Programme/Earthscan).

Villalobos, Ruy de 1999 *Notes on the valuation of renewable natural resources* (Buenos Aires) Mimeo.

World Bank 2000 *Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount of US\$ 5 Million equivalent to the Argentine Republic for A Sustainable Fisheries Management Project* (Washington D.C.).

Notas

1 Entre otras, la reflexión sobre la contradicción entre naturaleza y humanidad, la noción de “recurso natural”, las nociones de sustentabilidad en un contexto de desarrollo capitalista, etc.

2 La “perplejidad” del economista ortodoxo solamente encuentra explicación en su dogmatismo doctrinario: el mercado es impotente (o siempre llega tarde) para enviar señales vía precios a los agentes económicos. A pesar de la escasez creciente de un recurso natural sobre-explotado, sus precios no suben tan rápidamente como para morigerar el ritmo de la explotación. La catástrofe se produce inevitablemente. Pocos dudan hoy que el ámbito de la conservación de recursos naturales es un ámbito de intervención política explícita. Evaluar la eficacia de tales políticas en sistemas hegemonizados por el capital es otra historia...

3 El autor sostiene una visión que pretende no ser candorosa. Las compensaciones e indemnizaciones no se conceden por gracia de los poderosos ni por mejores cálculos de las pérdidas. Los derechos no se piden, se conquistan en

circunstancias históricas singulares a las cuales se puede llegar, sin embargo, cuando entre otras condiciones se ha generado suficiente información y se la ha hecho llegar a los damnificados por el régimen.

4 Listado extraído parcialmente de CEDEA (Onestini et al., 2001).

5 En rigor, nos referimos a especies ictícolas. Hacia fines del siglo pasado se produjo una significativa depredación de los “lobos marinos de dos pelos” habitantes de las costas patagónicas, que puso en peligro de extinción a esta especie. Tal proceso se redujo y no precisamente por medidas de control sino por los cambios de mercado que redujeron la demanda de pieles en las primeras dos décadas del siglo XX.

6 Las especies ictícolas en peligro son: Merluza/Argentine hake (*Merluccius hubbsi*); Polaca/Southern blue whiting (*Micromesistius australis*); Corvina rubia/Croaker or White Croaker (*Micropogonias furnieri*); Pescadilla de red/Striped weakfish (*Cynoscion guatucupa*); Besugo/Red porgy (*Pagrus pagrus*); Merluza negra/Patagonian Toothfish (*Dissostichus eleginoides*) and Merluza austral/Southern Hake (*Merluccius australis*) (Casal y Prenski, 2000).

7 Una de las consecuencias de la Guerra de las Malvinas fue el cercenamiento de parte de la ZEE y la aplicación en las áreas bajo control militar británico de un régimen diferente para la pesca por parte de empresas del resto del mundo.

8 Ver el capítulo correspondiente del Informe de CEDEA (Onestini et al., 2001).

9 El régimen vigente entonces no asignaba cuotas de captura máxima por buque. Se trabajaba con el concepto de cuota máxima de captura por especie el cual, solamente con los registros de capturas declarados por todos y cada uno de los buques, permitiría interrumpir la pesca de las especies si se comprobaba que la cuota máxima era alcanzada.

10 La típica transacción consistía en la adquisición de licencias concedidas a embarcaciones artesanales (muchas de ellas fuera de uso) y adoptarlas para buques con mayor potencia y capacidad de captura. Esto se hacía posible por una mezcla de desorden e ineptitud administrativa así como por corruptelas difundidas en los organismos de control.

11 El monto global de estos subsidios ha sido estimado en aproximadamente US\$ 230 millones para toda la década de los 1990. Cabe mencionar que a estos subsidios se suman subsidios nacionales (por ejemplo, reembolsos por exportaciones, puertos patagónicos, etc.) que habrían ascendido a unos US\$ 320 millones en la década (ver CEDEA: Onestini et al., 2001).

12 Una consecuencia inmediata es el desempleo de aproximadamente 9.000 trabajadores ligados a la explotación y procesamiento de la merluza: 61% en Mar del Plata y el resto en la Patagonia. Del total, unos 5.000 hombres trabajaban en la flota.

13 De hecho, más allá de algunos trabajos pioneros en la década de los 1980, la mayor parte de los trabajos realizados en este campo no tiene más de diez años de antigüedad. Un reciente compendio preparado por el PNUMA(2000) recoge bibliografía que no se remonta más allá de 1992.

14 Estos proyectos van desde el control de contaminación urbana hasta la conservación de bosques, fauna y arrecifes coralíferos. Además, múltiples proyectos de infraestructura y/o producción que generan impactos ambientales durante su construcción y/u operación requieren crecientemente de evaluación de estos impactos para fines de obtención de financiamiento o, en los últimos años, para cumplir con regulaciones locales.

15 Directas o indirectas como en los casos de “cambio de deuda por conservación”.

16 Algunos analistas de temas ecológicos se han opuesto radicalmente a la valuación de recursos naturales argumentando que adoptar tales categorías es adoptar el enfoque de los intereses dominantes. Tales afirmaciones son válidas en contextos determinados, como el caso de la supuesta “valuación de la deuda ecológica” de largo plazo. Pero no creemos que sean aplicables a casos acotados como el que nos ocupa. En este caso, rechazar el uso de las técnicas por razones ideológicas es como “echar al desagüe tanto el agua sucia como el niño”.

17 Para detalles, consultar el Apéndice. Se presentan además resultados correspondientes a los flujos de Valor Agregado y de Beneficios Netos de las empresas.

18 Las estadísticas recogen datos de productos heterogéneos (por ejemplo, congelados, fileteados, etc.) tomados en alta mar o en establecimientos costeros. Se busca identificar el precio del pescado capturado “sobre cubierta”, para el análisis.

19 Por supuesto, además de los costos operativos (descontados de los ingresos brutos) hay otros costos asociados de difícil cuantificación como aquellos relacionados con las prácticas de corrupción, los costos sociales del abrupto desempleo provocado por la interrupción de la captura y con la capacidad ociosa de la flota y otras instalaciones luego del colapso de las capturas.

20 Técnica usualmente aplicada para estimar el precio de una empresa de capital.

- 21 Volumen de 395.000 toneladas por un precio de US\$ 850 por tonelada.
- 22 A la fecha, la tasa de interés pasiva en Estados Unidos es del 2,5%.
- 23 Cabe destacar que con un precio de US\$ 600/ton el valor alcanzaría a US\$ 12.000 millones y que con un precio estimado de US\$ 1000/ton, el valor de la biomasa alcanzaría los US\$ 19.850 millones.
- 24 Se supone que ambos “paquetes” son mutuamente excluyentes, para fines del análisis comparativo.
- 25 Este valor está sujeto a discusión. Múltiples restricciones y distorsiones afectan su nivel. En todo caso, se trata de la tasa recomendada usualmente por los organismos internacionales de crédito para evaluar sus operaciones.
- 26 Estas metodologías fueron iniciadas por el BID a mediados de la década de los ‘80. Un excelente resumen se puede consultar en Londero (1987).
- 27 A este listado correspondería agregar los consumidores de la merluza (principalmente europeos), los cuales sin duda disfrutaron de un significativo “excedente del consumidor” dada la relativa estabilidad de los precios del pescado en los años de la sobre-explotación. Para fines de claridad expositiva, no se los incluye en el análisis.
- 28 El cálculo riguroso de estos beneficios implicaría elaborar una función de consumo de productos pesqueros a nivel mundial con hipótesis adecuadas de evolución de los ingresos per cápita según distintos mercados.
- 29 Situación frecuente en los casos de degradación de masas boscosas naturales.
- 30 Esta afirmación debe ser relativizada pues muchas “empresas pesqueras” son fragmentos del capital de conglomerados mucho mayores diversificados en numerosas ramas de la producción.